

DIARIO DE SESIONES

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

02 de Diciembre de 2015

43ª REUNION – 41º SESION ORDINARIA

137º PERIODO LEGISLATIVO

Vicegobernación:	PREGNO , Alicia Mónica
Presidente Provisorio:	GONZALEZ , Oscar
Vicepresidente:	GUTIÉRREZ , Carlos Mario
Vicepresidente 1ª:	ARDUH , Orlando Víctor
Vicepresidente 2ª:	FONSECA , Ricardo Oscar
Secretario Legislativo:	ARIAS , Guillermo
Secretario Administrativo:	RODRÍGUEZ , Rosana Gladys
Secretaría Técnica Parlamentaria:	OVELAR , Rubén Justo
Secretario de Coordinación Operativa y de Comisiones:	DANIELE , Fredy
Prosecretaría Legislativa:	HUBERT , Juan José
Prosecretaría Administrativa:	ELLENA , Armando Emilio
Prosecretario Técnico Parlamentario:	NIETO , Gladys del Valle
Prosecretario de Coordinación Operativa y de Comisiones:	FROSSASCO , Horacio

Legisladores presentes:

AGOSTI, Julio Alberto	GAMAGGIO SOSA, Marisa.
ALTAMIRANO, Alfredo.	GARCIA ELORRIO, Aurelio
ARDUH, Orlando.	GIGENA, Silvia Noemi.
BASUALDO, Carolina.	GONZALEZ, Oscar.
BIRRI, Roberto.	GRIBAUDO, Verónica Daniela.
BORELLO, Rubén.	GUTIÉRREZ, Carlos
BRARDA, Graciela.	LABAT, María Laura.
BROUWER de KONING, Luis.	LEIVA, María Fernanda.
BRUNO, Anselmo.	LIZZUL, Nancy.
BUSO, Sergio Sebastian.	LUCIANO, Delia Rosa.
BUTTARELLI, Eduardo.	MANZANARES, María Graciela.
CAFFARATTI, María Elisa.	MATAR, María Alejandra.
CARO, David Esmeraldo.	MIRANDA, María de los Ángeles
CEBALLOS, María del Carmen.	MONIER, José Omar.
CID, Juan Manuel.	MONTERO, Liliana.
CLAVIJO, Edgar Santiago.	MUÑOZ, Héctor
COMETTO, Hugo Leonides.	NARDUCCI, Alicia Isabel
CUELLO, Hugo.	PAGLIANO, Roberto Oscar.
DE LUCCA, José.	PEREYRA, Beatriz.
ECHEVARRIA, Luciana.	PERUGINI, Elba Carmen.
ECHEPARE, Juan Domingo	PIHEN, José
ESLAVA, Gustavo.	PODVERSICH, Norberto Luís.
FELPETO, Carlos Alberto.	PONTE, Adhelma.
FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.	PRESAS, Carlos.
FONSECA, Ricardo	RANCO, Dario.

RISTA, Olga.
 ROFFE, Carlos.
 SALVI, Fernando.
 SÁNCHEZ, Graciela.
 SÁNCHEZ, Luis Antonio.
 SCHIAVONI, Pedro
 SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
 SOSA, Ricardo.
 TRIGO, Sandra.
 VAGNI, Amalia.
 VÁSQUEZ, Mario Alberto
 VILCHES, Laura
 WINGERTER, Fernando Miguel.
 YUNI, Eduardo.

Legisladores ausentes

Justificados:

CHIOFALO, María Amelia.
 DE LOREDO, Rodrigo
 DEL BOCA, María Alejandra.
 HEREDIA, Dante.
 PRETTO, Javier.
 SESTOPAL, Marcos.

Legisladores ausentes

no justificados:

SUMARIO

1.-Izamiento	de	la	Bandera	Nacional.....	3317
2.-	Versión	taquigráfica.	Aprobación ...	3317	
3.-	Asuntos	entrados:			
	I.-	Comunicaciones	oficiales	3317	

De los señores legisladores

II.- Plan Estratégico y de Inversión para Obras de Vialidad, proyectado para 2016. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17851/L/15) del legislador García Elorrio.....	3318
III.- Docentes en situación de tareas pasivas recategorizados. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17852/L/15) de la legisladora Vilches..	3318
IV.- Presidente comunal electo de la localidad de La Paisanita, Dpto. Santa María. Dudoso accidente de tránsito. Repudio. Proyecto de declaración (17853/L/15) de la legisladora Vagni	3318
V.- Ley 9880, Estatuto Escalafón del Personal de Poder Legislativo. Artículo 12, inciso g). Modificación. Proyecto de ley (17874/L/15) del legislador García Elorrio.....	3318
VI.- Día Provincial del Árbitro de Fútbol. Establecimiento. Proyecto de ley (17875/L/15) del legislador García Elorrio.....	3318
VII.- Ministerio de Finanzas. Portal de Transparencia. Desaparición de comprobantes de gastos de los Ministerios, período 2014. Motivos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17879/L/15) del legislador García Elorrio	3318
VIII.- 46° Fiesta Nacional del Oro Blanco, en la localidad de Canals, Dpto. Unión. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (17881/L/15) de los legisladores Wingerter, Perugini y Ceballos	3318
IX.- Hotel Casino Spa Ansenuza, en la localidad de Miramar. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17882/L/15) del legislador García Elorrio.....	3318

X.-	Programa	"Braille en	las	Escuelas", en	los	niveles	primario y	secundario de	escuelas	públicas y	privadas.	Creación. Proyecto de	ley	(17883/L/15) del	legislador	García	Elorrio	3319
-----	----------	-------------	-----	---------------	-----	---------	------------	---------------	----------	------------	-----------	-----------------------	-----	------------------	------------	--------	---------------	------

XI.-	Ley 8625,	artículo 1º.	Práctica	deportiva y/o	comercial de	caza de las	especies	torcaza	común o	dorada y	columba	livia. Excepción.	Establecimiento.	Proyecto de	ley	(17884/L/15) del	legislador	Pretto.....	3319
------	-----------	--------------	----------	---------------	--------------	-------------	----------	---------	---------	----------	---------	-------------------	------------------	-------------	-----	------------------	------------	-------------	------

XII.-	Ley 8835,	Carta	del	Ciudadano.	Directorio	del	ERSeP. Artículos	26 y 27.	Modificación.	Artículo 26	bis. Incorporación.	Proyecto de	ley	(17885/L/15) del	legislador	Pretto	3319
-------	-----------	-------	-----	------------	------------	-----	------------------	----------	---------------	-------------	---------------------	-------------	-----	------------------	------------	--------------	------

XIII.-	Planes	de	vivienda.	Diversos	aspectos.	Pedido de	informe. Proyecto de	resolución	(17887/L/15) del	legislador	García	Elorrio	3319
--------	--------	----	-----------	----------	-----------	-----------	----------------------	------------	------------------	------------	--------	---------------	------

XIV.-	Muestra	de	Experiencias	Didácticas	de los	Jardines	Santa	María, en la	ciudad de	Alta	Gracia, Dpto.	Santa	María.	Adhesión y	beneplácito. Proyecto de	declaración	(17889/L/15) de la	legisladora	Basualdo	3319
-------	---------	----	--------------	------------	--------	----------	-------	--------------	-----------	------	---------------	-------	--------	------------	--------------------------	-------------	--------------------	-------------	----------------	------

XV.-	Ley 9505,	artículo 2º	-	exenciones	en el	Impuesto	sobre los	Ingresos	Brutos a la	industria y a la	construcción.	Derogación.	Proyecto de	ley	(17890/L/15) de la	legisladora	Lizzul ...	3319
------	-----------	-------------	---	------------	-------	----------	-----------	----------	-------------	------------------	---------------	-------------	-------------	-----	--------------------	-------------	------------	------

XVI.-	Tanti	Solar	del	Rock, en la	ciudad de	Tanti, Dpto.	Punilla. 14º	Edición	Adhesión y	beneplácito. Proyecto de	declaración	(17894/L/15) de los	legisladores	Narducci y	Sestopal	3319
-------	-------	-------	-----	-------------	-----------	--------------	--------------	---------	------------	--------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------	----------------	------

XVII.-	San	Carlos	Minas.	Fiestas	Patronales.	Beneplácito. Proyecto de	declaración	(17895/L/15) de la	legisladora	Manzanares	3319
--------	-----	--------	--------	---------	-------------	--------------------------	-------------	--------------------	-------------	------------------	------

XVIII.-	Estancia	de	Guadalupe,	Dpto.	Minas.	Fiestas	Patronales.	Adhesión y	beneplácito. Proyecto de	declaración	(17896/L/15) de la	legisladora	Manzanares.....	3320
---------	----------	----	------------	-------	--------	---------	-------------	------------	--------------------------	-------------	--------------------	-------------	-----------------	------

XIX.-	Centro	de	Estudios	Avanzados	de la	UNC. Diplomatura	en	Gestión	de				
-------	--------	----	----------	-----------	-------	------------------	----	---------	----	--	--	--	--

Negocios con la República Popular China. Inicio de clases. Beneplácito. Proyecto de declaración (17897/L/15) de la legisladora Lizzul3320

XX.- Fernanda Pereira, alumna del IPEM N° 82, de la ciudad de Despeñaderos, Dpto. Santa María. Obtención del primer lugar en la XIX Olimpiada Argentina de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Beneplácito. Proyecto de declaración (17898/L/15) de la legisladora Basualdo.....3320

4.- Niveles actuales de desempleo y subempleo reales, cierre de fábricas, industrias y comercios, etc. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17523/L/15) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se aprueba3320

5.- A) Agente Ariel Páez. Aspectos referidos a la contención psicológica, situación de revista, historial y asistencia familiar. Pedido de informes. Proyecto de resolución (15917/L/14) de los legisladores del bloque Frente Cívico, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....3320

B) Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de distintos Programas del Poder Legislativo. Pedido de Informes. Proyecto de resolución (15930/L/14) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3320

C) Convenio entre la Provincia y la Comunidad Regional Tercero Arriba, para la construcción de vertedero y tratamiento de basura. Pedido de informes. Proyecto de resolución (15935/L/14) del legislador Salvi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3320

D) Programa Incluir Salud, ex Programa Federal Incluir Salud. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (15950/L/14) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3320

E) Córdoba Bursátil S.A. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (15958/L/14) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

F) Obra "Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 36, tramo Espinillo – Estación Peaje Tegua", Dpto. Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16139/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

G) Resolución N° 21/2015 (Asignación Transitoria de Funciones de Mayor Responsabilidad y Ampliación Transitoria de Jornada). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16140/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

H) Río Suquia en el Campo de la Ribera. Denuncia que se estarían vertiendo líquidos cloacales. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16154/L/15) del

legislador Brouwer de Koning, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

I) Localidad de General Baldissera. Peces y aves muertas en la laguna. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16169/L/15) del legislador Clavijo, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

J) Subsecretaría de Gestión del Riesgo. Objetivos y funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16286/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

K) Ministerio de Gobierno y Seguridad. Programas. Ejecución Presupuestaria 2014. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16546/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

L) Barrio Ampliación Los Filtros, de Córdoba. Inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación. Situación dominial. Regularización. Cantidad de familias. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16560/L/15) de la legisladora Sánchez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

M) Ministerio de Infraestructura. Programas. Cuenta de Inversión. Ejercicio Financiero 2014. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16568/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

N) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Programas. Ejecución Presupuestaria 2014. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16569/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

O) Acueducto Villa María – Laboulaye. Estado de construcción y controles técnicos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16583/L/15) del legislador Roffé, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....3321

P) Adoquines para pavimentación con sistema articulado. Adquisición y adjudicación a diferentes municipios. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16595/L/15) del legislador Agosti, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

Q) Plan de contingencia previsto por la EPEC y plan quinquenal. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16717/L/15) de la legisladora Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

R) Ley N° 9685, tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos. Reglamentación, aplicación y cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16737/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

S) Localidad de Balnearia, Dpto. San Justo. Aumento de arsénico en el agua. Causas y procedimientos para remediarlo. Provisión de agua a través de una red de distribución de agua segura. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16751/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

T) Hernando y Las Isletillas. Consorcios Camineros. Pago de certificados. Demora. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16866/L/15) del legislador Brouwer de Koning, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

U) Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico. Ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015, Programa 020. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16882/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

V) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015, Programas 258, 262 y 263. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16884/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

W) Ministerio de Educación. Ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015, Programas 353, 369, 372, 377, 378 y 382. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16895/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

X) Obras de protección hidráulica y estabilización de taludes y contrataludes en rutas pavimentadas de montañas de la Provincia de Córdoba- Región I. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17007/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

Y) Obras de protección hidráulica y estabilización de taludes y contrataludes en rutas pavimentadas de montañas de la Provincia de Córdoba- Región II. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17008/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

Z) Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba. Proyectos de modificación y/o refacción. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17066/L/15) de la legisladora Montero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

A¹) Policía de la Provincia. Diversos aspectos. Ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba. Citación para informar. Proyecto de resolución (17071/L/15) de la legisladora Montero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

B¹) Edificios escolares. Estado y obras. Aulas contenedoras. Cantidad. Pedido

de informes. Proyecto de resolución (16122/L/15) de la legisladora Montero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

C¹) Periodista Dr. Eduardo Chacón. Detención y golpiza. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16123/L/15) de la legisladora Montero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3321

D¹) Néstor y Leonel Lupidi. Hechos de abuso policial en Villa Carlos Paz. Medidas adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16124/L/15) de la legisladora Montero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

E¹) Donación de un terreno a APADIM Córdoba. Revocatoria. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17133/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

F¹) Programa "Limpieza y Sistematización de cauces de Sierras Chicas, Tramos I al V". Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17051/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

G¹) Bienes públicos. Uso en campaña electoral. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17052/L/15) de los legisladores Arduh, Matar, Pereyra, Bruno, Yuni, Caffaratti, Brouwer de Koning y Vagni, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

H¹) Ruta Provincial N° 3. Obra de pavimentación del tramo Justiniano Posse – Escalante. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17058/L/15) de las legisladoras Miranda y Leiva, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

I¹) Empresa de grabado indeleble de dominio múltiple de automotores, ciclomotores y motocicletas, para la aplicación de la Ley 10.110. Suspensión de la concesión. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17060/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

J¹) Inundaciones de febrero de 2015. Acciones realizadas. Ministros de Infraestructura, de Finanzas, de Desarrollo Social y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Citación para informar. Proyecto de resolución (17245/L/15) de la legisladora Montero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

K¹) Centro Cultural Córdoba. Techo. Obras para evitar prácticas no autorizadas de deslizamiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17247/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

L¹) Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar. Administración de los recursos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17251/L/15) de la legisladora Caffaratti, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....3322

M¹) Obra: Pavimentación Ruta Provincial E-57 Camino del Cuadrado. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16809/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

N¹) Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. Traspaso y absorción de Córdoba Bursátil SA. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16908/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

O¹) Canales clandestinos y consorcios canaleros en los Dptos. Marcos Juárez, Gral. San Martín y Unión. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17139/L/15) de la legisladora Graciela Sánchez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

P¹) Transporte interurbano, en la localidad de San Pedro Norte, Dpto. Tulumba. Falta de servicio. Motivo. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17151/L/15) del legislador Brouwer de Koning, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

Q¹) Programa Córdoba Más Segura. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17166/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

R¹) Inundaciones. Gobierno nacional. Recursos recibidos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16582/L/15) del legislador Roffé, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....3322

S¹) Ejecución presupuestaria 2015, fondos correspondientes a la Coparticipación Federal de Impuestos. Recaudación y destino. Poder Ejecutivo Provincial. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17359/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

T¹) Ministerio de Desarrollo Social. Diversos programas. Poder Ejecutivo. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17360/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

U¹) "Programa de Desarrollo del Noroeste" de la Fundación Banco de Córdoba. Ejecución. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17369/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

V¹) Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Diversos programas. Ejecución presupuestaria. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17370/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

W¹) Hospitales Neuropsiquiátrico, Colonia E. Vidal Abal y José Antonio

Ceballos de las ciudades de Córdoba, Oliva y Bell Ville, respectivamente. Informe producido por el Órgano de Revisión de Salud Mental de la Nación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17378/L/15) de la legisladora Montero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

X¹) Ministerio de Finanzas. Programa 086. Ejecución presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17506/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

Y¹) Ministerio de Gobierno y Seguridad. Programas varios. Ejecución presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17507/L/15) del legislador Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

Z¹) Barrio Las Violetas. Señor Luqués. Agresiones sufridas por parte de una presunta banca narco. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17525/L/15) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....3322

A¹¹) Destacamentos policiales del interior. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17632/L/15) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

B¹¹) Nuevo Hospital Provincial de Río Tercero. Obras. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17545/L/15) de los legisladores Matar, Brouwer de Koning y Salvi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3322

C¹¹) Destacamentos policiales del interior. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17632/L/15) del legislador García Elorrio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3323

D¹¹) Policía de la Provincia. Robo de pistolas 9 mm nuevas. Citación al señor Ministro de Gobierno y Seguridad para informar. Proyecto de resolución (17668/L/15) de la legisladora Echevarría. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....3323

E¹¹) Programa 504/02, ampliación y conservación de redes primarias y secundarias. Incremento presupuestario. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17679/L/15) del legislador Fonseca. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3323

F¹¹) Policía de la Provincia. Robo de armas. Citación al señor Ministro de Gobierno y Seguridad y al señor Gobernador de la Provincia para informar. Proyecto de resolución (17683/L/15) de la legisladora Montero. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3323

G¹¹) Policía de la Provincia. Robo de pistolas reglamentarias, en barrio Ampliación Cervecedores de la ciudad de

Córdoba. Citación al señor Ministro de Gobierno y Seguridad y al señor Jefe de Policía de la Provincia para informar. Proyecto de resolución (17694/L/15) del legislador De Loredo. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3323

H^{II}) Programa "Córdoba de Pie", para remediar los daños causados por las inundaciones del verano de 2015. Implementación y ejecución de fondos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17717/L/15) del legislador De Loredo. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3323

I^{II}) Programa "Córdoba de Pie". Implementación. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17718/L/15) del legislador De Loredo. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba.....3323

J^{II}) Programa "Córdoba de Pie". Obras hídricas. Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17720/L/15) del legislador De Loredo. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba3323

6.- A) Interrupción de la aplicación de la guía de procedimientos para prácticas de abortos no punibles. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17516/L/15) de la legisladora Vilches, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3331

B) Operativo Policial en barrio Las Palmas. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (16415/L/15) de la legisladora Vilches, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3331

C) Policía de la Provincia de Córdoba. Masivas detenciones y allanamientos. Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad. Citación para informar. Proyecto de resolución (16709/L/15) de la legisladora Vilches, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.3331

D) Villa Boedo, de Córdoba. Operativo policial, con detenidos Bryan y Gastón Barraza. Ministerio de Gobierno y Seguridad. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17339/L/15) de la legisladora Vilches, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3331

E) Agencia Córdoba Cultura SE. Gastos de los fondos transferidos por el Ministerio de Gestión Pública en los presupuestos 2014 y 2015. Pedido de informes. Proyecto de resolución (17689/L/15) del legislador García Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba3331

7.- Asuntos entrados a última hora:

XXI.- 9º Festival de los Amigos 2015, en la localidad de Villa Gutiérrez, Dpto. Ischilín. Interés legislativo. Proyecto de declaración (17900/L/15) del legislador Vásquez3332

XXII.- Sistema de luminaria del empalme de la Rutas Nacionales Nros. 9 y 60. Reparación y puesta en funcionamiento.

Solicitud al PE. Proyecto de declaración (17901/L/15) del legislador Vásquez3333

XXIII.- Dra. Eleonora Zahorski. Labor realizada propiciando la investigación, estudio y difusión de la Historia del Norte Cordobés. Homenaje. Proyecto de declaración (17902/L/15) del legislador Vásquez3333

XXIV.- Carlos Coria, deportista villamariense. Obtención del Subcampeonato en el Campeonato Argentino Masters de Billar. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (17909/L/15) del legislador Ranco3333

XXV.- Club Atlético Defensores de San Marcos Sud. 95º Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (17910/L/15) del legislador Ranco3333

XXVI.- Club Atlético Talleres de Ballesteros, de la Liga Bellvillense de Fútbol. Ascenso a Primera División y obtención del Bicampeonato. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (17911/L/15) del legislador Ranco3333

XXVII.- Club Atlético San Martín de Vicuña Mackenna. 95º Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (17912/L/15) del legislador Ranco3333

XXVIII.- Centro Educativo 12 de Octubre, de la localidad de Tres Árboles, Dpto. Cruz del Eje. 100º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (17913/L/15) del legislador Monier3333

XXIX.- Inmuebles para la ejecución del Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de Residuos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba y accesos. Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación. Proyecto de ley (17914/L/15) de los legisladores González y Arduh3333

XXX.- Despachos de comisión ...3333

XXXI.- Peticiones y asuntos particulares3334

8.- A) Código de Convivencia Ciudadana. Creación. Proyectos de ley compatibilizados (2060/L/08, 8196/L/11, 10697/L/12, 12428/L/13, 13713/L/14, 13996/L/14, 13997/L/14, 14201/L/14, 14275/L/14, 14369/L/14, 14388/L/14, 14389/L/14, 14784/L/14 y 15160/L/14) de los legisladores Birri y Coria; de los legisladores Birri, Bischoff, Serna, Rodríguez, Lizzul, Díaz, Seculini, Roganti, Jiménez, Coria y Olivero, del legislador Birri, del legislador Cid, de los legisladores Narducci y Sestopal, del legislador González, del legislador González, de la legisladora Basualdo, legislador González, del legislador González, legislador González, del legislador González, de las legisladoras Lizzul, Montero y Fernández y de los legisladores Chiofalo, Fernández, Trigo y Cuello, respectivamente. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba en general y en particular3334

B) Ley Nº 9235, de Seguridad Pública. Artículos e incisos. Modificación. Ley Nº 7826, Orgánica del Ministerio Público

Fiscal. Inciso. Incorporación. Proyectos de ley compatibilizados (2060/L/08, 8196/L/11, 10697/L/12, 12428/L/13, 13713/L/14, 13996/L/14, 13997/L/14, 14201/L/14, 14275/L/14, 14369/L/14, 14388/L/14, 14389/L/14, 14784/L/14 y 15160/L/14) de los legisladores Birri y Coria; de los legisladores Birri, Bischoff, Serna, Rodríguez, Lizzul, Díaz, Seculini, Roganti, Jiménez, Coria y Olivero, del legislador Birri, del legislador Cid, de los legisladores Narducci y Sestopal, del legislador González, del legislador González, de la legisladora Basualdo, legislador González, del legislador González, legislador González, del legislador González, de las legisladoras Lizzul, Montero y Fernández y de los legisladores Chiofalo, Fernández, Trigo y Cuello, respectivamente. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba en general y en particular3334

9.- Inmuebles para la ejecución del Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de Residuos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba y accesos. Declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación. Proyecto de ley (17914/L/15) de los legisladores González y Arduh. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba en general y en particular3432

10.- Ruta Provincial Nº 21. Tramo Cerro Colorado-Quilino. Denominación como "Curaca Juan Asencio". Proyecto de ley (17812/L/15) de los legisladores Vásquez, Solusolia, Caro, Eslava y Brouwer de Koning, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en particular3440

11.- Sistema de Repositorios Digitales Educativos, Culturales y Científicos de la Provincia. Creación. Proyecto de ley (16577/L/15) de las legisladoras Perugini y Ceballos, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en general y en particular3444

12. A) Fiesta del Deportista, en la localidad de Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo. Adhesión. Proyecto de declaración (17690/L/15) de la legisladora Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3448

B) 46º Fiesta Nacional del Oro Blanco, en la localidad de Canals, Dpto. Unión. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (17881/L/15) de los legisladores Wingerter, Perugini y Ceballos. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba.....3448

C) Muestra de Experiencias Didácticas de los Jardines Santa María, en la ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (17889/L/15) de la legisladora Basualdo. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se

considera y aprueba con modificaciones.....3448

D) Tanti Solar del Rock, en la ciudad de Tanti, Dpto. Punilla. 14º Edición Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (17894/L/15) de los legisladores Narducci y Sestopal. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba3448

E) San Carlos Minas. Fiestas Patronales. Beneplácito. Proyecto de declaración (17895/L/15) de la legisladora Manzanares. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones.....3448

F) Estancia de Guadalupe, Dpto. Minas. Fiestas Patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (17896/L/15) de la legisladora Manzanares. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba3448

G) Centro de Estudios Avanzados de la UNC. Diplomatura en Gestión de Negocios con la República Popular China. Inicio de clases. Beneplácito. Proyecto de declaración (17897/L/15) de la legisladora Lizzul. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3449

H) Fernanda Pereira, alumna del IPEM Nº 82, de la ciudad de Despeñaderos, Dpto. Santa María. Obtención del primer lugar en la XIX Olimpiada Argentina de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Beneplácito. Proyecto de declaración (17898/L/15) de la legisladora Basualdo. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3449

I) 9º Festival de los Amigos 2015, en la localidad de Villa Gutiérrez, Dpto. Ischilín. Interés legislativo. Proyecto de declaración (17900/L/15) del legislador Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3449

J) Sistema de luminaria del empalme de la Rutas Nacionales Nros. 9 y 60. Reparación y puesta en funcionamiento. Solicitud al PE. Proyecto de declaración (17901/L/15) del legislador Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba3449

K) Dra. Eleonora Zahorski. Labor realizada propiciando la investigación, estudio y difusión de la Historia del Norte Cordobés. Homenaje. Proyecto de declaración (17902/L/15) del legislador Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones.....3449

L) Carlos Coria, deportista villamariense. Obtención del Subcampeonato en el Campeonato Argentino Masters de Billar. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (17909/L/15) del legislador Rancho. Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3449

M) Club Atlético Defensores de San Marcos Sud. 95º Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (17910/L/15) del legislador Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3449

N) Club Atlético Talleres de Ballesteros, de la Liga Bellvillense de Fútbol. Ascenso a Primera División y obtención del Bicampeonato. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (17911/L/15) del legislador Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3449

O) Club Atlético San Martín de Vicuña Mackenna. 95º Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (17912/L/15) del legislador Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3449

P) Centro Educativo 12 de Octubre, de la localidad de Tres Árboles, Dpto. Cruz del Eje. 100º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (17913/L/15) del legislador Monier. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba con modificaciones3449

13.- Legisladores provinciales. Palabras de despedida.....3460

– En la ciudad de Córdoba, a 2 días del mes de diciembre de 2015, siendo la hora 15 y 28:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 51 señores legisladores, declaro abierta la 41º sesión ordinaria del 137º período legislativo.

Invito a la señora legisladora Delia Luciano a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

– Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Luciano procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSION TAQUIGRÁFICA

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

-3-

ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

I

COMUNICACIONES OFICIALES

NOTAS

17886/N/15

Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 21 y 22, autorizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial.

A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda

17888/N/15

Nota del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos: Elevando el segundo informe anual de Diagnóstico Ambiental Provincial correspondiente al período 2015, conforme lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley N° 10.208.

A la Comisión de Asuntos Ecológicos

17891/N/15

Nota del Poder Judicial de la Nación: Comunicando la designación de autoridades de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, para el período 2016.

Al Archivo

17892/N/15

Nota del Ministerio de Gestión Pública: Remitiendo copia de la Resolución N° 1145, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.

A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda

17893/N/15

Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 290, 308, 309, 318, 319 y 321, modificando las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.

A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda

PLIEGOS

17880/P/15

Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Abogada Zulma Mariel Palmero, como Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Tercera Nominación 'reemplazante' de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

**PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES**

II

17851/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan Estratégico y de Inversión para Obras de Vialidad en el año 2015 - 2016, obras que se están ejecutando, las licitadas y las adjudicadas.

A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto y Hacienda

III

17852/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reubicación de docentes en situación de tareas pasivas recategorizados.

A la Comisión de Educación y Cultura

IV

17853/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual repudia el dudoso accidente de tránsito en que fuera embestido el electo Presidente Comunal de la localidad de La Paisanita, departamento Santa María, Ignacio Sala, el pasado 22 de noviembre.

A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes

V

17874/L/15

Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica el inciso g) del artículo 12 de la Ley N° 9880, Estatuto Escalafón del Personal del Poder Legislativo, referido a impedimentos para ingresar o reingresar al Poder Legislativo.

A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

VI

17875/L/15

Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que establece el 9 de octubre de cada año como el "Día Provincial del Árbitro de Fútbol".

A las Comisiones de Deportes y Recreación y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

VII

17879/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el motivo por el cual desde el 24 de noviembre han desaparecido de la página del Portal de Transparencia del Ministerio de Finanzas, los comprobantes de gastos de todos los ítems de los Ministerios, correspondientes al período 2014.

A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda

VIII

17881/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Wingerter, Perugini y Ceballos, por el cual adhiere a la "46ª Fiesta Nacional del Oro Blanco", a desarrollarse del 9 al 16 de enero de 2016 en la localidad de Canals, departamento Unión.

A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

IX

17882/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción, inauguración, concesión de explotación, desmontes realizados y posible volcamiento de efluentes cloacales del Casino Spa Ansenúza de la localidad de Miramar.

A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Ecológicos

X

17883/L/15

Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea el Programa "Braille en las Escuelas" en los niveles primario y secundario de enseñanza, públicos y privados.

A las Comisiones de Educación y Cultura, de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XI

17884/L/15

Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que exceptúa la práctica deportiva y/o comercial de caza de las especies torcaza común o dorada y columba livia, establecida en el artículo 1º de la Ley N° 8625.

A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XII

17885/L/15

Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que modifica los artículos 26 y 27 e incorpora el artículo 26 bis a la Ley N° 8835 -Carta del Ciudadano-, referidos al Directorio, requisitos para ser miembro del mismo, autoridades y quórum del ERSeP.

A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XIII

17887/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de vivienda que están proyectados, presupuestados y grado de desarrollo en la provincia.

A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

XIV

17889/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a la "Muestra de Experiencias Didácticas de los Jardines de Santa María", que se llevan a cabo del 1 al 3 de diciembre en la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María.

A la Comisión de Educación y Cultura

XV

17890/L/15

Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que deroga el artículo 2º de la Ley N° 9505, que suspende exenciones en el impuesto a los ingresos brutos a la industria y a la construcción.

A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Industria y Minería y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XVI

17894/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere a la 14ª edición del "Tanti Solar del Rock", a llevarse a cabo el día 16 de enero en la localidad mencionada del departamento Punilla.

A la Comisión de Educación y Cultura

XVII

17895/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a las Fiestas Patronales de San Carlos Minas, a celebrarse el día 8 de diciembre en honor a la Inmaculada Concepción de María.

A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes

XVIII

17896/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a las Fiestas Patronales de Estancia de Guadalupe, departamento Minas, a celebrarse el día 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe.

A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunes

XIX

17897/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual expresa beneplácito por el inicio de clases, el 20 de noviembre, de la Diplomatura en Gestión de Negocios con la República Popular China, por parte del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.

A la Comisión de Educación y Cultura

XX

17898/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual expresa beneplácito por la obtención del primer lugar en la XIX Olimpiada Argentina de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, por parte de Fernanda Pereira, alumna del IPEM N° 82 de la localidad de Despeñaderos, departamento Santa María.

A la Comisión de Educación y Cultura

-4-

NIVELES ACTUALES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO REALES, CIERRE DE FÁBRICAS, INDUSTRIAS Y COMERCIOS, ETC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Moción de vuelta a comisión, para su archivo

Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 53 del Orden del Día sea girado al archivo.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar al archivo el proyecto correspondiente al punto 53 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

PUNTO 53

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17523/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los niveles actuales de desempleo y subempleo reales, cierre de fábricas, industrias y comercios, nivel de actividad en especial en los sectores automotriz y metalmeccánico, cantidad de procedimientos preventivos de crisis iniciados y aprobados durante el año 2015, políticas que están aplicando los Ministerios de Trabajo y de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico, a los fines de mitigar la crisis.

Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur

-5-

A) AGENTE ARIEL PÁEZ. ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTENCIÓN PSICOLÓGICA, SITUACIÓN DE REVISTA, HISTORIAL Y ASISTENCIA FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.

B) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE DISTINTOS PROGRAMAS DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.

C) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA COMUNIDAD REGIONAL TERCERO ARRIBA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO Y TRATAMIENTO DE BASURA. PEDIDO DE INFORMES.

D) PROGRAMA INCLUIR SALUD, EX PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

- E) CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
- F) OBRA "DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO ESPINILLO – ESTACIÓN PEAJE TEGUA", DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
- G) RESOLUCIÓN Nº 21/2015 (ASIGNACIÓN TRANSITORIA DE FUNCIONES DE MAYOR RESPONSABILIDAD Y AMPLIACIÓN TRANSITORIA DE JORNADA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
- H) RÍO SUQUÍA EN EL CAMPO DE LA RIBERA. DENUNCIA QUE SE ESTARÍAN VERTIENDO LÍQUIDOS CLOACALES. PEDIDO DE INFORMES.
- I) LOCALIDAD DE GENERAL BALDISSERA. PECES Y AVES MUERTAS EN LA LAGUNA. PEDIDO DE INFORMES.
- J) SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO. OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
- K) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PROGRAMAS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
- L) BARRIO AMPLIACIÓN LOS FILTROS, DE CÓRDOBA. INMUEBLES DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN. SITUACIÓN DOMINIAL. REGULARIZACIÓN. CANTIDAD DE FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
- M) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PROGRAMAS. CUENTA DE INVERSIÓN. EJERCICIO FINANCIERO 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
- N) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PROGRAMAS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
- O) ACUEDUCTO VILLA MARÍA – LABOULAYE. ESTADO DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROLES TÉCNICOS. PEDIDO DE INFORMES.
- P) ADOQUINES PARA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA ARTICULADO. ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN A DIFERENTES MUNICIPIOS. PEDIDO DE INFORMES.
- Q) PLAN DE CONTINGENCIA PREVISTO POR LA EPEC Y PLAN QUINQUENAL. PEDIDO DE INFORMES.
- R) LEY Nº 9685, TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. REGLAMENTACIÓN, APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
- S) LOCALIDAD DE BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. AUMENTO DE ARSÉNICO EN EL AGUA. CAUSAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REMEDIARLO. PROVISIÓN DE AGUA A TRAVÉS DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SEGURA. PEDIDO DE INFORMES.
- T) HERNANDO Y LAS ISLETILLAS. CONSORCIOS CAMINEROS. PAGO DE CERTIFICADOS. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
- U) MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2015, PROGRAMA 020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
- V) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2015, PROGRAMAS 258, 262 Y 263. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
- W) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2015, PROGRAMAS 353, 369, 372, 377, 378 Y 382. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
- X) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA- REGIÓN I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
- Y) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA- REGIÓN II. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
- Z) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PROYECTOS DE MODIFICACIÓN Y/O REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
- A¹) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
- B¹) EDIFICIOS ESCOLARES. ESTADO Y OBRAS. AULAS CONTENEDORAS. CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
- C¹) PERIODISTA DR. EDUARDO CHACÓN. DETENCIÓN Y GOLPIZA. PEDIDO DE INFORMES.

D^I) NÉSTOR Y LEONEL LUPIDI. HECHOS DE ABUSO POLICIAL EN VILLA CARLOS PAZ. MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.

E^I) DONACIÓN DE UN TERRENO A APADIM CÓRDOBA. REVOCATORIA. PEDIDO DE INFORMES.

F^I) PROGRAMA "LIMPIEZA Y SISTEMATIZACIÓN DE CAUCES DE SIERRAS CHICAS, TRAMOS I AL V". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

G^I) BIENES PÚBLICOS. USO EN CAMPAÑA ELECTORAL. PEDIDO DE INFORMES.

H^I) RUTA PROVINCIAL N° 3. OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO JUSTINIANO POSSE – ESCALANTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

I^I) EMPRESA DE GRABADO INDELEBLE DE DOMINIO MÚLTIPLE DE AUTOMOTORES, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS, PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 10.110. SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

J^I) INUNDACIONES DE FEBRERO DE 2015. ACCIONES REALIZADAS. MINISTROS DE INFRAESTRUCTURA, DE FINANZAS, DE DESARROLLO SOCIAL Y DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.

K^I) CENTRO CULTURAL CÓRDOBA. TECHO. OBRAS PARA EVITAR PRÁCTICAS NO AUTORIZADAS DE DESLIZAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.

L^I) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS. PEDIDO DE INFORMES.

M^I) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 CAMINO DEL CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

N^I) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. TRASPASO Y ABSORCIÓN DE CÓRDOBA BURSÁTIL SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

O^I) CANALES CLANDESTINOS Y CONSORCIOS CANALEROS EN LOS DPTOS. MARCOS JUÁREZ, GRAL. SAN MARTÍN Y UNIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

P^I) TRANSPORTE INTERURBANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NORTE, DPTO. TULUMBA. FALTA DE SERVICIO. MOTIVO. PEDIDO DE INFORMES.

Q^I) PROGRAMA CÓRDOBA MÁS SEGURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

R^I) INUNDACIONES. GOBIERNO NACIONAL. RECURSOS RECIBIDOS. PEDIDO DE INFORMES.

S^I) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015, FONDOS CORRESPONDIENTES A LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS. RECAUDACIÓN Y DESTINO. PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.

T^I) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS PROGRAMAS. PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE INFORMES.

U^I) "PROGRAMA DE DESARROLLO DEL NOROESTE" DE LA FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

V^I) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIVERSOS PROGRAMAS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.

W^I) HOSPITALES NEUROPSIQUIÁTRICO, COLONIA E. VIDAL ABAL Y JOSÉ ANTONIO CEBALLOS DE LAS CIUDADES DE CÓRDOBA, OLIVA Y BELL VILLE, RESPECTIVAMENTE. INFORME PRODUCIDO POR EL ÓRGANO DE REVISIÓN DE SALUD MENTAL DE LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

X^I) MINISTERIO DE FINANZAS. PROGRAMA 086. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Y^I) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PROGRAMAS VARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Z^I) BARRIO LAS VIOLETAS. SEÑOR LUQUÉS. AGRESIONES SUFRIDAS POR PARTE DE UNA PRESUNTA BANCA NARCO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

A^{II}) DESTACAMENTOS POLICIALES DEL INTERIOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

B^{II}) NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE RÍO TERCERO. OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

C^{II}) DESTACAMENTOS POLICIALES DEL INTERIOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

D^{II}) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ROBO DE PISTOLAS 9 MM NUEVAS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.

E^{II}) PROGRAMA 504/02, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. INCREMENTO PRESUPUESTARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

F^{II}) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ROBO DE ARMAS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y AL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA PARA INFORMAR.

G^{II}) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ROBO DE PISTOLAS REGLAMENTARIAS, EN BARRIO AMPLIACIÓN CERVECEROS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y AL SEÑOR JEFE DE POLICÍA DE LA PROVINCIA PARA INFORMAR.

H^{II}) PROGRAMA "CÓRDOBA DE PIE", PARA REMEDIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES DEL VERANO DE 2015. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE FONDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

I^{II}) PROGRAMA "CÓRDOBA DE PIE". IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

J^{II}) PROGRAMA "CÓRDOBA DE PIE". OBRAS HÍDRICAS. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

Moción de vuelta a comisión

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 51, 54 al 56, 60 al 63 y 65 al 68 del Orden del Día sean girados a comisión.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 51, 54 al 56, 60 al 63 y 65 al 68 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

PUNTO 1

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

15917/L/14

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la contención psicológica brindada al agente Ariel Páez, su situación de revista, su historial y si se brindará asistencia a su familia.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 2

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

15930/L/14

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2014, distintos Programas del Poder Legislativo.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 3

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

15935/L/14

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio entre la provincia y la Comunidad Regional Tercero Arriba, rubricado por la firma Ferioli, para la construcción de un vertedero y de una planta de tratamiento de basura, en el mencionado departamento.

Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 4

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

15950/L/14

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del Programa Incluir Salud, ex Programa Federal Incluir Salud.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 5

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

15958/L/14

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a Córdoba Bursátil SA.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 6

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16139/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, justificación de la primera y segunda redeterminación de precio, fecha de inicio y finalización de la obra "Duplicación de Calzada Ruta Nacional Nº 36 Tramo Espinillo – Estación Peaje Tegua, departamento Río Cuarto".

Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

PUNTO 7

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16140/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 21/2015, emanada del Ministerio de Gestión Pública, aprobando la "Asignación Transitoria de Funciones de Mayor Responsabilidad" y "Ampliación Transitoria de Jornada".

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

PUNTO 8

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16154/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación actual sobre la grave denuncia que se estarían vertiendo líquidos cloacales al río Suquía en el Campo de la Ribera, predio a cargo del Gobierno Provincial.

Comisión: Agua, Energía y Transporte

PUNTO 9

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16169/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la laguna de la localidad de General Baldissera en la que se encontraron peces y aves muertas.

Comisión: Agua, Energía y Transporte

PUNTO 10

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16286/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los objetivos y al funcionamiento de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 11

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16546/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos programas del Ministerio de Gobierno y Seguridad.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 12

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

16560/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de familias que regularizaron su

situación dominial, relocalización, construcción de viviendas sociales, en virtud de la aplicación de la Ley Nº 10.045, expropiación de inmuebles en barrio Ampliación Los Filtros de la ciudad de Córdoba.

Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

PUNTO 13

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

16568/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos programas del Ministerio de Infraestructura.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 14

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

16569/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 15

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

16583/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de construcción y controles técnicos del Acueducto Villa María - Laboulaye.

Comisión: Agua, Energía y Transporte

PUNTO 16

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

16595/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición y adjudicación de adoquines para la pavimentación con sistema articulado a diferentes municipios de la provincia.

Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

PUNTO 17

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

16717/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al plan de contingencia previsto por la EPEC a los fines de evitar interrupciones de energía eléctrica en el período invernal y sobre el plan quinquenal anunciado el pasado 19 de marzo.

Comisión: Agua, Energía y Transporte

PUNTO 18

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16737/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación, aplicación y cumplimiento de la Ley Nº 9685, tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 19

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16751/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las causas y procedimientos para remediar el aumento de arsénico en el agua para consumo de la localidad de Balnearia, departamento San Justo, sobre la provisión de agua a establecimientos educativos en particular y a toda la comunidad, a través de una red de distribución de agua segura.

Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación y Cultura

PUNTO 20

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16866/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora existente en el pago de los certificados a los consorcios camineros de Hernando y Las Isletillas.

Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

PUNTO 21

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16882/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico, especialmente en lo referido al Programa 020.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 22

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16884/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, especialmente en lo referido a los Programas 258, 262 y 263.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 23

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16895/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del Ministerio de Educación, especialmente en lo referido a los Programas 353, 369, 372, 377, 378 y 382.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 24

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17007/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de: "Obras de protección hidráulica y estabilización de taludes y contrataludes en rutas pavimentadas de montañas de la Provincia de Córdoba- Región I".

Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

PUNTO 25

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

17008/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de: "Obras de protección hidráulica y estabilización de taludes y contrataludes en rutas pavimentadas de montañas de la Provincia de Córdoba- Región II".

Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

PUNTO 26

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

17066/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos de modificación, presupuesto, llamado a licitación, avance de obras y plazo de finalización de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.

Comisión: Agua, Energía y Transporte

PUNTO 27

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17071/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las distintas áreas de la policía que están involucradas en hechos de corrupción, agentes sancionados, causas abiertas, efectivos en situación pasiva o proceso judicial y sobre el pase a retiro de 200 agentes, luego desmentido por el Jefe de Policía.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 28

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16122/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un relevamiento del estado de edificios escolares, obras que se están realizando y detalle cantidad de aulas contenedoras que seguirán funcionando.

Comisión: Educación y Cultura

PUNTO 29

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16123/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la detención y golpiza que sufriera el periodista Dr. Eduardo Chacón por parte de la Policía de la ciudad de Arroyito y las medidas tomadas al respecto.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 30

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16124/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre hechos de abuso policial que sufrieran Néstor y Leonel Lupidi en la ciudad de Villa Carlos Paz y respecto de las medidas tomadas en el caso con el personal de la fuerza actuante.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 31

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17133/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la posible revocatoria en la donación de un terreno de 4.000 m2 ubicado en la zona de la Ciudad Universitaria donado a APADIM Córdoba en la década del 70.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 32

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17051/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del programa "Limpieza y sistematización de cauces de Sierras Chicas, Tramos I a V".

Comisión: Asuntos Ecológicos

PUNTO 33

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17052/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Pereyra, Bruno, Yuni, Caffaratti, Brouwer de Koning y Vagni, por el que solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre las irregularidades en el uso de bienes públicos en la campaña electoral, en particular en el departamento Río Segundo.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 34

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17058/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Miranda y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la paralización de la obra de pavimentación del tramo Justiniano Posse – Escalante, sobre la Ruta Provincial N° 3.

Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

PUNTO 35

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17060/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la suspensión de la concesión a la empresa de grabado indeleble de dominio múltiple de automotores, ciclomotores y motocicletas, para la aplicación de la Ley 10.110.

Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

PUNTO 36

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17245/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita a los Ministros de Infraestructura, de Finanzas, de Desarrollo Social y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las acciones llevadas a cabo luego de las inundaciones del mes de febrero de 2015.

Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 37

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17247/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las obras que se están realizando en el techo del Centro Cultural Córdoba, en virtud de prácticas no autorizadas de deslizamiento.

Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

PUNTO 38

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17251/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la administración de los recursos del Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar.

Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género

PUNTO 39

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16809/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: "Pavimentación Ruta Provincial E-57 Camino del Cuadrado", estudios morfológicos y geológicos, falla de Punilla e impacto ambiental.

Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

PUNTO 40

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16908/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al proceso de traspaso y absorción de Córdoba Bursátil SA a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 41

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17139/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de operativos realizados para la detección y clausura de canales clandestinos que derivan agua de inundaciones hacia caminos y zonas pobladas, cantidad de consorcios canaleros en los departamentos Marcos Juárez, Gral. San Martín y Unión y montos percibidos en el mes de marzo.

Comisión: Agua, Energía y Transporte

PUNTO 42

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17151/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se encuentra sin servicio de transporte interurbano la localidad de San Pedro Norte, departamento Tulumba.

Comisión: Agua, Energía y Transporte

PUNTO 43

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17166/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Programa Córdoba Más Segura.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 44

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16582/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos recibidos del Gobierno Nacional destinados al auxilio de los gobiernos locales afectados por las inundaciones.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 45

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17359/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo recaudado y destino de los fondos correspondientes a la Coparticipación Federal de Impuestos, conforme ejecución presupuestaria al 30 de junio del año 2015.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 46

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17360/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social, conforme ejecución presupuestaria al 30 de junio del año 2015.

Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

PUNTO 47

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17369/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución del Programa de Desarrollo del Noroeste de la Fundación Banco de Córdoba, en particular en la comuna de Villa Candelaria.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 48

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17370/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos programas del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, conforme ejecución presupuestaria al 30 de junio del año 2015.

Comisión: Agua, Energía y Transporte

PUNTO 49

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17378/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a los hospitales Neuropsiquiátrico, Colonia E. Vidal Abal y del José Antonio Ceballos de las ciudades de Córdoba, Oliva y Bell Ville, respectivamente, a partir del informe del día 7 de julio producido por el Órgano de Revisión de Salud Mental de la Nación.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 50

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17506/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución presupuestaria, al 30 de junio de 2015, del Programa 086 del Ministerio de Finanzas.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 51

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17507/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos de la ejecución presupuestaria, al 30 de junio de 2015, de los Programas 103, 105, 109, 751, 754, 755, 758, 759, 761, 763, 764 y 765 del Ministerio de Gobierno y Seguridad.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 54

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17525/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a las agresiones sufridas por el Sr. Luqués, del barrio Las Violetas de la ciudad de Córdoba, por parte de una presunta banda narco y medidas de seguridad que se están aplicando para erradicar los quioscos de venta de drogas.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 55

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17532/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué localidades existen destacamentos policiales, recursos asignados a los mismos, si hay un detalle de direcciones y teléfonos de cada uno y controles que se efectúan sobre cada uno de ellos.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 56

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17545/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se avanzó en la obra del nuevo hospital de Río Tercero, si está presupuestado para el ejercicio 2016 y obras previstas a corto plazo.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 60

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17632/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al allanamiento desarrollado el pasado 16 de octubre en el Centro Socio Educativo Semiabierto (Ex Centro de Ingreso Correccional) de barrio Las Flores de la ciudad de Córdoba.

Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

PUNTO 61

Pedido de Informes – Artículo 195

17668/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, por el que cita al señor Ministro de Gobierno y Seguridad al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe respecto al robo, en el mes de mayo, de 50 pistolas 9 mm nuevas de la Policía de la Provincia.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 62

Pedido de Informes – Artículo 195

17679/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al incremento presupuestario en el Programa 504/02 relacionado a la conservación y duplicación de calzada de las rutas nacionales Nros. 36 y 19.

Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

PUNTO 63

Pedido de Informes – Artículo 195

17683/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Señor Ministro de Gobierno y Seguridad y al Señor Gobernador de la Provincia al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informen respecto al robo de armas en el seno de la Policía de la Provincia.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 65

Pedido de Informes – Artículo 195

17694/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredó, por el que cita al Señor Ministro de Gobierno y Seguridad y al Señor Jefe de Policía de la Provincia (Art. 101 CP), para que informen sobre el posible robo de 50 pistolas reglamentarias, calibre 9 mm, en barrio Ampliación Cerveceros de la ciudad de Córdoba.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 66

Pedido de Informes – Artículo 195

17717/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredó, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la implementación del programa "Córdoba de Pie" y a la ejecución de fondos para remediar los daños causados por las inundaciones del verano de 2015.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 67

Pedido de Informes – Artículo 195

17718/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredó, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la implementación del programa "Córdoba de Pie", en lo referido a infraestructura, detallando por localidades.

Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

PUNTO 68

Pedido de Informes – Artículo 195

17720/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredó, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras hídricas ya ejecutadas, finalizadas; así como motivos por los que no se comenzó con otras previstas, en el marco del programa "Córdoba de Pie".

Comisión: Agua, Energía y Transporte

-6-

A) INTERRUPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA PRÁCTICAS DE ABORTOS NO PUNIBLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

B) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO LAS PALMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

C) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MASIVAS DETENCIONES Y ALLANAMIENTOS. SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. CITACIÓN PARA INFORMAR.

D) VILLA BOEDO, DE CÓRDOBA. OPERATIVO POLICIAL, CON DETENIDOS BRYAN Y GASTÓN BARRAZA. MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.

E) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. GASTOS DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA EN LOS PRESUPUESTOS 2014 Y 2015. PEDIDO DE INFORMES.

Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 52, 57 al 59 y 64 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 2º sesión ordinaria del 138º período legislativo del año 2016.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 2º sesión ordinaria del 138º período legislativo del año 2016, de los proyectos correspondientes a los puntos 52, 57 al 59 y 64 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 2º sesión ordinaria del 138º período legislativo del año 2016.

PUNTO 52

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17516/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre la interrupción de la aplicación de la guía de procedimientos para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punibles, Resolución N° 93/12, instrucciones impartidas a las direcciones de los hospitales y respuestas dadas a las solicitantes de las mismas.

Comisión: Salud Humana

PUNTO 57

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

16415/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial que terminó con la detención de tres jóvenes que se dirigían a la marcha conmemorativa del día 24 de marzo.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 58

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

16709/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre las masivas detenciones y allanamientos llevados a cabo por la policía los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 59

Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

17339/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial desarrollado en barrio Villa Boedo de la ciudad de Córdoba el día 27 de agosto, resultando detenidos dos jóvenes.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 64

Pedido de Informes – Artículo 195

17689/L/15

Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre gastos de la Agencia Córdoba Cultura SE, oportunamente transferidos por el Ministerio de Gestión Pública en los presupuestos 2014 y 2015.

Comisión: Educación y Cultura

-7-

ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXI

17900/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo al "9º Festival de los Amigos 2015", a desarrollarse los días 11 y 12 de diciembre en la localidad de Villa Gutiérrez, departamento Ischilín.

XXII

17901/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional la puesta en funcionamiento del sistema de luminaria del empalme de la Rutas Nacionales Nros. 9 y 60.

XXIII

17902/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, rindiendo homenaje a la Dra. Eleonora Zahorski por su labor en la investigación, estudio y difusión de la Historia del Norte Cordobés, desarrollado a través del Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba 'Horacio Dagoberto Goñí Fierro'.

XXIV

17909/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la obtención del segundo puesto en el Campeonato Argentino Masters de Billar, alcanzado por el deportista villamariense Carlos Coria.

XXV

17910/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al 95º aniversario del Club Atlético Defensores de San Marcos Sud, a celebrarse el día 18 de diciembre.

XXVI

17911/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por el ascenso a primera división y del bicampeonato alcanzado por el Club Atlético Talleres de Ballesteros, de la Liga Bellvillense de Fútbol.

XXVII

17912/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al 95º aniversario del Club Atlético San Martín de Vicuña Mackenna, a celebrarse el día 10 de diciembre.

XXVIII

17913/L/15

Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo a los 100 años del centro educativo "12 de Octubre" de la localidad de Tres Árboles, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 3 de diciembre.

XXIX

17914/L/15

Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Arduh, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios y convenientes para la ejecución del Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de Residuos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba y accesos.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXX

DESPACHOS DE COMISIÓN

**Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de
Ciencia, Tecnología e Informática**

16577/L/15

Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Perugini y Ceballos, creando el Sistema de Repositorios Digitales Educativos, Culturales y Científicos de la Provincia.

**Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización**

17812/L/15

Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Vásquez, Solusolia, Caro, Eslava y Brouwer de Koning, denominando "Curaca Juan Asencio" al tramo de la Ruta Provincial N° 21 que une las localidades de Cerro Colorado y Quilino.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXXI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES

17916/N/15

Nota de la Señora Legisladora Narducci: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, del Proyecto N°:

13713/L/14

Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, prohibiendo la fabricación, tenencia, depósito y comercialización de elementos de pirotecnia, autorizando solamente a fuegos de artificio para ser utilizados en espectáculos públicos.

17917/N/15

Nota del Señor Legislador Cid: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, del Proyecto N°:

12428/L/13

Proyecto de Ley. Iniciado por el Legislador Cid, modificando artículos de la Ley N° 8431, Código de Faltas.

-8-

A) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. CREACIÓN.

B) LEY N° 9235, DE SEGURIDAD PÚBLICA. ARTÍCULOS E INCISOS. MODIFICACIÓN. LEY N° 7826, ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. INCISO. INCORPORACIÓN.

Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión

Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de ley compatibilizados 2060/L/08, 8196/L/11, 10697/L/12, 12428, 13713, 13996, 13997, 14201, 14275, 14369, 14388, 14389, 14784 y 15160/L/14.

A continuación se leerá la nota mocionando su tratamiento sobre tablas.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 2 de diciembre de 2015.

Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S / D

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha, de los expedientes 2060/L/08; 8196/L/11; 10697/L/12; 12428, 13713, 13996, 13997, 14201, 14275, 14369, 14388, 14389, 14784 y 15160/L/14 (compatibilizados), modificando diversos artículos de la Ley 8431 (Código de Faltas de la Provincia de Córdoba).

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.

–**CÁMARA EN COMISIÓN**–

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta: la presente iniciativa es el resultado de años de trabajo por parte de la Comisión Especial para el Estudio, Análisis, Modernización y Reforma del

Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, que fuera creada por la Legislatura de la Provincia en diciembre de 2011.

A lo largo de estos años, tuvimos la posibilidad de escuchar opiniones por parte de la Policía, del Poder Judicial, de catedráticos y expertos en la materia, de diferentes instituciones públicas y privadas, de ONGs, ciudadanos y vecinos. Estas opiniones fueron recabadas no sólo en Capital, sino también en el interior provincial, entendiendo que a lo largo de la Provincia hay diversas realidades y problemáticas que deben ser atendidas. En efecto, el Código de Faltas vigente es una ley que tiene aplicación en todos los ámbitos de la Provincia, tanto en Córdoba Capital como en cada pueblo o comuna del Interior. En este sentido, se utilizó un método de trabajo que permitió conocer cuál es la realidad actual con respecto a la aplicación del Código de Faltas y la opinión de los ciudadanos cordobeses sobre esta herramienta, teniéndose en cuenta toda la geografía provincial.

Los aportes recibidos por la Comisión Especial, conjuntamente con el trabajo de los distintos bloques que componen esta Legislatura, permitieron entender la necesidad de reemplazar el Código vigente por un Código de Convivencia que asegure la coexistencia social y el respeto al ejercicio de las libertades y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución provincial y en las leyes.

En este nuevo Código de Convivencia se continúa con la misma estructura normativa de división del Código en tres libros: en el Libro I se establecen las disposiciones generales; en el Libro II se regulan la totalidad de las infracciones y sus respectivas sanciones, y, por último, en el Libro III se determina el procedimiento a aplicar con el nuevo Código.

Entrando al análisis del Libro I, se debe destacar que en el despacho se fijan sanciones menos aflictivas; es decir, se invierte el actual orden de penas –primero arresto y segundo multa– por un orden de: primero trabajo comunitario, segundo multa y tercero arresto, dejando así al arresto como última alternativa.

Asimismo, se estableció –fruto del consenso y con motivo de crear un Código mucho más garantista– que la asistencia letrada sea obligatoria durante todo el proceso contravencional.

Partiendo de estos preceptos, se logró consensuar un texto que contiene todos los cambios necesarios –que se han vuelto verdaderos reclamos concretos por parte de la sociedad– que van a permitir contar con una normativa que asegure todas las garantías que deben existir en un régimen contravencional moderno.

Al abordar el Libro I –en el que se encuentran contenidas las disposiciones generales de este nuevo Código de Convivencia–, nos encontramos con la incorporación de principios que no están contenidos en el Código actual. En primer lugar, el artículo 1º define con claridad el objeto del régimen contravencional, observándose en forma evidente un cambio de paradigma del actual Código de Faltas, llevado hacia un Código de Convivencia que va en resguardo de condiciones que garanticen la armonía social. Claramente, se establece la convivencia social, el ejercicio de derechos y el respeto de las libertades como objeto del régimen contravencional, sirviendo estos preceptos de guía para la aplicación de este Código, considerando infracciones aquellas conductas que alteren la paz social, menoscabando derechos y libertades.

Asimismo, se incorpora el principio de igualdad, el que –más allá de ser un derecho consagrado en nuestras Constituciones nacional y provincial, así como en los pactos internacionales de rango constitucional y en distintas leyes nacionales y provinciales– se reafirma al establecer que todas las personas recibirán, de parte de la autoridad, la misma protección y el mismo trato, sin que puedan ser afectados por distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias de carácter discriminatorio, debiendo prestar siempre una especial protección a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta. Esto se ve reflejado en algunas faltas específicas, en que se considera la situación especial de los menores, mujeres o personas mayores de 70 años, agravando las sanciones cuando sean víctimas de una contravención.

Se incorpora también el principio de tolerancia, que para algunos puede parecer meramente declamativo; sin embargo, para quienes estamos convencidos de que la tolerancia, la aceptación y el respeto frente a la diversidad son las bases fundamentales para vivir armónicamente dentro de la sociedad, este precepto es de suma importancia e inherente a una sociedad democrática, pluralista y participativa.

Por otra parte, se modifica una causal de inimputabilidad, estableciendo que no serán punibles las infracciones cometidas por menores que no tuvieran 18 años de edad a la fecha de la comisión del hecho; de tal manera, en consonancia con el régimen penal juvenil, se eleva de 16 a 18 años la edad de inimputabilidad. En tal sentido, gracias al aporte y consenso –hay que decirlo– de la totalidad de los bloques, que abogan por una reforma, se estipula un procedimiento puntual para el caso de infracciones cometidas por menores. Considerando su

especial situación de vulnerabilidad, se establece que cuando la infracción sea cometida por menores que no tuvieran 16 años cumplidos a la fecha de la comisión de la falta, la autoridad debe arbitrar los medios necesarios para entregar, en forma inmediata, el menor a los padres, tutores, guardadores o, en su caso, a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, haciendo cesar la conducta contravencional y la situación de riesgo del menor, asegurando en todo tiempo su integridad psicofísica. De este modo, vemos cómo, frente a una situación de vulnerabilidad, se interviene dándole un trato acorde, poniendo a disposición de un familiar – o, en su caso, de la SENAF–, evitando así la permanencia del menor en una dependencia policial –en concordancia con lo establecido por la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes–, lo que determina que actualmente se deba contar con un protocolo de procedimiento especial que asegure y resguarde la integridad psicofísica del menor.

Con relación a la protección de las niñas, niños y adolescentes, dentro de las disposiciones generales se incorporó un artículo que establece que, para el caso en que las infracciones sean cometidas valiéndose de menores, la autoridad interviniente tratará de hacer cesar la conducta y la situación de riesgo del menor, arbitrando los medios necesarios para ponerlo a disposición de los padres o de la SENAF.

De esta manera, se determina un procedimiento a seguir por ser, el menor, víctima de un mayor que lo explota, lo usa o lo manipula para que incurra en contravenciones y no reciba pena alguna.

Siguiendo con el principio de igualdad, se incorpora una modificación y una reformulación en lo que se refiere a las faltas cometidas por funcionarios públicos o miembros de las fuerzas de seguridad estableciendo que las penas van a ser más gravosas, cualquiera sea el tipo de acción u omisión en que incurrió el funcionario.

Avanzando en el análisis del Código, y en relación al concurso y conexidad entre contravención y delito, se determinó que cuando un hecho cayere bajo la sanción de este Código y del Código Penal será juzgado únicamente por el juez que entiende en el delito, suprimiendo la posibilidad que planteaba el actual código de poder condenar luego por la contravención si no se condenara por el delito, y lo hemos modificado por considerar que se estaría violando ...

– Murmullos.

Sra. Presidenta (Pregno).– Señores legisladores: solicito que guarden silencio para continuar con la sesión.

Continúa en el uso de la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.– Gracias, señora presidenta.

Decía que se estaría violando la garantía constitucional de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho y ser condenado tanto por contravención como por delito.

A simple vista, se puede observar que todas las modificaciones, incorporaciones o derogaciones son siempre en el sentido de lograr un Código más garantista donde haya cada vez menos lugar para la discrecionalidad. En este sentido, hay un cambio cualitativo en lo que hace a la asistencia letrada que es claramente un avance fundamental del nuevo artículo, ya que se establece que la asistencia letrada es para todos los casos, eliminando el precepto de que la asistencia letrada no será necesaria en ninguna etapa del proceso, que contenía el actual código.

Esta modificación también fue resultado del consenso, logrando un avance notable al determinar la obligación de que, al iniciarse el procedimiento, se debe hacer saber al imputado que le asiste el derecho de designar un abogado defensor de su confianza; para el caso de carecer de éste, la autoridad de juzgamiento le designará uno de oficio o, en su caso, un asesor.

Sin duda, es una de las modificaciones más relevantes que incorpora este proyecto, asegurando siempre al contraventor el ejercicio de su derecho de defensa e importa también que no haya hacia el juzgador posteriores planteos de nulidad por no haber contado -el contraventor- con su defensor. A lo largo de este nuevo Código nos encontraremos con la obligación de la presencia del defensor, bajo pena de nulidad, a la hora de que el juzgador tome decisiones que involucren a los contraventores.

Esta modificación, sumada al cambio fundamental en lo que hace a la persona, es quizás lo que más evidencia que estamos bajo un Código de Convivencia respetuoso de las garantías constitucionales.

Pasando a lo que se refiere a las penas del Título II, Capítulo Primero, de los tipos de sanción, podemos observar que en el despacho compatibilizado hay un cambio elocuente, al ser la “pena de arresto” excepcional como única pena principal y está prevista sólo para algunos casos o tipos en particular.

Asimismo, se invierte el orden de las penas principales estableciendo el trabajo comunitario como la principal –por definición–, seguido de la multa y, por último, el arresto, llegando así al nuevo Código que entiende al trabajo comunitario como una forma de remediar, por parte del infractor, la lesión causada que menoscaba, de manera general, la convivencia social. Entonces, el arresto no es ahora la primera opción para el juez, debiendo considerarse que en adelante no superará los tres días como regla general. Repito, el arresto no superará los tres días como regla general, avanzando así de manera inequívoca a un modelo donde la pena privativa de la libertad no es sólo la excepción sino que también hay una disminución cuantitativa respecto del actual Código. No obstante, en esta regla general existen figuras que por su gravedad ameritan una pena de arresto mayor, y así se fijó en el Código, siendo éstas las de actos discriminatorios, expresiones discriminatorias, hostigamientos, maltratos e intimidación, ya que se refieren en este caso a la violencia de género; posesión injustificada de ganzúas; peligro de incendio; prohibición de uso de pirotecnia, artículos pirotécnicos, comercialización y uso; disparos de armas y encendido de fuego en sitios públicos; conducción peligrosa; carreras en la vía pública y conducción bajo estado de ebriedad o bajo acción de consumo de estupefacientes o psicofármacos.

Esta nueva normativa sigue manteniendo la posibilidad de disminuir la pena por confesión, pero con un agregado esencial, ya que el reconocimiento de la culpabilidad sólo se puede realizar bajo pena de nulidad si el contraventor no cuenta con asistencia letrada. Vemos aquí, como ya mencioné anteriormente, que la asistencia letrada es una garantía que acompaña todo el Código, hasta el punto de tornar nulos actos que violen dicha forma.

Es claro el avance de un Código de Convivencia que respeta garantías que deben existir en procesos de este tipo, ya que en casos en que el contraventor haya realizado el reconocimiento de su culpabilidad sin contar con su abogado defensor se están vulnerando en forma clara garantías que existen en procesos de tipo penal.

En el mismo sentido, se establece que la ejecución condicional ante el caso de la condena pueda dejarse en suspenso, y la decisión debe ser fundada bajo pena de nulidad.

Respecto al perdón judicial, se incorpora la posibilidad de que el infractor ofrezca reparar el daño causado, esto es, sin duda, una clara adecuación del nuevo Código a lo que establecen los Códigos modernos, donde se da una preponderancia a resolver cuestiones de poca entidad como lo son muchas de las contravenciones de este nuevo Código, propiciando el avenimiento entre infractor y víctima por ser la mejor forma de componer un conflicto, ayudando de una manera efectiva a la paz social, ya que la reparación del daño genera en la víctima una respuesta lógica, efectiva y razonable que permite superar el hecho mismo.

La reparación del daño causado, contenido ahora en una pena sustitutiva, prevé sustituir las penas principales en forma total o parcial por la reparación del daño causado en el caso de que la contravención hubiera ocasionado un perjuicio a personas o bienes, pudiendo la autoridad ordenar la reparación no sólo al contraventor sino también –y esto es un avance– a su responsable civil, padre, tutor o curador, aclarando que ello de modo alguno reemplaza el derecho que siempre tiene la víctima a demandar la indemnización en el fuero civil correspondiente.

Siguiendo con las penas, en lo que se refiere a la multa se realiza una modificación a fin de que el monto dinerario mantenga los valores actualizados con el paso del tiempo para que no se transforme en montos viles que lleven a infractores consuetudinarios o sistemáticos a abusar de conductas por el hecho de que la sanción es de alguna manera inexistente. Así, se estableció la unidad de multa en un monto equivalente al diez por ciento del salario mínimo, vital y móvil para que se mantenga siempre actualizado y en un monto fijo, y que con los cambios económicos no se transformen en valores ridículos.

Asimismo, destacamos –y esto también es un aporte de los bloques de la oposición– que para hacer efectivo el pago de las multas se tengan en cuenta las condiciones económicas del infractor, y que el juzgador pueda autorizar que la misma se abone en cuotas que, en ningún caso, pueden exceder el 25 por ciento de los ingresos del contraventor.

Por otro lado, se estableció que el importe de las multas se destine al Ministerio de Desarrollo Social con asignación específica al Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo.

Con respecto a las penas accesorias, este nuevo Código plantea modificaciones en lo que se refiere a la prohibición de concurrencia y a las instrucciones especiales.

Finalmente, en cuanto a la interdicción de cercanía, se trata de una incorporación no contemplada en el Código actual consistente en una prohibición impuesta al contraventor de acercarse a menos de determinada distancia de lugares o personas por el tiempo que la autoridad de juzgamiento lo determine, logrando a través de esta pena accesoria contar con una herramienta similar a la de prohibición de concurrencia, considerando de forma particular a la víctima de la falta y fortaleciendo así a la convivencia social.

Con respecto al Libro II, que regula la tipificación de las faltas, se le dio una nueva estructura y se efectuó una modernización ya que se entiende que algunas están en una suerte de desuso y no tienen ya razón de existir.

Por otro lado, hay nuevas conductas antijurídicas que, sin llegar a ser delito, generan una molestia o un cercenamiento en los derechos de los demás ciudadanos y que deben ser castigadas procurando lograr la convivencia pacífica y armónica de todos los actores de la sociedad.

De este modo, y sobre la base de las opiniones recabadas en las distintas audiencias llevadas a cabo en el interior y las consultas efectuadas con intendentes y jefes comunales acerca de modernizar y adecuar los tipos vigentes a las necesidades y demandas que surgen del comportamiento social adecuado, se arribó a una nueva redacción del Libro II.

Como se dijo anteriormente, es importante destacar que en todas las contravenciones se fijaron sanciones menos aflictivas; en primer lugar trabajo comunitario, en su defecto multas y, por último, la sanción de arresto. Sólo tiene de manera exclusiva la pena de arresto, por la gravedad que representa, la figura de violación a la prohibición a whiskerías del expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, junto con la pena accesoria de clausura de los locales donde se comente la infracción.

Entrando al análisis concreto de las figuras contravencionales, destacamos que se han derogado las siguientes faltas: prostitución molesta o escandalosa, medidas profilácticas, mendicidad y vagancia, las patotas, las reuniones públicas tumultuarias, el consumo de alcohol en la vía pública, operaciones de cambio, prohibición de transitar para vehículos en malas condiciones de seguridad, vehículos mal estacionados, semovientes en sitios públicos y la omisión de ceder el paso a ambulancias, vehículos policiales o bomberos. La derogación de estas infracciones obedece a que no son acordes –como dijimos- a los tiempos modernos e implican un castigo para ciertas conductas privadas que no afectan, entendemos, la paz social.

En lo que se refiere a las operaciones de cambio, su derogación obedece a que ya están contempladas en el Régimen Penal Cambiario; por otro lado, las faltas referidas a la seguridad vial fueron derogadas en razón de ser redundantes porque se encuentran ya contempladas y penadas por la Ley Provincial de Tránsito.

Entrando directamente al análisis de la falta tipificada, debemos destacar que en el Título I, de Respeto a las Personas, encontramos la infracción de molestias a personas en sitios públicos, donde se decidió agravar las sanciones para el caso en que la víctima fuera mujer o persona mayor de 70 años, en razón de la mayor vulnerabilidad en que se encuentran.

Asimismo, se castigan los actos contrarios a la decencia pública. Se decidió aclarar que en ningún caso configurarían contravención las expresiones referidas a asuntos de interés público, como un modo de garantizar la libertad de expresión.

Se incorpora la figura del tocamiento indecoroso; esta falta es exclusivamente de instancia privada ya que la acción contravencional no se inicia nunca de oficio sino a instancia o denuncia de la víctima, ello para resguardar el honor o decoro de hombres y mujeres que se ven muchas veces sometidos a situaciones sumamente incómodas y que rozan el acoso; por ejemplo, en lugares donde hay aglomeración de gente sufren manoseos en partes íntimas de su cuerpo.

Una nueva falta es la de vehículos con niños en su interior, cuya razón de ser es que, lamentablemente, cada vez son más frecuentes las noticias de padres o adultos que dejan a niños encerrados y solos en vehículos mientras ellos realizan alguna actividad, trámite o cualquier otra acción, con el riesgo que dicha actitud puede generar en la integridad física de los niños. Por ello, y esto es una propuesta del legislador Oscar González, haciéndonos eco del peligro que representa esta conducta se decidió incorporar esta figura y al personal policial para que tome las medidas necesarias para asegurar la protección del menor, por ejemplo, abrir el vehículo estacionado.

También se crea la figura del suministro de objetos peligrosos a niños o niñas menores de edad -castigando a quienes se los entreguen de manera inequívoca- y que representen un peligro para éstos o terceros. Existe en la norma una enumeración ejemplificativa de objetos peligrosos como son: armas de fuego, armas blancas, explosivos, etcétera, es decir, aquellos que tengan una entidad suficiente y real de peligro.

Dentro del Título I se incorpora el Capítulo Tercero respecto a la libertad, donde se regula la facultad de una persona de ejercer el derecho de admisión, de conformidad a lo dispuesto por la Ley nacional 26.370. Se castiga a quienes ejercen este derecho de una manera abusiva con el reprochable fin de discriminar a otro, ya sea por su condición económica o por su aspecto físico.

En este Capítulo también se regula el cuidado de vehículos sin autorización legal, situación muy común en los tiempos que corren y que la sociedad demanda su control. En efecto, seguramente todos alguna vez hemos sido víctimas de inescrupulosos que con una actitud desafiante, y sin contar con ningún tipo de autorización legal o sin ser autoridad competente, exigen el pago de una suma de dinero alegando el cuidado del vehículo en la vía pública. Esto provoca situaciones de tensión y de posibles daños a la propiedad privada, lo que con esta figura se pretende evitar; es decir, se procura prevenir la violencia que genera este tipo de actitud totalmente ilegítima o ilegal. Sin perjuicio de ello, se establece como un agregado que no se aplicará sanción alguna cuando el dueño de un vehículo desee, de manera voluntaria, entregar al “cuida coches” una retribución.

Reconociendo también una demanda social, y para brindar respuesta a un reclamo actual, se crea el Capítulo Sexto, De la Protección contra la Violencia de Género, cuya finalidad es resguardar a todas aquellas personas que sufren hostigamiento, intimidación o maltrato, brindando así una respuesta rápida y eficaz para detener a quienes provocan estas situaciones con la finalidad de evitar consecuencias quizás fatales y que, lamentablemente, son noticias cotidianas en todo nuestro país. En consecuencia, se pretende brindar una respuesta inmediata mediante la detención preventiva del autor de este tipo de contravenciones. Asimismo, se establece un agravante de las penas para el caso de que la persona sea sostén de familia, las víctimas sean menores o mayores de 70 años, el hecho se produzca por razones de género o con el concurso de dos o más personas.

En consonancia con lo expresado con anterioridad, y debido a las frecuentes y lamentables situaciones que se conocen mediáticamente, se crea el Capítulo de Respeto a la Función Pública, donde se establece el castigo por el agravio al personal de centros educativos; por el aporte de distintos legisladores, se ha agregado a médicos o integrantes de equipos de salud. Últimamente, es muy común que el personal docente o no docente de una escuela, como también el personal de los hospitales públicos, sea víctima de insultos, gritos o intimidaciones de parte de padres que de ningún modo pueden tolerarse y, por lo tanto, estimamos que deben ser castigados.

Dentro del Capítulo De la Defensa de los Bienes Públicos y Privados se modifica la figura del merodeo urbano y ahora se tipifica como “conducta sospechosa”. Se caracteriza porque se ha establecido una regulación totalmente objetiva mediante la enumeración en la norma de situaciones que ameritan la aplicación de dicha figura. Quedan así claramente delimitados los extremos de su procedencia y se brinda de este modo una respuesta a los reclamos de una parte de la sociedad que considera que la figura del merodeo se aplica de manera discrecional y abusiva por parte de la Policía. Además, atendiendo al pedido de la mayoría de la sociedad que la considera una figura necesaria para la prevención de delito y para proteger y brindar seguridad a personas y bienes, se modificó su redacción para hacerla totalmente objetiva y evitar dichas situaciones discrecionales, ya que ha dejado de ser una figura como era en el Código actual tan abierta y ambigua. Por su parte, se regula –tal como ya se encontraba en el viejo Código de Faltas- el merodeo en la zona rural.

Se mantiene el Capítulo intitulado De la Defensa del Patrimonio Cultural, incorporándose una figura que castiga a todos aquellos que sin permiso remuevan o extraigan bienes de yacimientos arqueológicos, atento a la importancia histórica y cultural de este tipo de bienes.

En lo que respecta al nuevo Título De Defensa de la Fe Pública, se crea la falta de apariencia, con lo que se pena a quienes, con el propósito de ingresar a un inmueble, simulen algún trabajo o función, por ejemplo, ser trabajadores de alguna prestadora de servicios, debido a la intranquilidad que ello representa para toda la sociedad.

Por otro lado, y tal como fuera manifestado, se ha derogado la contravención que sanciona la mendicidad en general y sólo se castiga a quienes utilicen o expongan a menores o incapaces para mendigar o para la venta ambulante.

En el Capítulo denominado Del Consumo y Expendio de Bebidas Alcohólicas se establece la figura de “ebriedad o intoxicación escandalosa”, que ya estaba contemplada en el artículo 62 del actual Código, pero no se impondrá la pena de arresto y, junto a las penas principales como el trabajo comunitario, se aplicarán las penas accesorias de instrucciones especiales a los fines de que el infractor realice el correspondiente tratamiento terapéutico.

Por otro lado, se crea la figura que sanciona a quienes organicen competencias consistentes en el consumo del alcohol con el fin de proteger la salud, sobre todo la de nuestros jóvenes.

Asimismo, y por los fundamentos expresados anteriormente, se incorpora una falta que castiga a quienes faciliten, vendan o suministren a menores de edad productos industriales o farmacéuticos que emanen gases que puedan ser inhalados provocando daños en la salud del menor.

En lo que respecta al Capítulo de la Salud Pública, se introduce una modificación a la contravención que sanciona la negativa u omisión de identificarse, dejando totalmente claro que no procede la aplicación de pena alguna para quien no tenga o no exhiba el Documento Nacional de Identidad; no se castiga no tener el DNI, sí se castiga a quien, ante la solicitud de un funcionario público o miembro de la Fuerza de Seguridad de identificarse o de aportar sus datos completos, omita hacerlo, se niegue o dé datos falsos. Asimismo, se establece que este procedimiento de solicitar la identificación de una persona, para el caso que hubiera una negativa u omisión, la detención debe hacerse en presencia de dos testigos civiles de actuación.

Por otra parte, se modifica el anterior artículo 82 del Código de Faltas que castigaba diferentes conductas en ocasión de los juegos de carnaval, ya que los mismos han quedado en desuso; sí se penará conductas inapropiadas en ocasión de fiestas populares o religiosas.

Se incorporan tres nuevas contravenciones con respecto a la seguridad pública. En primer lugar, se castiga a quienes permitan a su ganado mayor o menor pastar o pasar a predios ajenos; en segundo lugar, se sanciona a quienes dejen deambular animales por la vía pública y, por último, se pena al dueño de una construcción ruinoso que, habiendo sido intimado a repararla o demolerla, no lo hiciera poniendo en riesgo la seguridad de personas o cosas.

En relación a los artículos que regulan el uso y la comercialización de la pirotecnia, en virtud de existir posiciones encontradas dentro de la Comisión de Reforma -si bien existe una postura que pretende prohibir totalmente su uso- se decidió que las figuras que hacen al tema continúen vigentes, permitiendo la comercialización y uso siempre que exista la autorización de la autoridad competente. Sin perjuicio de ello, no existe impedimento alguno para que cada municipio o comuna, ejerciendo la autonomía que le es propia, decida prohibir en su ejido su utilización o comercialización. Debemos destacar que se incorpora en este capítulo la sanción a cualquier mayor, sea pariente o no, que entrega a título gratuito pirotecnia a un menor de 16 años de edad; es decir, no sólo se castiga la venta a dichos menores sino a quienes la provean a los mismos.

Con respecto a la figura que castiga la portación ilegal de armas, debe quedar totalmente claro que la norma se refiere a armas que no estén previstas en el Código Penal como, por ejemplo, las de aire comprimido que provocan sensación de intranquilidad, ya que son capaces de producir daños o intimidación.

Conforme con lo manifestado, y en relación a las faltas que hacen a la Seguridad Vial, muchas figuras fueron derogadas, entre ellas la prohibición de transitar con vehículos en malas condiciones por la subjetividad de la figura. Con respecto a la falta que sanciona confiar la conducción de un vehículo a un menor, se saca la edad de 18 años y se establece que la sanción procede cuando la conducción la realiza un menor no autorizado por la autoridad competente, ya que en muchos lugares el carnet se entrega a edades más tempranas. Se deroga también la falta que castiga los vehículos mal estacionados, la utilización de semovientes, la obligación de dar paso a ambulancias, vehículos policiales o bomberos, por ser redundantes ya que se encuentran contempladas en la Ley de Tránsito. Por último, se modifica la contravención que sanciona la omisión de señalamiento cuando se está realizando una obra en la vía pública, haciendo extensiva la pena a personas humanas o jurídicas que actúen como representantes o ejecutores de la obra debido a que, en la mayoría de los casos, son obras realizadas por empresas privadas.

En relación al nuevo Capítulo que habla de la Defensa de los Consumidores, se elimina la norma que sanciona la omisión de enviar listas o llevar registros.

Para finalizar el análisis referido a las infracciones y sus sanciones, debo aclarar que no se han incorporado a este nuevo Código de Convivencia las faltas que están contempladas en el Título II, Capítulo Segundo, denominadas alteraciones al orden en juntas deportivas, y la del Título III, Capítulo Primero, violación a normas reglamentarias de la caza y pesca deportivas del Código de Faltas, Ley 8431, en virtud de que se va a legislar en el futuro sobre un Código de Convivencia Deportiva. En consecuencia, las faltas referidas a estos temas seguirán vigentes, tal y como se encuentran reguladas en el Código de Faltas, hasta que se produzca también la sanción de un nuevo Código de Convivencia Deportiva; en definitiva, se van a adecuar la figura y la contravención a los tiempos que corren y a las necesidades de la sociedad.

Continuando con el análisis del nuevo Código, me referiré al Libro III, normas de procedimientos en materia de infracción. Quizás el hecho más convocante y notorio de la revisión del Código de Faltas ha tenido que ver con la polémica que desata la autoridad de juzgamiento, es decir, que la Policía de la Provincia sea juez y parte, ya que actualmente quien interviene en el procedimiento es también luego el que termina aplicando la sanción. En ese sentido, hubo coincidencia plena en que debe cesar la potestad de juzgamiento de las

autoridades policiales, para lo cual se propone modificar el procedimiento que está instituido en el Libro III vigente.

De este modo, y entrando al análisis concreto del Libro III, referido a las normas de procedimientos en materia de infracciones, se encuentra dividido en cuatro títulos. El Título I, De las Disposiciones Generales, fija, entre otros temas, la autoridad competente y regula la detención preventiva; el Título II, De los Actos Iniciales, que regula la actuación de la Policía en la confección del sumario; el Título III, Del Juzgamiento, que reglamenta la actuación de los ayudantes fiscales y jueces de paz, y el Título IV, que habla de la revisión judicial, que regula el procedimiento que llevan adelante los jueces de faltas o de control o letrados más próximos al lugar del hecho.

El Título I comienza regulando la autoridad competente; establece que la autoridad competente para conocer y juzgar las infracciones cometidas en todo el territorio de la Provincia, son competentes: a) para el juzgamiento y las infracciones previstas en el Libro II de este Código, los ayudantes fiscales que no cuenten con competencia material específica y donde no hubiera ayudantes fiscales, los jueces de paz legos de campaña con competencia en el lugar donde se cometió la infracción o con asiento más próximo al lugar del hecho; b) para entender la revisión judicial, los jueces de faltas y, donde no los hubiere, los jueces de control o, en su defecto, los jueces letrados más próximos al lugar del hecho.

Aquí el nuevo Código consagra una solución que pone fin a la facultad de la Policía administrativa, a través del comisario y subcomisario, de juzgar administrativamente las faltas, otorgando la facultad de juzgamiento, en primer término, a los ayudantes fiscales que no cuenten con competencia material específica y, donde no los hubiere, a los jueces de paz legos de campaña. En el inciso b) establece que para entender la revisión son competentes los jueces de faltas y, donde no los hubiere, los jueces de control o, en su defecto, los jueces letrados más próximos al lugar del hecho.

De esta manera, se da respuesta a uno de los principales cuestionamientos que ha venido recibiendo el actual Código de Faltas, que se asienta sobre el hecho de que la misma Policía que constata la infracción en la vía pública, luego es la encargada de juzgar y aplicar la sanción correspondiente.

En este sentido, la circunstancia de tener que presentar el procedimiento a otra autoridad distinta a la fuerza policial, para su caso los ayudantes fiscales que forman parte del Ministerio Público y los jueces de paz del Poder Judicial, se alza como una mayor garantía para el ciudadano, ya que para que su comportamiento sea sancionado es necesaria la opinión en igual sentido de dos instituciones públicas distintas. Esta división de roles se presenta como un mejor contrapeso del accionar policial, ya que su actuación en esta materia es evaluada por una autoridad ajena a la propia institución.

Por otra parte, se regula la extensión preventiva de la siguiente manera: "detención preventiva, que no puede exceder las ocho horas de duración, contadas a partir del momento de su aprehensión y procede en los siguientes casos: a) cuando fuere sorprendido in flagrancia; b) si tuviera objetos o presentaran rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en la comisión de una contravención, y c), cuando se negara a manifestar o brindar la información suficiente que haga a su entidad, omitiera hacerlo, se negara a dar los informes necesarios o los diera falsamente sin causa justificada; en todos los casos, bajo pena de nulidad, el procedimiento debe efectuarse con la participación de dos testigos civiles de actuación.

Toda detención preventiva debe ser comunicada de manera inmediata a la autoridad competente, quien se impondrá de la situación y ordenará las medidas a seguir. Las circunstancias que motiven la detención preventiva y su prolongación en el tiempo deben hacerse constar, bajo pena de nulidad, en el acta a que hace referencia el artículo 130 de este Código.

Esta disposición también es una de las principales modificaciones al acotar fuertemente el impacto de la privación inicial y, junto con el resto de las disposiciones que regulan la imposición de la sanción de arresto, tanto de la parte general como del procedimiento del juzgamiento de revisión judicial, ubican a nuestra Provincia claramente por encima del estándar mínimo que ha ido fijando la Corte Suprema de Justicia en este tema. Me refiero a las exigencias que deben cumplir los regímenes contravencionales al momento de regular la privación de libertad de los infractores y que la Corte ha ido incorporando a partir de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en el caso de Argentina a partir del conocido fallo Bulacio.

Dentro del Título I también debemos mencionar un artículo que regula la situación de los menores bajo efectos del alcohol, de estupefacientes, psicofármacos u otras sustancias, con la modificación realizada durante el tratamiento en comisión en el sentido que deben ser conducidos al establecimiento sanitario que corresponda.

Respecto al Título II, prácticamente sigue la misma redacción de la Ley 8431, con un importante agregado en el artículo referido a la información que debe dársele a todo imputado. Aquí destacamos como novedad la exigencia de hacerlo bajo pena de nulidad y el agregado de dos nuevos incisos referidos al derecho de asignar asistencia letrada y al derecho de efectuar una llamada telefónica para informar a un familiar directo acerca de su situación. Este último derecho forma parte también del conjunto de situaciones que la Corte evaluó en el caso Núñez contra la Provincia de Tucumán, y cuya ausencia configura parte del contexto que fuera considerado violatorio de las garantías mínimas exigibles.

Este artículo permite dar más garantías al presunto infractor, teniendo en cuenta que el recaudo más exigente, desde el punto de vista constitucional, está orientado al supuesto de privación de libertad, por lo que se establece que cuando aparezca como procedente la sanción de arresto, la autoridad de juzgamiento debe elevar de manera inmediata al juez competente las actuaciones. De esta manera, se busca acelerar la intervención del juez y que sea él quien imponga este tipo de sanción.

Para los casos que la sanción sea impuesta por la autoridad de juzgamiento, se prevé la posibilidad de solicitar la revisión judicial en el término de dos días desde la notificación.

El Título IV trata sobre el procedimiento de revisión judicial, que se abre en los dos supuestos recién analizados, es decir, por revisión de la causa y cuando se solicite la revisión judicial de las resoluciones emitidas por ayudantes fiscales o jueces de paz. Es importante destacar acá tres novedades que trae el despacho en tratamiento, en el Libro I, de las disposiciones generales, que tiene una profunda repercusión en el juzgamiento de las contravenciones; me refiero al derecho de contar siempre con asistencia letrada, a la incorporación de trabajo comunitario como pena principal, y a la instauración de la reparación del daño causado como una pena sustitutiva de la principal. También es importante mencionar en este punto que se establece como principio general que la pena de arresto no superará en ningún caso los tres días.

Menciono todo esto en conjunto porque así puede apreciarse mucho mejor el cambio de paradigma que propone el nuevo Código; es decir, un Código donde la importancia de la pena de arresto se ve sensiblemente disminuida, tanto en lo que hace a su prioridad como a su duración. Como contrapartida, se realiza el trabajo comunitario y las instrucciones especiales; se autoriza la sustitución de las penas principales por la reparación del daño causado cuando la contravención hubiere causado un perjuicio a personas o bienes determinados.

Se establece el mecanismo para que el presunto contraventor pueda contar con asistencia letrada, a lo que hay que agregar las dos importantes novedades en lo que respecta al procedimiento, como ya lo vimos anteriormente: por un lado, la regulación de la detención preventiva que establece un plazo muy acotado de duración, no más de ocho horas y, por otro lado, el establecer que la autoridad de juzgamiento elevará de inmediato las actuaciones al juez competente, según lo establece el artículo 119, inciso b), en el caso que presuma que la sanción aplicable sería la de arresto. Es decir, la ley contempla que en la mayoría de los casos la sanción de arresto sea directamente aplicada por los jueces de falta, y donde no los hubiere por los jueces de control o, en su defecto, por los jueces letrados más próximos al lugar del hecho. Esto es así porque existe la posibilidad teórica de que la autoridad competente no haya considerado inicialmente aplicable la remisión y luego, al momento de dictar la resolución, imponga sanción de arresto. En este caso, le quedaría al condenado la posibilidad de solicitar, dentro de los dos días, la revisión judicial, pero la regla es que el Código está fijando que la sanción de arresto sea directamente aplicable por los jueces de falta o de control, o jueces letrados.

En definitiva, se procura que el procedimiento sea rápido y sumario. Por ello, será verbal y de características arbitrales, y lo más importante es que nadie podrá ser sancionado sin ser entrevistado personalmente y oído por quien tenga la responsabilidad de juzgarlo.

Por otra parte, para el caso de que haya un reconocimiento por parte del contraventor de la conducta, el juez resolverá pudiendo aplicar una disminución de la pena, perdón judicial, ejecución condicional o prohibición de concurrencia.

Finalmente, se ha establecido como disposiciones transitorias que la presente ley va a entrar en vigencia a partir del 1º de abril del próximo año. O sea, la entrada en vigencia de esta norma sancionada en el día de la fecha será el 1º de abril del año entrante, a los fines de poder capacitar y adecuar el nuevo procedimiento en materia de contravenciones establecido en el presente Código.

Asimismo, si bien a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se deroga la Ley 8431, actual Código de Faltas de nuestra Provincia, Texto Ordenado en el año 2007 y sus modificatorias, van a quedar exceptuados los artículos 54 al 60 del Capítulo Segundo, alteraciones al orden, juntas deportivas, del Título II el Libro II, y los artículos 105 al 108 del Capítulo Primero, violación a normas reglamentarias de la caza y la pesca deportiva, del

Titulo III el Libro II, cuyas disposiciones continuarán aplicándose en lo que hace al régimen sancionatorio, y también el inciso 2) del artículo 114 del Capítulo Primero del Título I del Libro III.

En conclusión, el despacho en tratamiento responde a la necesidad de una reforma integral del actual Código de Faltas para pasar a denominarlo y llamarlo en el futuro Código de Convivencia Comunitaria, logrando una normativa más garantista que contribuya a mejorar la convivencia social y evitar la discrecionalidad y el abuso en su aplicación.

Por otra parte, y a los fines de adecuar la normativa vigente al nuevo Código de Convivencia, se modifica la Ley 9235, de Seguridad Pública, en el inciso 4) del artículo 3º, artículo 22 e inciso p) del artículo 23, quitando la facultad de juzgamiento de contravenciones a la Policía de la Provincia de Córdoba.

Asimismo, se modifica la Ley 7826, Orgánica del Ministerio Público Fiscal, incorporando como inciso 5) del artículo 64, sobre las funciones de los ayudantes fiscales, la facultad de conocer y juzgar administrativamente las faltas cuya competencia le atribuya el Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba.

Además, se amplía la facultad del Tribunal Superior de Justicia y del Ministerio Público Fiscal para dictar todas las normas que sean necesarias para un adecuado funcionamiento del Código de Convivencia.

Por todo lo expuesto, señora presidenta, y para dar por terminada la intervención de nuestro bloque referida a cómo queda el despacho que vamos a discutir en la presente sesión, solicito el acompañamiento de los diferentes bloques, adelantando el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.

Quiero resaltar también el trabajo de los señores legisladores de todos los bloques durante más de cuatro años, quienes con su participación activa y mayoritaria, y con distinta mirada –esto es lo rescatable– permitieron arribar a este despacho que, en definitiva, se sintetiza en una obsesión que teníamos desde hace tiempo: reparar esta deuda que tiene nuestra democracia –todavía joven– en darle una herramienta mucho más justa, legalista y garantista a nuestra sociedad.

Creo que en el día de la fecha Córdoba está dando un paso fundamental al escuchar las voces de muchas movilizaciones, a lo largo y a lo ancho de la Provincia, pidiendo y reclamando una modificación y el cese de la arbitrariedad y la discrecionalidad de la norma, y creo que hoy –repito–, con la sanción de la misma, hemos dado un paso fundamental al reparar una deuda histórica que teníamos nosotros con nuestra democracia.

Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).– Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.– Señora presidenta: antes de comenzar con mi informe, he advertido un error que se ha deslizado en uno de los artículos; pido una rectificación porque fue un error absolutamente involuntario –de pluma y letra, como decimos los abogados–: cuando el artículo 69 impone “diez días”, en rigor de verdad debe decir “tres días” –que son los que correspondían a esa figura. Así que pido al Secretario que tome nota de esta rectificación.

Coincido con el final del discurso del miembro informante del oficialismo, de que este es un momento importante para la Legislatura de la Provincia de Córdoba; es uno de esos días cuando se discuten cosas trascendentes; aquellas que salen de las cuatro paredes de esta Casa del Pueblo para derramarse en su importancia a lo largo y ancho de todo el territorio provincial.

Es cierto que se trata de una asignatura pendiente porque, en rigor de verdad, lo que estamos poniendo en discusión es casi una “vaca sagrada” de la legislación en términos de políticas públicas de seguridad de Unión por Córdoba. Y digo una asignatura pendiente porque mientras hablaba el legislador Busso recordaba que hace un poco más de dos años, en este mismo recinto, cuando hacíamos una valoración de los deberes y haberes, de las fortalezas y debilidades desde nuestra aún joven recuperada democracia que cumplía 30 años, más de un legislador –entre los que me anoto–, cuando nos tocó hacer uso de la palabra para referirnos y reflexionar sobre las cosas que nos quedaban y de las deudas que teníamos con la democracia, decíamos que había dos, de un abanico amplio y opinable.

Una de ellas estaba vinculada a luchas contra la pobreza, esa era una asignatura pendiente grande, parafraseando precisamente al primer presidente que tuvo nuestro país cuando recuperó la democracia –y los que con él coincidimos–, que tenemos que llegar en algún momento a que “con la democracia se cura, se come y se educa”; esas tres palabras que quedaron para la historia.

La otra asignatura pendiente tiene que ver con el Código de Faltas. Al respecto reflexionaba: cómo pudimos los cordobeses convivir estos 30 años con semejante irregularidad –por decirlo de una manera complaciente y no técnica.

La semana pasada participé, junto con otros legisladores de la Provincia, en la presentación de un libro muy interesante –se los recomiendo, no solamente a usted, señora presidenta, sino también al resto de los legisladores que sé que están interesados en esta temática-: “Modelo Contravencional Alternativo”, de Mario Juliano y Horacio Etchichury.

Un párrafo de ese libro –escrito por un amigo, Claudio Guiñazú, con el nombre de “Elogio de la Osadía”- hace referencia a la necesidad de discutir y repensar críticamente el derecho y las prácticas que conforman el universo contravencional argentino. Ellos expresan –y lo comparto- que es necesario modernizar el ámbito contravencional, adecuándolo a las exigencias que la Constitución y los instrumentos de Derechos Humanos imponen al ejercicio de la potestad represiva del Estado.

El libro culmina en una frase, que nos interpela como representantes del pueblo, que dice: “Una modificación legislativa resulta insuficiente para eliminar prejuicios, pero puede neutralizar algunas de las consecuencias que se siguen de ellos”; y finaliza diciendo: “Es de esperar que los legisladores cordobeses y de las restantes provincias argentinas acusen recibo de la propuesta”. Desde ya que, en lo que a mí me toca, asumo plenamente ese desafío.

El Código de Faltas es, quizás, la herramienta predilecta de un gobierno que ha hecho de las políticas de seguridad un eje central de su política en general; que ha puesto –si lo tuviera que adjetivar o definir- enormes recursos en seguridad, a punto tal que Córdoba es la provincia que más policías por habitantes tiene, superando largamente la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas, y que –junto con otra provincia- tiene el presupuesto más alto en términos de asignación presupuestaria.

Uno podría decir que todo eso está bien -o que está mal-; pero, cuando advertimos lo corta que es la manta presupuestaria de la Provincia de Córdoba –manta que se exterioriza, por ejemplo, por el diferimiento del pago a los jubilados o por tener la presión tributaria más alta de la República Argentina en términos de Producto Bruto Geográfico- empezamos a entender que esa definición de política de gobierno no es neutra.

Pero, ¡vaya paradoja!: a pesar de esa asignación de recursos, a pesar del énfasis que ha puesto el Gobierno de la Provincia en llevar adelante estas políticas públicas de seguridad, tengo el absoluto convencimiento, sin caer en un acto de reduccionismo, que ha tenido un fracaso estrepitoso en términos de esas políticas.

No voy a caer, señora presidenta, en el lugar común de decir que este Gobierno ha hecho todo mal o que tengo una mirada distinta, porque, objetivamente, es un gobierno que, como cualquier otro, ha hecho algunas cosas que han recibido el beneplácito de la población, y otras que han merecido nuestro más enfático rechazo; pero lo cierto es que en materia de seguridad el fracaso ha sido mayúsculo porque, a pesar de ese presupuesto y de ese énfasis, en la Provincia de Córdoba tenemos hoy un aumento sostenido de la violencia –y no me refiero solamente a la violencia intervencional sino también a la institucional-, un crecimiento de la tasa de homicidios, enormes dificultades con la policía y un crecimiento del crimen organizado y del tráfico de drogas.

A mi juicio, ha fracasado no solamente una política específica sino un paradigma que aún adhiere a aquella vieja teoría que empezó a circular por estos solares del planeta este paradigma del doble pacto donde el poder político decide prácticamente, tercerizar, delegar toda la articulación, la definición, el diseño, la planificación y la ejecución de las políticas públicas de seguridad en la Policía, con la única condición que mantenga la criminalidad a raya.

Eso, indudablemente, empieza a tropezar a partir de que el narcotráfico perfora a la Policía de la Provincia de Córdoba a punto tal que la división de Drogas Peligrosas hoy se encuentra sometida a un proceso penal en Tribunales Federales. Después, los últimos acontecimientos que conocemos –aquellos vinculados a las noches del 2 y 3 de diciembre; lo último acontecido con el tráfico de armas de la propia Policía de la Provincia- dan una prueba concreta del fracaso de ese paradigma.

En ese contexto, el Código de Faltas tiene un enorme impacto, no solamente en las políticas de seguridad, sino también en las políticas sociales de la Provincia de Córdoba que, en realidad, nunca debieran estar disociadas. No puede haber una política de seguridad que no respete las políticas sociales y viceversa, a punto tal que hasta las mejores intenciones en materia de políticas sociales inclusivas, desde una perspectiva de derecho, suelen quedar heridas de muerte por una mala política de seguridad.

Si tuviéramos que ponderar en términos comparativos para saber de qué estamos hablando, dónde estamos parados, uno debiera imaginarse que el Código Penal de la Provincia de Córdoba abarca un enorme universo donde sanciona conductas que van desde el homicidio, la estafa, los delitos contra el Estado, hasta delitos menores.

Por aplicación del Código Penal, todos los años son detenidos y sometidos a proceso entre 18 y 19 mil ciudadanos en la Provincia de Córdoba, mientras que por la aplicación del Código de Faltas, que se supone que ataca aquellos hechos que son denominados de mínima intensidad, son aprehendidos entre 50 y 70 mil personas todos los años. Si hacemos un ejercicio mental, rápidamente podemos sacar la cuenta que en estas 3 ó 4 horas en que transcurre esta sesión legislativa en el Parlamento de la Provincia de Córdoba, van a ser detenidas entre 12 a 15 personas en la Provincia.

En verdad, el impacto es enorme porque se ha transformado a esta norma jurídica en una herramienta para disciplinar a los sectores populares y ha generado en el imaginario colectivo de las Fuerzas de Seguridad la creación de un nuevo sujeto, un sujeto imaginario, un nuevo sujeto social peligroso que en la psiquis de estos agentes responde a determinado estereotipo: un sujeto joven, morocho ...

Sra. Presidenta (Pregno).- Por favor, ¿podemos organizarnos?, porque se hace difícil escuchar la palabra del legislador.

Muchas gracias.

Sr. Birri.- Decía, un sujeto joven, morocho, hijo de sectores populares, que se viste de determinada manera, por portación de rostro. Ese -con su enorme impacto e incidencia social en la Provincia de Córdoba- es el "monstruo" que finalmente tenemos sentado en este debate en el banquillo de los acusados, sabiendo que si interpelamos el Código de Faltas también estaremos interpelando las políticas de seguridad que estos 16 ó 17 años ha venido llevando adelante Unión por Córdoba.

Tengo con este tema un histórico compromiso por partida triple: desde mi novel ejercicio de la Abogacía, cuando debía defender a muchísimos jóvenes de familias humildes de la Ciudad de Río Cuarto, sin haber visto nunca una materia en la Facultad de Derecho que abordara el Código de Faltas porque, indudablemente, estaba "pateado debajo de la alfombra"; luego, como funcionario de mi ciudad donde creamos la primera Comisión de Seguimiento de la Aplicación del Código de Faltas, en la Unidad Regional de nuestra Ciudad y, más tarde, con la posibilidad, como legislador de la Provincia de Córdoba, de honrar el compromiso asumido allá por el 2007, en pleno proceso electoral, cuando -como todos los que intentamos ofrecer una propuesta a nuestros vecinos- planteaba dentro de las prioridades de mi gestión legislativa, en esa suerte de contrato electoral, la reforma integral del Código de Faltas.

La verdad es que han pasado 6 años desde la presentación del primer proyecto -en el cual fui acompañado por la totalidad del entonces Frente Cívico y Social-, y hasta el día de hoy nunca fue tratado; pero, no tengo dudas de que tuvo la enorme virtud de poner en la agenda pública el debate sobre este tema. Dos años antes había empezado a ocurrir, también, un acontecimiento de pleno valor simbólico en el marco de las luchas populares, como lo fue la primera Marcha de la Gorra, que tuvo el enorme mérito de visibilizar de qué manera se lesionaban los derechos humanos y se vulneraban las Constituciones Nacional y Provincial.

A partir de ahí, se conformó una red invisible pero tangible, palpable, con miles de actores, en los barrios, en los sectores populares, en la academia, en la intelectualidad, en los gremios, en los pueblos, que de una u otra manera denunciaban que todos los días, todas las semanas, por la aplicación del Código de Faltas se lesionaban los derechos humanos en la Provincia de Córdoba, y todo ante un Gobierno impertérrito, ciego, sordo y mudo ante estos reclamos, que bajo el manto legítimo de la voluntad popular y las encuestas ha entendido que, a partir de ese "paraguas", se puede llevar puesto los derechos individuales y la Constitución de la Provincia.

En todo este tiempo, desde la militancia hemos pendulado entre dos estrategias, en la búsqueda de dos caminos de resistencia a la aplicación del Código de Faltas tal cual lo conocemos hoy: uno fue el planteo de la derogación del Código, y otro el planteo de su reforma integral. En verdad, conceptualmente me inscribo dentro de la teoría abolicionista, pero creo que no son los tiempos, creo que no están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para que no tengamos una norma contravencional en la Provincia de Córdoba, como no la tiene todavía ninguna de las 24 provincias argentinas.

Adhiero a la postura que ha planteado un referente nacional del análisis del Derecho Contravencional, Mario Juliano, quien decía en ese libro al que recién hacíamos referencia que: "ante todo este estado de cosas, la otra respuesta posible es la de un orden contravencional sustancialmente diferente al que conocemos, compatible con los derechos y las garantías y con el debido proceso legal, que sustituya de modo radical el modelo vigente".

Esa es la alternativa que venimos a proponer, sin que ello implique que deje de seducirnos -y lo comparto- la lisa y llana abolición del Derecho Contravencional por formas

más civilizadas y productivas de dirimir los conflictos, especialmente los conflictos de menor intensidad.

La verdad es que tengo un enorme respeto por los compañeros que han elegido el otro camino, el de la estrategia, para llegar a resultados similares. Pero, honestamente disiento de la estrategia elegida en el respeto de la lucha y de la resistencia.

Tengo el convencimiento de que plantear hoy la derogación o nada, es nada. Y ese “nada” no es neutro, no es gratis; es más, diría que es muy caro y se mide en decenas de miles de pibes que son detenidos todos los años en la Provincia de Córdoba sin un abogado que los defienda, con policías que son jueces y parte, con 48 horas –dos días- detenidos en los calabozos de Córdoba.

Por eso nosotros, con otro colectivo importante que tiene las mismas expectativas y las mismas ilusiones, hemos tomado el camino de plantear la reforma integral que rescate los postulados del colectivo de organizaciones que, allá por el año 2009 –si la memoria no me es ingrata-, en la Facultad de Derecho y bajo la coordinación de mi querido amigo Horacio Etchichury, concurrimos con Adela Coria –otra legisladora mandato cumplido, comprometida con las luchas populares-, a colectivizar junto a muchas organizaciones barriales de la sociedad civil y sectores de la academia en una propuesta de reforma integral del Código de Faltas que, entre otras cosas y entre sus principales enunciados, planteaba el respeto por la tripartición de poderes, garantizar el derecho a la defensa, la inversión de las penas, las garantías de los procesos mínimos, los debidos procesos, la uniformidad, nuevas figuras, mecanismos de justicia restaurativa, medidas de promoción de derechos, y podría seguir con la nómina de esos 20 postulados que se convirtieron en los ejes rectores de nuestro trabajo legislativo. Eso fue en el año 2009 y, por supuesto, mucha agua ha corrido bajo el puente.

En esa dirección hemos trabajado legislativamente sin olvidarnos, en mi caso como en el de muchos de los que están sentados en estas 70 bancas, que antes de ser legisladores hemos sido, somos y seremos militantes. Pero también es cierto, por un acto de absoluta responsabilidad, que el pueblo nos está pagando para ser legisladores y para cumplir con lo que dice el manual del buen legislador, que es hacer buenas leyes para los cordobeses, controlar los actos de gobierno y ser una correa de transmisión entre las demandas populares y el Estado.

En definitiva, este proyecto que se inició hace 6 años y tuvo un largo proceso de maceración, que tuvo –durante mucho tiempo- que dormir en los cajones de los sueños justos de la Legislatura, este proyecto que se está tratando va a ser una buena ley. Tengo el absoluto convencimiento de que es parcial y es insuficiente, pero en las actuales circunstancias de tiempo y lugar, políticas y sociales –porque no estamos legislando para Noruega, sino para la Provincia de Córdoba, gobernada por Unión por Córdoba-, con una sociedad que sigue teniendo a la inseguridad en el tope de sus problemáticas ciudadanas, no tengo la menor duda de que este proyecto de ley significa un avance.

En verdad, estoy muy lejos de hacer “posibilismo”; si hiciera posibilismo no sería un hombre de la izquierda democrática que eligió al socialismo como trinchera ideológica, y quizás hubiera elegido –y lo digo con absoluto respeto- al Partido Justicialista, al Radicalismo, o al PRO. Y reconocemos que aún queda mucho por hacer porque son muchas las debilidades que tiene este proyecto, pero como soy un hombre que tiene una mirada optimista de nuestro futuro, no tengo dudas que las debilidades que ofrece este proyecto de ley serán los desafíos y las oportunidades que tendrán los nuevos legisladores en los próximos cuatro años: tener Jueces de Falta que sean quienes dicten las sentencias –como decía el compañero Guiñazú días atrás, jueces con la toga y el peluquín-; eliminar, y no sólo restringir severamente como hemos hecho hasta ahora, la figura de la detención preventiva; reglamentar el habeas corpus, ya que la Provincia de Córdoba no tiene ley que lo reglamente, y ofrezco a los nuevos legisladores un proyecto de mi autoría para que lo tengan dentro de sus prioridades porque los cordobeses merecen tener una ley de hábeas corpus.

Aun con estas falencias, este proyecto, que se transformará en un Código, tiene poco que ver con el Código que estamos dejando atrás; aquél otro –y ya voy a hablar en tiempo pasado- lograba cosas casi milagrosas por lo penoso en términos de lo jurídico. Por ejemplo, conseguía el milagro casi único en la región de tener policías que dictaran sentencias; y a pesar de ser la Policía una institución del Poder Ejecutivo, estos actuaban como juez y parte. También conseguía el milagro de que hubiera decenas de miles de detenidos sin abogados. Cuando en algunos ámbitos regionales, nacionales, o internacionales –como el Mercosur- planteaba que en la Provincia de Córdoba había sentencias sin jueces y presos sin abogados, me decían: “Usted está loco, Birri; está hablando de una sociedad del siglo XVIII”. Pero no, era la Córdoba de 2015.

¿Sabe cuántos de las decenas de miles de aprehendidos por el Código de Faltas, señora presidenta –usted seguramente lo conocerá porque es una mujer informada-, contaban con

un abogado defensor a la hora de hacer valer sus derechos? El 4 por ciento; el 96 por ciento restante –son datos brindados por organizaciones que merecen nuestra confianza– era sancionado y muchas veces terminaba con sus huesos en un calabozo de nuestra Provincia, sin un abogado que lo defendiera.

Muchas veces pibes humildes, de los sectores populares de las principales ciudades de la Provincia de Córdoba, enfrentaron un proceso contravencional “solitos mi alma”, sin un abogado que los defienda. En la República Argentina, y particularmente en nuestra Provincia, hasta el peor de los criminales tiene un abogado que lo defienda en materia de justicia penal, no así los contraventores en Córdoba.

Dentro de un rato, esto nunca más va a ser así y todos los pibes detenidos, de los sectores populares y de cualquier sector, como nuestros hijos y los pibes de clase media –aunque muy ocasionalmente porque esta justicia contravencional tiene como principal objetivo el disciplinamiento de los sectores populares; sin ir más lejos, el cura de un barrio popular de la ciudad de Córdoba me contó, días atrás, que estaba con un grupo de pibes del barrio y lo llevaron a la UCA, detenido en la redada– gozarán del constitucional derecho de defensa en juicio y ninguna detención preventiva –que hoy dura hasta dos días– podrá superar las ocho horas y deberá ir acompañada de un informe circunstanciado de los motivos de la decisión adoptada; además, esas horas se contarán desde el momento preciso de la aprehensión y, si ese requisito no se cumple, se aplicará la pena de nulidad y una sanción por incumplimiento de los deberes de funcionario público al actor interviniente.

Por eso, señora presidenta, ¿cómo alguien puede decir que es lo mismo tener un abogado que no tenerlo, estando “solito mi alma”, encarando un proceso contravencional que puede terminar con días de arresto y con penas privativas de la libertad?, ¿cómo alguien puede afirmar que es lo mismo que a un pibe le dicte la condena un policía, que es el que colectó las pruebas y mandó detenerlo, siendo “juez y parte”?, ¿cómo se puede pensar que da igual que alguien esté preso dos días u ocho horas, como si estuviera alojado en un hotel cinco estrellas y no en un calabozo de nuestra Provincia?, ¿cómo se puede decir que da igual tener o no la figura de “prostitución escandalosa” para las trabajadoras sexuales de Córdoba? Dicho sea de paso, y en honor a ellas, mi primer proyecto en esta Legislatura –presentado a treinta días de haber iniciado mi mandato– consistió en la derogación del entonces artículo 45, que penaba la prostitución escandalosa en nuestra Provincia.

Otros me dicen que De la Sota se va a lavar la cara con este proyecto. La verdad es que me importa tres pitos –por no decir otra cosa– si De la Sota se lava la cara o se lava la conciencia, la verdad es que lo que me interesa es dictar una norma jurídica que les sirva a los sectores populares de la Provincia de Córdoba.

En esta larga resistencia al Código de Faltas, este es un eslabón más, nada más ni nada menos, es un mojón en el camino para seguir luchando por todo lo que falta, por otros paradigmas, para que un día no haga falta un Código de Faltas; en definitiva, para seguir luchando por una sociedad más justa y solidaria.

Mientras tanto, los jóvenes de la gorra seguirán marchando, nosotros junto a ellos seguiremos denunciando los abusos, habrá más fallos de jueces justos, que no miren para otro lado, se seguirá debatiendo acá, en las plazas y en las barriadas populares sobre mejores condiciones para una vida mejor para todos.

Mientras tanto, este legislador que termina su mandato, que hoy ocupa esta silla, esta banca, con la cual me han honrado los cordobeses y que traté de devolver con trabajo, honestidad y dedicación, cree haber cumplido con su contrato electoral y su compromiso electoral, simplemente con una partecita, en el acierto o en el error, con ese contrato que suscribí con los cordobeses y también para ayudar a develar uno de los grandes interrogantes que tienen no sólo las políticas de seguridad sino la política en general. La pregunta central que siempre nos hacemos aquellos que somos vecinos, ciudadanos –por sobre todas las cosas–, militantes a los que, ocasionalmente, el pueblo nos da este trabajo de ser legislador, en mi caso también desde una mirada jurídica, esa pregunta central en política criminal sigue siendo si un Estado constitucional puede vulnerar derechos humanos de un sector para brindar seguridad a otros. Y la respuesta no puede ser otra que “no”.

Por lo tanto, en mi nombre y en el del Partido Socialista, voy a votar en general a favor, y en particular, en contra los artículos 70, de conducta sospechosa, 71, de merodeo en zona rural, y 88, de omisión de identificarse.

Con esta definición agradezco la atención y manifiesto nuevamente mi voto favorable, con las excepciones que expresé para que se tome nota por Secretaría.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).– Gracias, señor legislador.

Dejamos sentada la modificación al despacho que obra en cada una de las bancas, despacho de Cámara en comisión, según lo expresado por el legislador Birri y, al mismo tiempo, quedan asentados en el Diario de Sesiones los que usted ha expuesto.

Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señora presidenta: “yo laburo, yo no robo, pero igual la Policía me trata como un choro”. Este es uno de los versos de una canción del cuarteto cordobés que se popularizó, y que refleja el sentir de cientos de miles de pibes que en esta Provincia se han visto avasallados en los más elementales derechos constitucionales por la acción de la Policía.

Antes de entrar en el tema, nobleza obliga, quisiera hacer algunos reconocimientos en nombre del bloque al que pertenezco y para el cual estoy informando, el bloque del Frente Cívico.

En primer lugar, voy a hacer un profundo reconocimiento al legislador Roberto Birri por su tesón, su trabajo, su esfuerzo, su vocación para construir consensos con los sectores populares.

En segundo lugar, un profundo reconocimiento a las organizaciones políticas, sociales, territoriales, que durante todos estos años han encarado una lucha en las calles para revertir esta situación.

También hacemos un reconocimiento a los sectores académicos -que han hecho un invalorable aporte- en las personas de Horacio Etchichury y de Hugo Seleme, no porque ellos estén totalmente de acuerdo con esta reforma -hay que decirlo- sino porque, aun en las discrepancias, han hecho aportes realmente centrales, sustanciales para esta reforma.

Quiero agradecer al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba; al INECIP; a los referentes de las distintas organizaciones juveniles territoriales que vienen trabajando, marchando y comprometándose como, por ejemplo, aquellos que son parte de la campaña nacional contra la violencia institucional o parte de las diversas cátedras de la Universidad, organizaciones políticas y territoriales; a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en la persona de Rubén Arroyo, con quien tengo el altísimo honor de copresidir esa organización.

Asimismo, sería justo -y lo voy a hacer- reconocer el esfuerzo que han hecho todos los bloques y en este sentido, también, con los avances y retrocesos, y las tensiones lógicas de quienes ejercen el poder con quienes no lo ejercemos, no es casual que hoy estemos sancionando este Código y que no haya sido posible en años anteriores, esto tiene que ver con cómo se han ido resolviendo estas tensiones. Por lo tanto, también quiero hacer un reconocimiento al bloque oficialista.

Centralmente, voy a hacer un reconocimiento a un área muy particular de esta Legislatura, que es la Secretaría General de Comisiones, en las personas de Fredy Daniele, José Luis Quaino y de cada uno de los asesores a quienes hemos realmente torturado la vida estos últimos días cambiándoles cientos y cientos de veces el despacho. A ellos nuestro reconocimiento porque son, de algún modo, esas hormiguitas incansables que hacen el laburo pesado y tienen que tratar de dar respuesta a las demandas de los que circunstancialmente ocupamos una banca.

Dicho esto, y compartiendo ciento por ciento las expresiones vertidas por el legislador Birri, es dable decir que, como refería hace un momento, esta sesión se produce en un contexto político-social determinado y las leyes nunca resuelven situaciones que no han ocurrido sino que vienen a reflejar o tratar de dar respuesta a situaciones que surgen a partir de la tensión social; no es casual que hayamos estado discutiendo 7 años, desde aquel primer proyecto de ley, que hayan habido las “marchas de la gorra”, ni tampoco que en la última sesión de esta Legislatura podamos avanzar en este proyecto y en esta sanción.

Cuando uno ejerce la representación política -algo parecido decía recién el legislador Roberto Birri- uno toma partido, tenemos que saber desde qué lugar hablamos y, muchas veces, quienes tenemos que tomar decisiones, tenemos que elegir el mejor camino posible entre lo que existe y lo que deseamos; nuestro voto y nuestra acción no pueden estar determinados solamente por una mirada egocéntrica, hacia el ombligo, defendiendo sólo mi idea; la responsabilidad de quien ejerce la función pública -y nosotros lo estamos haciendo- es tender a generar condiciones de dignidad y de mejor calidad de vida a quienes pretendemos representar.

Digo claramente: uno no ejerce la representación para todos, eso es mentira, cuando uno está en política y toma decisiones sabe que en el marco de las tensiones sociales se para en algún lugar; nosotros hemos decidido pararnos en el lugar de los sectores más vulnerables y desde ese lugar hacemos política, pensamos, actuamos y condicionamos muchas veces nuestro propio deseo.

No estamos sentados acá por ser virtuosos sino porque nos han otorgado el mandato popular y, en ese contexto, no podemos desconocer -como bien decía el legislador Birri-

que hay en la sociedad una demanda importante en materia de seguridad y un mandato, un reclamo importante de respeto hacia los derechos constitucionales de las personas.

Este Código que vamos a sancionar no va a resolver la discusión de fondo, porque ella sigue siendo cuál es la política de seguridad pública, si la misma va a estar destinada a la prevención o a la represión, si está orientada por la inclusión social en donde trabajo, educación y salud deben ser sus pilares; en ese contexto, renovamos nuestra profunda crítica a la política de seguridad pública del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

En esto de los contextos, no es casual que estemos tratando este proyecto, que no es mérito nuestro sino de esta conjunción de variables que se han ido uniendo en una red a lo largo de estos años, que la voluntad política de quienes empezaron la lucha -los pibes en la calle y sus definiciones- hizo necesario avanzar en un sistema que garantice los más elementales derechos constitucionales.

– Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Esto sucede –y no es un dato menor- en consonancia con el reciente fallo de la Cámara en lo Criminal de Sexta Nominación de nuestra Provincia que, hace muy pocos días, en un fallo ejemplar condenó a prisión efectiva a un comisario que abusaba y hacía abusar a sus subordinados del Código de Faltas. El fallo de la Cámara Sexta es impecable en relación a este contexto que estamos analizando, señor presidente, ya que marca y da veracidad en sus fundamentos avalando, desde el tercer Poder de la Provincia, a aquello que desde las calles los pibes vienen denunciando. Este fallo, entre otras cosas, toma y da por ciertas las órdenes que impartía el comisario Márquez y dice que las acciones estaban siendo llevadas a cabo porque él quería ser protagonista, que estaba avalado por la superioridad y que al que no le gustara tenía abierta la puerta para irse, ya que la orden era detener, con o sin causa, para hacer números. La Cámara dice también en este fallo –leo lo que está en negrita y porque lo subrayado nos pertenece- textualmente: “La actitud de Márquez es grave en tanto, ostentando la especial calidad de funcionario público, traicionó la confianza depositada en él, empleando la autoridad recibida como instrumento para violar la Constitución y las leyes, cuyo guardián celoso debería ser, repercutiendo negativamente en la Administración Pública”. Finalmente, dice: “La severidad es por los daños colaterales ocurridos, ya que Pablo Márquez con su ilegal proceder colocó a los principios y garantías constitucionales de un Estado constitucional y de derecho al nivel de sistemas políticos característicos de tiempos ya superados. Dispuso ilegalmente que se realicen prácticas que, en los tiempos actuales, sólo se encuentran en los regímenes totalitarios”. Termina la Cámara diciendo: “La Policía debe proteger la vida, las libertades, los derechos, las garantías y los bienes de todos los habitantes de nuestro país, sin distinciones ni discriminaciones, mediante procedimientos que sean conformes a derecho y respetuosos de los derechos fundamentales de las personas”. Este fallo es histórico para la Provincia de Córdoba y vuelve a poner en la agenda pública lo que los sectores populares venían denunciando.

Está claro, clarísimo, que el Código de Faltas ha sido el instrumento privilegiado para el control social de aquellos sectores más vulnerables. Como ejemplo, señor presidente, quiero comentar que entre este año y el pasado concurríamos a establecimientos educativos que nos invitaban a disertar sobre estos temas con los alumnos de sexto año, tanto en colegios públicos como privados. Quiero rescatar esta anécdota porque pinta de cuerpo entero lo que pasaba con la aplicación del Código de Faltas; antes de empezar la charla hacíamos el ejercicio –junto al equipo que nos acompañaba- de solicitar que levantaran la mano los que fueron detenidos debido a la aplicación del Código de Faltas. En los cinco colegios privados a los que asistimos, el porcentaje de jóvenes que había sido detenido por la aplicación del Código de Faltas no llegaba al cinco por ciento de quienes estaban allí sentados. Sin embargo, esta cifra fue inversamente proporcional en los colegios anclados en los barrios más populares de nuestra capital, como Maldonado, Villa El Libertador o Ameghino. Cuando preguntamos allí quién había sido detenido por el Código de Faltas, el 95 por ciento de los estudiantes levantó la mano.

Esto, tan gráfico y tan evidente, muestra que el Código de Faltas ha sido, precisamente, un Código que –fíjese la paradoja del nombre- sancionaba a aquellos a los que les falta; a los que le falta educación, a los que les falta salud, a los que les falta techo, a los que les falta acceso, en definitiva, a los que les falta inclusión. Un Código de Faltas que sanciona a los que les falta. Esa es la realidad, aunque parezca ser un juego de palabras que es simbólico, aunque no es simbólico lo que estamos diciendo.

En este contexto, sin entrar en los detalles de las reformas que bien ha enumerado y explicado el legislador miembro informante de la mayoría, nos parecen centrales dos o tres precisiones. En primer lugar, como bien decía el legislador Birri, este no es el Código ideal, ni el que nos gustaría; es el Código posible en este contexto histórico. Quizás para muchos sea más fácil pararse, pedir la derogación, gritar, pero eso no va a cambiar la realidad de 70 mil

pibes detenidos por año a través de esta normativa. Lo único que corresponde hacer es sostener las posiciones políticas y, a su vez, avanzar, no en función de nuestro interés político sino en función de disminuir el número de 70 mil pibes detenidos por el uso de este instrumento.

Esta es la disyuntiva que nos planteábamos con el legislador Birri y con cientos de personas con las que venimos trabajando durante estos años, pero con las que fuertemente nos reunimos en este último mes: o privilegiábamos nuestro interés mezquino o privilegiábamos que no haya 70 mil pibes detenidos irregularmente en la provincia de Córdoba. Nosotros tomamos la segunda opción y estamos muy conformes de haberlo hecho de este modo.

En el camino intentamos dos cuestiones bien gruesas. La primera, minimizar al máximo la subjetividad de las figuras que el Código preveía; hemos intentado que las conductas que se sancionaran fueran objetivables y que se desecharan aquellos términos ambiguos, que quedan a la discrecionalidad de quien esté evaluando si se comete una falta o no. Hemos quitado todos los contenidos que tenían que ver con características de personalidad, de moralidad, de cosas que hoy, en el siglo XXI, ya no están en discusión porque son parte de la subjetividad de cada uno. Como bien dijo el legislador Busso, hemos eliminado alrededor de 18 figuras, lo que no quiere decir que lo hayamos logrado en todas, y esa es la deuda a la que el legislador Birri hacía referencia.

¿Cuál fue la lógica? La lógica con la que intentamos trabajar fue minimizar el efecto del Código en los sectores de mayor vulnerabilidad y sostener las figuras en aquellos que, abusando de la vulnerabilidad de otros, cometen la falta. Esa fue la lógica con la que trabajamos en estos últimos días.

Entonces, desaparece del nuevo Código la prohibición de tomar alcohol en la vía pública porque es claro, tal como se planteó, que si usted tiene plata para tomar champán en la vereda de una confitería paqueta de Nueva Córdoba, la Policía no lo iba a detener; pero si a usted le alcanzara solamente para una cerveza sentado en el cordón de la vereda, después de jugar un partido de fútbol, usted iba a ser detenido.

Por eso son las eliminaciones de las figuras que hemos promovido; hay otras cuestiones en las que a nosotros nos hubiera gustado que avanzáramos como, por ejemplo - Birri tiene un proyecto en este sentido-, el tema de la pirotecnia, en el que directamente estábamos por la prohibición total y absoluta, porque nos parece que debemos avanzar hacia eso.

Cuando eliminamos los artículos que afectan básicamente a los llamados carreros - estaba la prohibición de permanecer en la vía pública- también lo hicimos con este criterio. Además de que es pobre, va preso, entonces, la lógica tiene que ser otra, tenemos que encontrar políticas inclusivas; no es sancionando, multando o llevando presos a los sectores más vulnerables que vamos a resolver la tensión social. Y así se han eliminado bastantes figuras, pero quedan otras a las cuales nosotros -y hacemos mención a las que el legislador Birri refiere- no vamos a acompañar.

Cuando se saca la figura de la destrucción de alambrados o la colocación indebida de cercos, claramente se apunta a un problema social, que es el tema de los asentamientos. No podemos criminalizar eso, tenemos que encontrar los mecanismos desde el Estado para la inclusión, no para la criminalización.

No obstante no compartir estos artículos a los que hacía referencia el legislador Birri - artículos 70 y 88-, hemos hecho aquellos aportes que creíamos que mejoraban sustancialmente ese tema como, por ejemplo, lo referido a la identificación, nadie más le va a poder exigir a un pibe que le muestre el documento, porque en la Argentina no es obligatorio andar con documento. Pero, además, si hubiese una negativa a identificarse -hemos incorporado que eso es una falta- debe estar acreditada por dos testigos civiles.

Todas las cuestiones de las figuras hemos intentado disminuirlas. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho, señor presidente. Volvemos al concepto de qué es lo posible para avanzar en la disminución de las 70.000 detenciones.

Birri hacía una referencia a una conversación que tuvimos con algunos curas que trabajan en los barrios populares, y ellos nos decían algo que todos quienes están transitando el territorio saben. Hoy, señores legisladores, la figura que se usa no es la del merodeo, porque ya tiene tanta mala fama que es otra, es la negativa a identificarse o consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública; entonces, también el razonamiento es que son un problema las figuras; sí es un problema; pero el nudo de este Código estaba en el proceso, y en ese proceso -como bien refirieron quienes hablaron- se ha garantizado la defensa, se ha cambiado la autoridad de juzgamiento y se ha disminuido y condicionado sensiblemente la prisión preventiva; estos son los tres nudos más importantes del proceso que hacían que pudiéramos tener a pibes detenidos por tres o cuatro días y nadie decía ni "mu".

Dicho esto, simplemente quiero ratificar, en nombre del bloque del Frente Cívico, que creemos que este es un paso importante; en todo caso, no es que hayamos conseguido todas las libertades, pero sí es cierto que a partir de la sanción de este Código, con todas sus imperfecciones, es probable -y en esto también tiene que ver la decisión política- que a futuro contemos con una vergüenza menos -esta vergüenza que hoy tenemos de tener a cientos de pibes vulnerables presos- y el año que viene podamos encontrarnos diciendo que ha disminuido sensiblemente por efecto de la aplicación de esta normativa.

En ese sentido, adelanto el voto afirmativo del bloque del Frente Cívico, haciendo mención también a que conste nuestro voto negativo para los artículos 70, 71 y 88.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo y el de su bloque en los artículos mencionados.

Tiene la palabra el legislador Arduh.

Sr. Arduh.- Señor presidente: en nombre de la Unión Cívica Radical, adelanto el voto positivo a esta reforma del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, que tantos debates ha generado en ámbitos académicos, sociales y en este mismo recinto.

Al hacerlo, ratificamos que esta nueva disposición incorpora instituciones más adecuadas a los imperativos constitucionales y convencionales de la actualidad. De allí que acompañemos este conjunto de normas que, entre otras -y quizás ello sea lo más importante-, dispone la inversión del orden de las reacciones punitivas, contemplando una serie de posibilidades, graduadas de menor a mayor, en la restricción de los derechos de los ciudadanos.

Asimismo, se destaca la judicialización del conflicto contravencional, establecida en dos etapas: una intermedia, de carácter administrativo, y una revisión de carácter jurisdiccional, siendo también trascendente el carácter obligatorio de la asistencia letrada durante todo el proceso.

También queremos manifestar algunas consideraciones sobre la figura del merodeo. El nuevo artículo 70, denominado "actitud sospechosa", no indica otra cosa que la supervivencia de esta figura contravencional. Esta nueva redacción del artículo 70, y también la del artículo 71, que mantiene la denominación "merodeo rural" estableciendo dos categorías de ciudadanos, según donde sea su lugar de residencia, merecen especial atención.

Apremiado el Gobierno, seguramente por la necesidad de aparentar una legislación más garantista, se cambió el nombre de Código de Faltas por el de Convivencia Ciudadana, y el de merodeo por actitud sospechosa. Pero esta nueva figura, aquella vieja falta, adolece de errores de técnica parlamentaria. Por ejemplo, los incisos a) y b) reproducen conductas tipificadas en el Código Penal como delitos consumados o en grado de tentativa; o el inciso c), que reanuda lo dispuesto por el artículo 69 del mismo Código.

Haciendo un poco de historia, en 1987 se modificó la Constitución Provincial eliminando el artículo 116, inciso 15), que permitía detener a una persona por el término de 24 horas, sin intervención del juez, y estableciendo en el artículo 42 que nadie puede ser privado de su libertad sin orden estricta de autoridad judicial competente.

A partir de este principio, se establece por unanimidad de todos los bloques políticos la Ley 8431, que en su artículo 98 establece la figura del merodeo punible, que representa la actitud sospechosa previa a la comisión de algún ilícito y que afecta la tranquilidad pública.

En aquella oportunidad, recordamos al miembro informante de nuestro bloque en el Senado, que decía "quizás no sea esta figura la panacea de la tipificación contravencional", y lo hemos repetido en varias oportunidades en este recinto, pero ninguno de nosotros ni tampoco de otro bloque ha encontrado otra. Es exactamente lo que está pasando hoy en este momento.

Esta cosmética legislativa sobre la figura del merodeo demuestra que, pasados más de veinte años desde aquellos debates, no se ha encontrado aún un modelo alternativo que sea políticamente posible y económicamente viable para asegurar aquel bien jurídico que la sociedad reclama, como la tranquilidad pública y la seguridad pública ciudadana.

Estos son los bienes jurídicos que debemos garantizar como derecho humano esencial, sobre todo a los sectores más vulnerables, puesto que todos sabemos que la indefensión ante el delito es inversamente proporcional al nivel socioeconómico de sus víctimas.

También quiero decirles que son comprensibles aquellas voces que se alzan en contra de esta figura, puesto que su aplicación en los últimos tiempos se transformó -o deformó- en una efectiva herramienta de control social y un instrumento de marketing electoral utilizado en conductas ilícitas de la Policía de nuestra Provincia. Esto lo demuestran la reciente condena de las cúpulas policiales y los hábeas corpus colectivos y preventivos contra las denominadas razias que se produjeron hace poco tiempo en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.

Es deber también manifestar que estas graves irregularidades no son solamente monopolio de la Provincia de Córdoba, sino que se extienden a todo el país, tal como lo manifestó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio contra Argentina” o en el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Adentrándonos más en profundidad en el análisis de la cuestión ideológica, tampoco resulta del todo comprensible que quienes promueven la derogación, lisa y llana, del merodeo, coincidentemente con la vieja postura ultraliberal que, en su momento, yo había dicho que son también quienes reivindican en actividades públicas o desde sus proyectos de declaración al Gobierno de Cuba. Así es. ¿Cómo pueden explicar esos legisladores, sin entrar en mayores contradicciones, que el régimen penal cubano castiga no como contravención sino como delito grave el “estado peligroso”, que no es otra cosa que el merodeo? Pero es más grave aún encontrarlo definido en el artículo 72 del Código Penal cubano como la especial proclividad en la que se halla una persona para cometer delitos y que, según el artículo 73 de la misma legislación, dicho estado se aprecia cuando en el sujeto concurren algunos de los índices de peligrosidad como la embriaguez, la narcomanía y la conducta antisocial.

Todos tenemos la enorme deuda con la democracia de buscar soluciones alternativas a la figura del merodeo no sólo realizables sino que conjuguen armónicamente el sistema de decisiones estatales y preventivas, garantizando tanto la seguridad ciudadana como la más absoluta e irrestricta defensa de las libertades individuales.

Es demagogia plantear una falsa opción entre un sistema que propone amplias libertades pero sin seguridad y otro con mayor seguridad pero con libertades y derechos restringidos. Sabemos que el único modo de hacer efectivo el estado de derecho democrático es garantizando ambas cosas: seguridad y libertad.

Pero, cercano a nuestras conclusiones, debo advertir que, más allá de estos cuestionamientos, este Código debe ser aprobado, ya que contiene modificaciones que representan un interesante cambio de paradigmas mucho más cercanos al ideal constitucional.

Mantenemos nuestras reservas sobre el artículo 164, que establece que las autoridades competentes, durante la revisión judicial, pueden imponer sanciones más gravosas. Esto atenta claramente contra la prohibición procesal que garantiza la plena libertad de recurrir, o mejor, la plena tranquilidad para hacerlo.

Por otro lado, también encontramos en el Código reformado una tendencia a la inflación penal, en este caso a la contravencional, que representa el 6,8 por ciento. Las últimas tendencias internacionales en materia contravencional pretenden reducir el catálogo de conductas tradicionales; los modernos códigos de convivencia establecen el mínimo posible de figuras contravencionales que habilitan la intervención estatal. En este caso no sólo no disminuyeron sino que aumentaron, aunque debemos admitir que han eliminado aquellas figuras más anacrónicas.

Para finalizar, quiero dejar una breve reflexión a mis pares. Acompañamos esta iniciativa por la necesidad de armonizar esa antigua legislación con los mandatos actuales del constitucionalismo y sus sistemas de garantías, aunque pienso que perdimos una oportunidad al no haber profundizado, buscado soluciones de fondo y consensuadas, verdaderas políticas de Estado para intentar resolver el conflicto que subyace; en cambio, consagramos lo que se denominará en el futuro como un nuevo Derecho Contravencional gatopardista.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).– Tiene la palabra la legisladora Echevarría.

Sra. Echevarría.– Señor presidente: aunque ya lo saben, adelante que desde el MST no vamos a acompañar este Código de Convivencia porque, a pesar del maquillaje utilizado, entendemos que no cambia la esencia represiva, discriminatoria e inconstitucional del nefasto Código de Faltas.

El primer artículo habla de asegurar la convivencia social, el respeto al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades consagradas en la Constitución, pero los artículos que vienen después no hacen más que contradecir este espíritu.

Todos estos años de lucha contra el Código de Faltas, junto a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, no fue para criticar la forma, sino la esencia del Código. Por eso, prácticamente la mayoría de las intervenciones en la Audiencia Pública fueron muy críticas, y se intentó aplacar dichas críticas que, en realidad, no plantean modificaciones al Código sino su completa derogación. De hecho, en estos momentos está habiendo una movilización en repudio en las inmediaciones de esta Legislatura.

Nosotros opinamos que el actual Código debería derogarse y no ser reemplazado por otro. Por eso, hace algunas semanas he presentado un proyecto de derogación que iba en este sentido, porque sancionar y aplicar códigos como éste genera situaciones por demás

ridículas e injustas como, por ejemplo, que un homicida tenga hoy más garantías que un simple contraventor. Es decir, una persona acusada de matar a otra, si no hay peligro de fuga, puede esperar en libertad hasta el momento del juicio, mientras que otra persona que tenga una actitud sospechosa –con todo lo que eso puede llegar a implicar- podría ser arrestada por tres días.

Se pretende mostrar como avances estas reformas que, sin duda, intentan responder a los años de lucha que venimos dando en relación a esto, pero creo que no es muy meritorio, a más de 30 años de la caída de la dictadura militar, reformar los resabios de aquellos nefastos edictos policiales heredados de los genocidas. Se tardaron un buen tiempo en hacerlo, señor presidente, y, en verdad, se pierde una nueva oportunidad actualizando sólo el maquillaje.

Sé que la mayoría de los presentes no participaron de las sucesivas “Marchas de la Gorra”; deben haber hecho caso a las palabras del señor Gobernador que planteó que quienes nos movilizábamos o éramos delincuentes o parientes de delincuentes. Si hubieran ido, hubieran escuchado cientos de historias de casos de “gatillo fácil”, de detenciones ilegales, de abuso policial, que es para lo que usa la Policía el actual Código de Faltas y es para lo que va a seguir utilizando la Policía este Código de Convivencia.

Incluso, esta situación ha sido reconocida por los recientes fallos que también han nombrado al ex comisario Márquez, en donde el Tribunal dijo, justamente, que sus prácticas eran propias de un régimen totalitario.

No me voy a explayar nuevamente en cómo la cúpula policial se ha transformado en una asociación ilícita que controla el delito organizado en la Provincia de Córdoba. Sólo les diré a quienes pretenden aprobar este Código que hacerlo sin abrir el debate de cuál es la Policía que va a aplicar este Código, cuáles son los profundos cambios que hay que aplicar en esta Policía, es un acto de complicidad con el abuso policial, por más que reserven uno u otro artículo.

En este proyecto se sigue reprimiendo conductas potenciales sin que lleguen a ser objetivas, es decir, antes de que sucedan; y se continúa con formulaciones ambiguas en muchos artículos, lo que –como se ha planteado otras veces- no es casual sino que es un acuerdo tácito que le libera las manos a la Policía para que aplique su criterio –que ya sabemos cuál es, la mayoría de las veces.

En ese sentido, es un enigma saber, por ejemplo, ¿qué es un acto contrario a la decencia pública? Si alguno de los legisladores que va a aprobar esto puede explicarlo se lo agradecería.

Por otra parte, en el artículo 27 se llega al extremo de sujetar la condena a la personalidad del contraventor, entre otras cosas. En verdad, surgen muchas preguntas sobre esto: ¿qué implica?, ¿cuáles son los criterios para establecer una personalidad?, ¿hay algunos aspectos mejores y otros peores?

Decimos que este proyecto es inconstitucional porque, entre otras cosas, no respeta algo básico: que sólo puede resolver sobre los derechos y la libertad de una persona un juez independiente e imparcial. En este proyecto se le delega esa tarea a los ayudantes fiscales, siendo que el Ministerio Público Fiscal tiene otra función: la de investigar e instruir las causas, nunca juzgar.

Además, si tenemos en cuenta el total colapso del sistema judicial y la falta de personal podemos prever que, más temprano que tarde, quien terminará decidiendo sobre la condena de los contraventores va a ser nuevamente la Policía, por más que por una cuestión formal la firme y apruebe un funcionario del Ministerio Público.

Ni hablar de figuras como la de “conducta sospechosa” o la de “merodeo en zonas rurales”. Mientras que en nuestra Constitución el circular, el transitar y el permanecer están establecidos como derechos, este Código los cercena; es decir, cualquier paseo o permanencia en un lugar puede terminar con una detención arbitraria de tres días. ¿De qué depende? De la cara del contraventor y del criterio del Policía –nuevamente “portación de rostro” basándose en prejuicios y estereotipos contruidos y reproducidos por la sociedad.

Por último, este Código le sigue entregando poder a la Policía a la hora de establecer la prisión preventiva, una figura que en el Código Penal está sumamente restringida; acá, basta con que alguien sospeche que una persona va a cometer un delito –aunque aún no haga nada- para que se aplique.

En verdad, esto no nos sorprende de parte del oficialismo, que viene defendiendo cada política represiva de la Policía y, sobre todo, protegiéndola ante cada uno de los gravísimos – insisto, gravísimos- escándalos que ha protagonizado; pero sí sorprende –y mucho- de parte de legisladores opositores que van a acompañar en general este proyecto aduciendo ciertos avances, sobre todo porque muchos jóvenes que pertenecen a sus espacios políticos están

ahora detrás de las vallas que rodean esta Legislatura planteando que no quieren ni Código de Faltas ni Código de Convivencia.

Llamo a que repiensen su voto, sobre todo aquellos que vienen acompañando los reclamos de las Marchas de la Gorra.

Se nos ha dicho que nos ordenamos por intereses mezquinos, que planteamos “derogación o nada”; en verdad, es el oficialismo el que planteó “es esto o nada”, y eso es un chantaje que nosotros no podemos tolerar, sobre todo si tenemos en cuenta que la distancia que existe entre esos supuestos avances y lo que debiera ser sacrifica no un detalle, no una nimiedad, sino derechos esenciales de las personas y de los sectores más populares.

Por todo esto, nuestro rechazo a este proyecto.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: en primer lugar quiero hacer una aclaración, porque se ve que hay una confusión de algunos legisladores que nos adjudican ubicarnos con Cuba, Venezuela y distintos países y gobiernos que serían izquierdistas, según su parecer. Quiero aclarar, en particular con respecto a Cuba, que es el caso que se mencionó, que nosotros defendemos las conquistas de la revolución de los trabajadores y los sectores populares, pero no tenemos el más mínimo acuerdo con los métodos de una burocracia como la castrista que, justamente, cercena un montón de derechos y libertades fundamentales. Pero, en la defensa de las conquistas de esa revolución, alentamos y defendemos otra forma de revolución, que es la revolución política contra esa burocracia para defender esas conquistas, y no la restauración a la que de hecho está llevando el propio gobierno cubano.

Aclarado esto, voy a adelantar el rechazo del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores a este nuevo Código de Convivencia. Entendemos que en lo esencial, como han sostenido algunos, mantiene el carácter represivo de algunas de sus figuras porque, acorde con el viejo Código de Faltas, penaliza actitudes, penaliza conductas y no hechos objetivamente comprobables. De hecho, ese artículo más cuestionado que es el referido al “merodeo”, simplemente cambia su denominación y pasa a llamarse “conducta sospechosa”. Este Código sostiene la presunta peligrosidad para que la Policía, y ahora los ayudantes de fiscales, intervengan en el juicio de esas contravenciones. Es un Código que superpone y denomina como contravenciones lo que son delitos no sólo penales, sino delitos de orden de la Justicia Federal, como lo que tiene que ver con trata; según este Código contravencional, por ejemplo, a quien mantenga abiertas wiskerías no le correspondería ser juzgado por un delito sino por una contravención; me parece un poco contradictorio en un gobierno que se la pasó haciendo publicidad de su lucha contra la trata.

– Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Mario Gutiérrez.

Pero, esencialmente, al escuchar el cinismo con el que el miembro informante habla y presenta estas modificaciones, parece un profeso garantista cuando pretende que nos olvidemos de lo que dijo el propio Gobernador, a quien responde, de que aquellos de la Marcha de la Gorra éramos los delincuentes o familiares de delincuentes que eran perseguidos por el Código de Faltas. Como si no se hubiera comprobado que las razias y el ataque a los derechos más fundamentales existieron y se produjeron de manera brutal por esta misma Policía.

Sobre todo, nos oponemos porque esa Policía sospechada de todo tipo y color de casos de narcotráfico, corrupción y escándalos, es la misma que va a seguir aplicando este ahora denominado Código de Convivencia Ciudadana. Si se le ha incorporado alguna que otra modificación en el procedimiento o en la limitación a algunos de los tipos contravencionales, tiene que ver pura y exclusivamente con la movilización y organización persistente de los sectores populares, de aquellos que se han visto afectados durante todos estos años por el Código de Faltas.

No nos olvidemos de que este año se llevó adelante la novena edición de la Marcha de la Gorra; hace cuatro años que la marcha cuenta con entre 15 y 20 mil participantes, personas movilizadas, es decir, es una marcha que se ha puesto al nivel, en nuestra Provincia, de aquellas que repudian la última dictadura cívico militar que está pronta cumplir 40 años desde que existió; es una movilización que se pronuncia por la defensa irrestricta de los derechos humanos.

Así, en respuesta a estas mismas movilizaciones populares y al poder que tienen los sectores de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud organizada, es que este Código incorpora algunas modificaciones que no sé cómo calificar, porque se pretende que con un demagógico artículo o capítulo que habla de la prevención de la violencia de género, que lo único que hace es agregar una contravención, se responda a las masivas movilizaciones de “Ni una menos”. Está claro que el problema de la violencia machista no se resuelve con más penas y el aumento de la punitividad. Es tan demagógica la incorporación de esta contravención que ni siquiera fue puesta en vinculación con otro artículo que plantea, por

ejemplo, las penas accesorias, donde está establecido que hay instrucciones especiales como los tratamientos terapéuticos o la de los cursos educativos. Es decir, ni siquiera fueron capaces de conectar una cosa con la otra, lo cual demuestra que es una respuesta completamente hipócrita a una demanda legítima de las mujeres y los sectores populares, que venimos y seguimos exigiendo una ley de emergencia con medidas urgentes para acabar con la violencia machista.

Sí tenemos que decir que hay algo que ha frenado el accionar impune de la Policía, el accionar impune de un gobierno que defiende esa misma policía, y es la movilización de estos sectores populares y el rechazo social al Código de Faltas.

En verdad, es lamentable que haya quienes, desde un discurso progresista, digan que es mejor aceptar las miserias de lo posible, o lo posible entre lo real y lo ideal –según nos quieren convencer–, porque me tendrían que explicar cómo se compatibiliza este supuestamente moderado Código de Convivencia con un Gobierno que acaba de aumentar el Presupuesto para la Policía Provincial, con un Gobierno que se galardona y se engalana con la nueva Fuerza Antinarcotráfico, que está compuesta de los mismos policías implicados en los casos de narcotráfico, de los mismos policías implicados en las detenciones arbitrarias y en la represión ilegal hacia la juventud.

Que me expliquen, entonces, cómo se compatibiliza esto de lo que nos hablan de salud, de educación y de que hay una estigmatización de los sectores populares que no acceden a esos derechos básicos, cuando en esta Provincia la cantidad de policías –que son alrededor de 23 mil– se equipara con la cantidad de maestras de nivel inicial y primario. Que me expliquen cómo se hace compatible con un Gobierno que acaba de votar un Presupuesto de ajuste.

Lo que hay que decir es que no solamente es un Código que estigmatiza y criminaliza a la juventud pobre y a los sectores populares, sino que lo esencial tiene que ver con una operación ideológica vinculada a la necesidad de aplicar ese ajuste. Porque lo que se hace es hacerles creer a otros sectores de trabajadores que los responsables del delito son esos jóvenes pobres, son esos jóvenes que portan gorras, son esos jóvenes que viven en los barrios “ghetto”, que este mismo Gobierno, en otras de sus gestiones, desplazó hacia la periferia, mientras los grandes delincuentes están intactos en las cúpulas policiales y se mantienen impunes por delitos comprobados; mientras están completamente impunes los vinculados al delito de narcotráfico, a los desarmaderos de autos, y cuando hay otros tantos delincuentes que, en estos días, “nos meten las manos en el bolsillo reventándonos con los aumentos de precios”, señoras y señores. Hay que decir que son los grandes capitalistas los principales delincuentes de esta Provincia y este país. Una multinacional como ARCOR, la segunda en volumen de ventas de esta Provincia ha sido la principal remarcadora de los precios de los elementos básicos como los alimentos; a los principales ladrones que de esta manera nos roban a los sectores populares y a los trabajadores nadie les anda poniendo códigos contravencionales ni marcando delitos de ningún tipo, porque no son capaces de abrir los libros de contabilidad para demostrar ese gran robo que es la especulación y el aumento de precios. Nos están robando todos los días.

Afortunadamente, hay trabajadores, sectores populares y un movimiento de mujeres que se oponen a esta estigmatización, a estas patronales que nos saquean el salario, a estos gobiernos que nos meten impuesto tras impuesto y que nos aumentan al ritmo de esta especulación e inflación que terminamos pagando nosotros con nuestros bolsillos, como los trabajadores de Minetti, los trabajadores de Fasec y distintos sectores de trabajadores a lo largo y ancho del país, que no sólo defienden sus condiciones de trabajo, que no sólo se animan a pelear contra esa miseria de lo posible, que si tuviesen que aceptarla serían las indemnizaciones, sería quedar en la calle mientras las patronales se han llenado los bolsillos durante todos estos años. No se acomodan a esa miseria de lo posible y siguen peleando por sus derechos laborales y, afortunadamente, a este round se lo ganaron. Y aprovecho para contar con mucho orgullo que los trabajadores de Minetti acaban de ganar ese round contra la patronal explotadora. Y esos trabajadores de Minetti van a la Marcha de la Gorra, esos trabajadores de Minetti se encuentran con los pibes perseguidos por la policía, esos trabajadores de Minetti y de otros sectores empiezan a darse cuenta de que sus aliados están ahí, que no quieren ser parte ni parecerse a sectores reaccionarios que desprecian a los pobres y que los estigmatizan.

Y sí, señoras y señores, nos paramos definitivamente de ese lado y no vamos a avalar un Código de Convivencia que el Gobernador Schiarette, junto a los medios de comunicación que le son afines y que defienden estas políticas, van a utilizar junto a la Justicia –porque no nos olvidemos que la Justicia también tiene un carácter de clase. Entonces, tampoco es ninguna garantía la intervención de la Justicia, porque sabemos de un montón de causas cajoneadas de casos de “gatillo fácil”, que demuestran que la Justicia defiende los intereses de las patronales. Basta mencionar un caso, el del Fiscal Pedro Caballero, que así como

mantiene cajoneada la causa de uno de los pibes, de Ezequiel Barraza, es el mismo fiscal que ha imputado a trabajadores de Valeo que luchaban contra los despidos y sus derechos laborales. Y sí –digo-, nos paramos definitivamente de ese lado y de ese lado vamos a seguir estando.

Para terminar, voy a leer un documento que es el de las organizaciones populares convocantes de la Marcha de la Gorra, que es el de los familiares de víctimas de casos de "gatillo fácil", que son familiares de víctimas de la represión policial, y me voy a hacer eco de su voz porque nuestra banca sigue estando al servicio de esos sectores. No tenemos ningún miedo ni tapujos en decirlo y sostenerlo, y está en la voz de los familiares de Vanesa Castaño, de los familiares de "Güere" Pellico, de Ezequiel Barraza, de Miguel Torres, de Cristian Guevara, de Lautaro Torres, de Ismael Sosa, de Nicolás Nadal, de Jorge Reyna, de Emanuel Panetta, de Pablo Navarro, de Jorge Pedernera, de los familiares de los 17 casos de "gatillo fácil" en 2014, de los 16 casos de 2013, de los 9 casos de 2015, de los familiares de todos y de esos 70 mil pibes detenidos ilegal y arbitrariamente que se mencionaron acá.

Dice el documento: "De La Sota, en el ocaso de su gobierno, pretende nuevamente hacer pasar una reforma reaccionaria del Código de Faltas. Esta es una tarea central en el contexto político actual, en la medida en que nos encontramos con un plan de ajuste a los trabajadores y a los distintos sectores populares. Es el último favor que realiza Unión Por Córdoba a su Gobernador electo, Juan Schiaretti, con una nueva impostura intenta legitimar el Código de Faltas para encubrir el carácter represivo de su gobierno."

La persecución a la juventud y a los trabajadores con el Código de Faltas en la mano es una política de Estado que el Gobierno provincial ha profundizado a lo largo de los años con el objetivo expreso de impedir la protesta y los reclamos frente a la falta de trabajo, la precarización laboral, el hacinamiento en los barrios y otras penurias. La política oficial ha sido la militarización de barrios enteros que se ampara cotidianamente en un Código que viola derechos constitucionales.

El Código de Convivencia propuesto mantiene el carácter antipopular con el que fue concebido el Código vigente. La reforma criminaliza las herramientas de lucha que utilizamos día a día quienes luchamos por más salario, acceso a la tierra y condiciones de vida digna; convierte en contravención algunos legítimos métodos de lucha y reclamo popular y, a su vez, persigue a los sectores precarizados de nuestro pueblo, facilitando una persecución sistemática de parte de la Policía a carreros y a "naranjitas".

En cuanto a la persecución a los "pibes" de los barrios, la modificación es cosmética, la sospecha sigue siendo declaración de culpabilidad y privación de la libertad. No es la existencia de un delito lo que habilita la intervención policial y la privación de la libertad, sigue siendo inconstitucional la forma de juzgamiento sin la intervención de un juez y cambiando la figura del comisario por la del ayudante fiscal.

Esta demagogia ocurre luego de que 20.000 personas en la calle le dimos un fuerte golpe a este Gobierno; la novena Marcha de la Gorra ha sido una contundente expresión del descontento popular ante el estado policial actual. Por eso buscan aprobar un Código de Convivencia consensuado por todo el arco político, oficialistas y opositores, a excepción –claro está– de la fuerza del Frente de Izquierda y la banca de la compañera Echevarría. Hacen esto desconociendo que esta misma movilización se expresó repetidas veces por la derogación en las calles como también en Audiencias Públicas.

A De la Sota, la UCR, y a todos los bloques políticos que avalan este maquillaje, los familiares y amigos de víctimas de "gatillo fácil", los trabajadores de Córdoba y los "pibes" de los barrios les decimos: la legitimidad que perdieron, la perdieron ante la movilización popular, la perdieron ante la sociedad y la opinión pública con el "narcoescándalo", la perdieron ante la Justicia que comprobó casos de abuso de autoridad, coacción reiterada y detenciones para rellenar estadísticas, como en el caso del comisario Márquez, la perdieron y no la van a conseguir con esta reforma.

¡Ni modificación ni mejoras para la represión! La nuestra es una exigencia a todos los Poderes del Estado: al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo que promueven estas políticas, y al Poder Judicial que las consiente. Hace más de veinte años que las organizaciones venimos denunciando esta política de inseguridad que se "caga" en los derechos humanos; nuestra resistencia a la "Tolerancia cero" exige terminar con el Código de Faltas.

Una vez más nos convocamos en las calles para frenar una reforma que busca perfeccionar el accionar represivo del Estado y su Policía. Al igual que el año pasado, 'con lucha y organización vamos a fondo por la derogación'".

"¡En tu Estado policial", coreaba la marcha "te marchamos de frente mar! ¡Derogación del Código de Faltas! ¡Basta de Gatillo Fácil! ¡Basta de perseguir y criminalizar las luchas sociales! ¡Exigimos terminar con las políticas de persecución y represión a los sectores organizados!"

Esta no es solamente mi voz como Frente de Izquierda, esta es la voz de todos los familiares de aquellos que son y serán víctimas de este nuevo Código de Convivencia.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Salvi.

Sr. Salvi.- Señor presidente: después de un tiempo de trabajar en pleno los distintos bloques, entendemos desde el bloque de Frente para la Victoria que se ha llegado a este Código de Convivencia de una manera en la cual debemos reconocer la tarea de todos los legisladores que han trabajado en este proyecto. También debo reconocer que para llegar a este Código fueron fundamentales la flexibilidad del bloque de Unión por Córdoba y el trabajo desarrollado por el legislador Roberto Birri y la legisladora Liliana Montero, que son quienes han llevado adelante, desde la oposición, el diálogo permanente con el bloque oficialista.

- Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

No sé si este Código es el ideal, pero es el que hoy esta Casa de la democracia puede ofrecer, de acuerdo con las circunstancias que se están dando.

Por eso, señor presidente, en nombre del bloque de Frente para la Victoria adelanto el voto afirmativo en general al proyecto en tratamiento y el voto negativo –en el marco de la votación en particular– al artículo 70.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo al artículo 70, señor legislador.

Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adelantando mi voto afirmativo en general al proyecto en consideración. Debo rendir homenaje al legislador Birri porque siempre tuvo claro que había que abordar este tema; en los cuatro años que compartí con él; me consta su trabajo y su insistencia para que esto se tratara, y ahora personalmente me cuestiono: ¿por qué no lo acompañé más?, ¿por qué no trabajé más para que se reforme el Código de Faltas?, ¿por qué duró tanto tiempo este Código?

Comparto parte del diagnóstico de la legisladora Vilches y, tomando en cuenta precisamente los argumentos por ella vertidos en este debate, a este nuevo Código habría que votarlo con las dos manos. Evidentemente, la gente viene sufriendo una situación de absoluta indefensión frente a la Policía de la Provincia, que ha perdido el timón.

Entonces, si la Policía perdió el rumbo en esta materia, con mayor razón hay que meterle mano prontamente al Código de Faltas. No soy una persona muy versada en este tema, pero –a excepción del planeta de “El Principito”, que es muy pequeño– no imagino ningún Estado del mundo en que se renuncie a ordenar las normas de convivencia de una comunidad. Podemos discutir si este Código tenía o no –por supuesto, no debiera tenerlos– paradigmas represivos.

¿Desde qué lugar nos hablan? En los países donde gobierna la izquierda totalitaria –ique Dios los ayude!– las normas en materia de faltas son muy complicadas, y ni qué hablar de sus Códigos Penales. A esta altura de la civilización, ¿cuál es el ejemplo de sociedad que haya renunciado a su derecho mínimo de ordenar la convivencia más propia? Ya no me refiero al catálogo de acciones del Derecho Penal sino a las formas de organización.

Por supuesto, es más fácil no abordar este problema y utilizarlo como un tema político, utilizarlo como un estandarte de batalla electoral, es un tema tribunero –si se quiere– pero ...

Sr. Presidente (González).- Legisladora Vilches: ¿solicita una interrupción?

Sra. Vilches.- Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Señor legislador: ¿se la concede?

Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: quiero aclarar que es evidente que creemos en otro tipo de ordenamiento social. Sabemos que puede faltarle un poco la imaginación –porque así se ha demostrado en otros temas–, pero no tiene que ver con estas condiciones y con esta sociedad capitalista sino con otras. Confiamos tanto en la humanidad, en los trabajadores, en los sectores populares y en su capacidad de organización como para poner en pie una sociedad sobre otras bases.

Gracias.

Sr. Presidente (González).- Continúe legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Si estaba confundido, ahora no sé. Realmente, esperaba que la legisladora me dijera: “mire, en el planeta del lado de El Principito se puede vivir de esta forma”, pero ahora me habla de una proyección del desarrollo de la humanidad. Lamentablemente, a mí me tocó legislar en la Argentina de 2015 y no puedo lavarme las manos en función de la Argentina de 2014, porque la responsabilidad se me ha dado ahora, y hay que tener lo que hay que tener para tocar estos temas delicados de la sociedad. Es más

fácil el grito tribunero, hacer política con la contradicción permanente, que abordarlos con responsabilidad.

La oposición ha dado otra muestra de responsabilidad, no le hemos sacado el hombro al problema, no hemos dejado que el oficialismo se cocine en sus propias contradicciones en materia de seguridad; los legisladores Birri, Montero y otras personas se han encargado del problema, han tomado contacto con las organizaciones sociales, le han puesto el pecho al problema.

Le quiero hacer un homenaje a Birri, por algo pertenece a un partido que tiene 100 años de historia; el socialismo argentino ya ha vivido estas situaciones: o ser tribunero o abordar los problemas de fondo.

El señor Alberto Belloni, un luchador de la resistencia peronista, nos recuerda un caso que es muy parecido a lo que está pasando hoy, si abordamos con responsabilidad los desafíos del presente, para lo cual el pueblo nos ha puesto acá. Les recuerdo a los señores legisladores que han opinado de nosotros que el mandato en el nombre del que hablo fue ratificado hace tan solo dos meses por miles de personas, o sea, algo de representación histórica, real y actual tenemos para hablar de estas cosas.

En 1904, el Ministro Joaquín V. González presentó un proyecto de ley sobre el Código Nacional del Trabajo que constituyó la legislación social y laboral más avanzada del mundo; se basaba en el informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República, realizado por Biale Massé a pedido del gobierno. Sin embargo –aquí viene Birri-, tanto los socialistas y anarquistas, como la oligarquía, lo atacaron, los primeros por reaccionarios y los segundos por revolucionarios. El diputado Alfredo Palacios lo apoyó, pero el Partido Socialista, por intermedio de Nicolás Repetto, atacó sobre todo a la constitución de los consejos de conciliación y arbitraje por ser demasiado buenos, lo que podía quitar todo carácter de clase a la organización de la clase obrera del país, o sea, por razones dogmáticas se boicoteó un proyecto que constituía la expresión jurídica más completa y avanzada del mundo en terreno de legislación social y laboral, como señala Belloni. Esta unión de la izquierda antinacional y de la oligarquía no sería la primera ni tampoco la última, dice Belloni.

¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos la responsabilidad de abordar los temas tal como se presentan.

¿Qué se pretendía? ¿Dejar así este Código de Faltas, que todos sabíamos que era realmente inderogable? No se podía derogar, en este estadio de la civilización humana no se puede renunciar a normas primarias de la mínima convivencia.

Yo pregunto: ¿esto es para festejar? ¿Por qué? Tenemos dos demandas de la sociedad: una de ellas es brutal, de seguridad que está pidiendo la gente y, por otro lado, tenemos esta gravísima situación de la forma en que se estaban tratando las contravenciones. Estábamos ante un problema muy difícil si no se actuaba con buena voluntad. Pero, ¿sabe qué?, no son contradictorias. Habrá mayor seguridad cuando haya más control constitucional, cuando haya más transparencia en el ejercicio de las garantías y derechos constitucionales, y nadie puede negar que, con todos los defectos que esta norma tiene, se avanza en garantías constitucionales, no en garantismo absurdo. Porque mientras más trabajemos sobre el rol de la Policía, que no sea juez y parte, que a las ocho horas la persona esté ante un representante del Poder Judicial, mientras sigamos avanzando en esta línea, se le pone a cada uno la responsabilidad de ser quien debe ser. Esto no es contradictorio con la demanda de seguridad de la gente, este es el mismo camino; mientras menos prepotencia, habrá mayor seguridad, porque las fuerzas de seguridad que actúan con prepotencia, y alguna vez con corrupción, mientras más ubicadas estén en su rol dentro de la sociedad, eso va a repercutir inexorablemente en elevar el nivel de seguridad de la población.

En el estado actual de la situación social y cultural de la Provincia, este Código me parece realmente un avance. Hay cosas que no me gustan, pero ahí está la responsabilidad ética que tenemos todos de ir por lo que consideramos menos malo, hasta que venga la sociedad de "Heidi". Llegará, yo no niego la capacidad humana de avanzar hacia situaciones de progreso. Hay escuelas filosóficas que las enseñan, las enseñamos en las facultades, está el "anarquismo ingenuo", por ejemplo. Hay un montón de escuelas filosóficas que lo vienen pregonando hace cientos de años, pero hasta que lleguemos a esa sociedad, no quiero volver a ver lo que debe estar pasando todavía en los centros de detención de menores, lo que me tocó a mí porque, evidentemente, los miembros de mi familia deben estar dentro de ese 5 por ciento de los detenidos a los que aludía la licenciada Montero. A mí me tocó, y mi hijo iba a un colegio privado. Detuvieron a seis por tirar bombitas en la vía pública y terminaron en la cárcel de Encausados. Yo los vi con mis propios ojos, encadenados como yo me imaginaba que sucedería en la Edad Media; una fila de personas tomadas de las manos y con cadenas, subiendo en los móviles hacia la cárcel de Encausados, en manos de un comisario de Policía que decidiría cuántos días estarían estos chicos del Colegio La Salle –que también los

detienen de vez en cuando- en la cárcel de Encausados, en donde no entran los “narcos” pero sí los chicos.

Por eso, considero que no es lo mejor, señor presidente, nadie dice que lo sea, pero es un avance fortísimo en materia de garantías, y ese avance no es un garantismo bobo sino de transparencia. Acá se ha logrado, con todos los defectos que esto tiene –que se irá retocando-, terminar con una etapa fea de la democracia de Córdoba. Por eso voy a apoyar en general este proyecto.

Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión los proyectos compatibilizados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- En consideración en general la primera propuesta de despacho referida al Código de Convivencia Ciudadana, tal como lo despachara la Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

A los efectos de la votación en particular, lo haremos por libros.

– Se vota y aprueba el Libro I, artículos 1º a 50, inclusive.

– Se vota y aprueba el Libro II, artículos 51 a 118, inclusive, con las salvedades hechas por los legisladores.

– Se vota y aprueba el Libro III, artículos 118 a 148, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 149 de forma, queda aprobado en general y en particular el despacho de los proyectos compatibilizados.

Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

En consideración en general la segunda propuesta, proyecto de ley referido a modificaciones a la Ley 9235 de Seguridad Pública y a la Ley 7286, Orgánica del Ministerio Público Fiscal, tal como lo despachara la Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículo.

– Se vota y aprueban los artículos 1º a 6º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado en general y en particular el proyecto.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

**PROYECTO DE LEY
2060/L/108
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º) ABRÓGASE el artículo 45 de la Ley Nº 8431.

ARTÍCULO 2º) De forma.

Leg. Roberto Birri y Adela Coria

FUNDAMENTOS

Si bien la ley provincial 8431 (Código de Faltas de la Provincia de Córdoba) fue sancionada en el año 1994, es prácticamente la misma norma que regía en la época de la dictadura militar 1976-1983; por lo cual se la cuestiona permanentemente desde distintos sectores del ámbito jurídicoacadémico, desde organizaciones de Derechos Humanos, de trabajadores y otras de la sociedad, pues vulnera de manera ostensible derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y demás normas vigentes de derecho Interno e Internacional.

Por otro costado, la ley en referenciada contiene anacronismos propios de la época predemocrática, que, la interpretación moderna del derecho y la misma dinámica social han dejado atrás.

Así, uno de los sectores más afectados por la aplicación de la Ley 8431 son las trabajadoras sexuales.

El Art. 45 del CFP establece:

Prostitución molesta o escandalosa. Medidas profilácticas o curativas.

Artículo 45.- SERÁN sancionados con arresto de hasta veinte (20) días, quienes ejerciendo la prostitución se ofrecieren o incitaren públicamente molestando a las personas o provocando escándalo.

Queda comprendido en este caso el ofrecimiento llevado a cabo desde el interior de un inmueble pero a la vista del público o de los vecinos.

En todos los casos será obligatorio el examen venéreo y de detección de todas las enfermedades de transmisión sexual y, en su caso, el tratamiento curativo.”

Es evidente que la cláusula puesta en crisis vulnera derechos y garantías constitucionales, es discriminatoria y neutraliza el ejercicio del derecho a trabajar.

En nuestro país, la prostitución no es ilegal. Desde el punto de vista jurídico, Argentina adscribe al sistema abolicionista, esto es, la prostitución no es considerada delito, pero sí las conductas que la determinan, a las que se asocian severas penas. El sistema jurídico admite un tratamiento contravencional, en cuanto la prostitución adquiera ribetes escandalosos o ponga en peligro la “moral pública”.

No se legisla entonces, en contra de la prostitución, sino en contra de las molestias que dicho ejercicio pudiera ocasionar a la comunidad, rebasando la esfera de lo privado, en detrimento de lo público.

El ejercicio de la prostitución, entonces, está contemplado como contravención, resguardando la “moral pública”.

Con relación al Derecho como sistema de garantías la arbitrariedad del llamado Derecho Policial”, se afirma que el régimen de contravenciones es inconstitucional y violatorio de las garantías penales y procesales: pues, es sabido que las sanciones de la Ley Nro. 8431 son impuestas por el jefe de policía, vulnerando de esta manera la tripartición de poderes que determina la forma republicana de gobierno. Al ser la policía parte del Poder Ejecutivo, se le otorgan a éste funciones que rompen la división de poderes establecida por la Constitución”.

Además, son pocos los casos en que durante el proceso contravencional actúe un abogado defensor. La persona que es detenida ejerciendo la prostitución tiene menos garantías que quien cometió un delito grave; es sabido que el régimen contravencional es parte integrante del derecho criminal. Por tanto si la prostituta es una contraventora la persona que contrata sus servicios es un partícipe necesario y por ende se le debe aplicar la misma pena que al autor. De esta manera debería una parte importante de nuestra sociedad masculina cumplir la misma pena de arresto que las trabajadoras sexuales; violentando así el principio de igualdad; pues la norma fija una pena para quien ofrece sexo pero nada dice sobre el que paga por tenerlo.

La norma que proponemos únicamente elimina la sanción de arresto y multas que aplica la policía por el ejercicio de la prostitución callejera de personas adultas”, recordando que “siguen vigentes los artículos 125, 126 y 127 del Código Penal, que castigan la facilitación de la prostitución de menores de edad y la promoción de la prostitución de personas mayores mediante todo tipo de coacción

Desde otro costado, hay que tener presente las situaciones de exclusión y pobreza a las que están expuestas las mujeres en situación de la mal llamada prostitución.

En este sentido, cabe destacar que las particulares condiciones de vida de estas mujeres marcan el ejercicio de la prostitución, a partir de situaciones de pobreza que implican la satisfacción de determinadas necesidades con propósitos concretos de alimentación y manutención propia, de sus hijas/os y sus parejas, para lo cual “hacer la calle”, se constituye en un trabajo que se vincula a la sobrevivencia cotidiana y marca sus subjetividades.

Desde esta última acepción del concepto de poder, el lugar de “dadoras del placer” de las mujeres en situación de prostitución a los varones que “contratan sus servicios”, las ubica en una instancia ligada a los mecanismos de producción económica y de una organización social estratificada en la que se encuentran en una situación de subordinación. La prostitución callejera puede considerarse entonces como un proceso de proletarización del trabajo femenino con implicaciones peculiares.

En ese marco es preciso recordar que las trabajadoras sexuales han sido reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por lo tanto, el Art. 45 del Código de Faltas violenta también el derecho al trabajo.

En Nuestro país, las trabajadoras sexuales se encuentran organizadas en AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), ubicadas dentro de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Según información que ha sido acercada a ésta Legislatura por las representantes de la Asociación: AMMAR nació en Córdoba en el año 2000, impulsada fundamentalmente por las violaciones sistemáticas a nuestros derechos como personas, como mujeres y como trabajadoras, por parte de la Institución Policial de la Provincia de Córdoba. Desde sus inicios, AMMAR ha trabajado en pos de limitar el accionar arbitrario y desmedido de la Policía, peleando por una mejor calidad de vida para este sector de mujeres sin embargo, hoy en día, la situación de las compañeras afiliadas de AMMAR Córdoba, sigue siendo la misma, ya que debemos padecer un permanente atropello a nuestros derechos humanos y ciudadanos básicos.”

“Nuestro objeto es la protección y defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales que desarrollan su actividad laboral en las calles de la ciudad. Para el cumplimiento de ese fin, AMMAR desarrolla tareas en distintos ámbitos. En este sentido, cabe destacar que desde hace 7 años, llevamos a cabo una tarea de promoción de la salud y prevención del VIH/SIDA y las ITS entre pares, con trabajadoras sexuales de Córdoba Capital y ampliando en estos dos últimos años a Villa María, San Francisco y Río Cuarto, siempre en el apoyo y la articulación del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.”

"Además, desde AMMAR hemos fundado hace cuatro años ya la primera Escuela de AMMAR en el país, (CENPA- AMMAR) la misma es oficial del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. En la actualidad contamos con una biblioteca popular de la escuela y un aula de computación para las alumnas/os para que todas las compañeras puedan acceder a la educación y promover así en nuestro sector una mayor inclusión en la sociedad. Hoy la Escuela de AMMAR es un espacio reconocido nacional e internacionalmente. Otra de las áreas de trabajo de AMMAR, lo constituye la posibilidad de las afiliadas de contar con asistencia letrada en los casos de detenciones por aplicación del Código de Faltas de la provincia. Vale recordar que nuestro trabajo (por varios motivos) no se realiza con las mujeres trabajadoras sexuales que se encuentran explotadas en lugares privados sino las que desarrollan su actividad en las calles de las ciudades de la provincia."

Con respecto a la aplicación del Código de Faltas, las representantes de AMMAR expresan: "Desde la Organización AMMAR Córdoba, queremos poner en conocimiento la situación de vulnerabilidad absoluta que padecen cotidianamente nuestras compañeras trabajadoras sexuales, víctimas de la persecución y represión policial que se ha visto agravada en los últimos tiempos en esta provincia."

"Las violaciones a nuestros derechos humanos se expresan en diferentes aspectos, siendo uno de los más graves, el tener que padecer sistemáticamente detenciones arbitrarias e infundadas por parte de la policía; no hay dudas que nos detienen por "portación de cara", ya que muchas veces nos llevan cuando estamos en bares almorzando o merendando, o cuando estamos simplemente esperando el colectivo."

"Y aunque la detención se produzca mientras estamos trabajando, lo consideramos igualmente injusto e inconstitucional ya que NUESTRO TRABAJO, EL TRABAJO SEXUAL, NO ES DELITO EN NUESTRO PAÍS. "

"Sí es delito el proxenetismo, la explotación sexual, sin embargo, paradójicamente, se persigue, a las víctimas más vulnerables, las trabajadoras sexuales callejeras "las más pobres"

"A la gravedad de estos hechos, se suma también el marco en que la policía concreta estas detenciones, siempre con maltrato, con agresividad, en ocasiones con violencia física y siempre con violencia psicológica.

"En estos dos últimos dos años AMMAR recorre el interior provincial, donde la situación de las compañeras se agrava, en cuanto a que tienen más días de detenciones, el maltrato es mayor, inclusive hasta le roban la comida y cigarrillos que sus familiares les llevan cuando están en los calabozos, una situación muy agresiva fue la que sucedió en el mes de abril, que desde Río segundo llevaron las compañeras presas hasta el hospital Rawson de esta la capital para realizarle los análisis venéreos (inclusive el de VIH/SIDA) de manera compulsiva, acción a la cual se opuso el director del hospital por tratarse de una violación a los derechos humanos de las personas.

"Un tercer aspecto a denunciar aquí, tiene que ver con otro tipo de **discriminación específica** hacia la población de trabajadoras sexuales; A diferencia del sector de Travestis/Transexuales de Córdoba con quienes las autoridades policiales firmaron una carta acuerdo para que estas compañeras no sean detenidas en la vía pública.

"Nuestras afirmaciones se fundan en las cifras proporcionadas por la propia Policía de la Provincia de Córdoba, que mediante informe de fecha 1 de octubre de 2007, remitió a la Asociación los siguientes datos, en relación a la Alcaldía de la Policía:

"1. Ingresos de personas aprehendidas por supuesta infracción al Art. 44 "Prostitución molesta o escandalosa":

668 (seiscientos setenta y cinco)- Plazo considerado: 04-10-2004 al 09-09/07.

2. Cantidad de ingresos de sexo femenino:

575 (Quinientos setenta y cinco)- Plazo considerado: 04-10-2004 al 09-09/07.

"Desde Ammar venimos realizando desde hace mucho tiempo ya, diversas gestiones con autoridades de diferentes jerarquías del Gobierno de la Provincia de Córdoba, no habiendo logrado en ninguna oportunidad, un acuerdo de similares características que el del sector de Travestis/transexuales.

"Si bien hemos llevado adelante reuniones con autoridades de la Provincia desde nuestros comienzos como Organización, estas reuniones y entrevistas se realizaron con mayor frecuencia, y con diferentes funcionarios del Ministerio de Seguridad; sin embargo, en ninguna oportunidad, hemos obtenido respuestas o soluciones a nuestros reclamos, muchos menos firmar un acuerdo."La situaciones de discriminación y detenciones que padecemos, se contraponen absolutamente al importante trabajo que desde AMMAR venimos desarrollando con la finalidad de mejorar las condiciones y calidad de vida de las trabajadoras sexuales de Córdoba".

"Un segundo gran aspecto en que se expresan las arbitrariedades hacia nuestras compañeras, tiene que ver con las situaciones padecidas una vez producida la detención no hay ninguna consideración para aquellas mujeres enfermas, embarazadas, o que estén amamantando, situación que el mismo código de faltas considera en su artículo 23 con arresto domiciliario".

"En un claro accionar nuevamente injusto y discriminatorio, el médico forense autoriza la permanencia de las trabajadoras sexuales en la ex cárcel de encausados, sin considerar situaciones especiales como las arriba mencionadas.

"Desde AMMAR hemos tenido que presentar escritos en el **juzgado de faltas** por compañeras detenidas, con embarazos en curso, o amamantando, o madres de varios hijos menores, o en otro caso con hemiplejía u otras enfermedades que el médico forense no tuvo en cuenta, como por ejemplo: asma, displasia de cadera, enfermedades crónicas como la diabetes o VIH. En uno de estos casos una de las compañeras debió ser trasladada directamente al Hospital, con hemorragias y fiebre, a punto de perder su embarazo por una infección urinaria contraída en el calabozo, un último caso el comisario autorizó la entrada de un bebé a la ex cárcel para que su madre lo amamante.

"La gravedad de este tipo de violaciones a los derechos humanos se acentúa más aun cuando nos encontramos con que una vez detenidas, tenemos que esperar 72 hs. para que nos dejen recibir algunos efectos personales imprescindibles tales como ropa, jabón, toallas, etc.

"Además, la mayoría de nuestras compañeras no se animan a utilizar el recurso de la apelación al Juez de faltas, (quien en algunos casos condenó con mas días a las compañeras) el cual es un derecho, por las constantes amenazas de la policía para que no lo hagan.

El presente proyecto no trata de promover la prostitución, sino de derogar una norma que, bajo la figura del 'escándalo' y por no requerir intervención del juez, habilita la comisión de arbitrariedades, como el hecho de que trabajadoras del sexo fuesen detenidas por 'portación de cara' cuando iban de mañana a hacer compras para sus hijos.

En definitiva, la ley 8431 en su Art. 45 tal cual está resulta violatoria de los Arts. 14; 18; 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 18; 23 y 39 de la Const. Pcial., entre muchísimos.

En el mismo sentido que ilustra el informe presentado por las representantes de AMMAR, se han manifestado distintos Órganos Estatales mediante recomendaciones. Así, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto Nº 1086/05 y, en oportunidad de poner en marcha el Plan Nacional Contra la Discriminación, encomendándole al INADI (INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFobia Y EL RACISMO), elaboración de políticas y medidas concretas. Entre otras cosas, el Organismo establece bajo el título: "Violencia contra las mujeres en situación de prostitución el siguiente diagnóstico:

"Las mujeres en situación de prostitución son uno de los grupos más marginados y discriminados en nuestra sociedad. Los patrones culturales discriminatorios hacia las mujeres aceptan que los varones compren sexo pero discriminan a las mujeres trabajadoras sexuales. El incremento de la prostitución está directamente relacionado con el incremento de la pobreza y la falta de oportunidades laborales de las mujeres. La falta de capacitación incentiva esta situación. Es habitual que los Códigos Contravencionales faculden a las policías a detener a las personas que ejercen la prostitución desde 30 a 60 días por infracciones sin intervención judicial. Esto genera abusos y detenciones arbitrarias de mujeres que ejercen la prostitución. Muchas de ellas suman varios años de sus vidas detenidas en las comisarías, mientras que son escasas las detenciones y las condenas a los proxenetas que explotan el trabajo sexual ajeno, delito tipificado en nuestro código penal. Las mujeres en situación de prostitución refieren que al ser detenidas son obligadas a firmar el reconocimiento de su culpabilidad. Se nos asegura que, en la mayoría de los casos, si no lo hacen son golpeadas y sometidas, muchas veces, a tener sexo gratuito con los policías. Debe agregarse que muchas de ellas tienen hijos que quedan desamparados durante estos períodos de detención arbitraria.

Según las denuncias recibidas, en algunas provincias se las mantiene en muy malas condiciones de detención: sin camas, colchones ni frazadas, con sanitarios rotos inmundos, con ventanas sin vidrios, sin calefacción y sin un plato de comida. Muchas veces, al ser detenidas, se les realiza compulsivamente análisis de VIH. Si son portadoras del virus, se las deja más tiempo detenidas. Si, como suele ocurrir, el Poder Judicial es renuente a dar curso adecuado a las denuncias por violencia familiar, la situación se agrava cuando se trata de mujeres en situación de prostitución. En varios juzgados provinciales se niegan a tomar las denuncias por detención arbitraria. Hemos recibido varias denuncias en las cuales no se ha investigado asesinatos o desapariciones de mujeres en situación de prostitución. Muchas veces, detrás de esta denegación de justicia, existe el prejuicio de que estas circunstancias son "gajes del oficio". Cuando las mujeres en situación de prostitución intentan hacer una denuncia policial son sometidas a malos tratos y discriminadas en los tribunales. También se han recibido denuncias de casos en los que se les ha negado atención en los hospitales a las mujeres que ejercen la prostitución, alegando falta de turnos o de medicamentos para no atenderlas" (Martes 27 de setiembre de 2005 Primera Sección - Suplemento BOLETÍN OFICIAL Nº 30.747 105). El informe además y específicamente propone como propuesta legislativa: Derogar todos los artículos de todos los Códigos provinciales y municipales con figuras contravencionales "abiertas" -falta de moralidad, escándalo en vía pública, merodeo, prostitución, etc.- que otorgan facultades a la policía para realizar detenciones sin intervención judicial previa.

Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación también se han realizado diversas Recomendaciones, surgidas de la Primer Consulta Nacional de Trabajo Sexual, Vih/Sida y Derechos Humanos, realizado hace pocos días, los días 20 y 21 de Agosto de 2008. En ese sentido el Ministerio de Trabajo RECOMENDÓ: 1) Violencia, Estigma y Discriminación: "Derogación a nivel municipal y provincial de los códigos contravencionales y toda legislación que criminaliza a las trabajadoras y trabajadores sexuales.

2) Condiciones de Trabajo Reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo del trabajo sexual como trabajo autónomo; esto es, sin proxenetas, para acceder a derechos básicos de todo trabajador/a como: obra social, aporte jubilatorio, acceso al crédito acreditando nuestra verdadera actividad, etc.

Reconocimiento gremial para las organizaciones como sindicatos de trabajadoras sexuales por parte del Ministerio de Trabajo.

Que el Ministerio de Justicia mandate a la Policía Federal para el cese de la persecución a trabajadoras sexuales.

Además, el MTSS Recomendó:

Que el Ministerio de Justicia recomiende a todas las provincias la derogación de los edictos policiales y códigos contravencionales que sirven de excusa para la persecución policial de las trabajadoras sexuales mujeres y travestis.

Que las legislaturas provinciales deroguen Códigos Contravencionales y Edictos policiales que criminalizan a las trabajadoras sexuales mujeres y travestis.

Libertad de trabajo: eliminación de las "zonas rojas" obligatorias.

Que, en el plazo de un año el Ministerio de Justicia enfatice en forma directa a todas las provincias por tercera vez implementar el Plan Nacional Antidiscriminación que recomienda la derogación de los códigos contravencionales”

Todas aquellas Recomendaciones van en el mismo sentido que el presente proyecto.

Así, y, específicamente a la provincia de Córdoba, la Sra. Presidenta del INADI, Dra. María José Lubertino envió al Sr. Gobernador Propuesta en consideración a las Recomendaciones del Plan Nacional Contra la Discriminación al cual la Provincia de Córdoba adhirió por Decreto 1157 de fecha 2 de Agosto de 2007; nota que ingresara a Secretaría General de la Gobernación en fecha 22/05/2008, por la que se recomienda la derogación de los artículos discriminatorios de los Códigos de Faltas., todo ello en el marco de la propuesta Nº 17 del Plan nacional, cuyo texto expresa “Derogar los artículos de todos los códigos Provinciales y Municipales con figuras contravencionales “abiertas” (falta de moralidad, escándalo en la vía pública, merodeo, prostitución, etc.) que otorgan facultades a la policía para realizar detenciones sin intervención judicial previa...”

En el mismo sentido, en Nota Nº 3355, de fecha 31/03/2008, remitida por el Sr. Ministro Justicia de La Nación , Dr. Aníbal Fernández, al Sr. Gobernador , donde se expresa , que “...la inquietud planteada se centra específicamente en los Códigos Contravencionales y de Faltas, cuyas cláusulas de carácter discriminatorio, recaen sobre determinados grupos y sectores de la población, como ser gays, lesbianas, bisexuales y personas trans, restringiendo sus derechos y su capacidad de participación política. No obstante que estos cuerpos legales han sido cuestionados tanto en el ámbito Nacional, como en el Internacional, así como desde la doctrina penal y desde el campo de los Derechos Humanos, y a pesar de las diversas acciones , presentaciones judiciales y declaraciones de inconstitucionalidad sobre los Códigos o sobre parte de su articulado, lo cierto es que éstas normas continúan tendiendo plena vigencia y son aplicadas, en la mayoría de sus casos en todo el territorio de la República Argentina.

En relación a las normas que los mismos contienen, se ha señalado en varias oportunidades, la vaguedad o apertura de los tipos descriptos como así también una leve tendencia al denominado Derecho penal de Autor, es decir la penalización no de conductas prohibidas sino de sujetos o condiciones de vida, respondiendo las penas y su progresividad, de ésta manera, no la ilegalidad de los actos, sino a la supuesta peligrosidad de sus autores.”

“En tal sentido, cabe destacar lo concerniente a la Provincia de Córdoba, varios artículos contenidos en la ley Nº 8431, Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, específicamente los artículos 42; 43 y 44 (hoy 45).”

Para finalizar, se invita al Sr. Gobernador a trabajar en conjunto a fin de homogeneizar la legislación provincial con la Nacional, con el objeto de armonizar las normas vigentes, evitando la colisión con normas de carácter internacional”.

Posteriormente, y, en fecha 13/05/08, por Nota 5373/08, el Sr. Ministro de Justicia de la Nación reitera la invitación al no haber obtenido respuesta.

Como antecedente mediato, la sanción del nuevo Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derogó los edictos policiales armonizando así la legislación.

Y recientemente, a fines del año 2003, un gran paso adelante lo ha dado, sin duda alguna, la Provincia de Entre Ríos, (Provincia que es parte de la Región Centro) al derogar de su Código de Faltas (ley 3815) un artículo similar al que aquí (curiosamente también Nº 45) se pretende abrogar, cumplimentando de esa manera con el Plan Nacional Contra la Discriminación.

En definitiva, queda claro que la libertad de trabajo sexual, en éste caso, solo quedaría limitada por normas de policía administrativa en materia de Salubridad Pública, las que en tanto y en cuanto sean cumplidas por las trabajadoras sexuales, estarían ejerciendo su oficio o profesión a derecho; pues de otro modo se estarían vulnerando normas Constitucionales.

Creemos, por un lado que, luego de los antecedentes expuestos, no hay razón alguna suficiente para sostener el Art. 45 del CFP, dando respuesta a un clamor generalizado de una parte de la sociedad, donde se revaloricen las diferencias, el respeto de los Derechos Humanos de Tercera Generación, la democratización de las instituciones, la no discriminación y el respeto a las libertades individuales; y, por otro lado, debemos seguir el camino de la hermana Provincia de Entre Ríos, máxime y teniendo en cuenta que, como se dijo supra es integrante de la Región Centro, pues, a los efectos de la integración es necesaria la armonización normativa.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Leg. Roberto Birri y Adela Coria

**PROYECTO DE LEY
8196/L/11
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Art. 1º) MODIFÍCASE el artículo 15 de la Ley 8431 (TO Ley 9444), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 15: Desde el primer momento de la persecución contravencional el imputado podrá hacer valer sus derechos a través de la asistencia técnica de su abogado defensor, en caso de contar con los medios para poder proveerse del mismo, caso contrario el Estado prestará dicha asistencia por medio del Asesor Letrado.”

Art. 2º) MODIFÍCASE el artículo 19 de la Ley 8431 (TO Ley 9444), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 19: Co-culpabilidad Social. Las penas se disminuirán conforme la escala del artículo o se prescindirá de ellas, según el grado de culpabilidad, cuando al autor se le dificulte o imposibilite la comprensión de lo injusto de su accionar en razón de que la sociedad no le ha brindado las posibilidades para una correcta comprensión de la antijuridicidad o de conducirse de modo adecuado a la misma.”

Art. 3º) MODIFÍCASE el Libro III de la Ley 8431 (TO Ley 9444), el que quedará redactado de la siguiente manera:

Jurisdicción y competencia.

ARTÍCULO 1.- LA jurisdicción y competencia en materia de faltas son improrrogables.

Autoridad competente.

ARTÍCULO 2.- SERÁN competentes:

1) Para la instrucción y el juzgamiento de las faltas contempladas en este Código, los Jueces de Faltas, y

2) Para entender en el Recurso de Apelación Contravencional, la Cámara Criminal en turno.

ARTÍCULO 3.- LOS Jueces de Faltas no serán recusables, pero podrán excusarse cuando existan motivos fundados que los inhiban juzgar por su relación con el imputado o con el hecho que motiva la causa.

ARTÍCULO 4.- LA privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional y las normas que la autoricen son de interpretación restrictiva.

ARTÍCULO 5.- LA detención preventiva podrá ordenarse, cuando la infracción atribuida previere pena privativa de libertad, en los siguientes casos:

1) Si fuere sorprendido en flagrancia;

2) Si tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en la comisión de una contravención;

3) En razón del estado o la condición del presunto infractor, y

4) Cuando no tuviere domicilio conocido dentro o fuera de la Provincia.

ARTÍCULO 6.- TODA falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio o por simple denuncia verbal o escrita ante autoridad policial o Juez competente, salvo las establecidas en el artículo 38 del presente Código.

ARTÍCULO 7.- EL funcionario que compruebe una infracción emplazará al imputado en el mismo acto para que comparezca ante la autoridad judicial cuando ésta lo cite, salvo el caso en que sea procedente el arresto preventivo.

ARTÍCULO 8.- CORRESPONDE instruir el sumario contravencional a la autoridad policial con inmediato conocimiento del Juez competente, si éste no creyere conveniente avocarse directamente a la instrucción. Dicho sumario deberá quedar terminado en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, prorrogables por otro tanto mediante decreto fundado del Juez. En caso que hubiere detenidos, el sumario deberá sustanciarse en un plazo improrrogable de veinticuatro (24) horas a contarse desde el momento de la detención.

ARTÍCULO 9.- LOS Jueces de Faltas y la autoridad policial deberán habilitar los días y horas necesarios para el estricto cumplimiento de los términos y plazos fijados en este Código.

ARTÍCULO 10.- LA autoridad policial interviniente podrá proceder al secuestro de todos los instrumentos, objetos, cosas, valores o dinero con que se haya cometido la infracción o que sirvieran para su comprobación. Podrá, además, ejecutar toda otra medida precautoria, incluida la clausura, debiendo comunicar de inmediato lo actuado al Juez de Faltas, quien podrá decidir sobre la procedencia de la medida.

ARTÍCULO 11.- LA autoridad policial iniciará el sumario contravencional confeccionando un acta que contendrá los elementos necesarios para determinar claramente:

1) Lugar, fecha y hora de comisión de la falta;

2) La naturaleza y circunstancia de la misma y las características de los elementos, instrumentos o vehículos empleados para cometer la falta;

3) El nombre y domicilio del imputado, si hubiere sido posible su individualización;

4) Nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere;

5) La disposición legal presuntamente infringida;

6) Nombre, cargo y firma del funcionario interviniente;

7) El detalle de los bienes secuestrados, y

8) Si actúa de oficio o por denuncia.

ARTÍCULO 12.- LA copia del acta cabeza de sumario será elevada al Juez inmediatamente de confeccionada.

ARTÍCULO 13.- EL acta tendrá carácter de declaración testimonial para el funcionario interviniente.

ARTÍCULO 14.- A todo imputado, detenido o no, se le hará saber por escrito el Tribunal a cuya disposición se encuentra y la contravención que se le atribuye. El imputado podrá requerir copia del acta, que deberá serle entregada de inmediato, dejando constancia en el sumario.

ARTÍCULO 15.- EL juicio tiene carácter público; el procedimiento será oral, sumario, gratuito, de características arbitrales y de instancia única.

ARTÍCULO 16.- RECIBIDO el sumario por el Juez, cuando el hecho no configure contravención o no se pudiera proceder, el Juez ordenará su archivo sin más trámite. En caso contrario el Juez fijará día y hora de audiencia de vista de la causa, la que se llevará a cabo en el término de cinco (5) días si el imputado estuviere en libertad o inmediatamente si estuviere detenido.

ARTÍCULO 17.- EN el día y hora fijados, se sustanciará el juicio.

El Juez intimará al imputado, ordenando la lectura del acta, procediendo a su identificación. Acto seguido se recepcionará e incorporará la prueba, se escuchará al imputado y a su defensor si lo tuviere, y seguidamente, sin más trámite se dictará sentencia.

ARTÍCULO 18.- EXCEPCIONALMENTE el Juez de oficio o a pedido de parte podrá ordenar nuevas pruebas indispensables, o medidas para mejor proveer, a cuyo fin está facultado para suspender la audiencia por un término no mayor de diez (10) días.

ARTÍCULO 19.- SI el imputado confesara circunstanciada y llanamente su culpabilidad, se dictará en el mismo acto la resolución que corresponda.

ARTÍCULO 20.- EL Juez valorará las pruebas con arreglo a la sana crítica racional y dictará resolución fundada, absolviendo o condenando. En caso de duda deberá estarse a lo que sea más favorable para el imputado.

ARTÍCULO 21.- LA sentencia se tendrá por notificada en el mismo acto de ser dictada oralmente por el Juez.

ARTÍCULO 22.- EL Juez actuará asistido por un Secretario quien labrará un acta que contendrá de manera sucinta lo ocurrido en la audiencia de vista de la causa, la que será firmada por el Juez, el Secretario de Actuación, el imputado -si supiere y quisiere hacerlo, dejando constancia en caso contrario- y el defensor.

ARTÍCULO 23.- EL acta a que se refiere el artículo anterior deberá contener:

1) Lugar y fecha de realización de la audiencia de vista de la causa;
2) Nombre y apellido del Juez, del imputado, del defensor si lo tuviere, y del Secretario de Actuación, y

3) Una relación de los hechos que se imputan, resumen de las pruebas incorporadas, nombre de los testigos, descargo del imputado y del defensor y la resolución con sus fundamentos.

ARTÍCULO 24.- LAS disposiciones del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba se aplicarán supletoriamente, en cuanto no fueran expresa o tácitamente incompatibles con las de este Código y la naturaleza de su procedimiento.

ARTÍCULO 25.- CONTRA la resolución del Juez de Faltas sólo procederá el recurso de apelación por violación del derecho de defensa en juicio. El recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días de notificada la resolución condenatoria, mediante escrito fundado con los recaudos establecidos para este recurso por el Código de Procedimiento Penal. El Juez concederá o no el recurso por resolución fundada que deberá dictar dentro de los tres (3) días de interpuesto el recurso y, en su caso, elevará las actuaciones ante la Cámara en lo Criminal y Correccional.

Métodos alternativos de resolución.

ARTÍCULO 26.- Este Código promueve y regula los métodos alternativos voluntarios para la solución de conflictos de naturaleza contravencional que podrán ser dispuestos por el Juez o el Ministerio Fiscal; o solicitados por las partes cuando se estimare conveniente intentar su solución por estas vías atendiendo la naturaleza del asunto, su complejidad y los intereses en juego.

ARTÍCULO 27.- El convenio de método alternativo deberá contener la enunciación clara y sucinta del hecho que dio origen al conflicto, su calificación legal, datos filiatorios del contraventor y de la víctima y método alternativo al que se recurrirá.

ARTÍCULO 28.- La Mediación es el procedimiento que tiene por objeto la reparación y compensación de las consecuencias del hecho contravencional mediante una prestación voluntaria del autor a favor de la víctima u ofendido. Cuando esto no sea posible o suficiente por sí mismo, se considerará la reparación frente a la comunidad. Las prestaciones de reparación no deben gravar ni al lesionado ni al autor en forma desproporcionada o inexigible.

ARTÍCULO 29: El Tribunal Superior de Justicia reglamentará por acordada los artículos 26; 27 y 28 de la presente Ley.

ARTÍCULO 30.- La remisión es un método alternativo que consiste en la derivación del infractor por parte del Fiscal Contravencional o el Juez a programas comunitarios de apoyo para su inserción. Podrá aplicarse de oficio o a petición de parte atendiendo la naturaleza del caso, su complejidad e intereses en juego. La derivación podrá efectuarse cuando aún no se haya promovido la acción o en cualquier estado del proceso.

DEROGACIONES

Art. 4º) DERÓGANSE los artículos 79 y 98 de la ley 8431 T.O. 9444.-

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Art. 5º) INCORPÓRASE la presente Ley al Código de Faltas Provincial ley 8431 T.O. ley 9444.-

Art. 6º) De forma.

Leg. Roberto Birri, Eduardo Bischoff, Rodrigo Serna, Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, Sara Díaz, César Seculini, Alejandro Roganti, Raúl Jiménez, Adela Coria y Liliana Olivero

FUNDAMENTOS

El Código de Faltas de la Provincia de Córdoba fue sancionado el 17 de noviembre de 1994 y promulgado el 07 de diciembre de ese mismo año como ley Nro. 8431. En la actualidad existe un texto ordenado aprobado por la ley Nro. 9444.

La norma citada reemplazó al Código de convivencia de la dictadura, aprobado en el año 1980.

Es interesante, a los fines de su análisis, recordar en cuanto a su trámite que fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados y por unanimidad en la Cámara de Senadores que insistió en su proyecto. Los argumentos centrales usados por los senadores para caracterizar la norma que se sancionaba aludía a que se trataba de un código democrático, consensuado, educativo y realista.

Fernando Montoya (UCR, senador informante) destacaba en aquella oportunidad que el nuevo Código reemplazaba al de la dictadura, y que receptaba el principio de la ley penal más benigna. Señalaba que se admitía la responsabilidad de personas ideales y de funcionarios, mientras que la reincidencia se mantenía en la modalidad específica (sólo era reincidencia la comisión de la misma falta). Remarcaba la prioridad de la jurisdicción local, y la existencia de la posibilidad de designar abogado, además de la apertura a sanciones alternativas y el arresto domiciliario junto a la opción de disminuir la pena por confesión. Agregaba que se establecía, aunque para un futuro cercano, un sistema judicial de faltas. El Código, enfatizaba Montoya, iba a la "aplicación directa y real de la ley".

Carlos Baldrich (PJ) también encomiaba la judicialidad del sistema y el respeto de la "libertad de la persona y la dignidad", junto al sentido educativo de la pena; "es un código hecho en democracia, por la democracia y para la democracia", decía.

Prudencio Bustos Argañaraz (Ucedé) subrayaba la importancia de las penas educativas y la judicialidad; expresaba su oposición al merodeo y su preferencia por la averiguación de antecedentes; sin embargo, votó a favor del proyecto.

Carlos Díez (Partido Federal) señalaba en ese momento que: "el Código se adapta a las necesidades actuales y destaca su modernidad".

En la recientemente publicada obra de Lucas Crisafulli e Inés León Barreto: ¿¡Cuánta Falta!? Código de Faltas, Control Social y Derechos Humanos, se afirma con razón que "es en este marco contradictorio de necesidades de nuevas leyes democráticas en sus formas pero anti-garantista en sus contenidos, que se sanciona el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba. Emerge en plena democracia, durante el año 1994 con todo el afán de "democratizar" las leyes, pero también emerge en épocas de populismo punitivo. El nuevo código es una prueba más de la forma de abordar la penalidad: sancionada por legisladores elegidos por el voto popular, pero fuertemente antiliberal en su contenido, dando a la policía la facultad de aprehender, instruir, acusar y juzgar en un única instancia todas las contravenciones, sumado a la ambigüedad y vaguedad de las figuras más la prescindencia de un abogado defensor durante la tramitación. Queda claro que no solo en sus formas se paga una deuda de la democracia, sino también en su contenido, pues el control penal es el termómetro de los derechos humanos. También, en consecuencia, ese control penal define la democracia".

Lo cierto es que se vuelve imprescindible avanzar en el análisis de la norma para fundamentar el presente proyecto; proceso que realizaremos con la ayuda invalorable de la obra de Mario Alberto Giuliano y Horacio Etchichury (Código de Faltas de la Provincia de Córdoba Ley 8431 y modificaciones Comentado, Lerner Editora) de la cual podemos observar claramente que este cuerpo legal violenta diversas normas constitucionales, que le son aplicables en virtud del principio de supremacía constitucional, lo que nos lleva a creer que la mejor solución para esta situación es la reforma integral del mencionado Cuerpo legal (CN, Artículo 31).

El Código de Faltas que integra el sistema penal cordobés, con su actual contenido, forma parte de lo que la criminóloga venezolana, Lolita Aniyar de Castro, ha definido como "instrumentos de furia contravencional profundamente positivistas, que garantizan la gobernabilidad a favor de los intereses poderosos; que consolidan los estereotipos; y que generalmente eluden el ámbito jurisdiccional en beneficio de la extensión de la gestión policial".

La ley 8431 permite a la policía provincial arrestar grandes cantidades de ciudadanos, sin orden judicial, ni control alguno. En razón a ello, llenan de asombro las declaraciones del Sr. Ministro de Gobierno, quien consultado recientemente sobre los posibles abusos, manifestó: "Yo creo que no abusamos de la aplicación del Código de Faltas. De todos modos, la gente siempre puede, frente a cualquier caso de abuso, hacer la denuncia. De todos modos, es posible que pueda haber artículos que puedan ser modificables. Se puede analizar, debatir. Ahora tenemos una sociedad que quiere un accionar más duro y otro pedacito de la sociedad que quiere una garantía absoluta a los derechos individuales y no quiere más un código contravencional" (La Voz del Interior, 07/09/2010).

Sin embargo, basta observar de manera sintética los datos ofrecidos por el Poder Ejecutivo en respuesta al Pedido de Informes interpuesto por la legisladora Adela Coria, para comprender el alcance e influencia negativa de la norma en cuestión, veamos algunos apartados:

- La Policía ofrece estadísticas elaboradas con diferente detalle por las distintas unidades de capital e interior. No hay seguimiento centralizado: la información se reunió para cumplir el pedido. De su sistematización y análisis, se refleja una situación crítica, que podría sintetizarse en más arrestos, más jóvenes, más merodeadores, con la evidencia de menos derechos, menos garantías, y la urgente necesidad de cambiar.

- Durante 2007, según datos de la Policía, se practicaron 15.000 arrestos por faltas en la ciudad de Córdoba. Al responder el pedido de informes, la fuerza señala que en 2009 esa cifra subió a 27.000. Aumentó un 80%, lo que resulta inexplicable. ¿Acaso se redujo en un 80% la delincuencia? El aumento de detenciones se agrava porque en la provincia de Córdoba no hay una ley que reglamente específicamente la garantía constitucional del hábeas corpus y su vigencia, por ejemplo, en horario nocturno o en los fines de semana.

- En toda la provincia, la Policía efectuó 54.223 arrestos. Cerca de la mitad (un 49%) afectaron a jóvenes menores de 25 años. Esto se acentúa en la ciudad de Córdoba, donde el porcentaje se eleva hasta casi el 70%.

• Varias Unidades Regionales clasifican los arrestos en dos: “por merodeo” y “por otras contravenciones”. Por ejemplo: en el departamento Punilla, durante 2009 hubo 848 arrestos por “merodeo”, sobre un total de 3400. Un solo artículo justifica el 25% de las detenciones.

• Todavía nadie ha explicado cómo el arresto por “merodeo” contribuye a la seguridad pública.

• El total de detenciones por aplicación del Código de Faltas informadas por los distintos departamentos de la provincia ascienden a 54.223, que se distribuyen según la edad aproximadamente del siguiente modo: 44% son jóvenes entre 18 y 25 años, 20,8% entre 26 y 35; más de 45 años, el 17,4%; de 36 a 45 años, el 8,7%; y menores de 18 años, el 5,2%.

A las declaraciones del Sr. Ministro y a los datos que surgen del pedido de informes precitado, bien vale como respuesta las siguientes reflexiones:

“Los seres humanos tenemos la peculiaridad de que cuando analizamos una situación negativa, rara vez nos ponemos dentro como parte del problema. Siempre otros son los malos, los culpables con los que - por cierto - hay que ser implacables. El reclamo por “la mano dura” a causa de la creciente inseguridad no pocas veces está vinculado al imaginario de que hay un grupo -por lo general jóvenes de clase sociales menos favorecidas- que está estigmatizado y estratificado: son delincuentes y no hay vuelta atrás, por lo tanto deben ser eliminados. Y hay otros grupos - la gente “decente”- que debe defenderse.

Sin embargo, creo que deberíamos preguntarnos primero, cómo hemos llegado a esta situación social; porque lo cierto es que el delito no ha disminuido.

El análisis simplista es que la justicia y la policía no actúan, que no se los castiga con suficiente severidad (ahí vienen los que reclaman más penas y bajar la edad de la imputabilidad). Pero nunca entra en el análisis - para este tipo de gente “decente” - que este colectivo social marginal al que se estigmatiza, ha sido relegado al margen, en gran medida, por la misma sociedad, por un sistema injusto que no brinda igualdad de oportunidades, sino que cada vez es más excluyente. Sin educación de calidad para todos, con cada vez menos oportunidad de trabajo, con la incuria de las autoridades, y con la insolidaridad y la complicidad de buena parte de la sociedad.

El problema es hondo y de larga data. La bajada de imputabilidad, la “mano dura” y los pedidos de pena de muerte son reacciones espasmódicas que no conducen a nada, que lo único que logran es favorecer el mensaje de los autoritarios y a los violentos que se creen dueños de la vida y la muerte.

Entonces, entendemos que hay que mirar las cosas desde una óptica más amplia para no quedar encerrados en planteos excluyentes y estériles, para acertar con las causas y las decisiones correctas”. (Editorial de La Luciérnaga-Edición marzo 2011).

Una característica fundamental del código es su aplicación extensiva. Refiere Crisafulli que “al contrario del código penal, el contravencional no aplica penas muy severas (aunque alguien, con justa razón, puede argumentar que pasar una hora privado de libertad en las terribles condiciones de detención que existen, para colmo por “prevención”, ya es una pena severa de sobremanera) sino que se caracteriza por alcanzar a la mayor parte de quienes, se ha dicho, conforman a ojos de las fuerzas de seguridad al “nuevo sujeto social peligroso” si tenemos en cuenta la selectividad con la que operan los efectivos policiales ya que las detenciones se realizan sobre la base de estereotipos raciales y sociales” Generalmente los detenidos se caracterizan por tener un fisionomía determinada- jóvenes y de piel trigueña- y por vestir ropas típicas de quienes concurren a los bailes de cuartetos (Posadas, 2005). Se va formando un estereotipo de los supuestos “productores de inseguridad”, en base a prejuicios (racistas, clasistas, xenófobos) que van configurando una fisionomía del delincuente en un imaginario colectivo de connotaciones casi lombrosianas (Zaffaroni, 2005:12).

Los abusos antes referidos, se deben principalmente, a la vaguedad de las conductas descriptas como contravención, y a la posibilidad, en general, de actuar de oficio (Artículo. 115 del Código de Faltas; excepciones en el artículo. 38) y de efectuar detenciones “preventivas” (Artículo. 123) (Siempre en referencia al texto vigente).

Cabe señalar, además, que cuando una falta puede castigarse con multa o arresto, las penas de multa no pagadas dentro del tercer día se convierten en pena de arresto (artículo. 31). Como es notorio, se materializa aquí un doble sistema, una justicia para el pobre, otra para quienes tiene buen poder adquisitivo, se introduce una irritante desigualdad de trato basada en la desigualdad económica. Priva de la libertad a un infractor sólo por su nivel patrimonial.

Asimismo, no existe un control adecuado de estos arrestos. En primer lugar, porque el Código no exige asistencia letrada para los detenidos. En segundo lugar, porque otro funcionario policial, y no un juez, dicta sentencia y controla el procedimiento. Sólo por vía de apelación puede accederse al órgano jurisdiccional, o en caso de ejecución efectiva de penas de cierta gravedad. Como se sostuviera con acierto en una publicación periodística el código patentiza una realidad jurídica y éticamente insostenible al permitir “presos sin abogados y sentencias sin jueces”. Estas tendencias que agravan claramente nuestra Constitución, y por extensión los tratados y pactos a los que ella adhiere, se han profundizado con las últimas reformas al código.

En primer término, se ha prolongado el tiempo máximo de arresto y se han fijado nuevas penas de arresto, “no redimibles por multa”.

Asimismo, desde el año 2003 se ha postergado indefinidamente la creación de los juzgados de faltas. Como consecuencia de ello, el juzgamiento de primera instancia sigue en manos de funcionarios policiales, advirtiéndose la intención de perpetuar el desplazamiento de una competencia de neto corte jurisdiccional hacia el poder político.

En general, el gobierno provincial sostiene la necesidad de estas restricciones inadmisibles a los derechos individuales con el fin de aumentar la seguridad pública. Sin embargo, ni los propios índices oficiales demuestran que exista una baja en los números de la delincuencia, por el contrario no solo que se han profundizado los hechos delictivos, sino que además se advierte una mayor violencia en la

comisión de los delitos; como hemos referidos en otros proyectos, las políticas públicas sociales sostenidas en el tiempo son aquellas herramientas que obtienen mayor resultado en materia de seguridad; la conclusión es unánime, con la vigencia de este Código tampoco se ha podido bajar el número de delitos.

A su turno, María Angélica Gelli, sostiene que una decisión razonable debe guardar:

- Proporción entre los medios y los fines (según fijó la Corte Suprema en "Inchauspe", Fallos, 199:483), y

- Relación causal entre la limitación de derechos y el objetivo buscado.

En este caso, el Código debe castigar conductas de modo que se relacione razonablemente con los fines buscados; no podemos quitar de nuestra vista el hecho de que el Código de Faltas, fiel expositor del derecho penal contravencional, intenta ser un marco regulatorio de la convivencia y la paz social.

Seguidamente y de un modo particular analizaremos las normas alcanzadas en el presente proyecto, basándonos en el ya citado trabajo de Etchichury y Graciano.

Artículo 15 (Asistencia letrada)

Este artículo permite que el proceso contravencional se lleve a cabo sin abogado defensor. Un proceso que puede culminar en la pérdida de libertad (por arresto u otra pena) o de propiedad (por multa) puede transcurrir sin que un abogado deba asistir al acusado. Según este artículo, "[l]a asistencia letrada del presunto contraventor no será necesaria en ninguna etapa del proceso. [...]".

Este carácter presuntamente opcional de la defensa letrada resulta violatorio, por su efecto, de la CN, artículo 18 y del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. "Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos", según la cláusula redactada en 1853. Una violación no sólo ocurre por acciones (tales como prohibir la defensa) sino también por omisiones, tales como dejarla librada a la voluntad de alguien que se encuentra detenido o con la amenaza de una condena. El Pacto de San José de Costa Rica también reitera en los incisos del artículo 8 el derecho a la asistencia letrada, garantizando incluso la provisión de defensa a cargo del Estado.

La falta (o "mera facultad") de abogado se agrava porque el acusador y el juzgador pertenecen a la misma institución estatal. En otras palabras: según el Código, no hay necesidad de contar con un abogado en un trámite donde un policía acusa y otro juzga. Resulta fácil imaginar que no son las mejores condiciones para prescindir de defensa letrada.

En materia de garantías penales, la "no obligatoriedad" puede resultar nociva. Se establecen ciertos criterios y seguridades porque se comprende que el acusado no está a veces en circunstancias de hacer una elección adecuada. Por ejemplo, el proceso penal debe ser público (Pacto de San José de Costa Rica, Artículo 8.5), a los fines de garantizar el control ciudadano sobre las actuaciones. Podría dejarse librado a la decisión del acusado, pero este control público se establece como regla (con excepciones) y no sólo como "posibilidad". Otro ejemplo está dado por la presunción de inocencia: no es renunciable, o "no obligatoria". Estas salvaguardas protegen al acusado frente a la pretensión punitiva del Estado. Respecto este tópico, la Corte Suprema de Justicia ha dicho en autos: N., J. G. s/ infr. art. 15, inc. 4º, LCP s/ incidente de inconstitucionalidad "Que, en estrecha vinculación con dicho derecho, el Tribunal ha puesto reiteradamente de resalto la significación de la inviolabilidad de la defensa en juicio en los procedimientos administrativos (Fallos: 198:78; 306:821 y sus citas; 308:1557 y sus citas; 312:1998 y sus citas). Por aplicación de dicha jurisprudencia se consideró que resulta constitucionalmente imperativo que la autoridad policial asegure la intervención de un letrado, ya sea éste particular o de oficio, en ocasión de notificarse al condenado del pronunciamiento dictado por la citada autoridad, a fin de otorgar a éste la ocasión de interponer oportunamente el recurso pertinente (Fallos: 314:1220, disidencia de los jueces Cavagna Martínez, Barra, Fayt y Petracchi. (...) La validez de esa renuncia al asesoramiento letrado, producida como detenido en una comisaría, sin embargo, no puede ser admitida en forma irrestricta, más aún cuando dicha manifestación de voluntad proviene de un menor de edad a la fecha de su detención que presumiblemente no conoce sus derechos, o bien, no está en condiciones de reclamar por ellos. En esa situación, el deber de asegurar el efectivo ejercicio de los derechos recae sobre la propia autoridad estatal (cf., en este sentido, el caso "Bulacio vs. Argentina", sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 18/9/2003, "124 - 130). Es ella quien debe, asimismo, controlar las condiciones en que se produce la custodia de los detenidos en vista de su particular situación de vulnerabilidad (cf. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mutatis mutandis, "Tomasi vs. Francia", sentencia del 27/8/1992, " 113-115; ídem, "Iwanczuk vs. Polonia", del 15/11/2001, ' 53). (...) Que aun cuando el detenido en el procedimiento contravencional impugnado haya renunciado a contar con un defensor, ello no implica que haya decidido renunciar también a comunicar su situación a una tercera persona. Esta posibilidad no se encuentra prevista en el régimen cuestionado, ni tampoco surge que, de hecho, N. hubiera contado con esa alternativa.

En tales condiciones, y al no estar prevista, cuando menos, la efectiva comunicación de la situación del contraventor a terceros ajenos a la autoridad policial, la detención necesariamente habrá de producirse en condiciones contrarias al estándar fijado por la Corte Interamericana en el caso "Bulacio" precedentemente citado (conf., esp., ' 130). (...) Que, en contra de lo expresado en la sentencia, una detención preventiva de 48 horas, producida en el marco de un procedimiento contravencional tramitado ante la autoridad policial y sin intervención judicial ni notificación necesaria a terceros no puede ser legitimada sin más ni más."

Al respecto, el Dr. Claudio Guíñazú ha referido que si bien el Código contempla la imposición de hasta sesenta (60) días de arresto -previa consulta al juez competente (art. 119)-, y de hasta veinte (20) por los Comisarios o Subcomisarios -sin consulta-, el art. 15 establece que la asistencia letrada del presunto contraventor no será necesaria en ninguna etapa del proceso, ni siquiera es exigida tal

asistencia durante su declaración como imputado, puesto que el art. 115 vigente, tampoco exige la presencia de un abogado defensor para tal acto.

Continúa afirmando Guiñazú que “resulta evidente que, ante la policía, el imputado puede sentirse intimidado, y puede resultar inducido a reconocer el hecho contravencional que se le atribuye. Incluso, la ausencia de control de un letrado durante la actuación de la policía imposibilita saber si efectivamente se ha aceptado tal declaración, y eventualmente, si el imputado ha confesado, y en qué condiciones lo ha hecho.

No exigir la presencia obligatoria de un abogado durante la declaración del imputado ante la autoridad policial resulta inconstitucional, por cuanto se vulnera la inviolabilidad de la defensa y el debido proceso, y se lo expone a una eventual declaración autoincriminante (arg., arts. 18 C.N. y 8, inc. 2, ap. G C.A.D.H.), quebrantándose además las expresas disposiciones del art. 40 de la Constitución Provincial, que establece que carece de todo valor probatorio la declaración del imputado prestada sin la presencia de su defensor. Lo cuestionable del procedimiento radica en el carácter eventual, y no obligatorio, de la participación del abogado defensor durante el procedimiento contravencional, participación que sólo se hace posible si el presunto infractor la solicita expresamente”.

La síntesis de la resolución del Alto tribunal más el análisis de Guiñazú nos debe eximir de mayores comentarios.

Artículo 19 (Confesión)

Este artículo ofrece un estímulo a la autoincriminación. La pena “podrá reducirse a la mitad” si el acusado confiesa su responsabilidad “en la primera declaración formal que preste”. En rigor, la disposición se refiere al “contraventor” y no al acusado ni al presunto contraventor. La formulación misma ya afecta la presunción de inocencia (que existe antes de que se dicte resolución).

Este incentivo amenaza la garantía constitucional contra la autoincriminación, incluida en el Artículo 18 de la CN. En primer lugar, porque estimula a confesar rápidamente (“en la primera declaración formal”). En segundo lugar, porque se da en un contexto donde la asistencia letrada no es obligatoria (Artículo 15 del Código). En otras palabras: se ofrece al acusado (“contraventor” en el lenguaje del Código) un aliciente para incriminarse, sin demasiado tiempo para pensarlo y sin asesoramiento de un abogado.

En este contexto, donde la policía arresta, acusa y juzga, sin obligación de asistencia letrada y con la premura de hacerlo rápido, el artículo 19 violenta el Artículo 8.3 del Pacto: “La confesión del inculcado sólo es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”.

Por otra parte, constituye una violación del principio de inocencia (artículo. 8.2 del Pacto). En efecto: según el Artículo 19 del Código, la confesión habilita a “la autoridad interviniente” (la policía) a “dicta[r] resolución sin más trámite”. Es decir que la acusación no es probada por el Estado, sino que la condena se dicta sin utilizar ni diligenciar más prueba que la confesión.

Por otra parte no se contempla ni siquiera la presencia necesaria de un abogado defensor durante la confesión, por lo que se violenta el art. 40 de la Constitución Provincial, citado precedentemente.

Derogación del artículo 79 (Negativa u omisión a identificarse).

Tocamos aquí quizás uno de los tópicos más conflictivos, con este artículo el legislador también amplía indebidamente las facultades policiales para arrestar ciudadanos.

La falta consiste en omitir identificarse (o hacerlo falsamente) o negarse a “dar los informes necesarios”, estando “en lugar público, abierto al público, existiendo motivos razonables por los que se les exija su identificación”.

El artículo viola el principio constitucional de legalidad (CN, Artículo. 19) al introducir un elemento de irreductible vaguedad: “motivos razonables”, que quedan al exclusivo arbitrio del personal policial. El criterio será revisado luego por otro funcionario policial, en la instancia de “juzgamiento”. Es difícil imaginar una situación con mayor riesgo de arbitrariedad.

A la vez, esto permite un arresto a voluntad del personal actuante. Basta que el agente elija una persona para detener y le exija identificación. Debemos recordar aquí el sin número de pedidos de informes que desde esta banca hemos presentado al seno de la Legislatura, dando cuenta de los excesos llevados a cabo por personal policial, que han tratado de ampararse en esta norma para cometer todo tipo de tropelías. Si el ciudadano se allana a identificarse, el policía siempre puede alegar que la identificación es falsa, o que no se han brindado todos los “informes necesarios”. Así queda habilitado el arresto. Paradójicamente, la reforma de la Constitución provincial, en 1987, eliminó la posibilidad de detener personas por averiguación de antecedentes. El atentado no solo que es claro, sino que además es gravísimo.

En virtud del Artículo. 79 del Código de Faltas, no queda espacio para la privacidad (CN, Artículo 19), para el derecho a transitar libremente (CN, Artículo 14), para el derecho de reunirse (CN, Artículo 33) y expresarse o peticionar a las autoridades (CN, Artículo 14). En todos estos casos, entre otros muchos, la policía puede irrumpir para detener a quienes no se identifiquen debidamente. Este modelo de actuación estatal colisiona frontalmente con el planteo de un Estado democrático, de Derecho, participativo.

La arbitrariedad se agrava por el ilimitado espacio territorial de aplicación: “lugar público, abierto al público”. Esto abarca desde calles y plazas hasta locales partidarios o sindicales, pasando por iglesias y escuelas, medios de transporte y oficinas estatales. Es decir: no se limita a lugares de propiedad pública, sino de carácter público, esto es, abiertos con más o menos restricciones. Cuesta poco imaginar cuánta intimidación puede generar en estos ámbitos el accionar de la policía arrestando personas que se niegan a dar todos “los informes necesarios”.

Derogación del artículo 98 (Merodeo).

Aquí se evidencia la más clara violación a los principios de legalidad (CN, artículos 18 y 19) y razonabilidad (CN, artículo 28). La figura habilita, en los hechos, la detención y sanción de ciudadanos por la mera voluntad del personal policial actuante. Viola, además, el derecho a circular (CN, artículo 14).

El legislador sanciona con multa o arresto a quienes “merodearen edificios o vehículos, establecimientos, agrícolas, ganaderos, forestales o mineros, o permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible, según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos”.

En primer lugar, el concepto de “merodeo” resulta extremadamente vago. El Código elige no dar mayores precisiones en cuanto al significado. En el debate parlamentario, el miembro informante del Senado insistió en que se trataba del “momento inmediato anterior a la consumación de un delito”. Sin embargo, ello no quedó plasmado en la figura. El mismo legislador admitió que “[quizás no sea ésta figura la panacea [sic] de la tipificación contravencional”, pero insistió en que “ninguno de nosotros [...] ha encontrado otra.”.

Según los diccionarios comunes, el merodeo combina la circulación y la finalidad de robo o saqueo, o en un sentido más amplio, la circulación sin un fin determinado.

El legislador, mediante esta figura, castiga la circulación atribuyéndole una intención delictiva. Tal atribución se basa, únicamente, en la discreción del personal policial actuante. En síntesis, podemos decir que: caminar se vuelve una contravención si la policía elige definirlo así. Se violenta el principio de legalidad. La conducta se vuelve punible de acuerdo a la opinión del agente de policía, “según las circunstancias del caso”, tal como indica el artículo.

No hay forma de que el ciudadano pueda prever qué circunstancias tendrán el efecto de incriminar su circulación, convirtiéndolo en un contraventor. Se trata, de una figura extremadamente ambigua, abierta a la arbitrariedad.

El personal policial puede arrestar al supuesto merodeador si observa en él una “actitud sospechosa”. Otra vez: la contravención se termina de configurar en la mente del observador, esto es, del policía.

En otros casos, el observador son terceros en los que se genera inquietud. Pero no hay forma de volver objetiva la conducta punible. Tampoco hay manera de que quede definida con precisión. Esto infringe, claramente, el principio de legalidad.

Además, el artículo viola el principio de inocencia. El acusado de merodeo sólo puede librarse de la sanción si ofrece una “razón atendible” para hallarse en el lugar. Sin embargo, esto también depende de la discreción policial. En efecto: la razón debe resultar “atendible” según el criterio del agente de la repartición.

No hay, por supuesto, razonabilidad alguna en esta figura. Se confiere enorme poder a la policía, no se establecen requisitos objetivos para la imputación, y se fundamenta la sanción explícitamente en estados mentales de terceros, o en prejuicios o suposiciones del agente policial. Cuesta imaginar un ejemplo más claro de violación del artículo 28 de la CN.

Lo cierto es que entre otras figuras el Código de Faltas castiga a quien merodeare de forma sospechosa ¿De qué depende que el transitar de una persona sea sospechoso?, es decir ¿Quién puede caminar paseando y quién deja de caminar para merodear, y de forma sospechosa? Lucas Crisafulli relata que “El humor racista dice que si un blanco corre es porque está haciendo footing, pero si el que corre es el negro, lo hace porque ha robado un estéreo, o está merodeando de forma sospechosa diríamos en estos tiempos de sobredimensión del Código del Falta. Karl Marx decía que la historia se repite, primero como tragedia, luego como comedia. Ahora bien, el racismo no sólo guía el ingenioso humor cordobés, la comedia, sino también construye prácticas, 148 tragedias cotidianas que se repiten día a día.”

Nuestra Provincia tiene a la fecha el triste privilegio de ser una de las escasísimas provincias que aún conservan esta perversa figura contravencional.

Artículo 117 (Resolución. Notificación)

Según este artículo, se dictará sentencia en el plazo de tres días de iniciada la actuación sumarial, y esta decisión será notificada al condenado. Sin embargo, no hay publicidad del proceso. En efecto: no existe deliberación pública, ni se prevé que el imputado sea oído por la autoridad que resuelve.

Esta falta de publicidad violenta el Artículo 8.5 del Pacto de San José de Costa Rica, y otros concordantes.

En este sentido vale mencionar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien expresó en autos: “N., J. G. s/ infr. Art. 15, inc. 4, LCP s/ incidente de inconstitucionalidad.” Que a partir del caso “Bulacio”, el Estado argentino está internacionalmente obligado a asegurar que los regímenes contravencionales, en tanto ponen en juego la libertad de las personas, estén configurados de tal modo que aseguren que no se reiteren hechos como el juzgado en su momento por la Corte Interamericana. (...) una detención policial de 48 horas fuera de todo control judicial no cumple con estos requisitos y favorece la producción de hechos como el que motivó la condena del Estado argentino en el caso citado.” Para agregar: “Que aun cuando el detenido en el procedimiento contravencional impugnado haya renunciado a contar con un defensor, ello no implica que haya decidido renunciar también a comunicar su situación a una tercera persona. Esta posibilidad no se encuentra prevista en el régimen cuestionado, ni tampoco surge que, de hecho, N. hubiera contado con esa alternativa. En tales condiciones, y al no estar prevista, cuando menos, la efectiva comunicación de la situación del contraventor a terceros ajenos a la autoridad policial, la detención necesariamente habrá de producirse en condiciones contrarias al estándar fijado por la Corte Interamericana en el caso “Bulacio” precedentemente citado”. Y por ultimo: “Que, producida una detención en esas condiciones, la mera previsión de un recurso de apelación de la posible sanción que imponga el Jefe de Policía no alcanza para dar cumplimiento al deber impuesto por el art. 7,

inc. 5to, de la citada Convención, de acuerdo con el cual toda persona detenida "debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales...", condición que no cumplen los funcionarios policiales con prescindencia de que se les asignen facultades sancionatorias en materia contravencional".

Por último, iremos a valorar aquellas violaciones al derecho de acceso a la justicia, a saber:

Artículo 114 inc. 1 (competencia para instruir y juzgar)

En este artículo el legislador provincial consagra el corredor de arbitrariedad en la aplicación del Código. En efecto: confiere la autoridad para instruir y juzgar a la misma institución, a saber, la Policía de la Provincia.

Así, la Policía detecta, investiga, colecta pruebas, acusa y juzga. Todo ello sin necesidad de asistencia letrada (Artículo. 15 del Código). Cuesta poco imaginar el grado de arbitrariedad posible con esta organización procesal.

El artículo, además, viola el requisito de juez "imparcial e independiente", fijado en el artículo. 8.1 del Pacto. En efecto: no basta que sea "juez natural", de acuerdo al artículo 18 de la CN. El Pacto exige que se trate de un juez que reúna otras condiciones objetivas: imparcialidad e independencia.

En el Código, no se asegura la imparcialidad, ya que no hay separación entre el órgano que acusa y el que juzga. Tampoco se garantiza la independencia, ya que el "juzgador" pertenece a una institución jerárquica, regida por el principio de obediencia funcional.

Surge claramente que aquí las reglas de la sana crítica racional para imponer una sanción es de aplicación nula, ya que la sola palabra de un funcionario policial resulta suficiente para llegar a la "certeza contravencional" de la existencia de la infracción.

La situación se agrava por la voluntad política evidenciada por el Ejecutivo y la Legislatura. En efecto: el Código de Faltas original preveía la institución de un sistema judicial para el juzgamiento de faltas. Sin embargo, la ley 9098 (sancionada en marzo de 2003) postergó sin plazo su instrumentación. En otras palabras: ha quedado clara la decisión política de mantener la acusación y el juzgamiento unificados en manos de la Policía. Ello a pesar que en el diario de sesiones en la que se sancionó la ley el miembro informante afirmó "hoy venimos a saldar una deuda, que a esta altura ya es histórica, de ahí que incluyamos una previsión que se materializa como clausula transitoria, mediante la que se le otorga un plazo no mayor a 90 días hábiles al Poder Ejecutivo a fin de que reglamente la presente, de manera de dotar de recursos el sistema jurisdiccional que esta ley instaura".

Las condenas dictadas, asimismo, resultan graves porque se mantienen registradas durante dos años (artículo. 11). A la vez, implican un aumento de un tercio en la siguiente condena por cualquier contravención (artículo. 10).

Existe, empero, una aparente excepción, donde se establece la obligación de comunicar al juez de faltas la detención. En el caso de los artículos 101 al 103, ya descriptos, hay obligación de "informar al juez de Faltas o con competencia en la materia" la detención de personas (art. 104); éste "impartirá las directivas a seguir".

Resta aclarar si el "juez" señalado es el mismo que para todas las infracciones del Título II del Libro II: se trata entonces del comisario (artículo. 114 inc. 1). En ese caso, no habría una verdadera excepción. De todas formas, puede alegarse que la mención explícita del Juez de Faltas obliga a comunicar a un funcionario judicial (el del artículo. 114 inc. 3). En tal caso, cabe preguntarse las razones para este tratamiento diferenciado.

Bajo la óptica de la opinión del Dr. Guñazú, se afirma que: "las fuerzas de seguridad provinciales, los miembros de la Policía, tienen a su cargo llevar a cabo actividades de instrucción y juzgamiento, lo que violenta palmariamente los arts. 18 de la C.N. y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) -con jerarquía constitucional desde 1994 según el art. 75, inc. 22 C.N., particularmente el principio nulla poena sine iudicio, y las garantías de acceso a la jurisdicción, el debido proceso, y la inviolabilidad de la defensa en juicio".

También resulta ostensiblemente violatorio de expresas disposiciones de la Constitución Provincial de Córdoba, en especial de los arts. 19, inc. 9 -acceso a la jurisdicción-, 39 -debido proceso-, 40 -defensa en juicio-, y 42 -privación de la libertad-; al igual que el art. 167 que asigna competencia en faltas y contravenciones provinciales a los jueces de paz.

En la práctica, las personas son detenidas por la policía, quien recién les hace firmar el acta al momento de ser puestas en libertad, con lo que se desvirtúa el ya deficiente procedimiento establecido por el Código de Faltas.

Todo lo cual refleja que, en la práctica, tales atribuciones quebrantan palmariamente el principio de división de poderes, y en particular, la expresa prohibición establecida por el art. 138 de la Constitución Provincial, que claramente dispone que "...en ningún caso el Gobernador de la Provincia ni funcionario alguno puede ejercer funciones judiciales...".

Artículo 118 (Solicitud de apertura de la instancia judicial)

Este artículo agrega un nuevo obstáculo para el acceso a la justicia. Para solicitar la apertura de la instancia judicial a favor de un detenido, la norma exige una presentación por escrito.

Este requisito agrega una carga difícil para muchas de las familias afectadas por el Código de Faltas. No resulta difícil imaginar que personas privadas de su educación por circunstancias sociales se vean imposibilitadas de ejercer este importantísimo derecho procesal, sólo por la exigencia de que sea presentado por escrito. Volvemos a lo manifestado supra, se crea un sistema que está asentado en la idea de "criminalizar" un estado o clase social, que no cuenta ni con los recursos económicos, ni con el grado de instrucción necesario para poder ejercitar las medidas básicas de defensa.

La norma no prevé ninguna excepción, lo cual refuerza su carácter discriminatorio (CN, artículo. 16 contrario sensu). A la vez, violenta el artículo. 25 del Pacto, donde se consagra el derecho a una tutela judicial efectiva.

El artículo 119 establece un atenuante de la situación, ya que obliga a consultar con el juez competente la ejecución efectiva de penas privativas de la libertad superiores a 20 días de arresto, o de multas que excedan las 60 unidades de multa. El juez podrá entonces revocar la sentencia dictada por el funcionario policial.

De todo lo dicho podemos concluir que el texto actual del Código de Faltas, a la luz de lo expuesto, ofrece numerosas oportunidades para el arresto de ciudadanos por conductas de alcances imprecisos. Con la posibilidad de actuar de oficio, la iniciativa queda en manos de la fuerza de seguridad. El procedimiento no garantiza la defensa, ni brinda acceso a un tribunal judicial más que por apelación.

A la vez, cuando una falta lleva penas de multa y arresto, las penas de multa no pagadas se convierten en penas de arresto; esto afecta mayormente a los sectores de ingresos más bajos.

La necesidad de prever un modelo alternativo de soluciones.

Se sostiene -y con acierto-, que las contravenciones se distinguen de los delitos por su menor contenido injusto, ello equivale a decir que la afectación a bienes jurídicos que traduce la comisión de una falta, resulta cuantitativamente inferior a la que importa la violación de los tipos criminales contenidos en el Código Penal y sus leyes complementarias.

A poco de repasar la larga historia del derecho de faltas, se advierte que no resulta desajustada la denominación que se le adjudica de ley de "estado peligroso sin delito". Ello es así en tanto la tradición argentina muestra a las claras que los "edictos policiales" de antaño o los actuales códigos contravencionales operados por los jefes de policía erigidos en jueces, generan verdaderos festivales de arbitrariedades y violaciones de derechos.

Como propone Eugenio Raúl Zaffaroni, "resulta menos gravosa una condena condicional a un mes de prisión, que la lesión que sufre el honor de una mujer a la que por un simple trámite policial se la declara prostituta. Por lo que si coincidimos entonces con que este verdadero derecho de prevención, implica el ejercicio del poder de castigo del Estado y requiere de una ideología y una sistematización acordes con principios constitucionales de protección de derechos humanos, hemos de convenir también que no resulta desatinado pensar a la legislación contravencional con el enfoque de las innovadoras concepciones que alumbran desde el Derecho Penal".

Concluiremos en que la justificación política de la represión estatal atiende a fines protectorios de derechos tanto del ofendido como del ofensor. Ahora bien, hasta hoy hemos concebido al juzgamiento del infractor y la aplicación de la pena como los medios razonables para restablecer la paz social alterada y brindar a la persona la posibilidad resocializadora que prevé el texto constitucional. Frente a esta afirmación de cuño tradicional, cabe preguntarse como lo hace Adolfo Ceretti: qué es una sociedad decente y qué es una sociedad civilizada. Siguiendo en sus conceptos a Avishai Margalit se responde que una sociedad decente es aquella en la cual las instituciones no humillan a las personas y una sociedad civilizada es aquella en la cual sus miembros no se humillan los unos a los otros; esta sería pues una asertiva definición "de una sociedad pensada como buena para vivir, en cuanto caracterizada por la no humillación...una sociedad en la cual a toda persona le es acordada la deuda de honor".

De ello se sigue pues que un comportamiento humillante "excluye al otro como no-humano", lo que permite afirmar entonces que el esfuerzo de las sociedades debe encaminarse hacia un diseño de instituciones que no discrimine a sus miembros convirtiéndolos en "objetos" o "medios" dotando al sistema penal de herramientas alternativas propias de lo que se da en llamar justicia restaurativa, el ejercicio del poder punitivo del Estado se democratiza y el contrato social se celebra considerando al individuo transgresor como un miembro de la sociedad; la delincuencia no es, sino, un producto social.

Este nuevo arquetipo no responde al interrogante de cómo debemos castigar, antes bien se pregunta, cuál fue el daño causado y cómo puede repararse. Como se ve, el núcleo de la justicia retributiva es el daño.

En primer término ha de tenerse en cuenta que no toda infracción es atrapada por estas modalidades alternativas, sin embargo se advierte viable para la gran mayoría de ellas.

Vale, para ello, recordar los lineamientos trazados en el documento E/CN. 15/2005/5/Add. 1 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas titulado: "Justicia Restaurativa. Informe del Secretario General. Adición, Informe de la reunión del grupo de Expertos sobre Justicia Restaurativa". En este instrumento se define al "programa de justicia restaurativa" como todo programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos; al "proceso restaurativo" como todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador.

Algunas de las soluciones propuestas tales como la mediación o conciliación y la remisión, son procesos de desjudicialización del conflicto que hemos considerado incluir en el proyecto.

Co-culpabilidad social.-

Hemos incorporado también en el proyecto esta figura que, entre otros, es receptado por el Código de Faltas de la Provincia de Chubut. Compartiendo la visión de que la solución claramente no pasa por una "mayor mano dura", resulta de utilidad el análisis que realiza el Dr. Luis Niño, destacado magistrado nacional quien manifiesta: "El estado de cosas socioeconómico- cultural pasa, entonces, a primer plano. Poner de relieve que la desigualdad y la marginación que de ella resulta no son fenómenos exclusivos de nuestro medio social es innecesario por perogrullesco. Desde España, nos llegan mensajes

de científicos sociales como Jesús Valverde Molina, alentando sobre situaciones que nos permiten efectuar una rápida identificación de las respectivas problemáticas”.

“No nos engañemos”- aconseja el jurista español Valverde Molina meditando sobre la situación de tres millones de individuos desocupados, en su mayoría jóvenes: “dada la casi nula formación educativa de los jóvenes en situación de pobreza y la escasez de empleos no especializados – los únicos a los que tendrán acceso- muchos...no tienen en su futuro más que el desempleo crónico, una situación en la que la supervivencia es el único objetivo o la droga y la cárcel, la inadaptación social...”

El citado Ministro de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni afirma que: “todo sujeto actúa en una circunstancia dada y con un ámbito de autodeterminación también dado. En su personalidad misma hay una contribución a ese ámbito de autodeterminación puesto que la sociedad nunca tiene la posibilidad de brindar a todos los hombres las mismas oportunidades. En consecuencia, hay sujetos que tienen un menor ámbito de autodeterminación condicionado de esta forma por causas sociales. No será posible poner en la cuenta del sujeto estas causas sociales y cargarle con ellas a la hora del reproche de culpabilidad. Suele decirse que aquí hay una co-culpabilidad con la que debe cargar la sociedad misma” Podemos sostener que en nuestro Código Penal hay una clara aplicación del principio de co-culpabilidad en el Art. 41, cuando se exige que para graduar la pena se tome en cuenta “la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos”.

Del Código de Faltas se puede afirmar que sin lugar a dudas es una efectiva herramienta de disciplinamiento social, pero poco puede decirse sobre su capacidad para enfrentar el delito menor.

En la citada obra de Crisafulli y León Barreto, se concluye en que “el ámbito contravencional y el accionar policial son un claro ejemplo de que la premisa legal, en materia internacional de derechos humanos está aún lejos de ser una realidad en la provincia de Córdoba, puesto que el sistema contravencional contribuye a provocar males mayores a la ciudadanía, ya que profundiza conflictos sociales que podrían resolverse por otros medios y reproduce las limitaciones propias del sistema penal sin que exista delito, sin realizar ningún aporte superador a la demanda de seguridad social imperante, por cuanto se ha convertido en un sistema vetusto, extemporáneo o improcedente”(Pag. 40 y 41).

Por último, las múltiples objeciones constitucionales al Código aconsejan su reforma integral. Sin embargo, somos plenamente conscientes que hay figuras que tienen el objetivo final de contribuir a la paz social, de ahí que la propuesta que aquí se presenta es el de una modificación que prevé modificaciones parciales con el objetivo de definir precisamente las acciones punibles, restringir al mínimo la detención preventiva y la posibilidad de actuar de oficio, rechazar la incriminación de conductas privadas o inofensivas y garantizar el derecho de defensa y el de acceso a un tribunal independiente e imparcial.

Avanzar en la reforma de esta ley es un imperativo de nuestro tiempo, en el convencimiento que las políticas públicas de seguridad para un sector de la sociedad no pueden construirse sobre la base de la vulneración de los derechos de otra parte de ella.

Obras citadas:

Mario Alberto Giuliano y Horacio Etchichury (Código de Faltas de la Provincia de Córdoba Ley 8431 y modificaciones Comentado Lerner Editora) Mario Alberto Giuliano y Horacio Etchichury (Código de Faltas de la Provincia de Córdoba Ley 8431 y modificaciones Comentado Lerner Editora)

Garavano, 2006:

Germán C. Garavano, Información y justicia II, Unidos por la Justicia Asociación Civil – Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2006; disponible en Internet en: http://www.unidosjusticia.org.ar/archivo/UNIJUS_KONRAD_Infoyjust2_A.pdf

Gelli, 2005:

María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, 3ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2005.

Maljar, 2003:

Daniel Maljar, “La ley más benigna es aplicable al derecho administrativo sancionador después de la reforma constitucional de 1994”, JA, 2003-II-438. Documento Lexis Nº 0003/009646.

Milicic, s. f.:

María de los Ángeles Milicic, “El procedimiento por faltas en la provincia de Santa Fe”, La Ley Litoral, s. f.

Núñez, 1986:

Ricardo C. Núñez, Manual de Derecho Penal. Parte Especial, 2ª ed. (1986), 1ª reimpresión, Marcos Lerner Editora Córdoba, 1988.

Sagüés, 1999:

Néstor P. Sagüés, Elementos de Derecho Constitucional, tomo 2, 3ª ed., Astrea, Buenos Aires, 1999.

Zaffaroni, Manual, pag.103 y ss.

Ferrajoli, Luigi “Derecho y Razón”, Séptima Edición, año 2005, Ed. Trotta, pag.335 y ss.

“Mediación Penal y Justicia - En-contrar una norma”, publicado en “Justicia Reparadora – Mediación Penal y Probation”, AA.VV.; Pedro David (Coordinador) con la colaboración de Adolfo Ceretti, Ed. Lexis Nexis, año 2005, pag. 5 y ss.

Lucas Crisafulli e Inés León Barreto: ¿¡Cuánta Falta!?. Código de Faltas, Control Social y Derechos Humanos, Incip.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.-

Leg. Roberto Birri, Eduardo Bischoff, Rodrigo Serna, Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, Sara Díaz, César Seculini, Alejandro Roganti, Raúl Jiménez, Adela Coria y Liliana Olivero

**PROYECTO DE LEY
10697/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Art. 84 de la Ley 8431, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artificios pirotécnicos.

ARTÍCULO 84.- Prohíbese la venta minorista o mayorista de elementos de pirotecnia o artículos pirotécnicos para uso particular en todo el territorio de la provincia de Córdoba.

Solo será autorizada por la autoridad competente la fabricación y venta mayorista de elementos de pirotecnia o de cohetería que no sean de estruendo y con destino a espectáculos de artificio.

Serán sancionados con arresto de hasta veinte (20) días, decomiso y en su caso clausura hasta noventa (90) días, los que fabricaren artículos pirotécnicos, sin autorización correspondiente de la autoridad competente. Igual sanción le será impuesta a quienes comercializaren, almacenaren, transportaren o distribuyeren esos elementos sin autorización.

Serán sancionados con arresto de hasta treinta (30) días, decomiso y en su caso clausura hasta ciento veinte (120) días, quienes comercializaren o utilizaren artículos pirotécnicos con riesgo de explosión en masa y los de trayectoria impredecible en tierra o por aire, a menos que esté expresamente autorizada su venta y uso por la autoridad competente.

Serán sancionados con arresto de hasta treinta (30) días, decomiso y en su caso, clausura o prohibición de funcionamiento hasta por ciento veinte (120) días, los propietarios de quioscos, negocios fijos o ambulantes, comercios o actividades afines, que vendieren o cedieren artículos de pirotecnia a menores de dieciséis (16) años.

En caso de reincidencia, podrán duplicarse las penas previstas en el presente artículo.

A los efectos de las disposiciones de la presente Ley, se entenderá por artículos pirotécnicos, todos aquellos susceptibles de producir estruendo o efectos fumígenos o luminosos, elaborados con explosivos o sustancias similares.”

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el Art. 84 bis de la Ley 8431, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Prohibición uso de pirotecnia.

ARTÍCULO 84 BIS.- Prohíbese la tenencia y el uso de cualquier tipo de material de pirotecnia o artificio de pirotecnia sin autorización expresa de autoridad competente.

Será sancionado con multa de hasta veinte (20) unidades de multa el que tuviere en su poder elementos de pirotecnia o artificios pirotécnicos, para su uso particular.

Será sancionado con arresto de cinco (5) y hasta veinte (20) días y prohibición de concurrencia a espectáculos públicos hasta dos (2) meses si de eso se tratare y en su caso clausura el que:

1) Pretendiera introducir, por cualquier medio, elementos de pirotecnia, como artificios pirotécnicos del tipo que fuere, al ámbito espacial de tránsito público o en donde se desarrolla un espectáculo público o de concurrencia pública;

2) Ingresare o facilitare el ingreso de elementos de pirotecnia, como artificios pirotécnicos de cualquier tipo, dentro del ámbito espacial de tránsito público o en que se desarrolla un espectáculo público o de concurrencia pública, y

3) Utilizare o facilitare el uso de elementos de pirotecnia, artificios pirotécnicos de cualquier tipo, dentro del ámbito espacial de tránsito público o en que se desarrolla un espectáculo público o de concurrencia pública, y en las zonas circundantes, inmediaciones al lugar de su realización, en una distancia no menor de cien metros (100 m) cuando aquel se desarrolle en espacios abiertos, ya sea inmediatamente antes de su iniciación o de finalizado el mismo, como durante su desarrollo.

En todos los supuestos procede el decomiso respectivo de los elementos de pirotecnia y posterior destrucción por parte de la autoridad competente.

En caso de reincidencia podrán duplicarse las penas previstas con el límite máximo establecido en la presente Ley.

Quedan exceptuados los espectáculos de artificios que cuenten con la autorización respectiva de la autoridad competente, en los que deberán observarse las siguientes condiciones:

1) Solo se permitirá la utilización de elementos de pirotecnia o de cohetería, que no sean de estruendo,

2) Debe tratarse de eventos destinados a entretenimientos de la comunidad o conmemorativos especiales previa habilitación temporaria municipal por el plazo previsto para el espectáculo y en el lugar determinado y considerado apto para el emplazamiento de los shows de fuegos de artificio.”

ARTÍCULO 3º.- Modifícase el Art. 85 de la Ley 8431, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Falta de cumplimiento de normas de seguridad.

ARTÍCULO 85.- Serán sancionados con hasta cinco (5) días de arresto, decomiso y clausura o prohibición de funcionamiento hasta por diez (10) días, quienes no cumplieren las normas de seguridad dictadas por la autoridad competente para el depósito y exhibición para la venta de productos

pirotécnicos.

Serán sancionados con hasta cinco (5) días de arresto, decomiso y clausura, o prohibición de funcionamiento hasta por diez (10) días, quienes vendieren artículos pirotécnicos de bajo riesgo y venta libre que no llevaran, como mínimo, inscripciones y etiquetas anexas con las instrucciones para su utilización y la leyenda "elemento de riesgo".

En caso de reincidencia podrán duplicarse las penas previstas en el presente artículo."

ARTÍCULO 4º.- Vigencia esta norma tendrá vigencia a partir del 1º de Febrero de 2013.

ARTÍCULO 5º.- De forma.

Leg. Roberto Birri

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como principal objetivo preservar la integridad física de las personas, de los animales y del medio ambiente.

Preocupados ante las consecuencias perjudiciales que los elementos de pirotecnia, aunque se los considere sinónimos de fiesta y alegría, generan en la salud, en el medio ambiente y en el comportamiento de la fauna, hemos mantenido diversas reuniones y conversaciones a lo largo de mucho tiempo con profesionales de Salud Pública, integrantes de Defensa Civil, asociaciones de personas con discapacidades, asociaciones protectoras de animales y familiares de personas que por condiciones médicas sufren episodios que agravan su condición; y con todos ellos hemos arribado a la conclusión de que la pirotecnia debe ser limitada en su uso de manera estricta, sólo permitiendo la realización de espectáculos de fuegos artificiales en el marco de eventos especiales destinados al entretenimiento y previo agotar las habilitaciones, controles y autorizaciones de las autoridades competentes. Arribamos a esta posición luego de compartir las descripciones de las consecuencias del uso de artefactos pirotécnicos a partir de las experiencias en el campo que a cada uno ocupa.

El uso de elementos de pirotecnia es cada vez más extensivo y no se limita sólo a las épocas festivas. Sin embargo, en particular por las celebraciones de las fiestas de fin de año en los meses de diciembre y enero nos vemos mayormente perturbados por fuertes ruidos debidos a la gran cantidad de bombas de estruendo, petardos y demás elementos de cohertería responsables de afectar negativamente a las personas, sobre todo a los bebés y ancianos y a los animales domésticos que son muy vulnerables a los fuertes ruidos, esto sin considerar la peligrosidad de su uso indebido.

En la actualidad la normativa que regula la comercialización y uso de pirotecnia en nuestra provincia es absolutamente insuficiente, porque se queda a mitad de camino dado que permite el uso de la pirotecnia sin contemplar el daño que pueden generar algunos de estos artefactos para la integridad física de la población y el impacto ambiental negativo que sobre animales domésticos y silvestres producen las explosiones o estallidos propios de la denominada pirotecnia en general y sin tener en cuenta que no existen en el mercado elementos de protección y prevención aptos para prevenir y mitigar explosiones en caso de producirse.

El fundador de la Asociación Argentina de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica Alberto Chinski manifestó que: "El problema de la pirotecnia es que la mayoría de las personas, sobre todo los chicos, no toman la distancia prudente, la hacen estallar en espacios cerrados —cuando no dentro de una botella o una lata— y muchas veces los cohetes no se elevan la distancia que deben subir. "La intensidad de la explosión puede producirles una conmoción en el oído interno que provoca un zumbido, vértigo, la perforación del tímpano y lo más grave, una pérdida muy importante de audición de los agudos".

El pediatra Miguel Alemán del Hospital de Clínicas, indicó "Además del problema auditivo los chicos pueden sufrir lesiones oculares, quemaduras o la pérdida de un miembro. No deberían jugar con fuegos artificiales nunca".

Investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) informaron que: "Las partículas metálicas del humo que emiten los fuegos artificiales suponen un riesgo para la salud, sobre todo para personas asmáticas".

Para todos los profesionales médicos consultados se debería prohibir el uso de la pirotecnia por parte de los particulares debido a los graves accidentes que cada año se registran como consecuencia de su uso, sobre todo entre los niños.

Los profesionales de Defensa Civil de distintas localidades, que tienen a cargo controlar esta actividad, ante la consulta manifiestan unánimemente que los elementos de pirotecnia son productos riesgosos para la salud y el ambiente.

Coincidimos con las asociaciones protectoras de animales cuando sostienen que debe prohibirse el uso de la pirotecnia entre tantos otros motivos porque los incendios de pastizales y el estrés que los estruendos ocasionan en los animales representan el principal impacto negativo de la pirotecnia en el medio ambiente.

Contamos como antecedentes con el hecho de que en muchos municipios de nuestro país, incluso en algunas provincias, se ha prohibido la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta de todo elemento de pirotecnia y cohertería, sea éste o no de venta libre y/o fabricación autorizada, podemos nombrar a:

- 1- Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, por Decreto rige la prohibición desde 2012.
- 2- Coronda, provincia de Santa Fe, por Ordenanza aprobada de manera unánime por el Concejo Deliberante rige desde enero del año 2012.
- 3- La Falda, provincia de Córdoba, por Ordenanza del Concejo Deliberante aprobada en forma unánime se declaró a La Falda "Territorio libre de pirotecnia".
- 4- Desde 1950 en Bahía Blanca rige por Ordenanza.

5- Desde 1989 rige por Ordenanza en Puerto General san Martín, provincia de Santa Fe.

6- Desde 1992 rige en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén.

7- Desde 1995 rige en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, por Ordenanza.

8- Desde 1997 rige por Ordenanza en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

9- Desde 1996 rige en toda la provincia de Tierra del Fuego, sancionada como ley.

10- Se encuentra en estudio sancionar vía ley provincial en la provincia de Neuquén.

11- En provincia de Buenos Aires ya tuvo media sanción.

12- En la Legislatura porteña está en estudio el tema.

13- Recientemente Alta Gracia en la provincia de Córdoba también ha adoptado medidas tendientes al no uso de pirotecnia.

Año a año aumentan los heridos por pirotecnia. No podemos despreciar, además, los daños reales que provocan en bebés y niños pequeños, en las personas con retrasos madurativos, en las personas con discapacidades que no pueden procesar los estímulos y desarrollan ataques de pánico o entran en convulsión, también en las personas que fueron víctimas de delitos con armas de fuego, o en los veteranos de Malvinas, que ante la repetición de detonaciones vuelven a revivir las experiencias traumáticas que pasaron en la guerra.

Los animales domésticos sufren ataques de ansiedad, o se escapan y son atropellados o provocan accidentes de tránsito. En algunos casos, presos del pánico, desarrollan actitudes agresivas reflejo del temor. Incluso hay aves que caen muertas.

Por otro lado, no podemos dejar de tener en cuenta el costo económico que estas situaciones traen aparejado, ya que muchas personas deben trasladarse a ciudades donde existe la prohibición de uso de pirotecnia, la destrucción de viviendas por caída de restos de artefactos pirotécnicos, el costo que representa para bomberos tener que acudir a los siniestros, los gastos médicos para las personas afectadas, los gastos veterinarios en el caso de dueños de animales, los numerosos costos económicos para las protectoras de animales (atención de animales heridos, grupos de búsqueda de animales), y el daño incuantificable al medio ambiente, con la contaminación de vías de agua con los metales pesados y residuos que contienen los artefactos pirotécnicos.

Ahora bien, con todos estos datos, análisis, manifestaciones, antecedentes y siendo el costo tan alto contrapuesto con la diversión de algunos y el beneficio económico de unos pocos, sobran los fundamentos que nos avalan al momento de presentar este proyecto, en pos del bienestar general de la comunidad, de nuestro medio ambiente y de nuestros animales, y descontamos por tanto que nuestros pares nos acompañarán en la aprobación del presente proyecto de Ley.

Leg. Roberto Birri

**PROYECTO DE LEY
12428/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

Artículo 1º.- MODIFÍQUESE el artículo 15 de la Ley Nº 8431, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 15.- Asistencia Letrada - Asistencia jurídica gratuita - Asesor Letrado Contravencional. La asistencia letrada del presunto contraventor será obligatoria desde el comienzo del proceso y dicha circunstancia deberá serle informada en la primera oportunidad procesal. La Autoridad de Aplicación, dentro de las veinticuatro horas de iniciadas las actuaciones, ofrecerá al acusado la posibilidad de designar un defensor particular a su elección, y si no lo hiciere dentro de dicho plazo, deberá designarle de oficio al Asesor Letrado Contravencional, el cual deberá ser efectivamente notificado de inmediato a los fines de la aceptación del cargo. En supuestos de resultar necesaria la asistencia jurídica gratuita, el Asesor Letrado Contravencional o cualquiera de sus Auxiliares letrados deberán tomar contacto personal y directo en el mismo lugar de detención con su asistido dentro de las veinticuatro horas de aceptado el cargo, debiendo las autoridades del establecimiento arbitrar los medios necesarios a tal fin ."

Artículo 2º.- MODIFÍQUESE el artículo 19 de la Ley Nº 8.431, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 19.- Disminución de la pena por confesión. Cuando el contraventor reconociere, "con la debida asistencia de su defensor", en la primera declaración formal que preste, su responsabilidad en la contravención que se le impute, la sanción correspondiente podrá reducirse a la mitad. En estos casos, la autoridad interviniente dictará resolución sin más trámite."

Artículo 3º.- MODIFÍQUESE el artículo 115 de la Ley Nº 8.431, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 115.- Formas de actuación. Las autoridades administrativas actuarán de oficio o por denuncia. Recogerán las pruebas y recibirán declaración de los presuntos infractores, "con la debida asistencia letrada".

En los casos en que las autoridades administrativas necesitaran allanar moradas, negocios o locales, interceptar correspondencia o comunicaciones, a los efectos de constatar las infracciones a la presente Ley, o proceder al secuestro de elementos probatorios referidos a aquéllas, solicitarán la correspondiente orden de los Jueces mencionados en el artículo 114 inciso 3).

Excepcionalmente, por razones de urgencia y distancia que la justifiquen, las órdenes podrán ser requeridas a los Jueces de Paz Lego con competencia en los lugares donde no hubiese Jueces Letrados.

De todo lo actuado dejarán constancia sumaria en acta firmada por el funcionario a cargo del expediente y por el secretario de actuación.”

Artículo 4º.- MODIFÍQUESE el artículo 117 de la Ley Nº 8431, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 117.- Resolución. Notificación. Dentro del plazo de tres (3) días de iniciada la actuación sumarial, las autoridades administrativas dictarán resolución por escrito y notificarán de inmediato al imputado “y su defensor”, con excepción de las infracciones previstas en el Título III, del Libro II, -Caza y Pesca- de la presente Ley, en que el plazo se ampliará a cuarenta y cinco (45) días. En todos los casos, en el acto de la notificación, se hará saber al imputado que le asiste el derecho de ocurrir ante el Juez competente, de lo que se dejará constancia.”

Artículo 5º.- MODIFÍQUESE el artículo 118 de la Ley Nº 8.431, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 118.- Aceptación de condena. Solicitud de apertura de la instancia judicial. Se tendrán por aceptadas las condenas si los interesados “o sus defensores” no las rechazaren dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su notificación personal, o si ulteriormente y sin causa justificada, no comparecieren a la citación para el juicio o durante su trámite.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el imputado permaneciere detenido, cualquier persona podrá solicitar por escrito la apertura de la instancia judicial. En tal caso, el Juez competente, sin demora, procederá a hacer comparecer al imputado, y si éste ratificare la solicitud, ordenará el inmediato envío del sumario.”

Artículo 6º.- MODIFÍQUESE el artículo 120 de la Ley Nº 8431, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 120.- Instancia judicial. Si el imputado “o su defensor” no aceptaren la condena de la autoridad administrativa, deberá elevar de inmediato el sumario con los detenidos que hubiere, al Juez competente, sin hacerse aquélla efectiva. Dentro del plazo de veinte (20) días a contar desde la recepción del sumario, en caso de hallarse en libertad, o inmediatamente, si estuviera detenido, el Juez citará “al imputado y a su defensor” para fijar la audiencia del juicio. El imputado podrá presentar luego de la citación a juicio y hasta el comienzo de la audiencia, las pruebas que hagan a su defensa.”

Artículo 7º.- MODIFÍQUESE el artículo 122 de la Ley Nº 8.431, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 122.- Audiencia. Resolución. Actas. Abierta la audiencia el Juez intimará el hecho de acuerdo a las constancias del sumario y, “en todos los casos con la debida asistencia letrada”, recibirá declaración al imputado, quien podrá abstenerse de hacerlo. Acto seguido, se examinarán los elementos de prueba. Excepcionalmente el Juez, de oficio o a pedido del imputado, podrá ordenar nuevas pruebas indispensables, a cuyo fin está facultado para suspender la audiencia por un término no mayor de seis (6) días.

Concluida la recepción de la prueba, el Juez concederá la palabra al defensor y en último término preguntará al imputado si tiene algo que manifestar.

A continuación, el Juez dictará, en forma sumaria y oral, resolución absolutoria o condenatoria. En la instancia jurisdiccional las autoridades comprendidas en el inciso 3) del artículo 114 juzgarán sin concentrarse limitadas por lo valorado y dispuesto en la resolución administrativa, pero no podrán imponer sanciones más gravosas.

El secretario labrará un acta sumaria de lo actuado, que será firmado por el Juez, el imputado –si supiere y quisiere hacerlo, dejándose constancia en caso contrario-, el defensor y el actuario.”

Artículo 8º.- MODIFÍQUESE el artículo 123 de la Ley Nº 8.431, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 123.- La detención preventiva podrá ordenarse fundadamente, cuando la infracción atribuida previere pena privativa de libertad, en los siguientes casos:

1) “Si de las constancias de la causa surgieran elementos que hicieren presumir que el supuesto infractor no se someterá voluntariamente al proceso”;

2) Cuando el supuesto infractor no tuviere domicilio conocido dentro o fuera de la Provincia.

“Inmediatamente ordenada la detención preventiva, la misma deberá ser notificada al imputado y a su defensor, quienes podrán oponerse a la misma dentro del plazo de veinticuatro (24) horas desde su notificación. Interpuesta la oposición, se elevarán de inmediato las actuaciones ante el Juez de Faltas quien, en igual término, deberá resolver fundadamente el planteo revocando o confirmando la medida impugnada”.

En el caso previsto en el artículo 98, el presunto contraventor podrá ser detenido al sólo efecto de su identificación por un término máximo de veinticuatro (24) horas. Si hubiere mérito para la imputación, será citado para que en el término perentorio de tres (3) días concurra a prestar declaración ante la Autoridad de Aplicación.

La libertad, aún previo a la sentencia, podrá ser dispuesta por las autoridades establecidas en el inciso 1) del artículo 114 o, en ausencia de ellas, por el funcionario policial a cargo de la dependencia.”

Artículo 9º.- DE forma.

Leg. Juan Cid

FUNDAMENTOS
PROYECTO DE REFORMA PROCESAL CÓDIGO DE FALTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

(INCORPORACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA OBLIGATORIA – GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO PROCESO Y DE LA DEFENSA EN JUICIO)

SITUACIÓN ACTUAL

La normativa procesal contravencional vigente en Córdoba en la actualidad evidencia serios inconvenientes desde el punto de vista procesal, toda vez que, sin perjuicio de las distintas opiniones doctrinarias que puedan existir sobre la naturaleza jurídica de las contravenciones y su diferencia respecto a los delitos, la realidad demuestra que, tanto la pena de arresto como la detención preventiva constituyen medidas privativas de la libertad ambulatoria cuya implementación práctica no dista demasiado de la aplicación de condenas o medidas de coerción penales.

En efecto, en numerosos supuestos se ha dado que el tiempo de encierro efectivamente cumplido por un contraventor ha resultado equivalente o incluso superior a la detención dispuesta en causas penales por delitos menores. Es entonces que debe tenerse en cuenta, desde una perspectiva social, que el encierro –sea contravencional o penal- siempre trae aparejado el mismo efecto disvalioso y estigmatizante.

Asimismo, también es sabido que el Código de Faltas, independientemente del contenido específico de sus normas, como catálogo sancionatorio de ciertas conductas, resulta una herramienta esencial para permitir una convivencia respetuosa entre ciudadanos.

Si bien surge claro que muchas figuras contempladas por dicho plexo normativo exhiben una técnica legislativa deficiente, e incluso en algunos casos hasta reñida con los principios de nuestra carta magna (por ejemplo, normas que reflejan un derecho penal de autor y no de acto), lo cierto es que tales deficiencias pueden ser subsanadas, al menos provisoriamente y hasta su modificación legislativa, por una efectiva intervención defensiva en cada sumario contravencional.

Es así que, desde la experiencia recogida en las Asesorías Letradas Penales de la Provincia, y fundamentalmente del trabajo de investigación realizado por los Dres. Juan Manuel Fernández López –adscripto a la cátedra de Procesal Penal de la Facultad de Derecho y Cs. Ss. de la UNC, y Lucas Benavidez Vargas –adscripto a las cátedras de Derecho Penal I y II de la Facultad de Derecho y Cs. Ss. UNC. se ha podido corroborar que, muchas de las personas que alguna vez han sido imputadas en causas penales, independientemente de haber sido sobreseídas posteriormente o bien condenadas, han sido luego objeto de hostigamiento policial a través de la aplicación abusiva del aparato represivo contravencional. Tal circunstancia reviste, además, una gravedad institucional extraordinaria al ser la policía administrativa simultáneamente autoridad de aplicación y juez de primera instancia para estos casos.

Todo ello, a su vez, se da en un ámbito donde las personas afectadas habitualmente padecen una situación de vulnerabilidad cultural, educativa y económica, lo cual (según el espíritu que inspira las 100 REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD), les impide conocer el verdadero alcance de sus derechos y ejercerlos en consecuencia. La única manera, a nuestro criterio, de subsanar tal desequilibrio entre Estado e individuo es asegurando el respeto por el derecho a una tutela judicial efectiva, a través de la implementación de una defensa eficaz y de calidad.

A esta particularidad del procedimiento contravencional, se suma una previsión legal del mismo que impide un efectivo control de su aplicación, cual es el art. 15 de la actual redacción del Código de Faltas provincial que establece, respecto a la Asistencia letrada del presunto contraventor, que la misma "... no será necesaria en ninguna etapa del proceso. Sin embargo, aquél podrá proponer defensor de confianza o pedir que se le asigne uno de oficio, derechos que le deberán ser debidamente informados al iniciarse el procedimiento, y en tales casos la Autoridad de Aplicación deberá designarlo, bajo pena de nulidad. Podrá ordenarse que el imputado sea defendido por el defensor de oficio cuando lo estime necesario para la celeridad y la defensa en juicio...".

De la lectura de la precedente previsión legal surge claramente una flagrante inobservancia de la garantía del debido proceso prevista por la C.N. y que indudablemente debe regir en toda actuación judicial, pero prioritariamente en procesos como el contravencional que materializan el poder punitivo del Estado. En consecuencia, y salvaguardando el principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio, es que estimamos que, la asistencia jurídica en el fuero de Faltas provincial no debe ser optativa sino que debe ser obligatoria, tal como sucede en la justicia penal común. Por ende, proponemos que una reforma legislativa prevea que, apenas iniciado un sumario contravencional, se le ofrezca al acusado la posibilidad de designar un defensor particular a su elección, o bien, de designar un asesor letrado especializado, sea voluntariamente o de oficio.

Estimamos adecuado que esta asistencia jurídica oficial recaiga en cabeza de un funcionario judicial cuya actuación se circunscriba exclusivamente al fuero de faltas, proponiéndose a tal efecto la creación de una Asesoría Letrada Contravencional, con una estructura dinámica y poco costosa, encabezada por un Asesor Letrado designado por concurso del Consejo de la Magistratura para selección de Asesores Letrados Penales. Además, resultaría necesario, para una mayor eficiencia en el ejercicio de la función, la asistencia de al menos tres auxiliares de la defensa pública letrados, los cuales colaborarán con el Asesor Letrado Contravencional en todas las funciones y tareas previstas por los acuerdos ya dictados por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia que regulan su intervención.

De tal modo, se aspira a poder implementar, a través de mínimas modificaciones al Código de Faltas, un procedimiento que garantice el contacto de cualquier detenido por supuesta comisión de contravención con su defensor en el término máximo de un día, a través de la visita cotidiana de los miembros de la Asesoría Letrada a los lugares de detención. Este contacto inmediato del contraventor con su abogado le brindará una contención y un asesoramiento jurídico que le permitirán al primero ejercer plenamente sus derechos y gozar de las garantías que, tanto la Constitución Nacional como las leyes, le reconocen. La implementación de dicha

modalidad defensiva constituye un paso más en el marcado proceso de acercamiento a la sociedad que el Poder Judicial de la Provincia lleva adelante.

A fines de alcanzar el objetivo precedentemente postulado, proponemos que el mentado artículo 15 del actual Código de Faltas sea reformulado con el siguiente contenido:

“Asistencia Letrada – Asistencia jurídica gratuita – Asesor Letrado Contravencional - Artículo 15.-

La asistencia letrada del presunto contraventor será obligatoria desde el comienzo del proceso y dicha circunstancia deberá serle informada en la primera oportunidad procesal. La Autoridad de Aplicación, dentro de las veinticuatro horas de iniciadas las actuaciones, ofrecerá al acusado la posibilidad de designar un defensor particular a su elección, y si no lo hiciere dentro de dicho plazo, deberá designarle de oficio al Asesor Letrado Contravencional, el cual deberá ser efectivamente notificado de inmediato a los fines de la aceptación del cargo. En supuestos de resultar necesaria la asistencia jurídica gratuita, el Asesor Letrado Contravencional o cualquiera de sus Auxiliares letrados deberán tomar contacto personal y directo en el mismo lugar de detención con su asistido dentro de las veinticuatro horas de aceptado el cargo, debiendo las autoridades del establecimiento arbitrar los medios necesarios a tal fin.”

En cuanto a la posibilidad de disminución de la pena a instancia de la confesión efectuada por el supuesto contraventor, consideramos que tal reconocimiento sólo será válido cuando el acusado contare con asistencia letrada. En su redacción actual, el artículo 19 permite una inaceptable posibilidad de autoincriminación sin el mínimo e indispensable asesoramiento técnico de un defensor. Por tal motivo, proponemos remplazar la actual redacción del mencionado artículo por la siguiente:

“Disminución de la pena por confesión. – Artículo 19.- Cuando el contraventor reconociere, “con la debida asistencia de su defensor”, en la primera declaración formal que preste, su responsabilidad en la contravención que se le impute, la sanción correspondiente podrá reducirse a la mitad. En estos casos, la autoridad interviniente dictará resolución sin más trámite.”

Respecto a numerosas normas tales como los artículos 115, 117, 120 y 122, sugerimos que, en virtud de la modificación postulada para el artículo 15, éstos también sean reformados, sólo en cuanto resulte necesario para que los mismos contemplen expresamente la participación de la defensa del imputado durante todo el proceso. De tal modo, quedarían redactados bajo la siguiente fórmula:

“Formas de actuación – Artículo 115.- Las autoridades administrativas actuarán de oficio o por denuncia. Recogerán las pruebas y recibirán declaración de los presuntos infractores, “con la debida asistencia letrada.”

En los casos en que las autoridades administrativas necesitaran allanar moradas, negocios o locales, interceptar correspondencia o comunicaciones, a los efectos de constatar las infracciones a la presente Ley, o proceder al secuestro de elementos probatorios referidos a aquéllas, solicitarán la correspondiente orden de los Jueces mencionados en el artículo 114 inciso 3).

Excepcionalmente, por razones de urgencia y distancia que la justifiquen, las órdenes podrán ser requeridas a los Jueces de Paz Lego con competencia en los lugares donde no hubiese Jueces Letrados.

De todo lo actuado dejarán constancia sumaria en acta firmada por el funcionario a cargo del expediente y por el secretario de actuación.”

“Resolución. Notificación. – Artículo 117.- Dentro del plazo de tres (3) días de iniciada la actuación sumarial, las autoridades administrativas dictarán resolución por escrito y notificarán de inmediato al imputado “y su defensor”, con excepción de las infracciones previstas en el Título III, del Libro II, -Caza y Pesca- de la presente Ley, en que el plazo se ampliará a cuarenta y cinco (45) días. En todos los casos, en el acto de la notificación, se hará saber al imputado que le asiste el derecho de ocurrir ante el Juez competente, de lo que se dejará constancia.”

“Aceptación de condena. Solicitud de apertura de la instancia judicial – Artículo 118.- Se tendrán por aceptadas las condenas si los interesados “o sus defensores” no las rechazaren dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su notificación personal, o si ulteriormente y sin causa justificada, no comparecieren a la citación para el juicio o durante su trámite.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si el imputado permaneciere detenido, cualquier persona podrá solicitar por escrito la apertura de la instancia judicial. En tal caso, el Juez competente, sin demora, procederá a hacer comparecer al imputado, y si éste ratificare la solicitud, ordenará el inmediato envío del sumario.”

“Instancia judicial – Artículo 120.- Si el imputado “o su defensor” no aceptaren la condena de la autoridad administrativa, deberá elevar de inmediato el sumario con los detenidos que hubiere, al Juez competente, sin hacerse aquélla efectiva. Dentro del plazo de veinte (20) días a contar desde la recepción del sumario, en caso de hallarse en libertad, o inmediatamente, si estuviera detenido, el Juez citará “al imputado y a su defensor” para fijar la audiencia del juicio. El imputado podrá presentar luego de la citación a juicio y hasta el comienzo de la audiencia, las pruebas que hagan a su defensa.”

“Audiencia. Resolución. Actas. – Artículo 122.- Abierta la audiencia el Juez intimará el hecho de acuerdo a las constancias del sumario y, “en todos los casos con la debida asistencia letrada”, recibirá declaración al imputado, quien podrá abstenerse de hacerlo. Acto seguido, se examinarán los elementos de prueba. Excepcionalmente el Juez, de oficio o a pedido del imputado, podrá ordenar nuevas pruebas indispensables, a cuyo fin está facultado para suspender la audiencia por un término no mayor de seis (6) días.

Concluida la recepción de la prueba, el Juez concederá la palabra al defensor y en último término preguntará al imputado si tiene algo que manifestar.

A continuación, el Juez dictará, en forma sumaria y oral, resolución absolutoria o condenatoria. En la instancia jurisdiccional las autoridades comprendidas en el inciso 3) del artículo 114 juzgarán sin concentrarse limitadas por lo valorado y dispuesto en la resolución administrativa, pero no podrán imponer sanciones más gravosas.

El secretario labrará un acta sumaria de lo actuado, que será firmado por el Juez, el imputado –si supiere y quisiere hacerlo, dejándose constancia en caso contrario-, el defensor y el actuario.”

En cuanto a la figura de la detención preventiva, dada su naturaleza de medida cautelar, para no vulnerar el principio de inocencia, sólo debe perseguir el aseguramiento de los fines del proceso, no pudiendo erigirse en un anticipo de pena, tal como la consagra la redacción actual del artículo 123. Es por ello que consideramos que el dictado de una medida de tal gravedad no puede sostenerse sólo en la existencia de un determinado cúmulo probatorio, sino que debe atender a la existencia de una verdadera presunción de peligrosidad procesal.

Tampoco se puede evaluar su procedencia en base a una fórmula genérica e imprecisa tal como la alusión “en razón del estado o la condición del presunto infractor”, por constituir la misma un fiel reflejo de una retrógrada técnica legislativa basada en el derecho penal de autor y no de acto.

Además, el carácter provisorio de la medida resulta insuficiente para relativizar el elevado efecto perjudicial que la errónea aplicación de la misma puede llegar a provocar sobre la persona de quien la padece, por lo cual la norma debiera no sólo prever sino también regular una vía impugnativa expeditiva para revertir cualquier resolución que indebidamente imponga el encierro cautelar del prevenido. Es por ello que a continuación se propone que el artículo 123 sea reformulado de la siguiente manera:

“CAPÍTULO SEGUNDO

De las medidas preventivas

Detención preventiva.

Artículo 123.- La detención preventiva podrá ordenarse fundadamente, cuando la infracción atribuida previere pena privativa de libertad, en los siguientes casos:

1) “Si de las constancias de la causa surgieran elementos que hicieren presumir que el supuesto infractor no se someterá voluntariamente al proceso”;

2) Cuando el supuesto infractor no tuviere domicilio conocido dentro o fuera de la Provincia .

“Inmediatamente ordenada la detención preventiva, la misma deberá ser notificada al imputado y a su defensor, quienes podrán oponerse a la misma dentro del plazo de veinticuatro (24) horas desde su notificación. Interpuesta la oposición, se elevarán de inmediato las actuaciones ante el Juez de Faltas quien, en igual término, deberá resolver fundadamente el planteo revocando o confirmando la medida impugnada”.

En el caso previsto en el artículo 98, el presunto contraventor podrá ser detenido al sólo efecto de su identificación por un término máximo de veinticuatro (24) horas. Si hubiere mérito para la imputación, será citado para que en el término perentorio de tres (3) días concurra a prestar declaración ante la Autoridad de Aplicación.

La libertad, aún previo a la sentencia, podrá ser dispuesta por las autoridades establecidas en el inciso 1) del artículo 114 o, en ausencia de ellas, por el funcionario policial a cargo de la dependencia.”

A modo de conclusión, cabe destacar que las reformas precedentemente expuestas obedecen a un criterio práctico de protección real de los derechos humanos, toda vez que, el objetivo de una reforma sustancial del Código de Faltas resultaría difícil de alcanzar, por requerir un consenso ideológico, político y social de mayor profundidad. Por el contrario, consideramos que resulta irrefutable la existencia de un consenso generalizado sobre la necesidad de irradiar los beneficios de las garantías constitucionales hacia todos los ámbitos donde se desarrollan los procesos, sean éstos judiciales o administrativos. Precisamente, las más repugnantes violaciones a los derechos humanos que existieron en nuestra historia como nación surgieron como consecuencia de un desapego a las garantías procesales (debido proceso, defensa en juicio, etc.) y no al menoscabo de garantías penales (principio de proporcionalidad, máxima taxatividad y mínima suficiencia, lesividad, reserva, etc.). A la sazón, resulta menos degradante para la dignidad humana acusar a una persona de una conducta ilegal pero carente de injusto, que impedirle que pueda defenderse debidamente de dicha acusación.

Leg. Juan Cid

**PROYECTO DE LEY
13713/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

**PROHIBICIÓN DEL USO DE PIROTECNIA, Y/O DE OTROS
ELEMENTOS SIMILARES**

ARTÍCULO 1º.- Prohíbase en el ámbito del territorio de la Provincia de Córdoba, la Fabricación, Tenencia, Depósito y Comercialización al público, a título gratuito u oneroso, de elementos de pirotecnia, sean éstos o no de venta libre y/o autorizados de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones del RENAR Nº 77/05 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2º.- Se entiende para la presente Ley como materiales pirotécnicos, artificios pirotécnicos y materias y artificios a una combinación de estos elementos destinados a producir explosión por propulsión, explosión por fricción, explosión por fricción por choque, explosión por combustión con efectos visibles, audibles y/o mecánicos.

ARTÍCULO 3º.- Queda autorizado expresamente por la presente Ley el uso en espectáculos públicos de fuegos de artificios destinados al entretenimiento de la comunidad o conmemoración de

eventos especiales, debiendo contar el mismo con la autorización, previa a la realización, de la Autoridad de Aplicación y/o aquellas que esta determine, la cual extenderá una "Habilitación Temporal", por el o los días del espectáculo y el lugar de emplazamiento en que se lleve a cabo el mismo.

ARTÍCULO 4º.- Queda autorizado expresamente por la presente Ley, la fabricación, tenencia, depósito y comercialización de productos de Fuegos Artificiales, de acuerdo a lo establecido por la disposición del RENAR Nº 77/05 y sus modificatorias, que se utilizan en espectáculos referidos en el artículo anterior de la presente norma.

ARTÍCULO 5º.- Se autoriza expresamente por la presente Ley, la fabricación, tenencia, depósito y comercialización de productos de pirotecnia denominados: "De Uso Práctico", detallados en el inciso b) del artículo 2º de la Disposición RENAR Nº 077/05 y sus modificatorias y los comprendidos en la Disposición Nº 265/05 del mismo Organismo.

ARTÍCULO 6º.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba y/o el que en el futuro lo remplace.

ARTÍCULO 7º.- Para los casos de incumplimiento de la presente Ley, en forma total o parcial, la Autoridad de Aplicación por vía de reglamentación, establecerá el régimen de sanciones.

ARTÍCULO 8º.- El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad, dará amplia difusión a la presente Ley, remitiendo copia de la misma a la Policía Provincial, Defensa Civil de la Provincia, Municipios y Comunas, Bomberos Voluntarios y Federaciones Regionales de Bomberos Voluntarios.

ARTÍCULO 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial, reglamentará la presente Ley dentro de los treinta días de promulgada la misma.

ARTÍCULO 10.- De forma.

Leg. Alicia Narducci y. Marcos Sestopal

FUNDAMENTOS

Los denominados artículos pirotécnicos constituyen un riesgo para la sociedad y el medio ambiente, ya que estos, son una liberación brusca de una gran cantidad de energía, encerrados en un volumen, los cuales producen un incremento violento y rápido de la presión, con desprendimientos de calor, luz y gases además de un estruendo y rotura también violenta del recipiente contenedor. Cuando hablamos de una explosión estamos haciendo referencia a un principio de la física y la química que libera una cierta cantidad de calor, de luz y de gases, estos van acompañados de un estruendo y de la rotura violenta del recipiente que contiene dichos elementos para que la misma se lleve a cabo. De esta definición se desprenden dos puntos a los cuales debemos referir taxativamente como es: la liberación de energía dañina para el ser humano por el fuego que dicha explosión produce y tóxica por la combustión gaseosa, que es inhalada inexorablemente; También altamente peligrosa para el medio ambiente por las mismas causantes; Y por la liberación de un alto índice de sonoridad, que afecta a todas las especies vivientes, en la cual debemos incluir a la par a los animales, este índice medido en decibeles, que ya ha causado lesiones graves de la audición y el consiguiente sufrimiento, harto elocuente al ver el comportamiento de las especies animales luego del estruendo. Nuestra provincia de Córdoba no es el único lugar de la Argentina donde las actividades festivas son resaltadas con explosiones de esta naturaleza y es menester hacer un llamado para que otras legislaturas tomen medidas similares para resguardar la integridad física de los seres vivientes y el cuidado del medio ambiente. Hospitales públicos y privados han visto pasar por sus salas de emergencias a cientos de personas con lesiones diferentes causadas por estas explosiones, con la consiguiente pérdida de alguna parte del cuerpo como vista u oído y en numerosos casos en extremidades, y con quemaduras de alto riesgo. Los animales domésticos no han escapado a este inconveniente como tampoco los de vida salvaje, que no solamente sufren por los ruidos sino que a causa de incendios producidos por estas prácticas, han perdido su hábitat natural a consecuencia de los mismos, produciéndose como todos sabemos un daño irreparable al medio ambiente y a la vida. Al prohibir la fabricación que no se adapta a las normativas y la tenencia, y por ende la indebida comercialización de estos productos bajo cualesquiera formas, estamos promoviendo a la seguridad en general, ya que hoy en día, y por los avances, las técnicas para la fabricación de estos elementos constituyen un alto riesgo para cuando estos se manipulan, ya que además los componentes cada vez son más potentes y ello torna a un grado de peligrosidad casi extremo su uso. Las explosiones causadas por propulsión, fricción, choque o combustión, han dejado de ser inofensivas, los también llamados fuegos artificiales y debido a su magnitud hoy recorren, después de la primera explosión, muchos metros para volver a estallar en el aire y luego caer sobre algún tipo de superficie y sin tener control debido de la distancia, y en muchas oportunidades son causales de incendios, esto se sintetiza en alto riesgo de incendio en zonas densamente pobladas como también de campo abierto. En capítulo aparte debemos considerar que existen fiestas importantes que son ornamentadas por este tipo de prácticas, ello también reviste un alto grado de peligrosidad si no se toman los recaudos necesarios, para ello, es necesario llevar a cabo una planificación experta, en manos de profesionales del medio que hayan sido reconocidos como prestadores de este servicio. La manipulación por parte de manos especializadas en el tema, harán coetáneamente cumplir las reglas, observando que los elementos a utilizar lleven la correspondiente autorización del Registro Nacional de Armas (RENAR) y lo establecido en la Disposición 77/05, y estos artefactos cumplan con todas normas vigentes. Es menester destacar que esta la ley autoriza a esos espectáculos en los cuales se usen fuegos de artificios y que estén exclusivamente destinados a entretenimientos de la comunidad y/o por conmemoración de eventos especiales, la utilización de elementos referidos en esta normativa deberán contar con la autorización previa de la autoridad de aplicación y de aquellas que esta determine, esta autorización llevará en forma expresa una habilitación temporal por el tiempo en que se realice dicho evento, y especificar el lugar en el cual se

habrá de emplazar dicho espectáculo. Estas normas facilitarán el trabajo de prevención de accidentes, tanto para la policía provincial como para bomberos y agentes de la Defensa Civil, conocer previamente el terreno donde se llevará a cabo un evento de esta naturaleza hace posible determinar con exactitud qué medidas ante riesgos generales habrán de tomarse. En cuanto a la Autoridad de aplicación de la presente normativa, se ha pensado en el órgano que tiene a cargo todo lo relacionado con la seguridad en nuestra provincia, por ello el Ministerio de Gobierno y Seguridad será el encargado de hacer cumplir la normativa o el Ministerio que a futuro pudiese corresponderle y/o reemplazare, haciendo hincapié fundamentalmente que las fuerzas públicas provinciales de seguridad están a cargo del mismo. La Autoridad de aplicación por vía reglamentaria abordará las sanciones y la graduación de cada pena tomando en cuenta siempre la magnitud de la misma y en todo caso la reincidencia. En otro orden, a través de esta ley perseguimos la concientización sobre el uso y la peligrosidad de elementos de alta potencia como también los de menor poder, ya que aun en estas circunstancias pueden causar lesiones. Tómese en cuenta que estamos además persiguiendo otra finalidad importante que es resguardar a la comunidad toda ante las distintas ofertas perniciosas del mercado marginal en lo que a pirotecnia se refiere, y por ello afirmamos que está terminantemente prohibido la fabricación, tenencia y la comercialización indebida de estos artículos. En fechas festivas, la comunidad se vuelca a la compra de cualesquiera tipos de estos productos sin revisar su peligrosidad por la potencia y sin revisar su procedencia, simplemente se mira el grado de lo atractivo que puedan ser y además del grado de sonoridad, tornándose en definitiva en cuasi-armas de suma peligrosidad. Paradójicamente las personas menos aptas son los mayores consumidores de estos artefactos para los cuales se requiere de habilidad, conocimiento y cuidado extremo ya que la piel, los ojos, los oídos y otros seres vivientes presentes son los principales implicados en accidentes y/o en directa e indirectamente perjudicados. Finalmente debemos aludir al desborde que se produce en la medicina de urgencia, esos centros hospitalarios que al día siguiente son noticias y sus pacientes se convierten en estadísticas año a año, de esta manera, el ser humano involuciona en vez de buscar un mejoramiento en sus vidas y en la vida misma del medio ambiente y de otros seres que componen la vida en el planeta. Si buscamos en otro tipo de estadística, habremos de visualizar también la policial en relación a los allanamientos y captura de productos indocumentados, que no cumplen con las exigencias mínimas de las reglamentaciones vigentes. Esta es nuestra oportunidad de prevenir a la población, esta es nuestra forma de valorar todo tipo de vida, esta es la vía para demostrar que estamos en el camino correcto para la preservación física. Esta es la gran oportunidad que todos nos debemos en el sentido de resguardar a las personas para que no sufran accidentes que pueden marcarla hasta el final de su vida y a la de quienes están a su lado. La pirotecnia es fatal cuando no es utilizada idóneamente y cuando se utiliza en gran escala y de gran potencia, prohibir este uso es dar un paso hacia adelante para el bien de nuestros semejantes y para bien de nuestra madre naturaleza. Por último queremos resaltar, que existen personas con problemas sensoriales y de motricidad, quienes por su dificultad no pueden requerir ayuda por sí mismos y en este aspecto estamos involucrando a los ancianos como también a todas aquellas personas con capacidades diferentes. Por todo lo que implica esta ley, es que solicitamos a nuestros pares acompañen con su voto positivo el presente proyecto para que quede establecido definitivamente como ley, para beneficio de la sociedad y mejoramiento de la calidad de vida y la defensa del medio ambiente.

Leg. Alicia Narducci y. Marcos Sestopal

**PROYECTO DE LEY
13996/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Incorpórese, como artículo 70 bis de la Ley 8431 –Código de Faltas de la Provincia de Córdoba-, el siguiente:

"ARTÍCULO 70 BIS.- Será sancionado con multa equivalente hasta cincuenta Unidades de Multa (50 UM), o arresto de hasta tres (3) días quien dejare dentro de un vehículo automotor de cualquier índole, a un niño de hasta ocho (8) años de edad, sin el cuidado de una persona de cuanto menos catorce (14) años de edad, en los siguientes supuestos:

1) Período superior a cinco (5) minutos cuando se tratara de menores de dos años de edad, y de diez (10) minutos cuando se tratara de menores de más de dos años de edad.

2) Condiciones externas que importen un riesgo para la salud y seguridad del niño, sin consideración del tiempo transcurrido. Entre estos supuestos se enumeran, a título enunciativo:

a) Estacionamiento del vehículo en lugares no autorizados;

b) Estacionamiento del vehículo en lugares autorizados, pero situados en una planta o nivel distinta a la que el responsable se ha dirigido;

c) Estacionamiento del vehículo en lugares autorizados, a una distancia superior a los veinte (20) metros si su responsable se encontrara en la misma planta o nivel que el automotor estacionado y no existiese muro o limitante alguno de la visión de este, sea parcial o total.

d) Estacionamiento del vehículo en lugares autorizados, sin consideración de distancia, si su responsable se encontrara en la misma planta o nivel que el automotor estacionado y existiese muro o limitante de la visión directa de este, sea parcial o total.

3) Con el motor del vehículo encendido, sin consideración del tiempo transcurrido.

ARTÍCULO 2º.- Incorpórese, como artículo 70 ter de la Ley 8431 –Código de Faltas de la Provincia de Córdoba-, el siguiente:

“ARTÍCULO 70 TER.-.- El oficial de seguridad que observare al niño solo o sin supervisión en las condiciones del artículo anterior, podrá tomar todas las medidas razonablemente necesarias para proteger la salud y la integridad corporal del niño.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Leg. Oscar González

FUNDAMENTOS

El Estado viene instrumentando, mediante diversas iniciativas aprobadas, medidas para reforzar la seguridad de niños y sus familias. No cabe duda de que ingresa dentro de la responsabilidad pública, la de proveer a los niños la protección, el debido cuidado, y las mejores oportunidades de vida que les permitan el máximo desarrollo de su potencial como individuos y como parte de un grupo familiar. No obstante, esa labor, constitucionalmente promovida, no puede ser ejercida sin una alianza tácita con padres tutores, o mayores responsables.

La realidad de la Provincia de Córdoba y de nuestro país requiere que recojamos la experiencia comparada, para atender situaciones que en ocasiones pueden ser imprevistas. Desde que apareció el primer vehículo, éstos se han convertido en algo más que un sistema de transporte. Los automotores han revolucionado la economía, la cultura, las relaciones humanas, los conceptos de distancia y de tiempo y la dimensión de la vida en sociedad. Lamentablemente, junto a estos aspectos positivos, el ritmo vertiginoso de las actividades humanas, y las gran cantidad de obligaciones que exigen a los adultos, han generado otros problemas, entre los que podemos mencionar las dificultades para lograr una convivencia sin accidentes en la vía pública, los permanentes siniestros de tráfico o tránsito, y numerosos dramas cotidianos que relacionan a vehículos con vidas. Entre estos comienza a destacarse un grupo de accidentes, que se verifica cuando niños sin experiencia, razón o criterio, son dejados solos dentro de los vehículos por padres o encargados que deben bajarse del vehículo y no prevén adecuadamente la posibilidad de riesgo o desastre.

Noticias recientes ponen de manifiesto la necesidad de establecer estrategias para asegurar que los padres encargados no abandonen a sus hijos dentro de los vehículos, lo que no sólo conforma una conducta irrazonable, sino que puede derivar en un grave peligro para la salud de los niños, ya que la temperatura de su cuerpo se puede elevar tres a cinco veces más rápidamente que la de un adulto, ocasionando lesiones permanentes e incluso la muerte.

Numerosos instrumentos internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, y nacionales como la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, nos señalan la necesidad de establecer cuidados especiales para los niños, debido a su falta de madurez física y mental. Vale recordar, que es un deber para los padres brindar una protección que implique una atención, un estado de alerta y de sobre aviso que aplique no sólo a la salud y seguridad sino también a la moral de sus hijos.

Por tanto, se procura tipificar la conducta de dejar a menores de edad desatendidos o sin cuidado de un responsable, dentro de automotores, aun cuando no sufran daño corporal, como mecanismo alternativo para disuadir tal acción.

Es por ello que se estima necesario establecer por virtud de la ley un mecanismo para que todo responsable permanente o transitorio de un menor transportado en un vehículo a motor, tome conciencia del peligro que puede acarrear dejar sin cuidado a aquél, aunque sea por escaso período de tiempo.

Finalmente, cualquier oficial de seguridad podrá tomar todas las medidas razonablemente necesarias, debido a que prima el interés preponderante de preservar la seguridad y la salud del menor.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.

Leg. Oscar González

PROYECTO DE LEY 13997/L/14 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el inciso i del artículo 40 (“Requisitos para circular”) de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004, el que queda redactado de la siguiente manera:

“INCISO I.- Que, tratándose de una motocicleta, ciclomotor o cuadriciclo a motor (en donde este vehículo esté autorizado a circular) sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados, y si aquellas no tuvieren parabrisas, su conductor use anteojos.”

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el inciso 2 del artículo 80 (“Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad”) de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004, el que queda redactado de la siguiente manera:

“INCISO 2.- El conductor y acompañante de motocicletas, ciclomotores y cuadriciclos a motor están obligados a utilizar el casco y demás elementos de protección.”

ARTÍCULO 3º.- Incorpórase como inciso 28 del artículo 84 (“Otras prohibiciones en la vía pública”) de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004, al siguiente:

“INCISO 28.- Circular conduciendo un cuadriciclo a motor por cualquier vía pública abierta o de acceso restringido –barrios cerrados, campings, etc.-, como así también por vías privadas conectadas a vías públicas o de acceso público –entradas a establecimientos hoteleros, balnearios, espacios recreativos, etc.-. Estos vehículos solamente podrán circular dentro de predios privados y, si estos están

destinados a explotación comercial relacionada a la recreación, turismo u otra, deberán ser informados a la Autoridad de Aplicación y podrán ser conducidos solamente por personas con licencia de conducir 'clase A' (artículo 16), debiendo llevar casco su conductor y ocupantes."

ARTÍCULO 4º.- Incorpórese a la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba TO 2007- el art. 67 bis, que queda redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 67 BIS.- Serán sancionados con multa equivalente hasta el importe de cien unidades de multa (100 UM) y secuestro del vehículo, los que condujeran cuadríciclos a motor por lugares no autorizados según el artículo 84 inciso 28 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias. La multa se incrementará hasta el importe de ciento cincuenta unidades de multa (150 UM) cuando el vehículo sea conducido por menores de 18 años.

Se aplicará la sanción de secuestro del vehículo y la multa prevista en el artículo 23 de la Ley Nº 9856 (Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo) si se verificaren los supuestos de hecho de dicha norma.

En caso de omisión de uso de cascos y de licencia habilitante previstos por el artículo 84 inciso 28 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias, se aplicarán las sanciones contempladas para dichas contravenciones cuando fueren cometidas con motocicletas."

ARTÍCULO 5º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los treinta (30) días contados desde la fecha de su publicación.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Leg. Oscar González

FUNDAMENTOS

La seguridad vial es fundamental en la formación y educación de los ciudadanos, para garantizar el respeto y preservación del derecho a la vida, derecho irrenunciable y personalísimo que reconoce y procura brindar protección a la condición primaria de todo derecho como es la vida.

Es por ello que el Estado ha definido como una prioridad y como una política de Estado la seguridad vial, teniendo el deber de proteger y preservar la vida en la vía pública mediante disposiciones legales que tengan como objetivo disminuir la ocurrencia de siniestros.

Existen controversias respecto a si los cuadríciclos son "vehículos" en el sentido estricto que la legislación de tránsito establece. Si bien a nivel nacional ni por las reglamentaciones de la Secretaría de Industria, ni por las que específicamente regulan la materia vial, estaríamos en condiciones de ratificar su inclusión en la categoría "vehículos", y en Córdoba, el artículo 5 de la ley 8560 los nombra especialmente. Por eso, y reconociendo que de hecho son empleados para trasladarse y desplazarse en la vía pública, cobra sentido disponer medidas específicas para su utilización.

Es en razón de la proliferación de los vehículos denominados cuadríciclos y la gran popularidad que han adquirido el último tiempo, que resulta necesario una expresa prohibición de su uso en la vía pública, debido al riesgo que implican para aquellos que lo conducen. Este tipo de vehículos -que aun sin estar contemplados como tales en las leyes nacionales que definen "vehículo" son susceptibles de causar daños y presuponen un riesgo similar y hasta más grave que el de cualquier otro automotor- se han hecho cada vez más visibles en las rutas y caminos de toda la Provincia de Córdoba y no sólo, como hasta hace poco tiempo en circuitos específicos para su uso o como vehículo de apoyo en labores agrícolas.

Técnicamente, se ha establecido que la mayoría de estos rodados fue diseñado para ser utilizado en superficies blandas (tierra o arena) y en zonas pedregosas, nunca en caminos asfaltados (rutas, autopistas o calles). Su uso generalmente es de tipo deportivo, lúdico, o rural. Su diseño no está preparado para circular en asfalto, utilizan gomas grandes, de baja presión y pierden estabilidad fácilmente al realizar maniobras de giro, ya que, al contrario de las motocicletas, se inclinan al lado contrario al de la curva pudiendo levantarse y volcar si la velocidad es excesiva. Incluso en Estados Unidos, su país de origen, tienen prohibido circular en asfalto.

El Estado Provincial ha articulado una serie de medidas tendientes a consolidar un sistema de control y ordenamiento vehicular, en vistas del crecimiento del parque automotor y el aumento de siniestros. Por ello, es conveniente para el adecuado control de los vehículos y la promoción de la seguridad vial a que se refiere este proyecto de ley, la prohibición de circular en la vía pública.

Asimismo, se prevé una sanción mayor en caso de que el vehículo sea conducido por menores de 18 años. Los accidentes de tránsito son la mayor causa de muertes y lesiones entre adolescentes. La conducción es una tarea complicada y exigente, que implica el control del vehículo, cumplimiento de las normativas vehiculares, observación del comportamiento de otros conductores e incluso tomar decisiones. Se ha comprobado que a los conductores que todavía no cuentan con la experiencia necesaria, les toma más tiempo reconocer situaciones de peligro al conducir. Es de esencial importancia la experiencia en la conducción, motivo por el cual se establece esta limitación a fin de disminuir situaciones de riesgo en tanto el conductor va adquiriendo mayor práctica y confianza.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.

Leg. Oscar González

**PROYECTO DE LEY
14201/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE**

LEY:

ARTÍCULO 1º.- Incorpórese el Art. 23 bis a la Ley Nº 8431 TO 2007 "Código de Faltas de la Provincia de Córdoba" el que queda redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 23 BIS.- En los casos previstos en el artículo 88 segundo párrafo de la presente Ley, esto es cuando el fuego se prendiere durante los períodos en que el Poder Ejecutivo Provincial haya declarado la emergencia ambiental por riesgo de incendio, el arresto podrá superar los sesenta (60) días estableciéndose un máximo de hasta ciento veinte (120) días.

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el Art. 88 de la Ley Nº 8431 TO 2007 "Código de Faltas de la Provincia de Córdoba" el que queda redactado de la siguiente manera:

Peligro de incendio

ARTÍCULO 88.- Serán sancionados con multa de hasta cincuenta Unidades de Multa (50 UM) o arresto de hasta cincuenta (50) días, los que sin causar incendios, prendieren fuego en predios urbanos o rurales, en los caminos y en zonas de esparcimiento -públicas o privadas-, sin observar las precauciones necesarias para evitar su propagación.

La sanción será de hasta ciento veinte (120) días de arresto, no redimible por multa, cuando el fuego se prendiere durante los períodos en que el Poder Ejecutivo Provincial haya declarado la emergencia ambiental por riesgo de incendio.

ARTÍCULO 3º.- Las disposiciones contenidas en el artículo 1º y 2º de esta Ley entrarán en vigencia al término de seis meses de la publicación de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Leg. Carolina Basualdo

FUNDAMENTOS

Los focos de incendios forestales que azotaron la provincia de Córdoba dejaron el terrible saldo de 25.000 hectáreas, dato escalofriante que nos ponen a reflexionar como sociedad. El fuego se extendió por diecisiete localidades de cinco departamentos cordobeses.

La prevención y el cuidado de nuestro sistema ambiental parte de nuestra responsabilidad. Sentirnos parte del medio en el cual vivimos; nuestras acciones son el reflejo de lo acontecido en nuestra Provincia.

En la actualidad existe un discurso político-criminal que pregona y acepta la modernización o expansión del Derecho penal como consecuencia de las nuevas formas de aparición de criminalidad, inevitable por la sociedad de riesgo en que vivimos. Una de las características del "moderno" Derecho penal, es precisamente la aparición desmedida de bienes jurídicos colectivos, que según dicen los críticos, dando forma artificial y adelantada de protección a los bienes jurídicos personales.

En doctrina se ha hecho la distinción, no tan pacífica, entre bienes jurídicos de naturaleza individual y colectiva. La base teórica debemos encontrarla a la luz del pensamiento filosófico, en tal sentido, la orientación individualista pregona que los valores de las obras y de la colectividad, están al servicio de los valores personales. En cambio, para la concepción supraindividualista, los valores colectivos supeditan cualquier otro valor, de manera que todos ellos sirven al Estado y al Derecho. La proliferación de los bienes colectivos en el campo jurídico es consecuencia del intervencionismo estatal, pues debe atender a un nivel macrosocial las nuevas necesidades y prestaciones que se convierte en condiciones para que los intereses individuales (salud, libertad, etc.) puedan tener vigencia real y efectiva.

En los delitos ambientales el bien jurídico protegido es, en líneas generales, la colectividad, con lo cual se está en conexión con la noción de interés difuso. Es decir todos somos titulares de la acción para impedir la lesión o para solicitar la reparación del daño si la lesión ya se llevo a cabo.

Los bienes colectivos, a su vez, son autónomos respecto de los cuales es necesario precisar un contenido material propio, esto no implica, sin embargo, un divorcio absoluto con los bienes individuales ya que ambos son realidades normativas. Dicho planteamiento no pretende una injustificada expansión del Derecho penal que iría contra los principios de mínima intervención penal y el programa despenizador que debe reinar en toda política criminal. No obstante, no hay que desconocer que la titularidad de los bienes jurídicos colectivos está al servicio de todas las personas, son pues verdaderas realidades existentes en el funcionamiento del sistema social, que posee sustantividad y contenido material en la descripción del injusto respecto a los bienes jurídicos personales.

En nuestro país, el constituyente reformador del año 94, le imprimió importantes modificaciones a los contenidos dogmáticos de nuestra Ley Fundamental. Estas consistieron en la incorporación de un segundo capítulo a la primera parte de la Constitución, titulado "Nuevos Derechos y Garantías" (arts. 36 al 43), como así también en la adición de nuevos incisos al artículo 75 relativos a las atribuciones del Congreso, entre los que queremos destacar: el régimen de los tratados internacionales (incs. 22 y 24) y la denominada "nueva cláusula del progreso" del inc. 19, entre otros). De este modo se ha operado, ante todo, un serio cambio en el "techo ideológico" de nuestra Carta Magna, al que se le han agregado los principales componentes que caracterizan al sistema internacional de los derechos humanos, y, en lo relativo al tema que hoy nos ocupa, esto es la ampliación del catálogo de los derechos con la inclusión de los denominados de tercera generación (arts. 41 y 42 C.N.) o "derechos de incidencia colectiva" (Art. 43 C.N.).

Es necesario destacar que, el sesgo reformador en esta materia reconoce antecedentes importantísimos en el derecho público de nuestro país, ya que la etapa del constitucionalismo provincial que se inicia en 1986 con la reforma de las leyes fundamentales de gran parte de las provincias argentinas, le imprimió un sentido semejante al de la Constitución nacional, al régimen de derechos y garantías contenido en sus respectivos textos.

Nos interesamos aquí por el régimen de protección del medio ambiente, por los antecedentes del nuevo artículo 41 de la Constitución Nacional.

De conformidad con los principios consagrados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano que tuvo lugar en Estocolmo en 1972 y siguiendo la línea adoptada en todas las constituciones sancionadas a partir de esa fecha, el constituyente reformador introdujo en nuestra Ley Fundamental la cuestión ambiental. Así, el Art. 41 de la Constitución consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado en aras a la obtención de un desarrollo sustentable, conjuntamente con el deber correlativo de preservarlo. Asimismo, se determinan claros mandatos en dirección de las autoridades y se fijan criterios para la distribución de las competencias en el interior del estado federal. La concreción del programa constitucional debe surgir del dictado de normas, de la fijación de políticas, del ejercicio del poder de policía, etc.

El art. 41 citado en su primer párrafo consagra el derecho humano al medio ambiente al que califica de "sano, equilibrado,...". Al mismo tiempo se fija un objetivo en el tiempo -la satisfacción de "las necesidades (...) de las generaciones futuras"- que pone de manifiesto la incorporación de la noción de desarrollo sustentable que hoy en día ubica a la variable ambiental como necesaria en la toma de toda decisión que haga al desenvolvimiento de una comunidad organizada. En la Constitución se habla de actividad productiva, en realidad se apunta a un tipo de modelo de desarrollo que haga viable la vida en el planeta en el presente y en el futuro. Este es el sentido que tanto la citada declaración de las Naciones Unidas como la estrategia de la Unión Internacional para la Naturaleza le dan a la expresión.

La concreción de un modelo como el que persigue la citada cláusula constitucional exige de una serie de requisitos, sin cuya presencia, objetivos tan ambiciosos serán de muy difícil por no decir de imposible concreción en el futuro. Esto es así, puesto que el planteo pone en juego las modalidades de producción, de consumo, de uso de los recursos naturales, el orden de prioridad de los valores sociales, etc. Se trata de cambios que necesariamente afectan intereses, modifican comportamientos, cambian pautas culturales. Todo ello sólo podrá lograrse a través de un enorme esfuerzo conjunto en el que deberán estar empeñados los más diversos sectores de la sociedad.

La gobernabilidad es la condición necesaria que debe imperar en el interior de una comunidad políticamente organizada para que las decisiones sean acatadas y a su vez se logre una administración eficaz de los intereses generales.

Es decir que, el acatamiento por parte de la mayoría de los miembros de una comunidad de una regla de comportamiento socialmente aceptada, reposa en el convencimiento de quienes la observan que ella es legítima, que obliga y que su aplicación redundará en algún tipo de beneficio para la sociedad.

Esta breve reseña del la acogida que tiene la protección del medio ambiente en la Constitución Nacional nos invita a tratar de encontrar vías adecuadas para impedir que la destrucción de los ecosistemas provoque a la larga la inhabilitabilidad del planeta.

La contravención es un acto que va en contra de las leyes o lo legalmente establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro tanto para quien lo lleva a cabo como también para otros. La legislación provincial prevé el peligro de incendio como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible en el Art. 88 de la Ley Nº 8431 TO 2007 "Código de Faltas de la Provincia de Córdoba".

Es en materia de punibilidad de esta contravención que, creemos fervientemente se requiere una modificación, ya que el bien jurídico protegido merece una tutela más celosa.

Leg. Carolina Basualdo

**PROYECTO DE LEY
14275/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba-Texto Ordenado 2007, el que queda redactado de la siguiente manera:

"Causas de inimputabilidad y de justificación.

ARTÍCULO 6º.- Las faltas no serán punibles en los siguientes casos:

1) En los previstos por el artículo 34 del Código Penal;

2) En los casos de tentativa, salvo disposición en contrario, y

3) Cuando sean cometidas por menores que no tuvieran dieciséis (16) años cumplidos a la fecha de comisión del hecho."

ARTÍCULO 2º.- Incorpórase a la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba-Texto Ordenado 2007, el artículo 6º bis, con la siguiente redacción:

"Faltas cometidas por menores.

ARTÍCULO 6º BIS.- EN el caso del inciso 3) del artículo anterior, la autoridad trasladará al menor a la dependencia policial más próxima para su entrega inmediata a los padres, tutores o guardadores, a quienes se avisará y citará a ese fin. Si careciera de ellos, se lo pondrá a disposición del Juez de Menores.

La autoridad interviniente tratará de hacer cesar la conducta contravencional y la situación de riesgo del menor, asegurando en todo tiempo la integridad psicofísica del mismo.

La causa contravencional será remitida perentoriamente al Juez de Menores y se remitirá copia certificada del expediente al Juez de Faltas para el juzgamiento, si correspondiera, de la responsabilidad de terceros, de quienes ejerzan patria potestad, tutores, curadores o guardadores del menor, según el caso y la falta cometida."

ARTÍCULO 3º.- Modifícase el artículo 93 de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba-Texto Ordenado 2007, el que queda redactado de la siguiente manera:

"Perjuicios a la propiedad pública o privada. Responsabilidad refleja.

ARTÍCULO 93.- Serán sancionados con multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta cinco (5) días, los que sin incurrir en delito contra la propiedad mancharen, pintaren, ensuciaren o de cualquier otro modo alteraren, percutieren o deterioren, sin permiso de la autoridad pública o del dueño en su caso, una cosa de propiedad pública o privada.

Igual sanción corresponderá a quienes ejerzan la patria potestad, tutores, curadores o guardadores cuando la contravención de que se trata, sea cometida por un menor de dieciséis (16) años, siguiéndose en tal supuesto el trámite previsto en el artículo 6º bis de este ordenamiento."

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Leg. Oscar González

FUNDAMENTOS

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), recogiendo claves de un debate presente en la sociedad, ha planteado pautas para el desarrollo de una convivencia adecuada.

En efecto, y siguiendo un camino propuesto por el gradual aporte de visiones de especialistas, líderes de la sociedad civil, y lo más importante, por la propia realidad, ha propuesto indicadores de "desarrollo humano", y ha señalado, para determinarlos, la calidad de la convivencia influye sobre aquél de un modo capital.

La idea de que el entorno social influye sobre el bienestar de sus miembros parece ser una verdad de Perogrullo, pero a su alrededor abundan interpretaciones y se libran enérgicas discusiones. Una de las principales reglas para una armoniosa convivencia es el del comportamiento cívico y "social", de carácter "público" -en el sentido de mostrarse en espacios "externos" al domicilio privado, si se nos permite la expresión-.

Ello incluye, tanto el buen uso de bienes e instalaciones destinadas a su aprovechamiento por la comunidad, de propiedad estatal o particular, como también el respeto a la propiedad ajena, en aquellos aspectos que no estén contemplados por la legislación de fondo. Contamos como atributo de la convivencia, recogiendo un argumento expuesto en el párrafo anterior, la "sociabilidad", es decir el modo en el cual las personas construyen cotidianamente sus relaciones con los demás en ámbitos como el trabajo, los centros educativos, las calles, los hogares y los barrios, teniendo en cuenta siempre al otro.

En la Provincia de Córdoba se estimula, desde la organización constitucional de un "Estado Social de Derecho", pasando por un conjunto de dispositivos también previstos en la Ley Fundamental para tutelar el desarrollo comunitario, familiar, y en lo individual, la adecuada educación y socialización, como así también en un plexo normativo que se dicta en su consecuencia, un carácter de convivencia y sociabilidad. Ello no es remedio a todos los males. Como en otras sociedades, existen, se verifican, comportamientos, actitudes y acciones irresponsables de grupos minoritarios que, sin licencia de la autoridad o del dueño en su caso, se manifiestan abusando de ciertas facilidades o derechos, percutiendo o alterando el mobiliario urbano, fuentes, parques, jardines, monumentos, señales de tráfico, en instalaciones provinciales, edificios públicos e inmuebles privados, que suponen un menoscabo, más allá del patrimonio colectivo, a la calidad de la convivencia. Y, claro está, pérdidas de valor de ciertos ámbitos o espacios, y además, erogaciones o gastos extraordinarios para la administración.

Resulta de suma importancia garantizar a partir de la calidad de la convivencia, el buen uso de los derechos a expresarse, a relacionarse, a desarrollar algún tipo de manifestación. Respetar el derecho de los demás a disfrutar, a partir de una tolerancia razonable, el entorno propio, en el cual podemos reconocer nuestra historia, pasado, futuro, costumbre y valores.

La Corte Suprema de Justicia ha establecido que no existe ningún derecho absoluto, siendo posible su razonable reglamentación. Sus límites se encuentran en otros derechos fundamentales, así también como en otros bienes constitucionalmente protegidos.

En este sentido, si bien nuestra legislación contravencional ya prevé sanciones para los supuestos bajo examen, cierto es que estos menoscabos o alteraciones muchas veces son llevados a cabo por inimputables, en particular menores de dieciséis años, sin que haya una sanción ni una reparación satisfactoria para los perjudicados.

De esta manera, quienes ejerzan patria potestad, tutela, curatela o guarda de aquellos menores, como también ocurre en la legislación de fondo, deben asumir responsabilidad contravencional por las acciones punibles en que incurriesen, respecto a estos supuestos, los menores a su cargo.

Se propone la extensión de la responsabilidad, tal como ya lo hace la legislación contravencional comparada, sobre bases jurídicas firmes. El Código Civil, en su artículo 264, establece que la patria potestad es un conjunto de "deberes y derechos". La imposición de responsabilidad a los padres está contemplada, no sólo en el artículo 264 del Código Civil, sino también en los artículos 265, 278 y 1114. Este último artículo señala responsabilidad civil de los padres por los hechos de sus hijos menores, siendo un tipo de responsabilidad por el hecho ajeno o también llamada indirecta. La mayor parte de la doctrina se inclina por responsabilizar a los padres en base a una infracción a los deberes de buena conducta y vigilancia en los hábitos, conducta y comportamiento. Aguiar Díaz estableció que al tratar la responsabilidad paterna se tiene presente el incumplimiento de los deberes que le corresponden al padre con relación a sus hijos: a) asistencia, en sentido amplio, en el que va incluida la educación; b) vigilancia, es complemento de la educación, y será más o menos necesaria conforme se cumpla el primer deber. Ninguna se excluye entre sí (Plovnich, 2011).

Es así como, en este caso, también extendemos la responsabilidad a los padres por los hechos de

sus hijos, cuando un menor de dieciséis años que está bajo su patria potestad comete una infracción o un daño, basándonos en una presunta culpa traducida en la infracción a los deberes de buena educación y vigilancia respecto al hijo menor, deberes que derivan, precisamente, de la patria potestad. (Boroffio, 2001). Es lo que en doctrina se denomina "responsabilidad refleja" por hechos de otros, en este caso la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos menores que configuren una contravención, o de quienes ejerzan la patria potestad o la guarda sobre éstos. Dicha responsabilidad encuentra distintos fundamentos entre los autores: la "culpa in vigilando", la responsabilidad objetiva derivada de la patria potestad, la responsabilidad objetiva por la "tesis del riesgo creado" y un sinnúmero de fundamentaciones propias de los juristas. Lo que es cierto, es que de alguna manera los padres o quienes tienen a su cargo el deber de educar y formar para el bien común a los menores, deben responder por cierto tipo de contravenciones que éstos cometan, ante la inimputabilidad del menor, pero la existencia cierta de la conducta reprochable y el eventual daño causado.

No obstante, está claro que las infracciones previstas en la presente norma son de carácter contravencional. El Estado Provincial tiene la obligación de poner en marcha todos aquellos mecanismos necesarios para preservar el orden público, la salud, la seguridad y el bienestar de las personas y el patrimonio provincial y particular. El poder de policía, parte integrante de las facultades provinciales reservadas, tiene como fin el de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la seguridad, la moralidad, la salud y el bienestar general de la población, imponiendo razonables limitaciones al ejercicio de derechos individuales. Seguramente muchos aspectos quedan pendientes de tratar, ya que la problemática abordada es de infinitas implicancias y aborda muchos otros temas, pero entendemos estar haciendo un aporte inicial e importante.

A tal fin es necesario disponer de un texto normativo que, a la vez que defina las conductas antisociales que degradan la Provincia y deterioran la calidad de vida, tipifique las infracciones y sanciones correspondientes y establezca también, a partir de la modificación del artículo 6 de la inclusión de un artículo 6 bis, mecanismos de rito que permitan el tratamiento adecuado de estas situaciones.

Es por todo lo antes expuesto, que solicitamos que se acompañe en el presente proyecto de Ley.

Leg. Oscar González

**PROYECTO DE LEY
14369/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Ley 9070, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 2º.- Los uniformes y demás elementos a los que hace referencia el artículo precedente, sólo podrán ser adquiridos en los establecimientos expresamente autorizados a tal efecto, de conformidad con esta Ley, su reglamentación y demás normativa aplicable"

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley 9070, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 3º.- Créase el "Registro Provincial de Fabricantes, Distribuidores y Comerciantes de Uniformes e Insumos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública y Servicios de Seguridad Privadas", el cual se organizará bajo la órbita de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

La Autoridad de Aplicación otorgará un certificado de registro, que deberá ser exhibido por el establecimiento, y remitirá a las instituciones que indique la reglamentación, el listado de los registrados -indicando nombre de la persona física o jurídica, rubro y domicilio-, como así también sus actualizaciones. Sin perjuicio de ello, con la periodicidad que indique la reglamentación, dicho listado también se publicará en el Boletín Oficial Provincial"

ARTÍCULO 3º.- Incorpórase al artículo 4º de la Ley 9070, un tercer y último párrafo, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 4º.- (...) Asimismo, la Autoridad de Aplicación controlará la venta informal o no sujeta a las previsiones de la presente Ley de uniformes y demás elementos indicados en el artículo 1º, tanto en forma física como virtual, tomando expresa intervención, requiriendo al poseedor del elemento en venta origen de la posesión del mismo y denunciando, en su caso, al Ministerio Público, el hecho de que se trate"

ARTÍCULO 4º.- Modifícase el artículo 5º de la Ley 9070, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 5º.- Toda compra de elementos o insumos deberá ser registrada por los establecimientos autorizados a su venta. Cuando se compre más de un ejemplar del elemento que fuere, deberá indicarse justificativo. La reglamentación establecerá la modalidad de registro, y las excepciones a la obligación"

ARTÍCULO 5º.- Modifícase el artículo 6º de la Ley 9070, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 6º.- Los municipios y comunas exigirán a los titulares de los establecimientos caracterizados en el artículo 1º de la presente, el certificado de inscripción en el Registro creado en el artículo 3º, para otorgar la habilitación de negocios correspondiente, sin perjuicio de otras obligaciones a cumplimentar en sede local"

ARTÍCULO 6º.- Derógase el artículo 7º de la Ley 9070.

ARTÍCULO 7º.- Incorporárase como artículo 90 bis de la Ley 8431 (Código de Faltas de la Provincia de Córdoba), el texto que sigue a continuación:

"ARTÍCULO 90 BIS.- Será sancionado con clausura preventiva del establecimiento, decomiso de elementos, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta cinco (5) días, según el caso, el que incumpliere con las obligaciones prescriptas en la Ley 9070 y modificatorias, a saber:

a) Compra y venta de uniformes y otros elementos a los que refiere el artículo 1º y concordantes de la Ley 9070, en establecimientos no inscriptos en el Registro Único de Fabricantes, Distribuidores e Insumos al que refieren su artículo 2º y concordantes. La sanción se aplicará al vendedor y al adquirente.

b) Compra y venta de uniformes y otros elementos a los que refiere el artículo 1º y concordantes de la Ley 9070, en establecimientos inscriptos, pero no registrada en los términos del artículo 5º de la ley. La sanción se aplicará al vendedor y al adquirente.

c) Compra y venta de uniformes y otros elementos a los que refiere el artículo 1º y concordantes de la Ley 9070, en establecimientos inscriptos, pero por quien no está autorizado a comprar. La sanción se aplicará al vendedor y al adquirente.

d) Utilización del uniforme y otros elementos a los que refiere la Ley 9070, por parte de personas que no sean sus propietarias. La sanción se aplicará tanto a quien está utilizando u ostentando el uniforme o los elementos, como también al propietario de los mismos cuando se pudiese establecer"

ARTÍCULO 8º.- Modifícase el artículo 8º de la Ley 9070, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 8º.- Los uniformes y demás elementos que deban dejar de utilizarse por deterioro, amortización, vencimiento o motivos análogos, como los que deban devolverse a la organización en razón de la baja del agente, deberán ser entregados a las fuerzas de seguridad o prestatarios del servicio de seguridad de que se trate, a fin de que se disponga su destrucción. Cuando el elemento deba ser adquirido por extravío o sustracción, deberá darse conocimiento expreso a la autoridad de aplicación para conocimiento y al servicio jurídico de la fuerza de que se trate a los fines de la investigación administrativa correspondiente. La reglamentación establecerá modalidades y excepciones. Asimismo, la reglamentación prescribirá qué elementos utilizados por los prestadores de servicios de seguridad privados son alcanzados por la presente Ley, y las modalidades particulares que dicha regulación exija cuando ellas debieran prevalecer"

ARTÍCULO 9º.- Modifícase el artículo 9º de la Ley 9070, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 9º.- La presente Ley es de orden público. Al momento de propiciar su reglamentación, el Poder Ejecutivo determinará la cartera u organismo que ejercerá como la autoridad de aplicación. (ver integración de reglamentación)"

ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Leg. Oscar González

FUNDAMENTOS

El propósito de la modificación a la ley 9070 que se impulsa mediante la presente, tiene por objeto tornar a dicha norma más ejecutiva y eficaz para abordar un aspecto muy importante en la prevención de contravenciones y delitos, como así también en la investigación de hechos criminales que conllevan, en alguno de sus capítulos, la utilización o la requisita en allanamientos u otros actos procesales, de uniformes reglamentarios y otros elementos correspondientes a las distintas fuerzas de seguridad que actúan en la provincia.

Como se decía en el mensaje de elevación del proyecto finamente aprobado como ley 9070, "La seguridad es una obligación que le cabe al Estado porque tiene el deber inexcusable de garantizar la vida y la integridad de las personas. Por estas razones y en cumplimiento de las funciones que le caben al Estado resulta necesario la regulación en la venta de uniformes, insumos, insignias, jinetas y jerarquías para llevar tranquilidad a los habitantes de nuestra provincia". La mirada sobre la situación se ratifica, y se proponen algunos cambios al texto oportunamente aprobado, con el convencimiento de que permitirán que el instrumento opere de modo decisivo sobre la realidad a la cual está destinado.

Además de la prohibición hoy vigente de vender a personas que no acrediten justificación de adquirir estos elementos, se consagra expresamente en el proyectado artículo 2, la obligación de adquirir dichos bienes en los establecimientos expresamente autorizados. Se ajustan algunos aspectos del Registro hoy existente, y se abordan nuevos aspectos de comercialización que la norma en vigencia (por caso la compra vía internet).

Se establece también la obligación de registrar las compras, como también un conjunto de responsabilidades para los municipios y comunas a fin de lograr un ágil y provechoso trabajo conjunto.

Sin perjuicio de que el empleo de estos elementos generalmente es conexo a delitos de mayor envergadura, se procura salvaguardar un tipo contravencional que disuada en principio un conjunto de conductas, y que las contenga en el caso de que éstas conductas se verifiquen, esbozado en un nuevo artículo 90 bis del Código de Faltas (ley 8431), dentro del capítulo comprensivo de las contravenciones contra la Tranquilidad y Seguridad Pública.

En cuanto a la Autoridad de Aplicación, se deja en manos del Poder Ejecutivo su determinación, a los fines de dotar de la máxima operatividad al régimen legal que se pretende modificar. Asimismo, la reglamentación podrá avanzar sobre algunos aspectos enunciados en la ley, pero que por su dinámica es razonable manejar en una instancia normativa de actualización más ágil.

Se suma también, dentro de los servicios objeto de la norma, a aquellos prestados por operadores privados, dado que se encuentran muy generalizados en determinados tipos de prestaciones (cuidado de edificios públicos o residenciales, barrios cerrados, diversos actividades brindadas por requerimiento de

entidades bancarias, etcétera), muchas de estas empresas tienen público conocimiento y pueden llevar a confusión.

Por todo lo expuesto, elevamos el presente proyecto, solicitando a los pares su aprobación.

Leg. Oscar González

**PROYECTO DE LEY
14388/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba- Texto Ordenado 2007, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Causas de inimputabilidad y de justificación.

ARTÍCULO 6º.- Las faltas no serán punibles en los siguientes casos:

1) En los previstos por el artículo 34 del Código Penal;

2) En los casos de tentativa, salvo disposición en contrario, y

3) Cuando sean cometidas por menores que no tuvieren dieciséis (16) años cumplidos a la fecha de comisión del hecho”

ARTÍCULO 2º.- Incorpórase a la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba- Texto Ordenado 2007, el artículo 6 bis, con la siguiente redacción:

“Faltas cometidas por menores.

ARTÍCULO 6º BIS.- En el caso del inciso 3) del artículo anterior, la autoridad trasladará al menor a la dependencia policial más próxima para su entrega inmediata a los padres, tutores o guardadores, a quienes se avisará y citará a ese fin. Si careciera de ellos, se lo pondrá a disposición del Juez de Menores.

La autoridad interviniente tratará de hacer cesar la conducta contravencional y la situación de riesgo del menor, asegurando en todo tiempo la integridad psicofísica del mismo.

La causa contravencional será remitida perentoriamente al Juez de Menores y se remitirá copia certificada del expediente al Juez de Faltas para el juzgamiento, si correspondiera, de la responsabilidad de terceros, de quienes ejerzan patria potestad, tutores, curadores o guardadores del menor, según el caso y la falta cometida”

ARTÍCULO 3º.- Incorpórase a la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba- Texto Ordenado 2007, el artículo 53 bis, con la siguiente redacción:

“Responsabilidad refleja.

ARTÍCULO 53 BIS.- En los supuestos tipificados en el presente Capítulo, en los artículos 51, 52 y 53, cuando las acciones a las que dichos preceptos se refieren fueran ejecutadas por menores de dieciséis (16) años, las sanciones contempladas se extenderán a quienes ejerzan la patria potestad, tutores, curadores o guardadores según el caso, de conformidad al trámite previsto en el artículo 6 bis de este Código y demás normas aplicables”

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Leg. Oscar González

FUNDAMENTOS

Como hemos establecido en otro proyecto de ley, es prevenir y sancionar ciertos actos antisociales, que aunque su realización no llegue a constituir delitos o faltas penales, si constituyen contravenciones, que vulneran la tranquilidad ciudadana y la armonía social de nuestra Provincia. Los abusos que en el pasado se hayan podido cometer en el pasado en el nombre del orden público no significa que tengamos que acostumbrarnos. Creemos en que la idea de que el entorno social influye sobre el bienestar de sus miembros parece ser una verdad de Perogrullo, pero a su alrededor abundan interpretaciones y se libran enérgicas discusiones. Una de las principales reglas para una armoniosa convivencia es el del comportamiento cívico y “social”, de carácter “público” -en el sentido de mostrarse en espacios “externos” al domicilio privado, si se nos permite la expresión-.

Es nuestro deber velar por el mantenimiento del orden, el bien común y la armónica convivencia provincial. El orden público constituye la base y el prerrequisito de la intervención pública en cualquier sector ya que no puede pretenderse un buen orden sanitario, urbanístico o de cualquier tipo en una situación de incumplimiento sistemático de normas básicas de convivencia. Nuestro objetivo es lograr la paz pública, entendida como la definiera Binding en el sentido de que “La paz pública nos muestra dos objetos de tutela, por un lado la situación de paz y por otro la confianza en la perduración en la situación de paz”. El concepto de orden público está vinculado a una función de protección, de tal manera que permite limitar la autonomía de la voluntad en interés de la comunidad.

En este caso, también extendemos la responsabilidad a los padres por los hechos de sus hijos, cuando un menor de dieciséis años que está bajo su patria potestad comete una infracción o un daño, basándonos en una presunta culpa traducida en la infracción a los deberes de buena educación y vigilancia respecto al hijo menor, deberes que derivan, precisamente, de la patria potestad. (Boroffio, 2001). Es lo que en doctrina se denomina “responsabilidad refleja” por hechos de otros, en este caso la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos menores que configuren una contravención, o de quienes ejerzan la patria potestad o la guarda sobre éstos. Dicha responsabilidad encuentra distintos fundamentos entre los autores: la “culpa in vigilando”, la responsabilidad objetiva derivada de la patria potestad, la responsabilidad objetiva por la “tesis del riesgo creado” y un sinnúmero de

fundamentaciones propias de los juristas. Lo que es cierto, es que de alguna manera los padres o quienes tienen a su cargo el deber de educar y formar para el bien común a los menores, deben responder por cierto tipo de contravenciones que éstos cometan, ante la inimputabilidad del menor, pero la existencia cierta de la conducta reproachable y el eventual daño causado.

Asimismo remarcamos que estas infracciones son de orden contravencional, propio del poder de policía que se reservare la Provincia con fin el de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la seguridad, la moralidad, la salud y el bienestar general de la población, imponiendo razonables limitaciones al ejercicio de derechos individuales.

Es por todo lo expuesto, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Leg. Oscar González

**PROYECTO DE LEY
14389/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba- Texto Ordenado 2007, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Causas de inimputabilidad y de justificación.

ARTÍCULO 6º.- Las faltas no serán punibles en los siguientes casos:

En los previstos por el artículo 34 del Código Penal;

En los casos de tentativa, salvo disposición en contrario, y

Cuando sean cometidas por menores que no tuvieren dieciséis (16) años cumplidos a la fecha de comisión del hecho”

ARTÍCULO 2º.- Incorpórase a la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba- Texto Ordenado 2007, el artículo 6 bis, con la siguiente redacción:

“Faltas cometidas por menores.

ARTÍCULO 6º BIS.- En el caso del inciso 3) del artículo anterior, la autoridad trasladará al menor a la dependencia policial más próxima para su entrega inmediata a los padres, tutores o guardadores, a quienes se avisará y citará a ese fin. Si careciera de ellos, se lo pondrá a disposición del Juez de Menores.

La autoridad interviniente tratará de hacer cesar la conducta contravencional y la situación de riesgo del menor, asegurando en todo tiempo la integridad psicofísica del mismo.

La causa contravencional será remitida perentoriamente al Juez de Menores y se remitirá copia certificada del expediente al Juez de Faltas para el juzgamiento, si correspondiera, de la responsabilidad de terceros, de quienes ejerzan patria potestad, tutores, curadores o guardadores del menor, según el caso y la falta cometida”

ARTÍCULO 3º.- Incorpórase a la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba- Texto Ordenado 2007, el artículo 59 bis, con la siguiente redacción:

“Responsabilidad refleja.

ARTÍCULO 59 BIS.- En los supuestos tipificados en el presente Capítulo, en los artículos 55, 56, 57 y 58, cuando las acciones a las que dichos preceptos se refieren fueran ejecutadas por menores de dieciséis (16) años, las sanciones contempladas se extenderán a quienes ejerzan la patria potestad, tutores, curadores o guardadores según el caso, de conformidad al trámite previsto en el artículo 6 bis de este Código y demás normas aplicables.”

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Leg. Oscar González

FUNDAMENTOS

El rol del Estado ha cambiado a medida que la misma sociedad ha modificado sus costumbres y hábitos. Anteriormente, el papel del Estado en los espectáculos deportivos consistía en aplicar su poder de policía para garantizar el orden público. Actualmente, tenemos una obligación social, que no sólo consiste en mantener el orden público sino en asegurar otros derechos y valores como la protección de los menores, derechos de los usuarios y consumidores, respeto por el medio ambiente y por el patrimonio cultural, accionar contra expresiones discriminatorias, etc.

El deporte es un fenómeno de masas que se asocia con aspectos de la vida en sociedad, coadyuvando a la buena convivencia social, aportando aspectos positivos a la cooperación, solidaridad y forjando un sentido de pertenencia.

Cada vez es mayor y más preocupante, el aumento de conductas incivilizadas en nuestra sociedad y que atentan contra la buena convivencia, de la cual, los espectáculos deportivos no escapan. Sucesos que con frecuencia rebasan inclusive los límites físicos de los estadios o recintos deportivos, afectando a la comunidad en los alrededores de dichos espacios. Estos actos, atentan tanto contra la libertad como contra la seguridad de los ciudadanos y del desarrollo integral de la familia, repercutiendo en espacios destinados a la convivencia y sano esparcimiento, por lo que resulta ineludible fortalecer institucionalmente al Estado Provincial para que pueda asegurar sus derechos.

Creemos que tenemos un rol imprescindible en el proceso de socialización, es decir, en la adaptación de una persona a la dinámica y valores de una sociedad determinada. Por eso, sostenemos

necesario extender la responsabilidad a los padres por los hechos de sus hijos menores de dieciséis años. En consonancia con otro proyecto de ley que hemos presentado para la modificación del Código de Faltas sancionando a aquellos que sin incurrir en delito contra la propiedad mancharen, pintaren, ensuciaren o de cualquier otro modo alteraren, percutieren o deterioren, sin permiso de la autoridad pública o del dueño en su caso, una cosa de propiedad pública o privada, extendiendo la responsabilidad a los padres por los hechos de sus hijos menores, hacemos nuestra la idea de que como estableció Aguiar Díaz, al tratar la responsabilidad paterna se tiene presente el incumplimiento de los deberes que le corresponden al padre con relación a sus hijos: a) asistencia, en sentido amplio, en el que va incluida la educación; b) vigilancia, es complemento de la educación, y será más o menos necesaria conforme se cumpla el primer deber. Ninguna se excluye entre sí (Plovánich, 2011).

Por supuesto que la presente norma tiene carácter contravencional, y que resulta de la facultad de policía con la que cuenta el estado provincial.

Por todo ello es que someto a consideración de esta Honorable Legislatura la aprobación de este proyecto.

Leg. Oscar González

**PROYECTO DE LEY
14784/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el acápite 2) del inciso i) del artículo 40 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560, Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias incluida la Ley Nº 10138, por el siguiente:

"2) Sus ocupantes -conductor y acompañante- lleven puestos cascos normalizados,"

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase el artículo 96 bis creado por la Ley 10138, del Libro II, Título II, Capítulo Sexto de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba- Texto Ordenado 2007 y sus modificatorias, por el siguiente:

"Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos.

Artículo 96 bis- Serán sancionados con multa de hasta ochenta Unidades de Multa (80 UM) o arresto de hasta veinte (20) días los que condujeren o se trasladaren como acompañantes en motocicletas y ciclomotores sin la documentación correspondiente, sin la placa identificatoria del dominio colocada en debida forma.

En todos los casos se procederá al secuestro de la motocicleta o ciclomotor, la que será restituida a su legítimo propietario cuando se hubieren subsanado los requisitos para circular.

La autoridad policial, con comunicación al Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios para su baja registral, ordenará la desnaturalización de toda motocicleta o ciclomotor que no hubiere sido retirada por su propietario dentro del año a contar desde la fecha en que se produjo el secuestro, en un todo de acuerdo al procedimiento que por vía reglamentaria se establezca."

Leg. Nancy Lizzul, Leg. Liliana MonteroError! Marcador no definido., **Leg. Nadia Fernández**

FUNDAMENTOS

La presente ley busca devolver a la sociedad el equilibrio perdido.

A partir de los graves hechos de violencia e inseguridad vividos en la provincia de Córdoba los días 03 y 04 de diciembre de 2013, a causa del acuartelamiento de las fuerzas policiales en reclamo de mejoras laborales, los cordobeses hemos asistido a la policialización de la provincia.

Ya sea para superar la sensación de vulnerabilidad que caló muy hondo, ya sea para mejorar la imagen de la fuerza pública golpeada por el escándalo de los "narco policías" o por la necesidad del Poder Ejecutivo de mostrar a la sociedad medidas concretas en la lucha contra el delito, la Ley 10.138, que es en definitiva la que introduce modificaciones a la Ley de Tránsito Provincial y al Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, no es fruto de la reflexión ni de la equidad que debieran caracterizar las normas que rigen la vida de los cordobeses.

En pos de la seguridad, hemos asistido a la criminalización de actos simples de la vida cotidiana, como es trasladarse en motocicleta.

Amén de ser un derecho constitucional, el del libre tránsito, es una necesidad para los habitantes que optan por un medio económico, ágil y menos contaminante que los automotores y vehículos de transporte público.

Decimos criminalización porque la ley supone que las personas que se trasladan en moto vehículos son potenciales delincuentes, a los que hay que identificar de manera distinta que al resto de los ciudadanos con el objeto de "Prevenir, disuadir y esclarecer delitos de rápida resolución" según reza la propia norma.

La forma de pensar obedece a la lógica: si te trasladas en un medio económico como la motocicleta es porque eres pobre, si eres pobre puedes ser un ladrón, por ende, identifiquemos a todos los pobres que se trasladan en motocicleta para así distinguir a los ladrones.

Una Ley de este tipo es inconcebible por discriminatoria, violatoria de todo principio de inocencia y contraria a los derechos humanos.

Si se trata de seguridad, proponemos identificar a las motos del MISMO modo que identificamos a los automóviles.

Por ello modificamos la ley sustituyendo los artículos contrarios a toda lógica elemental y respetando los referidos a la seguridad de las personas que se transportan en motovehículos.

Srs. Legisladores, los invitamos a respirar hondo y reflexionar, aportemos a la pacífica convivencia en una sociedad que nos integre a todos y reparemos las modificaciones que introduce la Ley 10.0138, que estigmatiza a los pobres y abre nuevas brechas entre las clases sociales que componen nuestra querida Provincia.

Así recuperaremos el equilibrio perdido.

Leg. Nancy Lizzul, Leg. Liliana Montero ¡Error! Marcador no definido., **Leg. Nadia Fernández**

**PROYECTO DE LEY
15160/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Derógase el artículo 45 del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- Incorpórese como artículo 46 ter del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, el siguiente texto:

"Sin perjuicio de las penalidades previstas en otros ordenamientos normativos sobre la materia, será sancionado con pena equivalente a 10 Unidades de Multa (10 UM) y hasta quince (15) días de trabajo comunitario y una instrucción especial sobre la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual para comprender el efecto negativo del consumo de prostitución, a quién entregare una suma de dinero, o cualquier otra cosa o actividad apreciable en dinero, para hacer un uso sexual de otra persona, mediar su consentimiento o no.

Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable también en el caso de que el pago del dinero o la entrega de la cosa apreciable en dinero o beneficio sea realizado por o para un tercero.

En el caso de reincidencia será sancionado con arresto de hasta seis (6) días y la instrucción especial prevista en el párrafo anterior.

El importe de la multa ingresará a los Programa de Prevención y Asistencia a Víctimas de Trata de Personas y Explotación Sexual previstos en la Resolución Nº 1/12 de la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas de la Provincia de Córdoba.

Si el autor fuere miembro de una fuerza de seguridad pública o policial o funcionario público municipal, provincial o nacional se sancionará con la pena de arresto de hasta diez (10) días, 20 unidades de multa, inhabilitación por el término de un (1) mes e instrucción especial sobre la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual para comprender el efecto negativo del consumo de prostitución.

En caso de reincidencia se le aplicará la sanción de quince (15) días de arresto y treinta (30) unidades de multa.

En ningún caso podrán ser sancionadas por la comisión de esta falta las personas prostituidas.

En todos los supuestos en que se inicien actuaciones por esta falta deberá ser comunicado a la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.

Cláusulas transitorias

El presente artículo entrará en vigencia a partir de los tres meses de la promulgación del presente Código de Convivencia Social, fecha hasta la cual el Poder Ejecutivo Provincial debe implementar una campaña intensiva de difusión y divulgación de los términos del presente artículo; además de capacitar a los operadores policiales y judiciales vinculados a la aplicación del mismo.

ARTÍCULO 3º.- Modifíquese la Ley 10060 incorporando como artículo 15 el siguiente texto: "Institúyase -en la Provincia de Córdoba- el día 23 de septiembre de cada año como "Día de Conmemoración de Lucha Contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual".

Leg. María Chiofalo

FUNDAMENTOS

El 23 de septiembre de cada año, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños. La declaración se produjo en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, en el marco de la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, a modo de homenaje a la fecha de la promulgación, en el Parlamento argentino, de la primera Ley Nacional en contra de la Trata de Blancas y Prostitución Infantil, ley número 9.143, de 1913, conocida como ley Palacios.

Alfredo Palacios, reconocido diputado socialista, sostuvo que estos delitos debían incorporarse en el Código Penal y denunció el tráfico que se practicaba con mujeres de aldeas de Rusia: "Jóvenes incautas que traían a nuestro país para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como esclavas".

Después de 100 años, esta situación no ha cambiado. Ahora las víctimas son extranjeras, de otras provincias y de Córdoba, explotadas aquí, en otras regiones o en el extranjero.

En nuestra Provincia de Córdoba, el 14 de mayo del año 2012 El Poder Ejecutivo puso en marcha un Programa Integral de Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual, como política de Estado, basada en el combate al delito y la protección de los derechos humanos de las víctimas y de las personas en situación de prostitución, en ese marco se sancionó la ley provincial 10.060, y su decreto reglamentario Nº 582 permitiendo a la Provincia de Córdoba contar con una herramienta jurídica que permitió dar un paso esencial, en el ámbito provincial, la lucha contra las mafias u organizaciones

delictivas que esclavizan y/o reducen a condición de servidumbre a los seres humanos para destinarlos al comercio sexual. En cumplimiento de Protocolos Internacionales de asistencia a las víctimas de Trata de personas se crea la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas.

El eje de acción del Gobierno provincial es la implementación de políticas de inclusión social y laboral de las víctimas, mediante el otorgamiento de becas económicas y capacitación, en función de sus necesidades y situación de vulnerabilidad, a cuyo efecto la Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas de la Provincia dicta las Resoluciones nº 1/12 y 2/13 que la reglamenta.

Asimismo el Poder Ejecutivo Provincial dicta Decreto 365, ratificado por Ley Provincial 10.066, que adhiere al Decreto nacional 936/11, de prohibición de avisos de oferta sexual por cualquier medio.

Se habilita la línea de teléfono 0810-888-3368 para denuncias anónimas, en el cual la llamada no puede ser identificada y el denunciante recibe un número de trámite para el seguimiento de su denuncia.

En Córdoba perseguimos a tratantes y proxenetas y liberamos de sus explotadores a las personas en situación de prostitución y víctimas de trata.

La estrecha y profunda relación entre la Trata de Personas y la prostitución, en la que la primera nutre de mercancía humana a la segunda, fogoneada y alimentada por la demanda de los "clientes" prostituyentes y la insaciable voracidad de proxenetas y tratantes, es una verdad indubitable.

Así lo refleja el Preámbulo del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena de la ONU: "La prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad".

Que la prostitución no es trabajo sino una forma de violencia contra las mujeres y de violación de sus derechos humanos –en la que la persona vulnerable es despojada de su humanidad y convertida en mercancía– es otra verdad incuestionable, ratificada judicialmente a través del famoso fallo de la provincia de Córdoba pronunciado por la Dra. María de los Ángeles Palacio de Arato.

Argentina es abolicionista desde la sanción de la ley 12.331 en 1937 (que prohíbe los prostíbulos en todo el país y castiga a quienes los sostengan, administren o regenteen ostensible o encubiertamente); la Convención de la ONU de 1949 y todo el plexo normativo internacional-constitucional sobre derechos humanos, tienen rango constitucional a partir de la Reforma del año 1994. El respeto y preeminencia de los Derechos Humanos implica la necesidad de protección estatal para prevenir y combatir el delito, y en segundo lugar para dar asistencia y reparación a sus víctimas.

La Provincia de Córdoba con la sanción de la Ley 10.060 reafirma el abolicionismo al que adscribe nuestro país desde aquella ley de profilaxis, marca las pautas a seguir en relación a las víctimas de Trata de Personas y a las que se encuentran en situación de prostitución en sus artículos 5 y 6, y su Decreto Reglamentario 582 (artículo 5) ya que permite situar a la mujer como sujeto de derecho y no como objeto e implicó un cambio de paradigma de la criminalización de las personas en situación de prostitución a la protección integral de sus derechos derogando, en efecto, de manera tácita el artículo 45 del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, por lo que se hace necesario dar un paso esencial, la derogación expresa de esta norma reglamentarista y discriminatoria, ya que no podemos hablar de igualdad entre el hombre y mujer, si existen normas que discriminan grupos sociales sobre la base de estereotipos penalizando a las personas que se encuentran en situación de prostitución.

La Trata de Personas nutre de mercancía humana a la Prostitución, esto es posible mientras exista demanda de los clientes prostituyentes, que configuran uno de los actores esenciales de la cadena de explotación; alimentando con su dinero a las redes de Trata de personas y de Prostitución, por lo que de acuerdo al modelo abolicionista de nuestro país, los antecedentes de los países que contienen legislación que penalizan al cliente prostituyente (Suecia, Noruega, Islandia, Francia) han mejorado positivamente la igualdad de género, es que propiciamos se incorpore en el nuevo Código de Convivencia Social una sanción para los prostituyentes.

Habiéndose conformado la Comisión Especial para el Estudio, Análisis, Modernización y Reforma del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba tendiente a introducir modificaciones para llevarlo a un plexo normativo moderno y eficiente: el nuevo Código de Convivencia Social que resguarda los derechos y garantías constitucionales y la protección integral de los derechos humanos de los ciudadanos.

Se torna imperioso adecuar este Código a la normativa jurídica Provincial, Nacional e Internacional sobre Trata de Personas, Explotación Sexual y personas en situación de prostitución.

En ese marco el presente proyecto, pretende por un lado derogar una norma del Código de Faltas Provincial que tipifica conductas de un grupo social que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Nuestro Código de faltas es una ley provincial que pena con multas y/o arrestos conductas que afectan la convivencia, llamadas faltas o contravenciones. En el mismo se encuentra una figura que persigue a personas que se encuentran en situación de prostitución, a pesar de haber sido derogado tácitamente a través de la ley 10.060, por lo que ahora corresponde su derogación expresa.

El artículo 16 de la Constitución Nacional y el artículo 24 de la Convención Americana de derechos Humanos (arts.16 CN, y 24 CIDH), establecen "la igualdad ante la ley"

La norma contravencional vulnera disposiciones de raigambre constitucional, por cuanto sanciona conductas que son de un determinado grupo, sobre la base de estereotipos.

En la actualidad hay coincidencia en que quien es prostituido realiza una actividad bajo el ejercicio de la violencia vulnerándose sus derechos fundamentales.

La prostitución debe ser considerada un grave problema que es perjudicial, tanto para las personas prostituidas como también para la sociedad en general. El Estado no puede legitimar situaciones que impliquen violaciones a los derechos humanos.

Sabido es que el Derecho internacional se ha preocupado por la prostitución, especialmente a partir del siglo XX. Los primeros tratados internacionales que reprimen la trata de mujeres y de niños que

entraron en vigor fueron: a) Acuerdo internacional del 18 de mayo de 1904 para la represión de trata de blancas modificados por el protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (13/12/1948; b)

Convenio internacional del 04 de mayo de 1910 para la represión de trata de blanca modificado por el precitado protocolo; c) Convenio internacional del 30 de septiembre de 1921 para la represión de trata de mujeres y niños, modificado por el protocolo aprobado por la asamblea de las naciones unidas del 20 de octubre de 1947; d) Convenio internacional del once de octubre de 1933 para la represión de trata de mujeres mayores de edad.

La ONU, celebra el "Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena" Adoptado por la Asamblea General en su resolución 317 (IV), de 2 de diciembre de 1949, Argentina ratificó este Convenio en 1957. En el Preámbulo del Documento se lee:

"Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad". El 25 de enero del año 1957 entro en vigor el Convenio para la represión de la trata de personas y de la Explotación de la prostitución ajena (ratificada en nuestro país por Ley Nacional Nº 11.925, adoptando la postura abolicionista de esta Convención.), adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas mediante resolución 317 y que supuso el cierre de burdeles en numerosos países.

El 26 de febrero del año 2014 el Parlamento Europeo dicta una resolución sobre la explotación sexual, la prostitución y el impacto sobre la igualdad de género que se transcribe:

"Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género (2013/2103(INI))

El Parlamento Europeo,

- Vistos los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,
- Visto el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de explotación de la prostitución ajena, de 1949,
- Visto el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979, cuyo objetivo es luchar contra todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer,
- Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989,
- Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993, cuyo artículo 2 establece que la violencia contra la mujer abarca «la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada»,
- Visto el Protocolo de Palermo, de 2000, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, anexo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
- Visto el objetivo estratégico D.3 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995,
- Visto el Convenio (nº 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo artículo 2 se define el trabajo forzoso,
- Vista la Declaración de Bruselas (11) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, que aboga por una política integral, multidisciplinar y efectivamente coordinada, que implique a los actores de todos los ámbitos en cuestión,
- Vistas las Recomendaciones del Consejo de Europa en este ámbito, tales como la Recomendación 11 (2000) sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la Recomendación 5 (2002) sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la Recomendación 1545 (2002) relativa a campañas contra la trata de mujeres,
- Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos,
- Vista la propuesta de recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la penalización de la compra de sexo para luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, Doc. 12920 de 26 de abril de 2012,
- Vista la Decisión Ministerial de Viena nº 1(12) de la OSCE, de 2000, en apoyo a las medidas de la OSCE y al Plan de Acción de la OSCE contra la trata de personas (Decisión nº 557, adoptada en 2003),
- Vistos los artículos 2 y 13 del Tratado de la Unión Europea,
- Vista la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos,
- Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002,
- Vista la Resolución del Consejo sobre iniciativas para luchar contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres (1),
- Vista la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos,
- Vista su Resolución, de 15 de junio de 1995, sobre la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín: «Igualdad, desarrollo y paz» (2),
- Vista su Resolución, de 24 de abril de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a los contenidos ilícitos y nocivos en Internet (3),
- Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 1997, sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres (4),
- Vista su Resolución, de 24 de octubre de 1997, sobre Libro Verde relativo a la protección de los

menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información (5),

- Vista su Resolución, de 6 de noviembre de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la lucha contra el turismo sexual que afecta a niños y el Memorándum relativo a la contribución de la Unión Europea a la intensificación de la lucha contra los abusos y la explotación sexual de que son víctimas los niños (6),

- Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual (7),

- Vista su Resolución, de 13 de mayo de 1998, relativa al Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información (8),

- Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 1998, sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1996) (9),

- Vista su Resolución, de 10 de febrero de 1999, sobre armonización de las formas de protección complementaria al estatuto de refugiado en la Unión Europea (10),

- Vista su Resolución, de 30 de marzo de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de las medidas de lucha contra el turismo sexual que afecta a niños (11),

- Vista su Resolución legislativa, de 11 de abril de 2000, sobre la iniciativa de la República de Austria con vistas a la adopción de la Decisión del Consejo relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet (12),

- Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2000, sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín (13),

- Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre nuevas medidas en el ámbito de la lucha contra la trata de mujeres (14),

- Vista su Resolución, de 15 de junio de 2000, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social titulada Víctimas de delitos en la Unión Europea - Normas y medidas (15),

- Vista su Resolución legislativa, de 12 de junio de 2001, sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la trata de seres humanos (16),

- Vista su Resolución, de 17 de enero de 2006, sobre estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños vulnerables a la explotación sexual (17)

- Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2006, sobre la situación actual en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones (18),

- Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre la prostitución forzada en el marco de los acontecimientos deportivos internacionales (19)

- Vista su Resolución, de 26 noviembre 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (20),

- Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres (21),

- Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre el 57º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas (22),

- Vista su Resolución de 23 de octubre de 2013 sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (23),

- Vista la campaña de sensibilización del Foro Europeo de Mujeres «No está en venta»,

- Visto el artículo 48 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0071/2014),

A. Considerando que la prostitución y la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de género y de dimensión mundial que afecta en torno a 40 - 42 millones de personas en todo el mundo, siendo la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen mujeres y niñas y casi la totalidad de los usuarios hombres y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad de género, lo que agrava aún más el fenómeno;

B. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada representan formas de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales;

C. Considerando que la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños, con fines de explotación sexual y otras formas de explotación constituye una de las violaciones de los derechos humanos más atroces, y que la trata de personas está creciendo a escala mundial debido al aumento de la delincuencia organizada y su rentabilidad;

D. Considerando que el trabajo es una de las principales fuentes de realización humana y que, a través de él, los individuos contribuyen solidariamente al bienestar colectivo;

E. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada están intrínsecamente ligadas a la desigualdad de género en la sociedad y tienen un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad así como en la percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad;

F. Considerando que la salud sexual y reproductiva se promueve con un enfoque de la sexualidad sano y basado en el respeto mutuo;

G. Considerando que la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas establece disposiciones firmes en relación con las víctimas;

H. Considerando que toda política relativa a la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas

a la sociedad, incluidos los jóvenes;

I. Considerando que la prostitución funciona como un negocio y crea un mercado, en el que distintos actores están interconectados y los proxenetas realizan cálculos y actúan para afianzar o aumentar sus mercados y maximizar los beneficios, y que los compradores de sexo desempeñan un papel fundamental, puesto que mantienen la demanda de este mercado;

J. Considerando que, según la OMS, la salud sexual «requiere de una actitud positiva y respetuosa hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, además de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia»;

K. Considerando que en la prostitución todos los actos íntimos se rebajan a un valor mercantil y el ser humano queda reducido a mercancía o instrumento a disposición del cliente;

L. Considerando que la gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución proceden de grupos vulnerables;

M. Considerando la seria relación que existe entre el proxenetismo y el crimen organizado;

N. Considerando que en torno a la prostitución florecen la delincuencia organizada, la trata de seres humanos, los crímenes violentos y la corrupción, y que el más beneficiado con su legalización sería el proxeneta, que se convertiría en «hombre de negocios»;

O. Considerando que los mercados de prostitución alimentan la trata de mujeres y niños (24);

P. Considerando que la trata sirve como recurso para abastecer de mujeres y mujeres menores de edad los mercados de la prostitución;

Q. Considerando que los datos de la UE indican que la actual política de lucha contra el tráfico de seres humanos no es eficaz y que hay un problema para identificar y perseguir a los traficantes, de modo que se ha de reforzar la investigación de casos de tráfico de personas con fines de explotación sexual y la persecución y condena de los traficantes de seres humanos;

R. Considerando que cada vez más jóvenes, de los cuales resulta alarmante que muchos sean niños, son obligados a ejercer la prostitución;

S. Considerando que la presión bajo la cual se ejerce la actividad de prostitución puede ser directa y física, o indirecta, por ejemplo a través de presiones sobre la familia en el país de origen, y puede consistir en una coacción psicológica insidiosa;

T. Considerando que la principal responsabilidad de luchar contra la trata de seres humanos recae en los Estados miembros, y que en abril de 2013 solo seis Estados miembros notificaron la transposición íntegra de la Directiva de la UE contra la trata de personas, cuyo plazo de aplicación expiró el 6 de abril de 2013;

U. Considerando que la Comisión, en su Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015), declara que «las desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales»;

V. Considerando que hay una enorme divergencia en el modo en que los Estados miembros abordan la prostitución, con dos enfoques fundamentales: un enfoque considera la prostitución como una violación de los derechos de las mujeres —una forma de esclavitud sexual— que da lugar y mantiene la desigualdad de género con respecto a las mujeres; el segundo enfoque sostiene que la prostitución promueve la igualdad de género al fomentar el derecho de la mujer a controlar qué desea hacer con su cuerpo; considerando que en ambos casos los Estados miembros tienen competencia para decidir cómo abordar la cuestión de la prostitución;

W. Considerando que, si bien existe una diferencia entre prostitución «forzada» y prostitución «voluntaria»;

X. Considerando que el asunto de la prostitución debe abordarse con una visión a largo plazo y según la perspectiva de la igualdad de género;

1. Reconoce que la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos

Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género;

2. Señala que debe respetarse la salud de todas las mujeres, incluido el derecho a disponer de su cuerpo y a una sexualidad libre de coacción, discriminación y violencia;

3. Destaca que hay diversos vínculos entre prostitución y tráfico de personas, y reconoce que la prostitución —a nivel y en toda Europa— alimenta el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad vulnerables, un alto porcentaje de las cuales tiene entre 13 y 25 años; destaca que, como muestran los datos de la Comisión, la mayoría de las víctimas (62 %) son objeto de trata con fines de explotación sexual, constituyendo las mujeres y las mujeres menores de edad el 96 % de las víctimas, identificadas o supuestas, y que el porcentaje de víctimas de países no pertenecientes a la UE ha aumentado en los últimos años;

4. Reconoce, no obstante, que la falta de datos fiables, precisos y comparables entre los países, debido principalmente a la naturaleza ilegal y con frecuencia invisible de la prostitución y la trata, da lugar a que el mercado de la prostitución siga siendo opaco y obstaculiza la toma de decisiones política, lo que significa que todas las cifras se basan exclusivamente en estimaciones;

5. Hace hincapié en que la prostitución es también una cuestión de salud, puesto que tiene efectos perjudiciales en las personas que la ejercen, que tienen más probabilidades de sufrir traumas sexuales, físicos y mentales, ser adictas al alcohol y las drogas, perder el respeto por sí mismas y presentar un mayor índice de mortalidad que la población media; añade y destaca que muchos de los compradores de sexo piden sexo comercial sin protección, lo que incrementa el riesgo de efectos perjudiciales para la salud, tanto para las personas que ejercen la prostitución como para los compradores de sexo;

6. Hace hincapié en que la prostitución forzada, la prostitución y la explotación en la industria del sexo tienen consecuencias físicas y psicológicas devastadoras y duraderas, incluso después de haber

cesado la prostitución, para los individuos que se ven implicados en ella, especialmente niños y adolescentes, además de ser, a la vez, causa y consecuencia de la desigualdad de género y de perpetuar los estereotipos de género y el pensamiento estereotipado sobre las mujeres que venden sexo, como la idea de que el cuerpo de las mujeres y mujeres menores de edad está en venta para satisfacer la demanda masculina de sexo;

7. Pide asimismo a los Estados miembros que introduzcan, en consonancia con el Derecho nacional, citas periódicas y confidenciales a efectos sanitarios y de orientación para prostitutas fuera de los lugares de ejercicio de la prostitución;

8. Reconoce que las personas que ejercen la prostitución constituyen un grupo con alto riesgo de contagio del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual;

9. Pide a los Estados miembros que intercambien mejores prácticas para reducir los riesgos asociados a la prostitución callejera;

10. Reconoce que la prostitución y la prostitución forzada pueden tener un impacto en la violencia contra las mujeres en general, ya que las investigaciones sobre los usuarios de servicios sexuales muestran que los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de la mujer (25); sugiere, por consiguiente, a las autoridades nacionales competentes que la prohibición de comprar servicios sexuales vaya acompañada de una campaña de sensibilización de los hombres;

11. Subraya que las personas prostituidas son especialmente vulnerables desde el punto de vista social, económico, físico, psíquico, emocional y familiar y corren más riesgo de sufrir violencia y daños que en cualquier otra actividad; destaca que se debe alentar, por lo tanto, a las fuerzas de policía nacionales a abordar, entre otras cosas, las bajas tasas de condena por violación de prostitutas; hace hincapié en que las personas prostituidas son asimismo objeto de oprobio público y están socialmente estigmatizadas, incluso si dejan de ejercer la prostitución;

12. Atrae la atención sobre el hecho de que las prostitutas tienen derecho a la maternidad, y a criar y cuidar a sus hijos;

13. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución incide en la violencia contra la mujer; señala, en particular, que los hombres que compran sexo son más proclives a cometer actos sexuales coercitivos, así como otros actos de violencia, contra las mujeres y que, con frecuencia, muestran actitudes misóginas;

14. Señala que entre el 80 y el 95 % de las personas que se prostituyen ha sufrido alguna forma de violencia antes de empezar a ejercer la prostitución (violación, incesto, pedofilia), el 62 % declara haber sufrido una violación y el 68 % sufre trastornos de estrés postraumático, un porcentaje similar al de las víctimas de tortura(26) ;

15. Señala que la prostitución infantil nunca puede ser voluntaria, puesto que los niños no tienen la capacidad de «consentir» la prostitución; exhorta a los Estados miembros a que combatan la prostitución infantil (la que afecta a los menores de 18 años) tan enérgicamente como sea posible, dado que es la forma más grave de prostitución forzada; exige con carácter urgente un enfoque de tolerancia cero basado en la prevención y protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los clientes;

16. Destaca que la prostitución y la explotación sexual de menores es cada vez mayor, también a través de las redes sociales, en las que con frecuencia se utiliza el engaño y la intimidación;

17. Atrae la atención sobre el fenómeno de la prostitución de menores, que no es lo mismo que acoso sexual, y que se debe a situaciones económicas difíciles o a la falta de cuidados por parte de los padres;

18. Hace hincapié en la necesidad de medidas eficaces que permitan dedicar una especial atención a la extracción de los menores prostituidos de los llamados mercados de la prostitución, a impedir su entrada en ellos y a centrarse en actividades contrarias a los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo;

19. Considera que la compra de servicios sexuales de personas menores de 21 años que ejercen la prostitución debe constituir un delito, en tanto que los servicios ofrecidos por estas personas no deben ser punibles;

20. Atrae la atención sobre el fenómeno del «patrocinio», que implica la prostitución de mujeres menores de edad o que acaban de alcanzar la mayoría de edad a cambio de productos de lujo o pequeñas cantidades de dinero que constituyen una fuente de financiación para cubrir los gastos diarios o los gastos relacionados con la educación;

21. Recuerda a los Estados miembros que la educación desempeña un importante papel en la prevención de la prostitución y la delincuencia organizada asociada a esta actividad, y recomienda, por lo tanto, que en las escuelas se lleven a cabo campañas educativas especiales de prevención y concienciación adaptadas a la edad de los participantes, así como que la educación sobre la igualdad sea un objetivo fundamental en el proceso de educación de los jóvenes;

22. Atrae la atención sobre el hecho de que la publicidad de servicios sexuales en los periódicos y medios de comunicación sociales puede ser un modo de apoyar la trata de personas y la prostitución;

23. Atrae la atención sobre el papel creciente que desempeñan Internet y las redes sociales en la captación de prostitutas nuevas y jóvenes por las redes de trata de seres humanos; pide que se organicen campañas de prevención, también en Internet, teniendo en cuenta los blancos vulnerables de esas redes de trata de seres humanos;

24. Atrae la atención sobre algunos efectos, en su mayoría negativos, de la producción de los medios de comunicación de masas y la pornografía, especialmente en internet, en la creación de una imagen desfavorable de la mujer, que puede tener como efecto el desprecio de la personalidad humana de la mujer y su presentación como una mercancía; advierte de que la libertad sexual no debe interpretarse como una licencia para despreciar a las mujeres;

25. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución afecta a la percepción de los jóvenes

de la sexualidad y de la relación entre hombres y mujeres;

26. Subraya que no debe penalizarse a las personas que ejercen la prostitución y pide a todos los Estados miembros que deroguen la legislación represiva contra las personas que ejercen la prostitución;

27. Insta a los Estados miembros a que se abstengan de penalizar a las personas que ejercen la prostitución y elaboren programas para ayudar a las personas que ejercen la prostitución/trabajadores sexuales a abandonar la profesión si así lo desean;

28. Cree que la reducción de la demanda debe formar parte de una estrategia integrada contra la trata en los Estados miembros;

29. Considera que una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de género es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y Noruega (el denominado modelo nórdico), que se está estudiando en diversos países europeos, en el que el delito lo constituye la compra de servicios sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución;

30. Subraya que la prostitución es un problema transfronterizo, y que los Estados miembros deben asumir la responsabilidad de luchar contra la compra de servicios sexuales fuera de su territorio;

31. Pone de relieve que algunos datos confirman el efecto disuasorio del modelo nórdico sobre la trata de seres humanos hacia Suecia, donde la prostitución y la trata no han aumentado, y que la población apoya cada vez más dicho modelo, especialmente los jóvenes, lo que demuestra que la legislación ha provocado un cambio en la actitud;

32. Reconoce los resultados de un reciente informe gubernamental en Finlandia, en el que se pide la total penalización de la compra de sexo, puesto que el planteamiento finlandés, que penaliza la compra de servicios sexuales de víctimas de trata, ha demostrado que es ineficaz en la lucha contra la trata;

33. Cree que la legislación brinda la oportunidad de aclarar cuáles son las normas aceptables en la sociedad y crear una sociedad que refleje dichos valores;

34. Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos;

35. Condena todo intento o discurso político basado en la idea de que la prostitución puede ser una solución para las mujeres migrantes en Europa;

36. Insta, por tanto, a los Estados miembros a que otorguen a la policía y a las autoridades competentes de los locales donde se ejerce la prostitución, de conformidad con la legislación nacional, el derecho a acceder a dichos locales y efectuar controles aleatorios;

37. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y herramientas necesarios para combatir la trata y la explotación sexual y para reducir la prostitución, como violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de las menores de edad, y de la igualdad de género;

38. Pide a los Estados miembros que transpongan en la legislación nacional lo antes posible, en especial en lo que respecta a la protección de las víctimas, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JI del Consejo;

39. Insta a la Comisión a que evalúe el impacto que el marco jurídico europeo, diseñado para acabar con la trata de personas con fines de explotación sexual, ha tenido hasta la fecha, realice nuevas investigaciones sobre los modelos de prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual así como sobre el elevado nivel de turismo sexual en la UE, con especial referencia a los menores, y promueva el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros;

40. Hace hincapié en que la Comisión debe seguir financiando proyectos y programas para luchar contra la trata de personas y la explotación sexual;

41. Insta a los Estados miembros a que diseñen y apliquen políticas sobre trata de personas, explotación sexual y prostitución y velen por que todas las partes implicadas, como ONG, policía y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, así como los servicios sociales y médicos, reciban apoyo, participen en el proceso de toma de decisiones y cooperen;

42. Reconoce que a una inmensa mayoría de las personas que ejercen la prostitución les gustaría abandonarla, pero se sienten incapaces de hacerlo; destaca que estas personas necesitan ayuda adecuada, particularmente asistencia social y psicológica, para escapar de las redes de explotación sexual y de las dependencias a menudo asociadas a éstas; propone, por consiguiente, que las autoridades competentes establezcan programas que ayuden a las personas a abandonar la prostitución, en estrecha colaboración con las partes interesadas;

43. Destaca la importancia de una formación adecuada de los servicios de policía y del personal del sistema judicial en general en los distintos aspectos de la explotación sexual, entre ellos la dimensión de género y la inmigración, y exhorta a los Estados miembros a que insten a las autoridades policiales a cooperar con las víctimas y a alentarlas a que testifiquen, a fomentar la existencia de servicios especializados dentro de la policía y a emplear a mujeres policía; insiste en la cooperación en materia judicial entre Estados miembros para luchar mejor contra las redes de trata de seres humanos en Europa;

44. Atrae la atención de las autoridades nacionales sobre el impacto de la crisis económica en el creciente número de mujeres y mujeres menores de edad, incluidas mujeres migrantes, que se ven obligadas a ejercer la prostitución;

45. Señala que los problemas económicos y la pobreza son las principales causas de la prostitución entre las mujeres jóvenes y las mujeres menores de edad, y que las estrategias de prevención específicas en materia de género, las campañas nacionales y europeas específicamente dirigidas a las comunidades socialmente excluidas y a las que se encuentran en situación de creciente vulnerabilidad (como las personas con discapacidad y los jóvenes que se encuentran en el sistema de protección infantil) y las medidas para reducir la pobreza y aumentar la concienciación entre los compradores y los proveedores de servicios sexuales, así como compartir buenas prácticas, son fundamentales para combatir la explotación sexual de las mujeres y las mujeres menores de edad, especialmente entre los migrantes; recomienda que la Comisión designe una «Semana europea de lucha contra el tráfico de seres humanos»;

46. Hace hincapié en que la exclusión social es un factor fundamental que contribuye al aumento de la vulnerabilidad de las mujeres y las mujeres menores de edad desfavorecidas a la trata de personas; destaca asimismo que la crisis económica y social ha provocado desempleo, dando lugar a que las mujeres más vulnerables, incluidas las que se encuentran más arriba en la escala social, empiecen a ejercer la prostitución/entren en el negocio del sexo, con objeto de superar la pobreza y la exclusión social; insta a los Estados miembros a que aborden los problemas sociales subyacentes que obligan a hombres, mujeres y niños a ejercer la prostitución;

47. Exhorta a los Estados miembros a financiar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno con apoyo y estrategias de éxito, prestar servicios sociales innovadores a las víctimas de trata o de explotación sexual, incluidos migrantes y personas indocumentadas, evaluar sus necesidades y riesgos individuales con objeto de prestar asistencia y protección adecuadas y a aplicar políticas —con un enfoque holístico y mediante los distintos servicios de policía, inmigración, sanidad y educación— destinados a ayudar a las mujeres y los menores vulnerables a abandonar la prostitución, al tiempo que velan por que dichos programas dispongan de un fundamento jurídico y de la financiación necesaria para alcanzar este objetivo; insiste en la importancia del seguimiento psicológico y en la necesaria reinserción social de las víctimas de explotación sexual; destaca que este proceso requiere tiempo, así como el desarrollo de un plan de vida que constituya una alternativa creíble y válida para las personas que ejercían previamente la prostitución;

48. Destaca que son necesarios más análisis y pruebas estadísticas para juzgar qué modelo es más eficaz para luchar contra la trata de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual;

49. Insta a los Estados miembros a que evalúen tanto los efectos positivos como negativos que la penalización de la compra de servicios sexuales tiene en la reducción de la prostitución y la trata de personas;

50. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que establezcan políticas de prevención específicas en materia de género en los países de origen de las personas prostituidas como consecuencia de trata de seres humanos, dirigidas tanto a los compradores de servicios sexuales como a mujeres y menores, mediante sanciones, campañas de concienciación y educación;

51. Solicita a la UE y a los Estados miembros que adopten medidas para desalentar la práctica del turismo sexual dentro y fuera de la UE;

52. Pide que el Servicio Europeo de Acción Exterior adopte medidas para poner fin al ejercicio de la prostitución en zonas de conflicto en las que estén presentes tropas de la UE;

53. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

En nuestro país, la prostitución, es abastecida en gran medida por la Trata de Personas. Ambas nacen antes que la Nación Argentina; así pues en el año 1797 una población de reclusas inglesas viajaba a una colonia penitenciaria de Australia, recalando en el Río de la Plata tras un motín a bordo del barco que las conducía; la mayoría de las mujeres se quedó en Buenos Aires.

La prostitución comenzó a ser legalizada en Argentina en el año 1875 al reglamentarse la actividad de los prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires; la ley local prohibía la actividad de las mujeres menores de 18 años, pero con una excepción "autorizar legalmente el ejercicio de la prostitución a niñas menores de edad si habían sido iniciadas tempranamente".

En la Argentina, y en Buenos Aires sobre todo, en ese momento había una mayor población de extranjeros que de nativos, y eran mucho más hombres que mujeres. La prostitución cundía y verdaderas mafias dominaban no sólo el negocio sino también la trata de blancas, eufemismo que por un lado esconde la crudeza de la compraventa de mujeres, pero por otro en un acto fallido- refiere a su analogía con la esclavitud. Proxenas de todo el mundo tenían en Buenos Aires, la Meca de la prostitución mundial.

Entre 1875 y mediados del siglo XX la reglamentación de la prostitución de parte del Estado era la política dominante, se ejercía bajo el control de los municipios y de la policía; al mismo tiempo las transformaciones sociales ante el avance de la modernidad, dará lugar a la Industria Nacional de la prostitución.

El dinero y el poder se entrelazaban como hoy en día, sobre este sucio negocio, y la tolerancia pasaba a ser complicidad y asociación en las utilidades.

Después de la desarticulación de la Zwi-Migdal (organización más poderosa de trata y explotación sexual), transformo la situación, sin que ello hubiera implicado la desaparición; así pues en enero del año 1935, en la ciudad de Buenos Aires por decreto municipal se cierran los prostíbulos; quedando tal solo la provincia en lugares disimulados en cafés, cabarets, restaurantes u hoteles céntricos.

En el mes diciembre del año 1936 se sanciona la ley 12.331 Ley de Profilaxis Venérea; prohíbe la existencia de locales para el ejercicio de la prostitución en todo el país y castiga a las personas que dirigen o son dueñas de estos establecimientos

Por cierto, respecto de la Ley 12.331, el Estado Argentino cambió de una concepción reglamentarista de la prostitución por una abolicionista debido a la proliferación de la trata de mujeres que se hizo más visible con el caso de mujeres traídas desde Polonia. En oportunidad en la que se sancionó la ley de profilaxis los artículos 15 y 17 fueron introducidos a partir de una propuesta realizada por el entonces senador Serrey por la provincia de Salta, en aquella ocasión dijo que su inclusión buscaba "la dignificación humana, de igualdad de los sexos, de verdadero feminismo, abolición de la más ominosa de todas las esclavitudes". Sostuvo que el propósito era erradicar "uno de los males más graves que derivan la prostitución oficializada... el desarrollo de trata de blancas", que la reglamentación de la prostitución y la consecuente tolerancia eran "las causas principales de la trata de blancas, la degeneración del hombre y la esclavitud de la mujer". Finalmente para dejar más en claro aún, cuáles eran las razones que abonaban las prescripciones que pretendía agregar el proyecto, señaló "la discusión entre abolicionistas y reglamentaristas basadas en razones profilácticas no puede subsistir porque hay otros motivos superiores que invocar". La iniciativa y propuesta del entonces senador por Salta fue apoyada unánimemente por sus colegas por ambas cámaras y así paso a integrar el texto de la ley.

En nuestro país desde la reforma constitucional del año 1994, disponemos de normas jurídicas internacionales sobre derechos humanos contempladas en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional que tienen jerarquía internacional como "La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 4); Convención Interamericana de Derechos Humanos (artículo 6); el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (artículo 8);

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 6); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer (09/06/1994-ratificada por ley 24.632) y el artículo 34 y 35 de la Convención de los Derechos del Niño; contemplan derechos que son Constitucionales de jerarquía superior a las leyes infra legales.

La nueva redacción del inciso 22 perteneciente al artículo 75 de la Constitución Nacional modifica radicalmente el sistema de fuentes del orden jurídico Argentino. El reconocimiento de la jerarquía constitucional de manera directa a once instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la posibilidad de otorgar igual jerarquía en el futuro a otros "tratados y convenciones" sobre la misma materia consagran una clara apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos.

Si bien, desde sus orígenes, nuestro ordenamiento permitía la incorporación de normas convencionales internacionales mediante la regulación constitucional del régimen de los tratados internacionales, la reforma de 1994 establece una jerarquía hasta entonces inédita en nuestro medio respecto de las citadas normas.

En efecto, no es posible, legalizar o reglamentar una actividad que se encuentra prohibida en Convenciones internacionales de jerarquía constitucional, ya que imponen deberes hacia los Estados que es el de prohibir y castigar la explotación sexual ajena por resultar violatoria de derechos constitucionales.

También podemos mencionar, la "Convención Sobre Eliminación de Toda las Formas de Discriminación Contra la Mujer", en su preámbulo reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; define en el artículo 1º que "la expresión "discriminación de la Mujer" denotara toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Dispone en el artículo seis (6): "que los Estados Partes tomaran todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer".

Por otra parte la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Contra la Mujer- Convención de Belén Do , establece en su preámbulo que "el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales; que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres; que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual, social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida y la de adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Para los efectos de esta convención debe entenderse como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado., disponiendo en el artículo dos (2) que incluye en el concepto de violencia a la física, psicológica y sexual comprendiendo, como formas de violencia a la trata de personas y a la prostitución; estableciéndose entre las obligaciones de los estados partes la de "incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.

Deviene indispensable adecuar la normativa local a nuestra Constitución Nacional que incorpora nuevos paradigmas de género, a cuyo fin se torna necesario derogar esta norma que penaliza a personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Por otra parte es menester agregar que la última parte del artículo 45 del Código de Faltas resulta contradictorio con la legislación Nacional, por cuanto ordena el examen venéreo obligatorio de los infractores a esta disposición, como así mismo su tratamiento curativo, contradiciendo la ley 23.798 (ley

Sida). Según el artículo 6 de dicha norma y su reglamentación (decreto 1244/91), no pueden obligarse a una persona a efectuarse el análisis de VIH.

No podemos hablar de igualdad entre el hombre y mujer, si existen normas que discriminan grupos sociales sobre la base de estereotipos, permitiendo el debate infundado respecto de “prostitución forzada o libre” que soslaya un problema mucho más grave que es la violación de derechos humanos esenciales.

Por otro lado, el presente proyecto pretende penalizar al prostituyente, llamado erróneamente “cliente” por cuanto estamos convencidos que quienes pagan por sexo generan la explotación sexual, y ésta a su vez la demanda de Trata de Personas. Lamentablemente el prostituyente siempre ha sido invisibilizado en el sistema prostibulario ya que no existen antecedentes en nuestro país de que se hayan implementado acciones que apunten a este actor esencial de la explotación.

Como antecedentes a nivel internacional podemos mencionar que la obligación de desalentar la demanda está contemplada en el Convenio Para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros instrumentos internacionales que han sido suscripto por Nuestro País.

Entre los Países que han avanzado hacia la penalización del cliente prostituyente por el uso sexual de personas, se encuentran Suecia, Islandia, Noruega y Francia. Y debatiendo sobre este tema: Reino Unido, Sudáfrica, Corea del Sur, Israel, y el Parlamento Escocés.

La ley sueca es un enfoque innovador que se centra en la demanda de la prostitución, esto permitió hacer un giro de perspectiva al afirmar que el pago por el uso sexual es una cuestión de violencia de género. Este país encomendó en el año 2008 una investigación para evaluar la aplicación de la legislación en la práctica y sus efectos en la prostitución y la trata de personas con fines sexuales en este País. El resultado de esta investigación dio cuenta de la disminución de la prostitución en algunos lugares de Suecia como así mismo un cambio de actitud respecto de las personas en situación de prostitución mudando el estigma hacia los clientes prostituyentes.

Por otra parte, merece también especial atención la resolución dictada por el parlamento Europeo en el mes de febrero del año 2014 alentando a los Estados partes a que se sancionen a quienes pagan por sexo y a la implementación de una campaña de sensibilización de los hombres.

Sobre esta cuestión podemos mencionar, también el informe de la relatora especial sobre los Derechos Humanos de las víctimas de la trata de personas, señora Sigma Huda, para el Consejo Económico y Social de la ONU:

“Los usuarios de la prostitución, los propietarios de esclavos o los consumidores de productos fabricados por víctimas de trata son responsables de generar la demanda que propicia la trata de personas”.

Hay estudios que inclusive plantean el supuesto conocimiento, o no, por parte del usuario de la Prostitución sobre la condición de las personas prostituidas. Ella también establece que los usuarios de la prostitución son incapaces de diferenciar entre las personas prostituidas que han sido víctimas de las actividades ilícitas determinadas como trata de personas. Los estudios empíricos lo demuestran desde este punto.

“El desconocimiento que tiene el cliente de las circunstancias reales que soportan las víctimas, su falta de concientización e incluso su indiferencia son factores estimulantes para el mercado de sexo que se nutre de las víctimas de trata”.

También se cita un importante estudio, el de Anderson O’Connell, en el que se establece que entre el 77 y el 100 por ciento de los usuarios de prostitución, en diversos países, era plenamente consciente de que las mujeres estaban siendo víctimas de trata con fines de su prostitución y que, pese a ese conocimiento, continuaron involucrados en el uso de las personas prostituidas.

Los usuarios de prostitución son a menudo totalmente incapaces de hacer distinciones porque están motivados a construir una ficción de mutualidad en relación a sus encuentros con prostitutas.

Luego continúa relatando que, en primer lugar, hay que señalar que todas las formas de trata vulneran Derechos Humanos fundamentales y son fuente de preocupaciones acuciantes en el plano mundial.

“A diferencia de los compradores de productos de consumo fabricados por trabajadores que han sido víctimas de la trata, el usuario de la prostitución crea la demanda, y al acoger a la persona traficada forma, a la vez, parte de la cadena de la trata. Esto es sumamente importante: el usuario de la prostitución crea la demanda y, a la vez, forma parte de la cadena de la trata”.

“Al participar de una actividad de sexo comercial, el usuario está infligiendo a la víctima de la trata un daño adicional y sustancial equivalente a la violación, que trasciende los métodos nocivos empleados por otras personas para lograr la entrada de dicha víctima en la prostitución o la continuidad en ella”.

“A la vez, plantea que existen muy buenas razones para creer que muchos usuarios son conscientes de que las mujeres y los niños prostituidos, cuyos servicios utilizan, son sometidos a los métodos ilícitos descriptos en el Protocolo de Palermo pero que, pese a ello, hay normas culturales muy extendidas que fomentan el empleo de personas prostituidas”.

Como cuestión normativa, es evidente que la responsabilidad de la existencia del mercado de la trata con fines sexuales recae sobre los usuarios, los traficantes y las condiciones económicas, sociales, jurídicas, políticas, institucionales y culturales que propicia la opresión de mujeres y niños en todo el mundo.

“Está muy discutido si a través de nuestra legislación penal se puede sancionar o no a los usuarios. Al respecto, se ha supuesto erróneamente que dicha perspectiva no encaja con el uso del Derecho Penal para castigar a los usuarios de servicios sexuales. Esta conclusión sólo puede basarse en

la premisa de que los varones tienen el Derecho Humano a utilizar a personas prostituidas, la cual debería rechazarse. Los hombres no tienen derecho a usar a estas personas". Finalizó la Relatora (20 de febrero de 2006 E/CN.4/2006/62)

A nivel Nacional podemos mencionar el proyecto de ley de penalización del cliente de la Diputada Marcela Rodríguez (1509/D/2013), antecedente primordial para la elaboración de este proyecto.

Siendo coautores colegas de distintas corrientes políticas Rodríguez Marcela Virginia Recalde Héctor Pedro Storani María Luisa, Garnero Estela Ramona, Iturrasape Nora Graciela, Linares María Virginia - Riestra Antonio Sabino, Caselles Graciela María, Comelli Alicia Marcela, Chieno María Elena Petrona, Lotto Inés Beatriz, Bedano Nora Esther, González Nancy Susana, Leverberg Stella Maris, Nebreda Carmen Rosa, lo que evidencia el compromiso asumido ante esta problemática en la que se ven afectados los Derechos Humanos.

A continuación se transcribe:

"El objeto del presente proyecto es adoptar medidas necesarias para la eliminación de la explotación sexual. La explotación sexual, en todo el mundo, es una de las mayores violaciones a los derechos humanos fundamentales contra mujeres, niños y niñas -así como personas transgénero, travestis e intersex, que implica un atentado a la integridad sexual, a la dignidad y a la libertad de la persona, al mismo tiempo que una manifestación de la desigualdad entre los sexos y de las diversas formas de violencia contra las mujeres en los términos de los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país. La violación de los derechos humanos de las personas explotadas sexualmente es causa y consecuencia de estos delitos.

Así, constituye un obstáculo para el pleno goce y ejercicio de otros derechos y garantías contemplados por dichos instrumentos internacionales de derechos humanos, la mayoría de los cuales tienen jerarquía constitucional conforme lo prescripto por el art. 75 inc 22 de la Constitución Nacional.

Esta iniciativa, por ende, se basa en la obligación del estado de obrar con la debida diligencia de prevenir y sancionar la violación de derechos que implica la explotación sexual, tanto como manifestación de violencia contra las mujeres y niñas -en su abrumadora mayoría, además de personas trans-, como de violación a la igualdad sexual.

Transcribo, parcialmente, aquí lo que he expuesto en "Tramas de la Prostitución y la Trata con Fines de Explotación Sexual" (1), publicado en Investigaciones, Corte Suprema de Justicia de la Nación, en septiembre de 2012:

"Pretendo examinar la situación de quienes entran a la prostitución, las personas que son prostituidas: la mayoría casi absoluta mujeres y niñas; de edades cada vez más y más tempranas (2); de grupos raciales desfavorecidos; con necesidades económicas extremas; sin hogar, ni techo ni lugar para refugiarse; o con una historia previa de incesto (3), de abuso físico o sexual - usualmente cometido por algún familiar o allegado-. (4)

Dentro de la prostitución, las mujeres llegan a tener sexo con cientos de hombres por mes, miles de hombres por año, desconociendo las condiciones a las que estarán sometidas, y sin posibilidad de controlar tales condiciones.(5) Mientras son prostituidas, son sometidas a nuevos abusos, violaciones (6), golpizas, y hasta torturas. Atadas a una situación de deuda económica permanente con sus proxenetas o tratantes. Muchas son arrestadas o privadas de libertad y nuevamente sometidas a agresiones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad. Están sujetas a la infección de enfermedades de transmisión sexual, en especial VIH-SIDA por haber tenido que ceder al uso sexual sin preservativo, sea por coerción o, paradójicamente, por necesidades económicas de subsistencia. Pueden ser convertidas en adictas a las drogas (7) o al alcohol con la finalidad de mantener el control y su situación de dependencia. (8) Llegan a sufrir procesos de disociación por los cuales se desconectan de su realidad emocional y consiguen que su cuerpo se aleje, desvinculándose de la realidad a la que están sometidas.(9) (10)

Melissa Farley desarrolló una investigación en nueve países (Canadá, Colombia, Alemania, México, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Estados Unidos y Zambia), respecto de la historial de violencia física y sexual de 854 personas contemporáneamente o recientemente en prostitución. Entre los hallazgos, predominó el carácter multi-traumático de la prostitución: 71% de las personas prostituidas fueron físicamente atacadas en prostitución; 63% fueron violadas; 89% respondieron que querían escapar de la prostitución, pero no tenían otra forma de sobrevivir. Un total de 75% habían estado sin hogar en algún momento de sus vidas; 68 % cumplían los criterios establecidos para Trastorno de Stress Postraumático (PTSD sus siglas en inglés). La severidad de los síntomas del Trastorno de Stress Postraumático estaba fuertemente asociada al número de diferentes tipos de violencia física y sexual sufridos a lo largo de su vida. (11) (12)

Los síntomas de stress postraumático de las participantes de este estudio estaban en un rango similar a las de los veteranos de guerra que buscan tratamientos, las mujeres golpeadas que requieren de refugios, las sobrevivientes de violación, y las personas refugiadas por tortura infringida por el estado. Estos datos se repiten en otras investigaciones similares. (13)

Otros estudios, también, indican que las mujeres prostituidas, sufren lesiones cerebrales como consecuencia de las experiencias traumáticas vividas, palizas, puñetazos, patadas, estrangulamientos, golpes en la cabeza con objetos pesados, etc., similares a aquellas experiencias documentadas a través de testimonios de sobrevivientes de la tortura o de mujeres maltratadas, como adelantáramos.(14)

Conforme los datos brindados por Farley (15), el Comité Especial Canadiense sobre Pornografía y Prostitución concluyó que la tasa de mortalidad de las mujeres y niñas prostituidas era 40 veces más alta que la del promedio de la población.(16) La información aportada en un estudio respecto de tasas de suicidio de mujeres en prostitución muestra que el 75% de mujeres "escort" en prostitución habían intentado suicidarse y que, las mujeres prostituidas componen el 15% de todos los suicidios reportados por los hospitales." (17) (18)

"La prostitución es consecuencia de la falta de elecciones, la última disyuntiva de aquellas

personas con menor cantidad de alternativas, o que directamente carecen de cualquier otra opción de vida real. La coerción subyacente, ya sea de índole física, económica, como de otro tipo, conduce a un contexto de abusos sexuales a cambio de dinero, y en el que la mayor parte de ese dinero va a otras personas... De acuerdo con los testimonios orales históricos recogidos de las mujeres en prostitución, muy pocas de ellas realmente "eligen entrar a la prostitución". (19)

"Distintas autoras han indicado que cuando se le pregunta a una persona en prostitución "¿qué necesita?", el 89% dirá: "dejar la prostitución". (20) Sin embargo, sienten que no pueden o no saben cómo hacerlo. Dado el limitado número de estrategias y políticas públicas para la salida de la prostitución, las mujeres prostituidas suelen estar atrapadas en su situación. Las distintas formas de violencia a las que son sometidas, entre las cuales se destacan los castigos físicos y amenazas que les dirigen a ellas y sus familias en caso de querer dejar la prostitución, así como los que presencian cuando sus compañeras pretender escapar, presentan un entorno atemorizante. En muchos casos, carecen de confianza, de iniciativa, o de los recursos necesarios para poder dejar la prostitución. En general se requiere de una cantidad de intentos y ciclos de entrada y salida de la prostitución debido a las barreras que están presentes en cada momento de estos procesos de salida (factores individuales, relacionales, estructurales y sociales). (21)"

Quienes pagan por el uso sexual de las mujeres generan la explotación sexual y ésta, a su vez, la demanda de trata de personas -aunque esta explotación no se limita a las víctimas de trata sino que también afecta a mujeres prostituidas reclutadas a través de otras estrategias. Sin embargo, son los más invisibilizados en el sistema prostibulario, gozan de anonimato, y pocas políticas públicas han apuntado a este factor clave, por considerar que "está dentro de la naturaleza masculina", "que es parte del deseo masculino", "insaciable, instintivo e incontrolable", comprar el uso sexual de mujeres.

La finalidad de la penalización de la conducta de "comprar" a una persona para su uso sexual no se basa en una simple concepción punitivista ni constituye una intromisión en la vida privada de las personas amparada por el artículo 19 de la Constitución Nacional. La "compra" de una persona para su uso sexual implica un daño para esta la libertad e integridad sexual de esta persona, así como para su libre determinación. Es sencillamente, una forma más de explotación sexual. Por cierto, la utilización de la vía penal en contra de los explotadores se complementa con otras iniciativas legislativas presentadas que garantizan políticas públicas concretar para la salida de la prostitución, en particular mediante la transferencia directa de ingresos.

En palabras de Catharine A. MacKinnon:

"Todo esquema adecuado para promover los derechos humanos de las personas prostituidas debe tener tres elementos: despenalizar y brindar apoyo a las personas prostituidas, penalizar fuertemente a los compradores, y criminalizar eficazmente a los terceros que se benefician con este negocio. Estos son los pasos claves para desbloquear la situación de discriminación enquistada a la que están sometidas las mujeres prostituidas sobre la base de la pobreza, la casta, la raza o la nacionalidad a la que pertenecen, en combinación con su género." (Véase Catharine A. MacKinnon, "Trata, Prostitución y Desigualdad", en Discriminación y Género: Las formas de la violencia. Defensoría General de la Nación. Buenos Aires, 2011.

La presente iniciativa, asimismo, recoge parcialmente, y en lo pertinente, el proyecto contenido en los Expedientes 5458-D- 2010 y 1489-D-2012 y, en el Dictamen de Minoría de la Orden del Día 1812 de 2012 a cuyos fundamentos, para mayor abundancia nos remitimos y reproducimos aquí parcialmente, como adelantáramos:

Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicable

La obligación de desalentar la demanda está presente en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949 (22), en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos que ha suscripto el estado argentino.

En particular, el Convenio de 1949 establece:

ARTÍCULO 1º.- Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra:

- 1) Concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona;
- 2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona.

Artículo 2.-

Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que:

- 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento;
- 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (23) en su artículo 6 prescribe que "Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer."

Por su parte, la Recomendación Nº 19 (24) dictada por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (25) sobre La violencia contra la Mujer, en relación con el mencionado artículo 6 de la Convención (CEDAW), y específicamente relacionado con el proyecto que propulsamos, la Recomendación General 19 afirma que:

"13. En el artículo 6 se exige a los Estados que adopten medidas para suprimir todas las formas

de trata y explotación de la prostitución de la mujer.

14. La pobreza y el desempleo aumentan las oportunidades de trata. Además de las formas establecidas, hay nuevas formas de explotación sexual, como el turismo sexual, la contratación de trabajadoras domésticas de países en desarrollo en los países desarrollados y el casamiento de mujeres de los países en desarrollo con extranjeros. Estas prácticas son incompatibles con la igualdad de derechos y con el respeto a los derechos y la dignidad de las mujeres y las ponen en situaciones especiales de riesgo de sufrir violencia y malos tratos.

15. La pobreza y el desempleo obligan a muchas mujeres, incluso a muchachas, a prostituirse. Las prostitutas son especialmente vulnerables a la violencia porque su condición, que puede ser ilícita, tiende a marginarlas. Necesitan la protección de la ley contra la violación y otras formas de violencia.

16. Las guerras, los conflictos armados y la ocupación de territorios conducen frecuentemente a un aumento de la prostitución, la trata de mujeres y actos de agresión sexual contra la mujer, que requiere la adopción de medidas protectoras y punitivas."Entre sus Recomendaciones concretas a los Estados en esta materia, el Comité afirma:

"24. A la luz de las observaciones anteriores, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda que:

g) Se adopten medidas preventivas y punitivas para acabar la trata de mujeres y la explotación sexual.

h) En sus informes, los Estados Partes describan la magnitud de todos estos problemas y las medidas, hasta disposiciones penales y medidas preventivas o de rehabilitación, que se hayan adoptado para proteger a las mujeres que se prostituyan o sean víctimas de trata y de otras formas de explotación sexual. También deberá darse a conocer la eficacia de estas medidas.

i) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, la indemnización inclusive."

En el mismo orden de ideas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención De Belém Do Pará" (26), señala "que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades".

En cuanto a las obligaciones asumidas por el Estado al suscribir dicha Convención, la República Argentina se comprometió, conforme al artículo 7) a:

"Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y

h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención."

Si bien existe una gran variedad de instrumentos jurídicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas que pueden ser aplicadas a los fines de combatir la explotación de las personas, especialmente las mujeres y los niños, no se había aprobado ningún instrumento universal que abordara los diferentes aspectos de la trata de personas, hasta la adopción del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.(27)

En primer lugar, a los fines de su aplicación en el ámbito local, debe tenerse en consideración, el carácter complementario señalado de ambos instrumentos, por lo cual su interpretación debe ser realizada en forma sistemática y armoniosa, prevaleciendo aquella interpretación más beneficiosa a la protección de los derechos humanos de las personas afectadas por la trata, y respetando el principio de no regresividad. Esto es, toda vez que la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional establezca una norma que brinde una mayor o más amplia protección debe estarse a la aplicación de dicha norma, sin perjuicio de la especificidad del Protocolo de Palermo que la complementa.

Los fines del citado Protocolo de acuerdo con su Artículo 2) son:

"a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los

niños;

b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos;
y

c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines."

Debemos destacar que entre las definiciones contempladas en su artículo 3 relativas al concepto de "trata de personas", el Protocolo incluye también, en lo que aquí respecta, "otras formas de explotación sexual".

Reviste especial importancia para el proyecto que proponemos, el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Sra. Sigma Huda "Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género" presentado ante el Consejo Económico y Social, el 20 de febrero de 2006. (28) Por tal motivo, reproduciremos las consideraciones más significativas de dicho informe en lo que respecta a esta iniciativa.

En cuanto a la concepción de la prostitución como una forma de explotación sexual y los supuestos en que puede ser considerada ser trata, la Relatora Especial afirmó:

"42. La mayor parte de la prostitución, tal y como se practica actualmente en el mundo, suele reunir los requisitos para que pueda ser considerada trata. Es raro dar con un caso en que los motivos que llevan a una persona a la prostitución, y las experiencias de esa persona dentro de la prostitución, no incluyan como mínimo un abuso de poder y/o un abuso de vulnerabilidad. En este contexto, poder y vulnerabilidad deben entenderse también desde la óptica de las disparidades basadas en el sexo, la raza, la etnia y la pobreza. Dicho de manera sencilla, el camino que lleva a la prostitución y a ese estilo de vida una vez que se ha caído en ella, raramente se caracterizan por el pleno ejercicio de derechos de las víctimas o la obtención de oportunidades adecuadas.

43. Por consiguiente, sobre los Estados Partes que han legalizado la industria de la prostitución recae la pesada responsabilidad de velar por que las condiciones asociadas a la práctica de la prostitución dentro de sus fronteras no tengan que ver con los medios ilícitos descritos en el apartado a) de la definición del Protocolo, con objeto de que sus regímenes legales de prostitución no sean simples instrumentos de perpetuación de una trata extendida y sistemática. Tal y como atestiguan las condiciones imperantes en el mundo, los Estados Partes que mantienen una prostitución legalizada están lejos de cumplir esta obligación.

48. El Protocolo define la trata desde una perspectiva extremadamente amplia que engloba probablemente todas las manifestaciones actuales de la prostitución. Los términos "trabajo sexual", "trabajador del sexo" y "cliente" sugieren de manera equivocada que la prostitución en su práctica actual no entra por lo general en la categoría de trata. La Relatora Especial cree que esto es síntoma de una visión profundamente equivocada de la práctica actual de la prostitución en todo el mundo.

Gracias a su experiencia e investigaciones como titular de su mandato, la Relatora Especial considera evidente que la mayor parte de la prostitución implica uno o varios de los medios ilícitos señalados en el apartado a) del artículo 3 del Protocolo, y que por lo tanto constituye trata. (29)

57. Los usuarios de la prostitución, los propietarios de esclavos o los consumidores de productos fabricados por víctimas de la trata, entre otros, son responsables de generar la demanda que propicia la trata de personas. Muchos de estos personajes también encajan en la definición de "traficante" pero el solapamiento entre ambas categorías no es absoluto ya que, si bien todo traficante forma parte de la demanda (ya que fomenta la explotación que da origen a la trata), a la inversa no ocurre necesariamente lo mismo.

60. No obstante, no son muchas las razones que inducen a pensar que ocurriría lo mismo en el mercado del sexo y, por tanto, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 9, los Estados Partes están obligados a desalentar de forma general la prostitución. Los usuarios de la prostitución son incapaces de diferenciar entre las personas prostituidas que han sido víctimas de las actividades ilícitas descritas en el párrafo a) del artículo 3 del Protocolo y las que no lo han sido, o carecen de la motivación necesaria para distinguirlos. Los estudios empíricos (30) y las respuestas al cuestionario conjunto corroboran esta conclusión. Como se señaló en una respuesta no gubernamental, "el desconocimiento que tiene el cliente de las circunstancias reales que soportan las víctimas, su falta de concienciación al respecto o incluso su indiferencia" son factores estimulantes para el mercado del sexo que se nutre de víctimas de la trata".

De particular interés encontramos las expresiones vertidas por la Relatora Especial sobre la demanda y la trata con fines sexuales, que pasamos a reproducir:

"61. A continuación la Relatora Especial se centrará en la trata con fines sexuales desde la perspectiva de la demanda, especialmente, la generada en parte por los usuarios de la prostitución

62. En primer lugar, hay que señalar que todas las formas de trata vulneran derechos humanos fundamentales y son fuente de preocupaciones acuciantes en el plano mundial; al centrarse exclusivamente en la trata con fines sexuales, la Relatora Especial no pretende en absoluto insinuar lo contrario.

63. Sin embargo, existen varios motivos que justifican que se limite a este tipo de trata y, en particular, a la función de los usuarios de servicios sexuales en la creación de demanda:

- Si bien mediante la trata se violan de múltiples formas los derechos humanos de las mujeres y los niños, la trata con fines sexuales constituye una modalidad en la que se vulneran los derechos de estas personas precisamente porque son mujeres y niños;

- A diferencia de los compradores de productos de consumo fabricados por trabajadores que han sido víctimas de la trata, el usuario de la prostitución crea la demanda y (al acoger a la persona traficada) forma a la vez parte de la cadena de la trata;

- Al participar en una actividad de sexo comercial, el usuario está infligiendo a la víctima de la

trata un daño adicional y sustancial equivalente a la violación que trasciende los métodos nocivos empleados por otras personas para lograr la entrada de dicha víctima en la prostitución o su continuidad en ella;

- Existen buenas razones para creer que muchos usuarios son conscientes de que las mujeres y los niños prostituidos cuyos servicios utilizan son sometidos a los métodos ilícitos descritos en el Protocolo y que, pese a ello, hay normas culturales muy extendidas que fomentan el empleo de personas prostituidas;

- Pocos motivos inducen a pensar que exista en todo el mundo una proporción significativa de las actividades de la prostitución en las que no se empleen uno o varios de los métodos ilegales enumerados en el Protocolo;

- El uso de la fuerza, las amenazas, la coacción, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad tienen una presencia tan fuerte en tantos aspectos de la actividad sexual no comercial, que es muy poco probable que un número elevado de usuarios de la prostitución se abstenga de utilizar esos servicios porque la persona que se prostituye haya sido víctima de dichos métodos ilegales;

- Es probable que incluso los usuarios mejor intencionados sean incapaces de discernir cuál es la diferencia entre las mujeres que han sufrido los métodos ilícitos descritos en el Protocolo y las que no (si las hubiere). (31)

65. Por definición, la prostitución aúna en una sola interacción dos formas de poder social (el sexo y el dinero): en ambas esferas (la sexualidad y la economía) el hombre ostenta sobre la mujer un gran poder de forma sistemática (32). En la prostitución, estas diferencias de poder se funden en un acto que asigna y reafirma a la vez la función social dominante del hombre subordinando socialmente a la mujer.

69. En un mundo que sigue llevando la impronta de la supremacía de los blancos y del dominio masculino, las mujeres y las niñas que sufren la opresión debido a su raza, nacionalidad, casta o color de piel son especialmente vulnerables a la explotación sexual. Los usuarios de la prostitución suelen aprovecharse de esta vulnerabilidad y, al hacerlo, abusan de su propia posición de relativo poder social sobre las víctimas de la trata.

74. Como cuestión normativa, es evidente que la responsabilidad de la existencia del mercado de la trata con fines sexuales recae sobre los usuarios, los traficantes, y las condiciones económicas, sociales, jurídicas, políticas, institucionales y culturales que propician la opresión de mujeres y niños en todo el mundo. Atribuir a las propias víctimas la responsabilidad de ser quienes impulsan el mercado sería una injusticia muy grave; tal afirmación equivale a culpar a las víctimas y constituye una nueva violación de sus derechos humanos."La Relatora Especial también se refirió a la perspectiva de derechos humanos a considerar en la materia:

"81. Para comenzar, la Relatora Especial desearía disipar una idea falsa muy habitual en relación con la naturaleza de un enfoque de derechos humanos en la trata. En algunos lugares, se ha supuesto erróneamente que en cierta manera dicha perspectiva no encaja con el uso del derecho penal para castigar a los usuarios de servicios sexuales. Esta conclusión sólo puede basarse en la premisa de que los varones tienen el derecho humano a utilizar a personas prostituidas. Esa premisa debería rechazarse: los hombres no tienen derecho a usar a estas personas. En algunos ordenamientos jurídicos, se ha concedido a los varones el derecho legal a valerse de personas prostituidas pero, como se señaló anteriormente, ese derecho puede estar directamente en conflicto con los derechos humanos de las personas que se prostituyen, que en su mayoría han sido objeto de los métodos ilegales descritos en el párrafo a) del Protocolo y, por tanto, son víctimas de la trata. Cuando los derechos humanos de dichas víctimas entren en conflicto con las prerrogativas legales de los usuarios de la prostitución, deben prevalecer los derechos de las primeras: eso es una verdadera perspectiva de derechos humanos en la trata con fines sexuales."En lo que aquí respecta, como objeto de la propuesta planteada por el presente proyecto, queremos destacar las consideraciones expresadas por la Relatora Especial sobre la penalización del uso de las personas prostituidas:

"83. La ley de Suecia que prohíbe la adquisición de servicios sexuales es una manifestación especialmente adecuada contra la demanda que propicia la trata ya que no sólo condena oficialmente el uso de personas prostituidas, sino que lo hace en un contexto que reconoce expresamente que la industria del sexo comercial tiene una naturaleza muy marcada por las diferencias de género: "Como ocurre con todas las normas, la ley [sueca] tiene una función normativa. Constituye una manifestación concreta y tangible de la creencia de que en Suecia ni las mujeres ni los niños están en venta. Elimina efectivamente el derecho de comprar mujeres y niños para que se prostituyan que los propios varones se han atribuido". (33)

88. Con arreglo al párrafo 5 del artículo 9, los Estados Partes han contraído la obligación de desalentar la demanda de la trata. La Relatora Especial considera que este deber puede cumplirse efectivamente mediante la penalización del uso de personas prostituidas y la aplicación de buena fe de estas disposiciones.

89. Aunque la penalización de una actividad no garantice que ésta dejará de realizarse, no cabe duda de que sirve de instrumento disuasivo claro y eficaz. Por disuadir se entiende "privar del valor, la confianza o la energía moral" (34). Así pues, la obligación de desalentar la demanda alude directamente al deber del Estado de llevar a cabo un proyecto normativo expreso para condenar la demanda que propicia la trata. Dado que la condena abierta de una conducta nociva constituye una de las funciones centrales del sistema de justicia penal, es lógico que se aliente a los Estados Partes a penalizar el uso de personas prostituidas con el fin de cumplir las obligaciones que han contraído con arreglo al párrafo 5 del artículo 9.

90. La Relatora Especial subraya que las sanciones penales aplicables a la industria del sexo comercial no deberían servir para penalizar a las mujeres y los niños víctimas de la trata. Las leyes y políticas internas que lo hacen contribuyen a exacerbar su vulnerabilidad y a que sean más susceptibles

de convertirse en víctimas de la trata con fines sexuales. Esta idea se mencionó precisamente en una respuesta al cuestionario relativa a un país específico: "Cuando se castiga a las mujeres que se prostituyen pero no a los usuarios de sus servicios, se genera la demanda de servicios sexuales".

91. La Relatora Especial condena las leyes y políticas que penalizan a las prostitutas, especialmente cuando no se imponen penas análogas a los que utilizan sus servicios. Las medidas adoptadas para acabar con la demanda deberían servir para que las víctimas de la trata no sean penalizadas ni sometidas a medidas de castigo, como la deportación, que las haría aún más vulnerables a otras violaciones de los derechos humanos y las expondría a ser nuevamente víctimas de esa práctica.

92. Se ha afirmado que la penalización, incluso aunque vaya dirigida únicamente contra los usuarios, puede tener el efecto no deseado de ocultar la prostitución exacerbando así la vulnerabilidad de las víctimas de la trata frente a los abusos de los derechos humanos. Sin embargo, es igualmente cierto que la legalización de la prostitución supone presentar los abusos de los derechos humanos como si fueran simplemente un trabajo legítimo, "ocultando" por tanto esas violaciones tan evidentes. Esta dinámica fue señalada por una ONG en su respuesta: "Si la prostitución es legal, las autoridades no vigilan la industria del sexo y así cada vez hay más víctimas que son atraídas y obligadas contra su voluntad a prestar servicios sexuales".

Por otra parte, queremos destacar aquí el Informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Consejo Económico y Social, que contiene los "Principios y Directrices Recomendados sobre los Derechos Humanos y la Trata de Personas". (35) Este instrumento contempla una serie de medidas de diversa índole a adoptar a los fines de cumplir cabalmente con las obligaciones contraídas por los Estados, aplicables a las distintas instancias de los poderes públicos.

En particular, reproducimos lo atinente específicamente a este proyecto "Directriz 7: Prevención de la trata de personas

Las estrategias que apunten a prevenir la trata de personas deben tener en cuenta que la demanda constituye una causa fundamental. Los Estados y las organizaciones internacionales deben también tener en cuenta los factores que aumentan la vulnerabilidad a la trata de personas, entre ellas la desigualdad, la pobreza y la discriminación y los prejuicios en todas sus formas. Una estrategia eficaz de prevención debe tener como base la experiencia adquirida e información fidedigna.

Los Estados, en colaboración con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y, cuando proceda, aprovechando los programas y las políticas de cooperación para el desarrollo, deberían considerar la posibilidad de:

1. Analizar los factores que crean demanda de servicios de comercio sexual y de trabajo en condiciones de explotación y adoptar firmes medidas legislativas, normativas y de otra índole para hacer frente a estos problemas.

2. Establecer programas que ofrezcan distintas maneras de ganarse la vida, entre ellos educación básica, capacitación y alfabetización, especialmente para mujeres y otros grupos que han estado tradicionalmente en situación de desventaja...." (36)

Pasando a realizar un análisis en particular de este valioso instrumento, debemos destacar que, en su nota al pie Nº 6, el Alto Comisionado aclara que "En el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (el Protocolo de Palermo) se define la trata de personas como "... la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como un mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos" (artículo 3 a). El Protocolo agrega que la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios precedentemente enunciados (artículo 3 c).".

Esto es, si bien el Protocolo no define expresamente la "compra" de una persona para su uso sexual, sin embargo, las definiciones contempladas en ese instrumento, tal como lo asevera el Alto Comisionado, establecen un piso "mínimo" que los países deben incorporar en su legislación local. Del mismo modo, se reconoce, que la explotación de la prostitución ajena no excluye, sino que, por el contrario, existen "otras formas de explotación sexual". Por tal motivo, la propuesta que aquí propulsamos pretende incluir esta forma de explotación sexual, mediante una figura conforme con las demás pautas establecidas a fin de abarcar casos de abuso de poder y situaciones de vulnerabilidad basadas en determinados factores de discriminación.

Cabe destacar que, entre los Principios recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas relativos a la prevención, se destacan:

- "4. Las estrategias que apunten a prevenir la trata de personas tendrán en cuenta que la demanda es una de sus causas fundamentales.

5. Los Estados y las organizaciones intergubernamentales se asegurarán de tener en cuenta en su acción los factores que aumenten la vulnerabilidad a la trata, entre ellos la desigualdad, la pobreza y la discriminación en todas sus formas."

Asimismo, la "Directriz 4: Establecer un marco jurídico adecuado

Se ha determinado que la falta de legislación específica o adecuada acerca de la trata de personas a nivel nacional constituye uno de los principales obstáculos en la lucha contra esa trata. Es imperiosa la

necesidad de armonizar las definiciones legales, los procedimientos jurídicos y la cooperación judicial en los planos nacional y regional de conformidad con las normas internacionales. El establecimiento de un marco jurídico adecuado que sea compatible con las normas y los instrumentos internacionales en la materia tendrá también un papel importante en la prevención de la trata de personas y la explotación conexas.", también abre una puerta importante en relación con la explotación conexas, y que no necesariamente se limita a los supuestos expresamente enunciados en la definición del Protocolo.

Más aún, la Directriz 7: Prevención de la trata de personas da cuenta del carácter crucial de la demanda en la trata de personas: "Las estrategias que apunten a prevenir la trata de personas deben tener en cuenta que la demanda constituye una causa fundamental. Los Estados y las organizaciones internacionales deben también tener en cuenta los factores que aumentan la vulnerabilidad a la trata de personas, entre ellas la desigualdad, la pobreza y la discriminación y los prejuicios en todas sus formas." En este orden de ideas se inscribe la criminalización de la "compra" de una persona para su uso sexual, y según estas condiciones de vulnerabilidad.

Debemos aclarar que los términos "el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad" y el lenguaje de la nota 13 al pie de página (13 Nota Interpretativa de Naciones Unidas: "En los travaux préparatoires se indicará que la alusión al abuso de una situación de vulnerabilidad debe entenderse como referida a toda situación en que la persona interesada no tiene más opción verdadera ni aceptable que someterse al abuso de que se trata."), contemplados en el Protocolo de Palermo, aclaran que la trata puede ocurrir sin el empleo de fuerza. Del mismo modo, pueden cometerse otras formas de explotación sexual como la que nos referimos en el presente proyecto.

Consideramos que la inclusión en el Código Penal de la figura aquí propuesta, resulta de crucial importancia a los efectos tanto garantizar la debida protección de los derechos humanos de las personas explotadas, así como para prevenir tanto la explotación sexual en sí que constituyen, como la demanda que generan en relación con la trata de personas para fines de explotación sexual. Dicho claramente, y tal como lo señalara la Relatora Especial, si no existieran personas dispuestas a pagar por el uso sexual de otra persona, claramente no tendría sentido la trata de seres humanos con esta finalidad.

Derecho comparado

En relación con los países que han avanzado hacia la penalización del pago por el uso sexual de personas se encuentran Suecia -legislación a la que nos referiremos en particular-, Islandia (37), y Noruega (38). Asimismo, se encuentran debatiendo cambios y proyectos: Francia -caso sobre el que nos detendremos más adelante-, el Reino Unido (39), Sudáfrica, Corea del Sur; Israel, y el Parlamento Escocés (40). (41)

Dado que el modelo sueco ha sido considerado como la iniciativa más avanzada -sin perjuicio de algunos cuestionamientos que podría merecer la terminología utilizada-, y que ha cosechado mayor reconocimiento en la materia, dedicaremos especial atención a esta legislación.

El Código Penal Sueco, Capítulo 6, sección 11 establece:

"Una persona que, en casos distintos a los expuestos previamente en este capítulo, obtenga una relación sexual casual a cambio de dinero, será sentenciada por la compra de un servicio sexual a una multa o hasta seis meses de prisión.

Lo dispuesto en este primer párrafo es aplicable también en el caso de que el pago del dinero sea prometido o realizado por una tercera persona".

Reproducimos el memorando del Ministerio de Justicia de Suecia (42) por resultar ilustrativo de la fundamentación de la política pública en la que se basó la prohibición de compra de servicios sexuales, "Desde enero de 1999 comprar - e intentar comprar - servicios sexuales constituye un delito penal en Suecia. El castigo es una multa o prisión por un máximo de seis meses. El delito comprende todas las formas de servicios sexuales, tanto si son compradas en la calle, en burdeles o en los así llamados institutos de masajes, etc. Tanto el comprador como el vendedor pueden ser hombres o mujeres. Los servicios sexuales incluyen el coito pero también otras formas de relaciones sexuales. El pago puede ser mediante dinero pero también puede consistir en, por ejemplo, alcohol o drogas. La disposición se aplica también a la persona que toma ventaja de un servicio sexual pagado por otro.

La disposición marca la actitud de Suecia frente a la prostitución. La prostitución es una forma de explotación de seres humanos y constituye un significativo problema social, que es nocivo no sólo para la prostituta individual sino para la sociedad en su conjunto. La disposición tiene por objeto inhibir a la gente de comprar sexo por el riesgo de ser sujeto a intervenciones policiales, etc. La persona que vende servicios sexuales no es castigada. En la mayoría de los casos esta persona es el socio más débil que es explotado.

Es importante destacar que la disposición penal debe ser vista como un apoyo a la labor realizada por los servicios sociales y otras autoridades, así como por las organizaciones no gubernamentales. La penalización nunca puede ser más que un elemento complementario en los esfuerzos para reducir la prostitución y no puede ser un sustituto de mayores esfuerzos sociales."

En abril de 2008, el gobierno sueco ordenó una investigación para evaluar la aplicación de la legislación en la práctica y sus efectos en la prostitución y la trata de personas con fines sexuales en Suecia. El equipo encargado de realizar esta evaluación entregó su informe el 2 de julio de 2010.

A continuación, reproducimos parcialmente algunos de los aspectos más relevantes del Resumen de este estudio.

"El estudio sobre la evaluación de la prohibición de la compra de los servicios sexuales 1999-2008". (43)

"El 1º de enero de 1999 Suecia se convirtió en el primer país en el mundo en legislar criminalizando la compra, pero no la venta, de servicios sexuales. El tipo penal - la prohibición de compra de servicios sexuales - actualmente se encuentra en el capítulo 6, sección 11, del Código Penal.

La prohibición de la compra de servicios sexuales fue introducida desde que se consideró que combatir la prostitución era de un apremiante interés social. Contrariamente a medidas e iniciativas anteriores, la criminalización apuntaba a la demanda de servicios sexuales, por ej. Compradores de sexo y potenciales compradores de sexo. La prohibición estaba destinada a ayudar a luchar contra la prostitución y sus nocivas consecuencias en una manera más efectiva de la que era posible utilizando las medidas previas. El proyecto legislativo sostenía que, en una sociedad con igualdad de género, es vergonzoso que los hombres consigan relaciones sexuales casuales con mujeres a cambio de una paga, y que Suecia, introduciendo una prohibición de la compra de servicios sexuales, también enviaba una importante señal al resto de los países resaltando nuestra mirada sobre la compra de servicios sexuales y la prostitución. Resaltó que la prostitución implica un grave perjuicio tanto para los individuos como para la sociedad. Se esperaba que la criminalización tuviese un efecto disuasorio sobre los potenciales clientes de sexo y sirviese para reducir el interés de varios grupos o individuos extranjeros en establecer actividades organizadas de prostitución en Suecia, lo que tendría un efecto inhibitorio en la prevalencia de la prostitución en este país.

La prohibición de la compra de servicios sexuales ha estado vigente ahora por más de diez años. Se han presentado diferentes visiones acerca de las consecuencias que ha tenido la criminalización. El asunto de la evaluación de la prohibición ha sido planteado en el Riksdag en varias oportunidades. La legislación que prohíbe la compra de servicios sexuales también ha recibido atención internacional, y hay un gran interés en descubrir qué efectos ha tenido. Por ejemplo, el creciente problema de la trata de seres humanos para propósitos sexuales y prostitución ha significado que varios países han encontrado una razón para considerar nuevos métodos para combatir la compra de servicios sexuales y la trata de personas."

"Nuestro cometido ha sido el de evaluar la aplicación de la prohibición de compra de servicios sexuales y sus efectos. Hemos investigado cómo la disposición ha funcionado en la práctica y qué efectos ha tenido en la prevalencia de la prostitución y la trata de personas con fines sexuales en Suecia. Un punto de partida de nuestro trabajo ha sido que la compra de servicios sexuales debe permanecer criminalizada."

Algunos puntos de partida generales (Capítulo 2)

"El proyecto para criminalizar la compra de servicios sexuales era parte de la Ley del Gobierno contra la Violencia contra la Mujer (Kvinnofrid, 1997/98:55). La Ley proponía un gran número de diferentes medidas en diversos sectores para combatir la violencia contra las mujeres, la prostitución y el acoso sexual en el ámbito laboral. De acuerdo con la Ley, un asunto estrechamente relacionado con la violencia contra las mujeres y la falta de igualdad de género era el asunto de los hombres que compran servicios sexuales, generalmente de mujeres; por ej., la cuestión de la prostitución.

La idea más importante con referencia al asunto de la prostitución, presentada en la Ley, fue que la atención debía ser dirigida hacia los compradores. Era un giro de la perspectiva, que puede ser resumida afirmando lo obvio: si no hubiese demanda no habría prostitución.

El 10 de julio de 2008 el gobierno presentó el "Comunicación Gubernamental", que era un plan de acción contra la prostitución y la trata de personas con fines sexuales. A través de este plan, el gobierno enfatizó una vez más que la prostitución y la trata de personas no son aceptables en nuestra sociedad y que se necesitan medidas de largo alcance para combatirlos. El plan de acción nota que las razones subyacentes para que las personas se involucren en la prostitución varían, pero el factor primario que perpetúa tanto la prostitución como la trata de personas es la demanda, por ej., personas, principalmente hombres, compran sexo. La trata de personas con fines sexuales afecta principalmente a mujeres jóvenes y niñas. La escala exacta de trata de personas no se conoce debido a que muchos casos no son reportados, pero está generalmente aceptado que la trata de personas representa una de las más rentables formas de crimen organizado internacional.

Hay entonces una clara vinculación entre la existencia de prostitución y trata de personas con fines sexuales.

Desde que fue introducida, la prohibición de comprar servicios sexuales ha causado discusión tanto en Suecia como internacionalmente. A pesar de la posición oficial, hay aún un debate en Suecia con respecto a las actitudes frente a la prostitución. Aquellos que defienden la prostitución argumentan que es posible diferenciar entre la prostitución voluntaria y la involuntaria, que los adultos deberían tener el derecho a vender y comprar sexo libremente, y que la prohibición de la compra de servicios sexuales representa una posición anacrónica basada en moralismo sexual. De todos modos, con base en una perspectiva de igualdad de género y de derechos humanos, y desviando el foco de la oferta, por ej., aquellos que son explotados en la prostitución, a la demanda, por ej., tratantes, proxenetas y compradores de sexo, la distinción entre prostitución voluntaria e involuntaria no es relevante."

En este orden de ideas, resulta especialmente significativo reflejar el pensamiento de Catharine A. MacKinnon, quien fue promotora de la iniciativa plasmada en el modelo sueco (44), y quien afirmó al referirse a la pornografía, "como ocurre con toda la prostitución", "las mujeres y las niñas y niños están allí, en su gran mayoría, no por elección sino por la falta de opciones. En general, "consienten" que se lleven a cabo los actos sólo en el sentido degradado y demencial de la palabra (común también para el delito de violación), en el que una persona desesperada por cesar lo que está ocurriendo, no ve escapatoria, no tiene ninguna alternativa real, a menudo ha sido abusada sexualmente en su infancia, puede ser adicta a las drogas, no tiene techo, ni esperanza, está todo el tiempo tratando de evitar golpizas o de que la maten, casi siempre está desesperada económicamente, y tolera ser abusada sexualmente a cambio de dinero, incluso si, en la mayoría de los casos, se le paga a un tercero. Muchas de estas personas son niños y niñas". (45)

Fundamentalmente, Suecia ha sido clara en relación con la perspectiva de concebir el pago por el uso sexual de una persona como una cuestión de violencia contra las mujeres. En este sentido,

constituye una ley de igualdad sexual.

Se puede observar una disminución de la prostitución en algunos lugares de Suecia, tal como lo indica el estudio de evaluación citado, (46) así como un cambio simbólico de especial relevancia a través de una tendencia de mudar el estigma que recaía en las personas prostituidas para comenzar a recaer en quienes pagan por el uso sexual de estas personas prostituidas.

El caso sueco ha sido discutido en varios países europeos, pero llama la atención, particularmente, el caso de Francia. Recientemente, su Asamblea Nacional nombró una comisión encargada de estudiar la situación de la prostitución en su país. Su Informe (47) ha sido elevado al pleno de la Asamblea el día 13 de abril de 2011 y examina en más de 300 páginas la situación actual y las posibles políticas públicas que podrían adoptarse. En su Cuarta Parte, el Informe recomienda la penalización de los clientes de la prostitución citando particularmente el caso sueco y otros ejemplos del derecho comparado y resaltando su eficacia. Coherentemente con este informe, el 6 de diciembre de 2011 la Asamblea Nacional francesa aprobó por unanimidad una resolución (48) que "reafirma la posición abolicionista de Francia en materia de prostitución". En dicha resolución la Asamblea considera que "la prostitución es ejercida esencialmente por mujeres y que los clientes son varones casi en su totalidad, contraviniendo así el principio de igualdad entre los sexos" y "estima que la prostitución no podrá disminuir si no es gracias a un cambio progresivo en las mentalidades y un paciente trabajo de prevención, educación y responsabilización de los clientes y de la sociedad entera".

Al día siguiente de aprobada esta resolución, y fundándose en las recomendaciones de la comisión parlamentaria, la diputada Danielle Bousquet y el diputado Guy Geoffroy han presentado un proyecto de ley (49) que crea un nuevo tipo en el Código Penal francés: "El hecho de solicitar, aceptar u obtener, a cambio de una remuneración o promesa de remuneración, relaciones de naturaleza sexual por parte de otro está penado con dos meses de prisión y multa de 3.750 euros." Recordemos que el actual artículo 225-12-1 del Código Penal Francés ya pena con tres años de prisión y multa de 45.000 euros la misma conducta cuando las relaciones sexuales sean "solicitadas, aceptadas u obtenidas de parte de un menor o de una persona que presente una vulnerabilidad particular, aparente o conocida por el autor, debido a una enfermedad, deficiencia psíquica o física o estado de embarazo".

A los fines de este proyecto se ha tenido en consideración los principios y tratados internacionales de derechos humanos pertinentes, así como los informes y documentos, Observaciones y Recomendaciones, producidos por los organismos encargados del monitoreo de estos - en particular el Consejo Económico y Social, el Comité de Derechos Humanos y el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Asimismo, se han tenido en cuenta los Informes de los Relatores Especiales de Naciones Unidas que se han expresado en la materia, en particular el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Sra. Sigma Huda "Integración De los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género" presentado ante el Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Humanos, 62º período de sesiones, Tema 12 del programa provisional, 20 de febrero de 2006. E/CN.4/2006/62; así como los "Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas" contemplados en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, del 20 de mayo de 2002, Período sustantivo de sesiones de 2002, Nueva York, 1º a 26 de julio de 2002, Tema 14 g) del programa provisional, Cuestiones sociales y de derechos humanos: derechos humanos (E/2002/68/Add. 1). Se ha estudiado especialmente el derecho comparado, en particular la legislación sueca y la evaluación de su aplicación". Compartimos plenamente con los argumentos esgrimidos por la Diputada Marcela Rodríguez.

Por otra parte Silvia Chejter, socióloga, profesora titular de la Cátedra Género, Globalización y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se especializa en temas de género: políticas públicas, violencia hacia las mujeres, discursos de violencia, derechos de las mujeres, etc.- Autora de "La Niñez Prostituida" (Unicef - 2000), en las páginas 37 y 38 refiere a una investigación de las edades de inicio a la prostitución por la cual pudo confirmar la existencia de prostitución infantil tanto en lugares cerrados como abiertos. Sostuvo que la mayoría de las niñas y niños que fueron entrevistados para su trabajo de investigación tienen más de 15 años; sin embargo su ingreso al mundo prostibulario es más precoz, habiendo sido iniciados antes de los 15 años; este dato lo constató en diversos países de América Latina, en una investigación realizada en República Dominicana donde se ve que la edad inicio es alrededor de los 11 o 12 años (La Neo-prostitución Infantil en República Dominicana UNICEF 1994). Y otra investigación iniciada en Paraguay en el año 1997 encontró que el 72% de las niñas se iniciaron antes de los 15 años y el 28% a partir de los 15 años).

Silvia Chejter En su nuevo libro "Lugar Común, La Prostitución" establece claramente que el prostituyente, a pesar de ser el protagonista principal e imprescindible, rara vez es mencionado y mucho menos visibilizado:

"Prostituir es un verbo que habitualmente se conjuga con un sujeto trastocado. Cuando se dice "una mujer se prostituye" ¿qué se está diciendo? ¿Se diría acaso que el esclavo "se esclaviza"? ¿o que el obrero "se explota" a sí mismo? Cuando un varón paga por sexo, prostituye. El sujeto es el "prostituyente" llamado, en el lenguaje mercantil travestido que se utiliza, "cliente", "usuario", "consumidor".

Las personas que son "objeto" de la acción de la acción prostituyente son "personas prostituidas". No es posible que alguien se prostituya a sí misma.

El trastocamiento del lenguaje se manifiesta también cuando un "proxeneta" se convierte en "empresario de la noche", una mujer o persona prostituida en "trabajadora del sexo" o "prestadora de servicios sexuales" y el "mundo prostibulario" en "mercado del sexo".

Este libro analiza la problemática desde otro lugar, desde la mirada de los que "pagan por sexo", exhibiendo las relaciones y mecanismos de dominación sexual, de explotación, legitimados por las

costumbres y tradiciones.

En los discursos patriarcales los clientes son receptores pasivos, un producto de la “oferta”, invirtiendo de este modo y ocultando así el rol protagónico de la demanda.

Vivimos en sociedades y culturas que no cuestionan la Prostitución, que conciben a los hombres como sujetos del placer / sujetos del poder / sujetos prostituyentes / y a las mujeres como objetos al servicio del placer masculino. La Cultura induce a los hombres que siguen las reglas a que reconozcan su género en imágenes y narrativas en las que son “clientes”, es decir, con derechos a pagar por sexo.

Y como dice Françoise Collin: “A través de estos análisis, la cuestión verdadera que se impone es la siguiente: ¿Qué mundo queremos? ¿Queremos luchar contra la mercantilización creciente de la vida humana o, por el contrario, consumirla, asegurando así la victoria completa del capitalismo, es decir, la resolución de todo lo humano a su equivalente monetario, en el olvido de la humanidad?”.

Desde otra mirada, la de las víctimas de prostitución, destacamos especialmente las expresiones vertidas por Sonia Sánchez, ex prostituta, en su libro “Ninguna Mujer Nace Para Puta” (editorial Ediciones año 2012), refiere: “Hola soy Sonia, mujer rebelde y argentina...” Le tengo asco a los mecanismos que hacen que nuestros espacios, organizados por nosotras mismas, se conviertan en nuestras propias jaulas. No nos organizamos para prostituírnos mejor o para mantenernos ahí. AMMAR CTA fue la primera organización a la cual me integré, allí comencé un proceso de aprendizaje que me llevo en el año 2002 a ser expulsada junto a otras compañeras, porque me imponían una identidad que yo no quería aceptar – la de trabajadora sexual-. Allí nunca me calle frente al manejo fiolo que el sindicalismo opero sobre nosotras. De esa manera fundamos AMMAR Capital, que presidí hasta el año 2006” (AMMAR Capital: Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, una organización que nuclea a mujeres en situación de prostitución. Nació luego de la ruptura con AMMAR CTA).

Así mismo la autora citada en su libro manifiesta que: “las putas hemos puesto el cuerpo siempre para sobrevivir y luchar pero nunca la palabra. Se habla sobre la prostitución a partir de exhibir los dolores, los dramas, pero no se habla de prostitución para poner en cuestión a la sociedad que sustenta esta situación en cientos de miles de mujeres en todas partes del mundo” desde su experiencia personal ella sostiene que “hay una cadena de explotadores y complicidades que los coloca en el mismo lugar de responsabilidad de asociación y de importancia, son socios, todos tienen algo en común sobre nosotras: el poder sobre nuestros cuerpos” entre los que ella menciona al prostituyente, sobre esta cuestión Sonia dice “la puta no tiene cliente, tiene prostituyente, este afán de nombrarlo como cliente lo coloca en una relación de consumo inocua para él y la puta, la cara del prostituyente es la más grotesca del poder sobre los cuerpos de las mujeres; él sabe que alquila tu cuerpo a otro representante del circuito de poder que va a ejercer sobre vos, la puta no tiene respecto del cliente un margen de decisión. Un prostituyente es un consumidor de prostitución que está dentro de una cadena de consumo de mujeres, te convierten en una profesional de sus gustos sexuales te dan esa herramienta y allí tienes un saber sobre sus cuerpos que no lo reconoce como saber”.

Marcelo Colombo expreso con gran acierto que “el sistema Prostibulario es un depredador de los derechos humanos de las mujeres”

El fiscal titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), participó del II Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres, desarrollado en Mar del Plata, donde planteó –basado en una recomendación de la CEDAW de 1992-que son la pobreza y la falta de empleo dos factores que obligan a muchas mujeres a prostituirse. “Esta recomendación pone en serio conflicto, y hasta derriba, la idea de la supuesta distinción entre prostitución forzada y prostitución libre”. También refirió a que si bien “los conceptos de Trata de Personas y la Explotación Sexual son diferentes, están bien emparentados, porque vienen a presentar una situación donde los derechos humanos de la mujer resultan avasallados del modo más dramático y más grave”. También refiere que en la convención firmada por las Naciones Unidas en 1949 “se proponía a todos los Estado parte a adherir a una postura abolicionista, en relación con el tratamiento de la prostitución, condenando toda forma de proxenetismo, sin importar el consentimiento”.

En dicho panel refirió a la CEDAW quien funciona bajo la lógica de un Comité, que emite recomendaciones para todos los Estados. “En 1992 se dio a conocer una recomendación titulada ‘Las características de la violencia hacia la mujer’, donde en relación al artículo sexto, indica que la pobreza y el desempleo -como principales variables- obligan a muchas mujeres a prostituirse”. El titular de la Protex, analizó: “Pone especial foco en la cuestión de la pobreza y el desempleo, en tanto aumentan todas las oportunidades de trata. Son cuestiones bien estructurales y que tienen que ver con las características de desigualdad estructural que existen entre el hombre y la mujer, en cuanto a acceso a derechos”. Este punto, añadió, obliga a tratar de trasladar estas afirmaciones del Comité, hacia discusiones que hoy se mantienen respecto a la interpretación del delito de trata con fines de explotación sexual cuando de mujeres se trata. “Esta recomendación pone en serio conflicto, y hasta derriba, la idea de la supuesta distinción entre prostitución forzada y prostitución libre. Si parte del supuesto de que en realidad son la pobreza y el desempleo las condiciones que obligan en la mayoría de los supuestos a las mujeres a tener que padecer las vivencias de un sistema prostibulario, en definitiva está dejando huérfana cualquier otra apreciación acerca de esta idea de libertad o autonomía”, “Si el propio Comité de la CEDAW se está comentando precisamente que la pobreza y el desempleo son factores principales que obligan a las mujeres a estar sometidas a la prostitución, el concepto de vulnerabilidad tiene que estar integrado sí o sí por estas características objetivas: pobreza, género, migración, a partir de las cuales casi desde el vamos nos encontramos con que la inmensa mayoría, por no decir todos los casos, las personas que se encuentran en esa situación de explotación sexual, son personas vulnerables”, relató.

Esa situación de vulnerabilidad hace que “el consentimiento que pueda dar esa persona no tiene ningún valor en la defensa del tratante”, aclaró.

A su vez, Colombo se refirió a la recomendación 19, donde además de establecer otras formas de

explotación sexual como el turismo sexual o los abusos que se producen en el marco de lo que se denomina servicio doméstico, propone “un cuidado especial y adicional” sobre la mujer prostituida”. “El Comité establece medidas preventivas para desalentar la existencia de la prostitución, en el sentido de desarrollar y proponer todo tipo de planes o programas sociales, donde se eliminen los estereotipos de mujer/objeto sexual”.

Estas recomendaciones, alimentan la posibilidad de derribar estereotipos. Y el artículo 6 de la Convención, añadió, “da en la tecla cuando dice que hay que empezar a trabajar los prejuicios sociales y culturales”.

Para finalizar, el fiscal especializado comentó algunos de los “estereotipos clásicos que se ven en la práctica judicial”. “Hay jueces que siguen pensando que las mujeres que están sometidas a la explotación sexual en un prostíbulo ‘optan por una vida fácil’, sin tener ninguna consideración sobre lo que significa el día a día en un prostíbulo; siguen pensando que es un modo de ganar dinero fácil y esto no lo firman en los fallos, pero sí funciona como un subtexto de lo que terminan resolviendo; entienden que hacen eso porque en realidad les gusta; y principalmente la falacia de esta supuesta autonomía para consentir una explotación. Como si en definitiva pudiera haber alguna suerte de derecho a la libertad o autonomía para alguien considerarse un esclavo o un explotado feliz”, relató.

Y agregó, aquí “convive también el estereotipo de la mujer mendaz, muy visitado también en los casos de violencia de género, donde el relato de la mujer es un relato descreído y subconsiderado en el escenario judicial”.

Por todo ello, instó a los operadores judiciales “a trabajar fuertemente sobre los propios prejuicios y preconceptos para ver al sistema prostibulario como lo que es, un depredador de los derechos humanos de las mujeres”.

Otras palabras dignas de destacar son las de la Dra. Carmen Argibay, quien fue una gran luchadora de los derechos humanos y de las cuestiones de género, por lo que no podemos dejar de mencionar lo que pensaba sobre esta cuestión, ella decía que “El cliente es cómplice del proxeneta” pidió a la sociedad que pasara a ocupar un papel activo. “no miremos para el costado” “el cliente es cómplice del proxeneta o lo que es peor hace abandono de persona porque no hace nada frente a la situación de la víctima indefensa” se pronunció “a favor de penalizar a los clientes de prostitución”, el cliente debiera ser penado porque es un partícipe de mantener a la mujer en situación de vulnerabilidad e indefensión”

Carmen Argibay y el ex Procurador General de la Nación Esteban Righi acordaron una iniciativa para mejorar la persecución del delito de trata para explotación sexual, mediante la capacitación a los fiscales y mediante un protocolo que guíe las investigaciones de este delito que afecta principalmente a adolescentes y jóvenes de los sectores más vulnerables, con el argumento de que: “Hay que convencer a la ciudadanía de que no es un problema de los jueces ni de los fiscales. La sociedad no puede mirar para el costado, no puede ignorar la situación de las víctimas de trata”, pidió Argibay. Y consideró que es “un problema muy serio”. “Ojalá se sumen otras ramas del Gobierno, de otros poderes, para combatir la trata” y “liberar a las mujeres, a veces niñas, que han quedado atrapadas en redes de prostitución”.

En oportunidad de prologar el libro de la Dra. Palacio de Arato “Trata de Personas y Prostitución en la Provincia de Córdoba” Análisis de la Ley Provincial 10.060 - Comentario a Fallo Rossina, destacábamos: El título de este libro refleja una verdad indubitable, la estrecha y profunda relación entre la Trata de Personas y la Prostitución, como dos caras de una misma moneda, donde la primera nutre de mercancía humana a la segunda, fogoneada y alimentada por la demanda de los “clientes” prostituyentes y la insaciable voracidad de proxenetas y tratantes.

Así lo refleja con claridad meridiana el Preámbulo del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena de la ONU: “La Prostitución y el mal que la acompaña, la Trata de Personas para fines de Prostitución son incompatibles con la dignidad y el valor de la Persona Humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”.

La Autora, brillante jurista cordobesa, destaca a través de sus páginas, como previamente lo hizo a través de su famoso fallo, otra verdad incuestionable, que la Prostitución no es Trabajo sino una forma de violencia contra las mujeres y de violación de sus derechos humanos, donde la persona vulnerable es despojada de su Humanidad y convertida en mercancía.

Ningún Ser Humano puede consentir su propia Esclavitud o su propia Explotación, este es un Principio Básico del Derecho y de los Derechos Humanos, la irrelevancia del consentimiento y cómo se encuentra viciada la Voluntad en situaciones de vulnerabilidad es detallado con maestría por la Dra. Palacio de Arato.

El análisis pormenorizado de la ley provincial 10.060, destaca aspectos importantes: su loable carácter eminentemente preventivo, su complementariedad armónica con la normativa nacional e internacional sobre la temática y en materia de Derechos humanos,

Su Bien Jurídico Protegido, Prevenir y Combatir el flagelo de la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual.

El resguardo integral de los derechos de las víctimas y personas en situación de prostitución, implementando políticas de inserción social y laboral.

Su Espíritu, Abolicionista, como lo es Argentina desde la sanción de la Ley nacional 12.331, la Convención de la ONU de 1949 y todo el plexo normativo internacional –constitucional, operativo a partir de la Reforma del año 1994.

La importancia de la educación como instrumento de prevención y de cambio cultural para comprender el impacto nocivo del consumo de prostitución, construyendo una ciudadanía responsable.

Como afirma Nelson Mandela “La Pobreza no es un Accidente. Como la Esclavitud y el Apartheid, es una creación humana y puede eliminarse con las acciones de los seres humanos” La Trata de Personas y la Prostitución también.

Es necesario transcribir lo establecido por la Doctora Palacio de Arato en su esclarecedor libro, ya que logra explicar las principales secuelas de la violencia en la mujer (editorial Lerner páginas 149 a 153

año 2013):

"Los aportes de otras ciencias nos permiten visualizar el grave daño que produce la condición de esclavitud y de violencia que se profundiza cuando se mantiene en el tiempo.

Siguiendo a Lydia Cacho¹, se pueden englobar en el síndrome de la mujer maltratada tres modalidades sintomáticas que se desarrollan a lo largo de situaciones continuas de violencia psicológica, física y emocional.

No significa que las mujeres estén enfermas, sino que presentan traumas resultantes de la violencia, los cuales pueden superarse una vez que han salido de la situación de adversidad.

a. Síndrome de Estocolmo: este término explica las razones psicológicas que motivan a las personas esclavizadas o secuestradas a defender a sus captores. En la mayoría de los casos, los tratantes promueven esta conducta en las mujeres para aumentar sus posibilidades de salir ilesos ante una posible denuncia; se pueden llegar a establecer falsas relaciones afectivas o románticas.

b. Síndrome de indefensión adquirida: condición psicológica en la que la víctima aprende a creer que está indefensa, que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que emprenda es inútil. Su victimario lleva a cabo actos intimidatorios cíclicos que le demuestran que él ejerce el poder sobre su vida; muchas veces lo hace por medio de premio y castigo. Como resultado la víctima permanece pasiva frente a una situación desagradable o dañina.

c. Síndrome de estrés postraumático: este conjunto de síntomas puede aparecer después de sobrevivir a guerras, torturas, desastres, accidentes, ataques terroristas o situaciones de esclavitud. Una persona forzada a la prostitución que ha padecido maltrato puede sufrir dicho trastorno. En muchos casos, la víctima llega a tener flashbacks, a revivir la pesadilla y a desarrollar fobias. Otros síntomas son la dificultad para concentrarse, los desórdenes alimentarios, los intentos recurrentes de suicidio, automutilaciones y los trastornos límite de la personalidad.

En algunos casos las personas pueden ser sobrevivientes, es decir pueden recordar los violentos sucesos sin vivir sus efectos paralizantes. Puede llevar a cabo procesos emocionales y terapéuticos que le permitan retomar el control de su vida y percatarse de sus emociones y pensamientos relacionados con los delitos cometidos en su contra, tendiendo además la capacidad de mirar al futuro y abrigar esperanzas.

Por su parte, a partir de la ley 10.060 se procura también prevenir la cantidad de casos, a partir de la búsqueda de concientización por parte de la sociedad."

La autora también analiza como se ha extendido el concepto de Trata de Personas en la Ley 10.060:

"El art. 8 de la ley provincial 10.060, objeto de análisis, establece en este tópico una pauta particular que merece la pena resaltar: en el entendimiento que de este flagelo sólo se sale con la concientización de la sociedad toda, busca generar el cambio a través información, discusión de ideas y formación de las nuevas generaciones dentro de la consideración de que la prostitución por viejo que sea el oficio es lo que abre la puerta a la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual, buscando formar ciudadanos bajo el ideario abolicionista abrazado por nuestro país.

Así manda a incorporar como contenido curricular en las escuelas provinciales el estudio de todos los aspectos que hacen a la trata de personas y los medios de prevención para no ser víctimas de ese flagelo.

Al respecto es bueno recordar la distinción que realiza la periodista Cacho², entre "trata blanda" y "trata dura". La diferencia radica en la actividad que cumple el reclutador.

En la primera ("trata blanda") el reclutador aprovecha la situación de vulnerabilidad personal o social de la víctima, y mediante engaños la traslada bajo la promesa de algún tipo de empleo. El perfil de la mujer –sea mayor o menor de edad- es: origen humilde, reside en zonas marginales de mucha pobreza, precario nivel educativo, con escasas o nulas posibilidades laborales y un entorno familiar inestable. Accede voluntariamente en busca de cambiar su fortuna y salir de los padecimientos.

En cambio, en la "trata dura" normalmente media el secuestro. La red se pone de manifiesto en toda su extensión, pues se accede a la víctima luego de una paciente tarea, que consiste en inteligencia e investigación de su persona y entorno. Se la identifica, se la sindicada y luego se monta un operativo de captación, en la vía pública se la secuestra.

Como no se cuenta con su voluntad, se la droga, golpea y violenta sexualmente, buscando su quebranto, anulando su resistencia y eliminando su identidad, transformándola en el objeto deseado, e ingresa de ese modo a la red, donde conforme sea su conducta puede seguir siendo víctima o comenzar a ascender en ella, convirtiéndola en parte de la misma y con tareas operativas dentro de la misma.

Todo ello torna imprescindible el conocimiento y la concientización social.

Sin pretender agotar esta arista de la temática, es oportuno hacer mención de la información suministrada por la organización Missing Children argentina, entidad que informa que la principal causa de niños perdidos es la llamada sustracción, que el porcentaje de niñas duplica al de niños y que la edad en la que más casos de sustracción se registran en Argentina es desde los trece a los diecisiete años de edad.

Consideramos que la franja de edad mencionada es óptima receptora de la pauta especial fijada por el art. 8 de la ley 10.060".

Estamos convencidos que el establecimiento de un marco jurídico adecuado tendrá un papel importante en la prevención de la Trata de Personas y Explotación Sexual, por lo que propiciamos la

¹ Cacho, Lydia, *Óp. Cit.*, nota 3, p.303.

² Cacho, Lydia, *ob. Cit.* p. 241.

derogación expresa del artículo 45 del Código De Faltas Provincial, y la incorporación del artículo 46 ter protegiendo a la persona prostituida y penalizando al prostituyente, de acuerdo al modelo abolicionista Argentino. Por todo lo expuesto y aquellas razones que se darán en el momento de su tratamiento, es que solicito la aprobación de la presente iniciativa.

Leg. María Chiofalo

PROYECTOS DE LEY 2060/L/08, 8196/L/11, 10697/L/12, 12428/L/13, 13713/L/14, 13996/L/14, 13997/L/14, 14201/L/14, 14275/L/14, 14369/L/14, 14388/L/14, 14389/L/14, 14784/L/14 y 15160/L/14

TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10326**

**CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA**

**LIBRO I
DISPOSICIONES GENERALES**

**TÍTULO I
RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL**

**Capítulo Único
Definiciones**

Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene como objeto el resguardo de las condiciones que aseguren la convivencia social y el respeto al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades consagrados en la Constitución y las leyes.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. Este Código se aplica a las infracciones que en él se tipifican y que sean cometidas en el territorio de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de otras faltas previstas en leyes especiales.

Artículo 3º.- Igualdad. Todas las personas recibirán de la autoridad la misma protección y trato, sin que puedan ser afectadas por distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias de carácter discriminatorio, debiéndosele brindar protección especial a las personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad o debilidad manifiesta.

Artículo 4º.- Tolerancia. La convivencia ciudadana pacífica exige -tanto de particulares como de autoridades- la aceptación y el respeto por la diferencia y la diversidad que es propia de toda sociedad democrática, pluralista y participativa.

Artículo 5º.- Extensión de las disposiciones generales. Las disposiciones generales de este Código serán aplicadas a todas las infracciones previstas por leyes provinciales y ordenanzas municipales, salvo que éstas dispusieran lo contrario.

Artículo 6º.- Terminología. Los términos "infracción", "contravención" o "falta" están usados indistintamente y con idéntica significación en este Código.

Artículo 7º.- Participación. Todos los que intervinieren en la comisión de una infracción, sea como autores, cómplices o mediante cualquier otra forma de participación quedan sometidos a la misma escala penal, sin perjuicio que la sanción se gradúe con arreglo a la respectiva participación y a los antecedentes de cada imputado.

Artículo 8º.- Culpabilidad. Salvo disposición en contrario sólo es punible la intervención dolosa.

Artículo 9º.- Causas de inimputabilidad y de justificación. Las infracciones no son punibles en los siguientes casos:

- a)** En los previstos por el artículo 34 del Código Penal;
- b)** En los casos de tentativa, salvo disposición en contrario, y
- c)** Cuando sean cometidas por menores que no tuvieren dieciocho (18) años de edad cumplidos a la fecha de comisión del hecho.

Artículo 10.- Infracciones cometidas por personas menores de 18 años. En el caso del inciso c) del artículo 9º de este Código la autoridad arbitrará los medios necesarios para hacer inmediata entrega del niño menor a sus padres, tutores o guardadores, a quienes se avisará y citará a ese fin, dando intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o el organismo que en el futuro la reemplace, como Autoridad de Aplicación del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Provincia de Córdoba, según Ley Nº 9944. En ese caso, como en los que el niño o niña careciera de adultos responsables, este organismo tratará de hacer cesar la conducta contravencional, asegurando en todo tiempo la integridad psicofísica del mismo y determinará si existen o no derechos del niño o niña que se encuentren vulnerados, en cuyo caso aplicará las medidas de protección integral de derechos que corresponda según lo establecido en el artículo 42 de Ley Nº 9944.

Artículo 11.- Infracciones cometidas valiéndose de personas menores de edad. En todos las infracciones tipificadas en el presente Código en las que para su comisión se valiere de personas menores de dieciocho (18) años de edad, la autoridad interviniente tratará de hacer cesar la

conducta contravencional y la situación de riesgo del menor, y arbitrará los medios necesarios para ponerlo a disposición de los padres, tutores o guardadores, dando intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o al organismo que en el futuro la sustituya, a los fines establecidos en el artículo 10 de este Código.

Artículo 12.- Ley más benigna. Tipicidad. Si la ley vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos los efectos de la ley operan de pleno derecho. La analogía no es admisible para crear infracciones ni para aplicar sanciones.

Artículo 13.- Personas jurídicas. Cuando la falta fuere cometida en nombre, al amparo o en beneficio de una persona jurídica, ésta será pasible de las penas establecidas en este Código que puedan serle aplicadas, sin perjuicio de la responsabilidad de las personas humanas intervinientes.

Artículo 14.- Funcionarios Públicos. Agravantes. El máximo de la sanción prevista para cada falta en el presente Código se duplicará cuando la contravención fuere cometida, autorizada, posibilitada o tolerada por un funcionario público o un miembro de las fuerzas de seguridad.

Artículo 15.- Reincidencia. El condenado por una contravención que cometiere la misma infracción en el término de un (1) año a contar desde la condena, sufrirá la pena correspondiente a la nueva falta cometida aumentada en un tercio.

Artículo 16.- Registro de antecedentes contravencionales. La Policía de la Provincia de Córdoba llevará un registro personalizado de las condenas por las contravenciones previstas en el presente Código, las que se asentarán en los prontuarios que correspondan al momento de expedirse las respectivas planillas de antecedentes. A tal efecto, las autoridades administrativas y jurisdiccionales de aplicación de este Código oficiarán comunicando las diversas resoluciones para su anotación.

Transcurridos dos (2) años de recaída la sentencia condenatoria sin que el infractor haya cometido otra falta, el registro de aquella caducará. En estos casos los registros caducos no podrán hacerse constar en los certificados de antecedentes.

Artículo 17.- Concurso de infracciones. Agravantes. Si mediare concurso de varios hechos independientes de infracciones reprimidas con una misma especie de pena principal, la sanción a imponerse tendrá como máximo la suma resultante de la acumulación de los máximos de las sanciones correspondientes a las infracciones concurrentes. Sin embargo, esta suma no podrá exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate.

Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas de diversa especie se aplicará la sanción más gravosa, de acuerdo al orden fijado en el artículo 22 de este Código, y ella podrá agravarse hasta en un cincuenta por ciento (50%). En ningún caso la acumulación obstará la imposición de las penas accesorias.

Artículo 18.- Concurso y conexidad entre contravención y delito. Cuando un hecho cayere bajo la sanción de este Código y del Código Penal será juzgado únicamente por el juez que entiende en el delito.

Artículo 19.- Concurso y conexidad entre contravención y falta municipal. Cuando un hecho cayere bajo la sanción de este Código y de ordenanzas municipales será juzgado por la autoridad que previniera, salvo expresa disposición en contrario de este Código.

Artículo 20.- Asistencia letrada. Al iniciarse el procedimiento se le hará saber al imputado que le asiste el derecho de designar abogado defensor de su confianza. Para el caso de carecer, la autoridad de juzgamiento le hará designar uno de oficio o, en su caso, un asesor ad-hoc.

Artículo 21.- Normas de aplicación supletoria. Las disposiciones generales del Libro 1 del Código Penal se aplicarán subsidiariamente en cuanto no fueran expresa o tácitamente incompatibles con las de este Código.

TÍTULO II DE LAS PENAS

Capítulo I De los Tipos de Sanción

Artículo 22.- Penas principales, accesorias y sustitutivas. Las penas principales que se establecen en el presente Código son las siguientes:

- a) Trabajo comunitario;
- b) Multa, y
- c) Arresto.

Se prevén como accesorias las penas de:

- 1) Inhabilitación;
- 2) Clausura;
- 3) Decomiso;
- 4) Prohibición de concurrencia;
- 5) Interdicción de cercanía, y
- 6) Instrucciones especiales.

Se establece como pena sustitutiva la reparación del daño.

Artículo 23.- Individualización y graduación de las penas. La sanción será individualizada y graduada en su especie, medida y modalidad según la naturaleza y gravedad de la falta, las circunstancias concretas del hecho y los antecedentes del autor.

En los casos de multa se tendrán en cuenta, además, las condiciones económicas del infractor y su familia.

Artículo 24.- Disminución de la pena por confesión. Cuando el contraventor, en la primera declaración formal que preste, reconociere su responsabilidad en la contravención que se le impute, la sanción correspondiente podrá reducirse a la mitad. En estos casos la autoridad interviniente dictará resolución sin más trámite. En ningún caso, bajo pena de nulidad, este reconocimiento se podrá realizar sin que el contraventor cuente con asistencia letrada.

Artículo 25.- Perdón judicial. Si el imputado de una contravención no hubiere sufrido una condena contravencional durante el año anterior a la comisión de aquélla, puede ser eximido de pena en los siguientes casos:

a) Cuando por circunstancias especiales resulte evidente la levedad del hecho y lo excusable de los motivos determinantes de la acción revelaren la falta de toda peligrosidad en el imputado;

b) Cuando el infractor ofreciere reparar el daño, o

c) Cuando el particular ofendido pusiere de manifiesto su voluntad de perdonar al infractor.

En estos casos la autoridad de juzgamiento puede declarar extinguida la acción contravencional respectiva.

Artículo 26.- Pena natural. Queda exento de pena quien como consecuencia de su conducta al cometer la contravención se infligiere graves daños en su persona o en sus bienes, o los produjere en la persona o bienes de otro con quien conviva o lo unan lazos de parentesco.

Artículo 27.- Ejecución condicional de la condena. La condena puede dejarse en suspenso cuando el infractor ofreciere reparar el daño y no hubiere sufrido otra condena contravencional durante el año anterior a la comisión de la falta y la ejecución efectiva de la pena no fuere manifiestamente necesaria. Esta decisión debe ser fundada, bajo pena de nulidad, en la personalidad del condenado, su actitud posterior a la falta, la naturaleza del hecho y demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de ejecutar efectivamente la condena.

En tal caso, si el contraventor no cometiere una nueva contravención en el curso del año siguiente al de la condena, ésta se tendrá por cumplida. Si por el contrario el contraventor cometiera una nueva contravención dentro de dicho lapso, debe cumplir efectivamente la condena pronunciada en suspenso, además de la que corresponda por la nueva contravención cometida.

Capítulo II

De las Penas Principales

Artículo 28.- Trabajo comunitario. El trabajo comunitario se cumplirá en dependencias oficiales -provinciales, municipales o comunales- u otras instituciones de bien público estatales o privadas, y se aplicará a la conservación, funcionamiento o ampliación de establecimientos asistenciales, de enseñanza, parques y paseos, salvo juzgados y dependencias policiales.

El día de trabajo será de cuatro (4) horas. La resolución sancionatoria fijará el lugar y el horario, atendiendo a las circunstancias personales del infractor y el modo de controlar su cumplimiento.

Artículo 29.- Multa. Institúyese con la denominación de "Unidad de Multa" (UM) la unidad de referencia a los fines de la fijación de esta pena, la cual tiene un valor en pesos equivalente al diez por ciento (10%) del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente a la fecha de la imposición de la sanción.

La pena de multa debe ser abonada mediante depósito bancario en la cuenta que al efecto habilite el Banco de Córdoba S.A., con entrega de comprobantes ante la autoridad administrativa o judicial que la impusiera, dentro de los tres (3) días de notificada y firme.

Artículo 30.- Facilidades de pago. Cuando el monto de la multa y las condiciones económicas del infractor lo aconsejaren, la autoridad de juzgamiento puede autorizar su pago en cuotas, fijando el importe de las mismas -que en ningún caso pueden exceder del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos mensuales del infractor- y las fechas de pago.

El incumplimiento hará caducar el beneficio acordado, siendo en este caso de aplicación lo dispuesto para la conversión de la multa en arresto.

Artículo 31.- Cobro judicial de las multas. Cuando proceda el cobro judicial de una multa la acción se promoverá por vía de apremio a través de los funcionarios que Fiscalía de Estado indique, sirviendo de título suficiente el testimonio de la sentencia condenatoria firme.

Artículo 32.- Destino de las multas. Los importes de las multas ingresarán al Ministerio de Desarrollo Social o al organismo que en el futuro lo reemplace en su competencia, con asignación específica a programas de protección de niñas, niños y adolescentes en riesgo.

Artículo 33.- Arresto. El arresto se cumplirá en establecimientos especiales o en dependencias adecuadas de las que existieren, asegurando la decencia e higiene de los detenidos, pero en ningún caso el contraventor será alojado con imputados o condenados por delitos comunes.

El arresto no superará los tres (3) días, salvo disposición en contrario del presente Código.

Artículo 34.- Arresto domiciliario. El arresto domiciliario debe disponerse cuando:

a) No hubiere lugar en los establecimientos adecuados;

b) Se tratare de mujeres en estado de gravidez o durante el período de lactancia;

c) Se tratare de personas mayores de sesenta (60) años de edad o que padezcan alguna enfermedad o impedimento que hicieren desaconsejable su internación en los establecimientos mencionados en el artículo 33 de este Código, y

d) Por las circunstancias especiales del caso el arresto en un establecimiento pudiere producir perjuicios graves o irreparables para el núcleo familiar.

El contraventor debe permanecer en su domicilio tantos días como le hayan sido impuestos en la condena, bajo la inspección y vigilancia de la autoridad, que determinará los recaudos y mecanismos de control pertinentes para su cumplimiento efectivo. Si se ausentare sin previa autorización e injustificadamente, el juez dispondrá su inmediato alojamiento en un establecimiento por los días que faltaren cumplir.

Artículo 35.- Trabajo comunitario o arresto de fin de semana. En el caso de contraventores no reincidentes que tuvieran domicilio en la localidad, el trabajo comunitario o el arresto puede cumplirse durante los fines de semana, días feriados y no laborables, cuando se den algunos de los siguientes supuestos:

a) Cuando el cumplimiento de la sanción en días hábiles afectare su actividad laboral, y

b) En los casos en que la sanción no fuere superior a los tres (3) días.

Si el contraventor no se presentare a cumplir el trabajo comunitario o el arresto el día que corresponda sin causa justificada, el juez dispondrá su inmediato alojamiento en un establecimiento por tantos días como faltaren cumplir.

Artículo 36.- Diferimiento del trabajo comunitario o el arresto. El cumplimiento del trabajo comunitario o el arresto puede diferirse o suspenderse en su ejecución cuando provoque al infractor un perjuicio grave e irreparable o así lo determinen razones humanitarias. Cesada la causal que motivó la decisión, la pena se ejecutará inmediatamente.

Artículo 37.- Conversión del trabajo comunitario en multa o en arresto. Si el trabajo comunitario no fuere cumplido en el tiempo y en la forma establecido en la resolución condenatoria, se producirá su conversión al máximo de la multa prevista para la falta o a su proporcionalidad.

Asimismo, si la multa no fuera abonada en el plazo establecido en el artículo 29 de este Código se producirá su conversión en arresto a razón de un (1) día de arresto por cada Unidad de Multa (UM) impaga, siempre que no supere el máximo correspondiente a la falta de que se trate.

La pena de arresto por conversión de una multa cesará por su pago total. En este caso se descontará la parte proporcional al tiempo de arresto sufrido.

Capítulo III

De las Penas Accesorias

Artículo 38.- Inhabilitación. La inhabilitación importa la suspensión o cancelación -según el caso- del permiso concedido para el ejercicio de la actividad en infracción. Puede imponerse, aunque no esté prevista expresamente para la contravención cometida, cuando ésta importare incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, de licencia o habilitación de poder público.

La inhabilitación no puede superar los tres (3) meses, salvo los casos en que expresamente se disponga lo contrario.

Artículo 39.- Clausura. La clausura importa el cierre del establecimiento o local en infracción y el cese de las actividades por el tiempo que disponga la sentencia o, sin término, hasta que se subsanen las causas que la motivaron. Para que proceda la clausura basta que el propietario o encargado del comercio, establecimiento o local, sea responsable por la elección o la falta de vigilancia del autor de la contravención.

Puede imponerse, aunque no esté prevista expresamente para la contravención cometida, cuando ésta importare un abuso en la explotación o atención de un establecimiento, comercio o local, cuyo funcionamiento dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público.

La clausura no puede superar los tres (3) meses, salvo los casos en que expresamente se disponga lo contrario.

Artículo 40.- Decomiso. La condena contravencional importa la pérdida de los bienes, enseres, efectos, objetos o automotores empleados para la comisión del hecho, salvo que:

a) Pertenezcan a un tercero no responsable;

b) Exista disposición expresa en contrario, o

c) En la instancia judicial se lo determine, fundado en la necesidad que tenga el infractor de disponer de esos bienes para subvenir o atender necesidades básicas o elementales para él y su familia.

Los bienes decomisados con motivo de las infracciones o contravenciones cometidas en el Departamento Capital se incorporarán al patrimonio del Ministerio de Desarrollo Social o al organismo que en el futuro lo sustituya. Los bienes decomisados con motivo de las infracciones o contravenciones cometidas en el resto de los departamentos de la Provincia se incorporarán al patrimonio de la municipalidad o comuna donde se cometió la contravención la que, previa aceptación de los mismos ante la Autoridad de Aplicación, podrá disponer de su uso o el producido de su enajenación en beneficio de instituciones de bien público estatales o privadas.

Artículo 41.- Prohibición de concurrencia. La prohibición de concurrencia consiste en la interdicción impuesta al contraventor para asistir, ingresar o permanecer en un lugar por el tiempo que la autoridad de juzgamiento determine, el que no podrá superar los noventa (90) días corridos a partir de la fecha de imposición de la sanción.

Artículo 42.- Interdicción de cercanía. La interdicción de cercanía consiste la prohibición impuesta al contraventor de acercarse a menos de determinada distancia de lugares o personas por el tiempo que la autoridad de juzgamiento determine, el que no podrá superar los noventa (90) días corridos a partir de la fecha de imposición de la sanción.

Artículo 43.- Instrucciones especiales. Cuando por las características del hecho y las condiciones personales del contraventor sea conveniente, la autoridad de juzgamiento dispondrá la aplicación de instrucciones especiales, que consisten en:

- a) Asistencia a un curso educativo, o
- b) Cumplimiento del tratamiento terapéutico que se disponga previo informe médico.

El curso educativo o el tratamiento terapéutico no pueden demandar más de cuatro (4) horas de sesiones semanales ni prolongarse por más de cuatro (4) meses, y pueden ser atendidos por instituciones públicas o privadas.

La autoridad de juzgamiento establecerá en la resolución el modo de controlar su cumplimiento.

Artículo 44.- Incumplimiento de instrucción especial. Si el condenado incumpliere la instrucción especial sin causa justificada, la Autoridad de Aplicación le impondrá la multa o el arresto teniendo en cuenta el tiempo de instrucción especial que se hubiere cumplido, a razón de una Unidad de Multa (1 UM) o un (1) día de arresto por cada día de instrucción especial no cumplida, excepto que las condiciones personales del contraventor hicieren desaconsejable su aplicación.

Capítulo IV De las Penas Sustitutivas

Artículo 45.- Reparación del daño causado. Las penas de trabajo comunitario, arresto o multa pueden ser sustituidas -total o parcialmente- por la reparación del daño causado cuando la contravención hubiere ocasionado un perjuicio a personas o bienes determinados.

La autoridad de juzgamiento puede ordenar la reparación del daño a cargo del contraventor o de su responsable civil (padre, tutor o curador).

La reparación impuesta por la autoridad de juzgamiento en modo alguno sustituye o reemplaza el derecho de la víctima a demandar la indemnización en el fuero civil competente.

TÍTULO III DE LAS ACCIONES Y PENAS

Capítulo I Del Ejercicio de la Acción

Artículo 46.- Acciones de instancia privada. Deben iniciarse de oficio todas las acciones contravencionales contenidas en este Código, salvo las que dependieran de instancia privada.

Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de las siguientes infracciones:

- a) Molestias a personas en sitios públicos (artículo 51);
- b) Tocamientos indecorosos (artículo 53);
- c) Expresiones discriminatorias (artículo 63);
- d) Perjuicios a la propiedad pública o privada (artículo 68), y
- e) Escándalos y molestias a terceros (artículo 81).

Capítulo II De la Extinción de la Acción y de la Pena

Artículo 47.- Extinción de la acción contravencional. La acción contravencional se extingue por:

- a) La muerte del infractor;
- b) La prescripción;
- c) El perdón judicial;
- d) El cumplimiento voluntario del máximo de tiempo de trabajo comunitario correspondiente a la falta, y
- e) La amnistía.

Artículo 48.- Extinción de la pena contravencional. La pena contravencional se extingue:

- a) En los supuestos de los incisos a), b) y e) del artículo 47 de este Código, y
- b) Por indulto.

Artículo 49.- Prescripción de la acción y de la pena. La acción para perseguir infracciones prescribe a los seis (6) meses si no se hubiere iniciado procedimiento y al año si se lo ha iniciado. La pena prescribe a los dos (2) años a contar desde la fecha en la cual la sentencia quedó firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiere empezado a cumplirse.

Artículo 50.- Interrupción de la prescripción. La prescripción de la acción y de la pena se interrumpe por la comisión de una nueva contravención o delito doloso, así como por aquellos actos que impidan la ejecución de la pena impuesta o impulsen la prosecución del trámite de la causa o exterioricen la voluntad estatal de reprimir. La prescripción corre o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes o responsables de la infracción.

LIBRO II DE LAS INFRACCIONES Y SUS SANCIONES

TÍTULO I DEL RESPETO A LAS PERSONAS

Capítulo I Del Respeto a la Integridad Física, Psíquica y Moral

Artículo 51.- Molestias a personas en sitios públicos. Serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que molestaran a otra persona afectando su decoro personal mediante gestos, palabras o graficaciones en la vía pública, lugares de acceso público o desde un lugar privado con trascendencia a terceros.

El máximo de la sanción prevista se duplicará si la víctima fuere mujer, menor de dieciocho (18) años de edad, mayor de setenta (70) años de edad o si el hecho se produjere en horario nocturno, cualquiera fuere su edad.

En ningún caso configurarán contravención las expresiones referidas a asuntos de interés público.

Artículo 52.- Actos contrarios a la decencia pública. Serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que en la vía pública, lugares abiertos al público o lugares públicos profririeren palabras o realizaren gestos o ademanes contrarios a la decencia pública.

El máximo de la sanción prevista se duplicará si tales actos fueran ejecutados en ocasión de celebrarse festividades cívicas, religiosas o actos patrióticos.

En ningún caso configurarán contravención las expresiones referidas a asuntos de interés público.

Artículo 53.- Tocamientos indecorosos. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que valiéndose de las aglomeraciones de personas en lugares públicos, sitios privados de acceso público o unidades de transporte público de pasajeros realicen en forma deliberada roces, tocamientos o manoseos en evidente actitud libidinosa o de acoso, que pudiera afectar el honor o decoro de otra persona.

Capítulo II

De la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 54.- Admisión de niñas, niños y adolescentes en espectáculos públicos Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los propietarios, gerentes, empresarios, encargados, regentes o responsables de salas de espectáculos o lugares de diversión pública que en contra de una prohibición legal dictada por autoridad competente permitieren la entrada o permanencia de niñas o niños menores de edad en esos locales.

A los fines de este artículo rigen en la Provincia las prohibiciones, restricciones y calificaciones efectuadas en el orden nacional, sin perjuicio de las que en jurisdicción local se establecieren en ausencia de aquellas o agravándolas.

En caso de reincidencia puede ordenarse, además, la clausura del negocio o local por un plazo de hasta treinta (30) días.

Artículo 55.- Prohibición de expendio o consumo de bebidas alcohólicas a menores. Los propietarios o responsables del expendio de bebidas alcohólicas, cualquiera sea su graduación, como el que facilitare o instigare su consumo a menores de dieciocho (18) años de edad serán pasibles de las siguientes sanciones, según corresponda:

a) Clausura del local por treinta (30) días en la primera ocasión y arresto de hasta quince (15) días, y

b) En caso de reincidencia clausura definitiva del local y arresto por treinta (30) días.

En el caso de que se expendan bebidas alcohólicas o se facilite o instigue su consumo a menores de catorce (14) años de edad, los propietarios o responsables del lugar serán sancionados con arresto de treinta (30) días y la clausura definitiva del local.

Iguales sanciones corresponderán cuando se tolere el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores aunque aduzcan haber ingresado a los locales con ellas en su poder.

A este fin se exhibirán, en las puertas de acceso y dentro de los locales que comercialicen bebidas alcohólicas, carteles con la leyenda: **"Código de Convivencia Ciudadana: Prohíbese el expendio y consumo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho (18) años"**.

Artículo 56.- Vehículo con niños en su interior. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que dejaren en el interior de un automóvil, vehículo automotor o similares a niños de hasta ocho (8) años de edad, sin el cuidado de una persona responsable.

El máximo de la sanción prevista se duplicará cuando el vehículo se encuentre estacionado:

1) En lugares no autorizados;

2) En lugares autorizados pero situados en una planta o nivel distinta a la que el responsable se ha dirigido;

3) Con el motor del vehículo encendido, o

4) Cuando las condiciones externas importen un mayor riesgo para la integridad física del menor.

El personal policial interviniente puede disponer las medidas razonablemente necesarias para asegurar la protección integral del menor.

Artículo 57.- Suministro de objetos peligrosos a niñas o niños menores de edad. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que en cualquier lugar o por cualquier medio suministren, faciliten o permitan a un menor de dieciocho (18) años de edad el acceso a cualquier tipo de arma de fuego, aire o gas comprimido, arma blanca, objetos cortantes, punzantes, explosivos,

venenosos, estupefacientes o material pornográfico, destinados de manera inequívoca a provocar daño para sí o para terceros.

Capítulo III

Del Respeto a la Libertad

Artículo 58.- Derecho de admisión. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que ingresaren o permanecieren en lugares públicos o privados de acceso público contra la voluntad de quien ejerza el derecho de admisión en los términos de la Ley Nacional Nº 26.370.

Artículo 59.- Ejercicio abusivo del derecho de admisión. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que amparándose en el ejercicio del derecho de admisión prohibieren o de cualquier manera impidieren el ingreso o la permanencia en un lugar público o privado de acceso público, en el que se realicen eventos y espectáculos musicales, artísticos, de entretenimiento en general, de esparcimiento, de consumición de bebidas y alimentos o similares, a una persona por sus condiciones subjetivas capaz de colocarla en una situación de discriminación, inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes.

Igual sanción les será aplicada a los propietarios, gerentes, empresarios, encargados, regentes o responsables del comercio o establecimiento que dispongan, permitan o toleren la conducta tipificada como infracción en el primer párrafo de este artículo.

El máximo de la sanción prevista se duplicará para el personal policial que, cumpliendo el servicio de adicional en el lugar, no impida la comisión de la infracción, sin perjuicio de las demás responsabilidades que le caben por su pertenencia a la fuerza de seguridad.

Artículo 60.- Cuidado de vehículos sin autorización legal. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que sin acreditar habilitación de la autoridad competente exigieren retribución económica por permitir el estacionamiento o alegar el cuidado de vehículos en la vía pública.

No resulta aplicable la sanción prevista en este artículo cuando la retribución sea efectuada de manera voluntaria por el propietario del vehículo.

Capítulo IV

De la Protección contra la Trata de Personas

Artículo 61.- Violación a la prohibición de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos de alterne. Sin perjuicio de las penalidades previstas en otros ordenamientos normativos sobre la materia y la clausura total y definitiva del establecimiento, serán sancionados con arresto de hasta sesenta (60) días no redimible por multa, los que violen la prohibición dispuesta en todo el territorio de la Provincia de Córdoba de instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración o explotación, bajo cualquier forma o modalidad, de manera ostensible o encubierta, de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos o locales de alterne.

Capítulo V

De la Protección ante Actos Discriminatorios

Artículo 62.- Actos discriminatorios. Serán sancionados con hasta quince (15) días de trabajo comunitario, multa de hasta treinta Unidades de Multa (30 UM) o arresto de hasta quince (15) días los que en lugares públicos, sitios públicos o de acceso público exhiban o hicieren exhibir simbologías, emblemas, carteles, imágenes o escritos que tengan contenido discriminatorio basado en una idea o teoría de superioridad de una raza o de un grupo de personas, en razones de nacionalidad, origen étnico o racial, color, religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos, capacidades diferentes o condiciones sociales, laborales o económicas.

Artículo 63.- Expresiones discriminatorias. Serán sancionados con hasta quince (15) días de trabajo comunitario, multa de hasta treinta Unidades de Multa (30 UM) o arresto de hasta quince (15) días los que en lugares públicos, sitios públicos o de acceso al público profieran o hicieren proferir frases, cánticos o cualquier otro tipo de manifestación verbal que tenga contenido discriminatorio basado en una idea o teoría de superioridad de una raza o de un grupo de personas en razones de nacionalidad, origen étnico o racial, color, religión, ideología, edad, sexo, orientación sexual, caracteres físicos, capacidades diferentes o condiciones sociales, laborales o económicas, que constituyan un menoscabo a la persona humana o una afrenta u ofensa a los sentimientos, honor, decoro o dignidad de las personas.

Artículo 64.- Agravante. El máximo de las sanciones previstas en este Capítulo se duplicarán cuando quienes cometan las infracciones lo hagan por intermedio de personas inimputables.

Capítulo VI

De la Protección contra la Violencia de Género

Artículo 65.- Hostigamiento. Maltrato. Intimidación. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta treinta (30) días los que intimiden, hostiguen o maltraten física, psíquica o económicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito.

Artículo 66.- Agravante. El máximo de las sanciones previstas en el artículo 65 de este Código se duplicarán cuando:

- a) El autor o instigador sea la persona sostén de familia;
- b) La víctima sea persona menor de dieciocho (18) años de edad, mayor de setenta (70) o con necesidades especiales;
- c) Se cometa por razones de género, o
- d) El hecho se produjere con el concurso de dos (2) o más personas.

TÍTULO II DEL RESPETO A LAS INSTITUCIONES

Capítulo Único Del Respeto a la Función Pública

Artículo 67.- Agravio al personal de centros educativos y de salud. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que en la vía pública, lugar público o de acceso público profirieren gritos, insultos o realizaren señas o ademanes capaces de turbar, intimidar, menoscabar psicológicamente o inferir agravio a la investidura, condición sexual, buen nombre u honor del personal docente o no docente, médicos o integrantes de los equipos de salud, con motivo o en ocasión de los servicios que prestan en cualquier centro educativo o nosocomio de la Provincia de Córdoba.

El máximo de las sanciones previstas se duplicará si se hubiere puesto en riesgo la integridad física de la persona afectada, cuando el hecho se hubiere producido dentro de un establecimiento educativo o de salud o en ocasión de celebrarse un acto público.

TÍTULO III DE LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES

Capítulo I De la Defensa de los Bienes Públicos y Privados

Artículo 68.- Perjuicios a la propiedad pública o privada. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que sin incurrir en delito contra la propiedad deterioren o de alguna manera afecten bienes de uso público o privado.

Artículo 69.- Posesión injustificada de llaves alteradas o de ganzúas. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que sin causa justificada llevaren consigo ganzúas u otros instrumentos exclusivamente destinados a abrir o forzar cerraduras, o llaves que no correspondieran a cerraduras que el tenedor pueda abrir legítimamente.

En todos los casos tales efectos serán decomisados.

Artículo 70.- Conducta sospechosa. Serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que evidenciaren una conducta sospechosa por encontrarse en inmediaciones de edificios o vehículos -con o sin moradores u ocupantes- o de personas:

- a) Escalando cercas, verjas, tapias o techos o mostrando signos de haberlo hecho o intentando hacerlo;
- b) Manipulando o violentando picaportes, cerraduras, puertas, ventanas o ventanillas;
- c) Portando herramientas o elementos capaces de ser utilizados para violentar cerraduras, puertas, ventanas o ventanillas;
- d) Circulando en vehículos o motovehículos sin la identificación correspondiente, y
- e) Persiguiendo de una manera persistente y ostensible a un transeúnte sin una razón atendible.

Artículo 71.- Merodeo en zona rural. Serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que merodearen establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales o mineros, o permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible, según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos.

Capítulo II De la Defensa del Patrimonio Cultural

Artículo 72.- Protección de obras de arte y monumentos históricos. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que de cualquier modo alteraren la forma, color u otro atributo de un inmueble, construcción, obra de arte o monumento de características históricas, científicas o artísticas, sujeto a la confianza pública, sin estar debidamente autorizado para ello, y no se tratare de una conducta prevista como delito en el Código Penal.

Artículo 73.- Protección de bienes con valor arqueológico. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días y decomiso de los bienes, los que sin permiso de autoridad competente remuevan, extraigan, retiren o transporten elementos que se encuentren en yacimientos arqueológicos o paleontológicos, o formen parte de ellos.

TÍTULO IV

DE LA DEFENSA DE LA FE PÚBLICA

Capítulo I

Del Uso de Uniformes o Credenciales

Artículo 74.- Falsa apariencia. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que simularen o aparentaren falsamente el desempeño de un trabajo o función, de un estado de necesidad, accidente o vínculo, con el propósito de ingresar a edificios, domicilios o lugares de uso privado.

Capítulo II

De la Utilización de Menores o Discapacitados

Artículo 75.- Exposición de menores o incapaces. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que en lugar público o privado de acceso público expongan a un menor de catorce (14) años de edad a la mendicidad o venta ambulante de mercaderías y los que se valieren de menores de dieciséis (16) años de edad o de persona incapaz o con discapacidad para obtener dádivas o beneficios. En el caso de los niños menores de edad debe darse intervención inmediata a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o al organismo que en el futuro la reemplace, a los fines de que la misma determine las medidas de protección integral de derechos, según lo previsto en la Ley Nº 9944.

Capítulo III

De las Subastas Públicas

Artículo 76.- Irregularidades en subasta pública. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que sin incurrir en delitos contra la propiedad perturbaren, confundieren, desalentaren o incitaren las propuestas, o de cualquier otro modo contribuyeren a frustrar -en todo o en parte- el normal desarrollo o el resultado de una subasta pública.

El máximo de la sanción prevista se duplicará cuando la perturbación se tradujera en el ofrecimiento de condicionar su prescindencia en la puja, por sí o por otro, formulada a otro concurrente o futuro concurrente a ella, a cambio de un pago dinerario u otra dádiva.

Capítulo IV

De los Medios Telefónicos e Informáticos

Artículo 77.- Falsos avisos o alarmas. Uso indebido de comunicaciones de seguridad o emergencia. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que alerten falsamente o realizaran llamados telefónicos al solo efecto de causar molestias a los servicios de emergencia, de policía, bomberos, maltrato de menores y todo otro servicio de emergencia pública.

Artículo 78.- Uso indebido de teléfonos. Responsabilidad del propietario. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días los propietarios u ocupantes por cualquier título del inmueble o dependencia donde se encuentre el teléfono desde el que se realizaren las llamadas sancionadas por el artículo 77 de este Código, salvo que se demuestre que al momento de cursarse la llamada les fue absolutamente imposible adoptar los recaudos necesarios para evitar su uso indebido.

Capítulo V

De la Venta de Entradas

Artículo 79.- Reventa prohibida de entradas. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que durante la venta de entradas a un espectáculo público:

- a)** No ofrecieren manifiestamente la totalidad de las localidades disponibles;
- b)** Las vendieren en condiciones diferentes a las dadas a conocer por el organizador del espectáculo;
- c)** Las revendieren con lucro indebido, o
- d)** Facilitaren la contravención de lo previsto en el presente artículo por su condición de dirigentes de las instituciones intervinientes.

TÍTULO V

DEL RESPETO A LA TRANQUILIDAD PÚBLICA

Capítulo I

De los Desórdenes y Escándalos Públicos

Artículo 80.- Desórdenes públicos. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que peleen o riñeran o incitaren a hacerlo en la vía o parajes públicos o en lugares expuestos al público, en forma peligrosa para su integridad o para terceros.

Artículo 81.- Escándalos y molestias a terceros. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que profirieren gritos, ofensas, hicieren ruidos o utilizaran otros medios capaces -conforme a las circunstancias- de causar escándalos públicos o molestias a terceros.

El máximo de la sanción prevista se duplicará si tales actos fueran ejecutados en ocasión de reuniones, justas deportivas o espectáculos públicos de cualquier naturaleza.

Capítulo II

Del Consumo y Expendio de Bebidas Alcohólicas y Otras Sustancias

Artículo 82.- Ebriedad o intoxicación escandalosa. Serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario o multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) y aplicación de instrucciones especiales los que por su culpa se encontraren o transitaren la vía pública o lugares públicos o abiertos al público en estado de ebriedad o bajo acción o efectos de estupefacientes, psicofármacos o cualquier otra sustancia, en forma escandalosa.

El máximo de la sanción prevista se duplicará si en la infracción intervinieren dos (2) o más personas.

En estos casos y en aquellos en que no se dé la condición de escándalo, la autoridad policial adoptará las medidas necesarias o convenientes para el mejor resguardo de la integridad física de los afectados y para hacer cesar la infracción o evitar que se incurra en ella.

Artículo 83.- Expendio prohibido de bebidas. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días los dueños, gerentes o encargados de negocios abiertos al público que omitieren usar los medios necesarios, con arreglo a las circunstancias -entre ellos requerir el auxilio de la autoridad policial- para evitar la permanencia en sus locales de personas en estado de ebriedad.

El máximo de la sanción prevista se duplicará en el caso de que las personas referidas expendieran bebidas a quienes se encontraren en estado de ebriedad.

Esta disposición se aplicará a los miembros de las comisiones directivas, gerentes o administradores de sociedades y asociaciones en cuyos locales se cometan las infracciones a que se refiere este artículo, cuando omitieren realizar la vigilancia necesaria para evitar que estos hechos se produzcan.

En caso de reincidencia podrá ordenarse, además, la clausura del negocio o local por el término de hasta treinta (30) días.

Artículo 84.- Organizar o promover juegos o competencias de consumo de alcohol. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días y clausura de hasta treinta (30) días los que organicen o promuevan, en lugares públicos o privados, juegos o competencias consistentes en el consumo de bebidas alcohólicas.

El máximo de la sanción prevista se duplicará cuando en el juego o competencia intervengan personas menores de dieciocho (18) años de edad.

Artículo 85.- Protección de niñas, niños y adolescentes. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que faciliten, distribuyan, vendan o suministren a menores de dieciocho (18) años de edad productos industriales o farmacéuticos de los que emanen gases o vapores tóxicos que al ser inhalados o ingeridos sean susceptibles de producir trastornos en la conducta y daños en la salud.

El máximo de la sanción prevista se duplicará cuando la víctima sea menor de dieciséis (16) años de edad.

TÍTULO VI DE LA DEFENSA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Capítulo I

De la Seguridad Pública

Artículo 86.- Falsa denuncia contravencional. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que denunciaren o acusaren ante la autoridad competente como autor de una contravención administrativa o reprimida por la legislación de infracciones en general, a una persona que sabe inocente, o simulare contra ella la existencia de pruebas materiales con el fin de inducir el proceso contravencional pertinente a su investigación.

Artículo 87.- Inobservancia de medidas de seguridad. Serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que no observaren las disposiciones de orden o seguridad para las personas o bienes dictadas por autoridad competente en ocasión de cualquier festividad o celebración pública o religiosa.

Artículo 88.- Negativa u omisión a identificarse. Informe falso. Serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que en lugar público o abierto al público, existiendo motivos razonables por los que un funcionario público o miembro de las fuerzas de seguridad -en ejercicio legítimo de sus atribuciones- les solicite que manifiesten o brinden la información suficiente que haga a su identidad, omitieren hacerlo, se negaren a dar los informes necesarios o los dieron falsamente, sin causa justificada.

En todos los casos, bajo pena de nulidad, el procedimiento debe efectuarse con la participación de dos (2) testigos civiles de actuación.

Artículo 89.- Tenencia o circulación de animales potencialmente peligrosos. Serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que en sitios públicos o privados enclavados en zona urbana

tuvieren o circularen con animales cuya peligrosidad ponga en evidente riesgo potencial la seguridad de las personas o cosas.

En todos los casos se procederá al secuestro de los animales potencialmente peligrosos a fin de hacer cesar el riesgo.

Artículo 90.- Juegos en ocasión de fiestas populares o religiosas. Serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que en ocasión de la celebración de fiestas populares, religiosas o juegos:

a) Utilizaren sustancias u otros elementos capaces de producir peligro para la integridad de terceros;

b) Arrojaran elementos líquidos desde vehículos en movimiento o desde edificios, o

c) Arrojaran o utilizaren otros elementos capaces -conforme a las circunstancias- de causar molestias a terceros que no participan de los eventos.

Artículo 91.- Peligro de incendio. Serán sancionados con multa de hasta cincuenta Unidades de Multa (50 UM) o arresto de hasta cincuenta (50) días los que sin causar incendios prendieren fuego en predios urbanos o rurales, en los caminos y en zonas de esparcimiento -públicas o privadas-, sin observar las precauciones necesarias para evitar su propagación.

La sanción será de hasta ciento veinte (120) días de arresto, no redimible por multa, cuando el fuego se prendiere durante los períodos en que el Poder Ejecutivo Provincial haya declarado la emergencia ambiental por riesgo de incendio.

Artículo 92.- Presencia de animales en predios ajenos. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que permitan a su ganado mayor o menor pastar o pasar a predios ajenos sin el consentimiento de su propietario, administrador o tenedor.

Artículo 93.- Deambulación de animales. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los propietarios o tenedores de animales que los dejen deambular por la vía pública o por lugares de uso público, con riesgo potencial de producir daños a terceros o a sus bienes.

Artículo 94.- Construcciones ruinosas. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que intimados por la autoridad competente no cumplan con la reparación o demolición de construcciones que pongan en peligro la seguridad de personas o cosas.

Cuando el propietario hiciere caso omiso a la intimación de demolición, la autoridad de juzgamiento puede ordenarla con cargo a cuenta del responsable.

Capítulo II

Del Uso de Pirotecnia

Artículo 95.- Artículos pirotécnicos. Fabricación. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días, decomiso y, en su caso, clausura de hasta noventa (90) días los que fabricaren artículos pirotécnicos sin autorización correspondiente de la autoridad competente.

Igual sanción le será impuesta a quienes comercializaren, almacenaren, transportaren o distribuyeren esos elementos producidos sin autorización.

Artículo 96.- Artículos pirotécnicos. Comercialización y uso. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta diez (10) días, decomiso y, en su caso, clausura de hasta ciento veinte (120) días los que comercializaren o utilizaren artículos pirotécnicos con riesgo de explosión en masa y los de trayectoria impredecible en tierra o por aire, a menos que esté expresamente autorizada su venta y uso por la autoridad competente.

Artículo 97.- Artículos pirotécnicos. Venta a menores. Serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días, decomiso y, en su caso, clausura o prohibición de funcionamiento por hasta ciento veinte (120) días los propietarios o responsables de quioscos, negocios fijos o ambulantes, comercios o actividades afines que vendieren o cedieren artículos de pirotecnia a menores de dieciséis (16) años de edad. Idéntica sanción se impondrá a los mayores de edad que, unidos o no por vínculos parentales, provean de pirotecnia a menores de dieciséis (16) años.

Artículo 98.- Prohibición de uso de pirotecnia. Espectáculos públicos. Prohíbese el uso de cualquier tipo de material de pirotecnia o artículo de pirotecnia en espectáculos públicos, se desarrollen éstos en espacios abiertos o cerrados, alcanzando la prohibición a los lugares adyacentes a su realización, tanto en forma inmediata a su inicio, durante su desarrollo como a su finalización.

Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta diez (10) días y prohibición de concurrencia a espectáculos públicos por hasta dos (2) meses si de eso se tratare y, en su caso, clausura los que:

a) Pretendieran introducir, por cualquier medio, elementos de pirotecnia, como artificios pirotécnicos del tipo que fuere, al ámbito espacial en donde se desarrolla un espectáculo público;

b) Ingresaren o facilitaren el ingreso de elementos de pirotecnia, como artificios pirotécnicos de cualquier tipo, dentro del ámbito espacial en que se desarrolla un espectáculo público, y

c) Utilizaren o facilitaren el uso de elementos de pirotecnia, como artificios pirotécnicos de cualquier tipo, dentro del ámbito espacial en que se desarrolla un espectáculo público y en las zonas circundantes, inmediaciones al lugar de su realización en una distancia no menor de cien metros (100 m)

cuando aquel se desarrolle en espacios abiertos, ya sea inmediatamente antes de su iniciación, durante su desarrollo o finalizado el mismo.

En todos los supuestos procede el decomiso respectivo de los elementos de pirotecnia y su posterior destrucción por parte de la autoridad competente.

El máximo de la sanción prevista se duplicará en caso de reincidencia.

Quedan exceptuados los espectáculos de artificios que cuenten con la autorización respectiva de la autoridad competente.

Artículo 99.- Falta de cumplimiento de normas de seguridad. Serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días, decomiso y clausura o prohibición de funcionamiento por hasta diez (10) días a quienes no cumplieren las normas de seguridad dictadas por la autoridad competente para el depósito y exhibición para la venta de productos pirotécnicos de bajo riesgo y venta libre.

Artículo 100.- Artículos pirotécnicos de bajo riesgo. Serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis Unidades de Multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días, decomiso y clausura o prohibición de funcionamiento por hasta diez (10) días a quienes vendieren artículos pirotécnicos de bajo riesgo y venta libre, que no llevaran -como mínimo- inscripciones y etiquetas anexas con las instrucciones para su utilización y la leyenda "elemento de riesgo".

Artículo 101.- Reincidencia. El máximo de las sanciones previstas en el presente Capítulo se duplicarán en caso de reincidencia.

Capítulo III Del Uso de Armas

Artículo 102.- Portación ilegal de armas. Agravantes. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días y decomiso los que en la vía pública o sitios públicos portaren armas a disparo, impulsadas por gases o aire comprimido, cortantes o contundentes, o llevaran elementos destinados a producir explosiones o daños en reuniones públicas, sitios públicos o abiertos al público.

La sanción de arresto se duplicará cuando la portación sea realizada por personal directivo o dependiente de empresas privadas de vigilancia sin estar autorizados para hacerlo.

Artículo 103.- Disparo de armas y encendido de fuego en sitios públicos. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta cinco (5) días los que sin incurrir en delitos contra las personas dispararen armas, lanzaren proyectiles, hicieren fuego o explosiones peligrosas en sitios públicos o abiertos al público, en lugares habitados o en reuniones públicas.

TÍTULO VII DE LA DEFENSA DE LA SEGURIDAD VIAL

Capítulo Único De la Seguridad en el Tránsito

Artículo 104.- Conductor menor de edad. Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario, multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que confiaren la conducción de un vehículo a un menor de edad no autorizado para ello por autoridad competente.

Artículo 105.- Conducción peligrosa. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta diez (10) días e inhabilitación de hasta ciento veinte (120) días los que en calles, caminos o rutas públicas condujeran vehículos de manera peligrosa para su propia seguridad o la de terceros.

El máximo de la sanción prevista se duplicará si se hubiere causado un accidente y, sin incurrir en el delito de abandono de personas previsto en el Código Penal, fugaren o intentaren eludir la autoridad interviniente.

En caso de reincidencia la inhabilitación puede extenderse hasta trescientos sesenta (360) días. La inhabilitación se comunicará a las autoridades competentes.

Artículo 106.- Carreras en la vía pública. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta diez (10) días los conductores que disputaren en la vía pública carreras de velocidad, regularidad o destreza con vehículos automotores, motocicletas o bicicletas, sin que mediare permiso previo de autoridad competente.

Artículo 107.- Obstrucción de señales viales o de interés público. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que removieren, hicieren ilegible, obstaculizaren o tergiversaren el significado de cualquier tipo de señal vial que hubiese colocado o mandado fijar una autoridad pública, o los que colocaren una de dichas señales que sea falsa.

Artículo 108.- Omisión de señalamiento de peligro. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que omitieren el señalamiento necesario para evitar un peligro proveniente de obras o tareas de cualquier índole que se efectuaren en caminos, calles u otros parajes de tránsito público.

Igual pena se le impondrá a la persona humana o jurídica que actúe como comitente, representante o ejecutor de la obra o tarea.

Artículo 109.- Conducción en estado de ebriedad o bajo acción de estupefacientes o psicofármacos. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta diez (10) días e inhabilitación de hasta dos (2) años los que condujeran vehículos en calles, caminos o rutas públicas en estado de ebriedad o bajo acción o efectos de estupefacientes, psicofármacos o cualquier otra sustancia.

En caso de reincidencia la inhabilitación podrá extenderse hasta cuatro (4) años.

La inhabilitación se comunicará a las autoridades competentes.

Artículo 110.- Agravantes. En los casos de los artículos 104, 105, 106 y 109 de este Código el máximo de la sanción se duplicará cuando el autor de tales infracciones condujere vehículos destinados al transporte de pasajeros o de cargas, o cuando los transportare de forma tal que constituya un peligro para el tránsito.

En caso de reincidencia corresponderá la inhabilitación para conducir cualquier tipo de automotores por el término de dos (2) años.

Artículo 111.- Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que condujeran motocicletas y ciclomotores sin la documentación correspondiente, sin la placa identificatoria del dominio colocada en debida forma o sin el casco normalizado.

Igual sanción le corresponderá a quienes se trasladaren como acompañantes sin el casco normalizado.

En todos los casos se procederá al secuestro de la motocicleta o ciclomotor, la que será restituida a su legítimo propietario cuando se hubieren subsanado los requisitos para circular.

La autoridad policial, con comunicación al Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios para su baja registral, ordenará la desnaturalización de toda motocicleta o ciclomotor que no hubiere sido retirada por su propietario dentro del año a contar desde la fecha en que se produjo el secuestro, en un todo de acuerdo al procedimiento que por vía reglamentaria se establezca.

TÍTULO VIII DE LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

Capítulo I

De la Trazabilidad de la Mercadería

Artículo 112.- Omisión de enviar listas o llevar registros. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días:

a) Los propietarios o encargados de negocios de compraventa de cosas muebles usadas que no llevaran el Registro General de los bienes adquiridos y Registros Especiales, cuando se tratare de metales y piedras preciosas, joyas, autopartes, aparatos de electrónica, electrodomésticos y cualquier otro que disponga el Poder Ejecutivo.

Idéntica sanción se aplicará a quienes omitieren, falsearen o adulteraren los datos que deban consignar en los registros previstos en el párrafo anterior.

Los registros deben ser rubricados y foliados por la autoridad policial correspondiente al lugar donde se encuentre emplazado el comercio, y contendrán:

- 1)** Nombre y apellido del vendedor;
- 2)** Número de documento;
- 3)** Domicilio;
- 4)** Descripción pormenorizada del bien adquirido;
- 5)** Precio pagado, y
- 6)** Firma o impresión digital del enajenante.

El comerciante debe conservar fotocopia de la primera y segunda página del documento de identidad del vendedor.

b) Los propietarios o encargados de negocios de compraventa de cosas muebles usadas que dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de compra, fundieren, desmontaren, transformaren o enajenaren los bienes a que se refieren los incisos precedentes, o no presentaren los objetos comprados o recibidos en consignación a requerimiento de la autoridad competente, y

c) Los propietarios o encargados de comercios de automotores usados, de talleres mecánicos, de mantenimiento, de chapa y pintura y de locales guardacoches, excluidas las simples playas de estacionamiento que, en violación de disposiciones dictadas por la autoridad competente, omitieren efectuar el Registro de Automotores que reciban así como el de la identidad de las personas que lo llevan a dichos lugares.

Los registros a que hacen referencia los incisos a) y c) del presente artículo deben ser exhibidos toda vez que lo requiera la autoridad policial.

En caso de reincidencia por las infracciones previstas en este artículo puede imponerse, además, la clausura del negocio por hasta sesenta (60) días.

Artículo 113.- Omisión de llevar registro de pasajeros. Serán sancionados con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de hasta tres (3) días los propietarios, administradores, gerentes o encargados de hoteles u hospedajes que

omitieren registrar el ingreso o egreso de los pasajeros que alojen o consignar datos referentes a su identificación y lugar de procedencia.

La misma sanción será aplicable a las personas mencionadas en el primer párrafo de este artículo que negaren u omitieren la exhibición del Registro de Pasajeros a la autoridad policial cuando ésta lo requiera.

Quedan exceptuados de la disposición precedente los hoteles habilitados por autoridades municipales para dar alojamiento por horas.

Artículo 114.- Omisión de llevar documentación para el transporte de carga. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa equivalente hasta el veinte por ciento (20%) del valor de la carga transportada o arresto de hasta tres (3) días los propietarios o transportistas que trasladaren cargas en general, cualquiera sea su género, forma o especie sin la documentación requerida por las disposiciones legales y la reglamentación respectiva.

Capítulo II

Faenamiento Clandestino

Artículo 115.- Faenamiento y transporte ilegal de animales. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que faenen, faciliten muebles o inmuebles o de cualquier manera colaboren a esos fines, o transporten animales faenados o sus distintas partes, conociendo o debiendo conocer que los mismos fueron faenados o transportados en las condiciones enunciadas en el artículo 115 de este Código.

Artículo 116.- Comercialización de animales faenados ilegalmente. Serán sancionados con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que adquirieren, reciben u ocultan o de cualquier manera comercializaren animales faenados o sus distintas partes, conociendo o debiendo conocer que los mismos fueron faenados o transportados en las condiciones enunciadas en el artículo 115 de este Código.

Artículo 117.- Agravante por reiteración. Las sanciones previstas en el presente Capítulo se duplicarán cuando el autor se dedicare en forma reiterada o con habitualidad, o cuando en su comisión intervengan más de dos (2) personas.

Artículo 118.- Secuestro y decomiso. La comisión de cualquiera de los hechos a que alude el presente Capítulo determinará siempre el secuestro y decomiso de la mercadería involucrada.

LIBRO III

DE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE INFRACCIONES

TÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 119.- Autoridad competente. Para conocer y juzgar las infracciones cometidas en el territorio de la Provincia de Córdoba son competentes:

a) Para el juzgamiento de las infracciones previstas en el Libro II de este Código los ayudantes fiscales -que no cuenten con competencia material específica- y -donde no los hubiere- los Jueces de Paz Legos de Campaña con competencia en el lugar donde se cometió la infracción o con asiento más próximo al lugar del hecho, y

b) Para entender en la revisión judicial los jueces de faltas y -donde no los hubiere- los jueces de control o en su defecto los jueces letrados más próximos al lugar del hecho.

Artículo 120.- Recusación y Excusación. La autoridad competente no es recusable pero puede excusarse cuando existan motivos fundados que la inhiban de juzgar por su relación con el imputado o con el hecho que motiva la causa.

Artículo 121.- Estado de libertad. La privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional y las normas que la autoricen son de interpretación restrictiva.

Artículo 122.- Detención preventiva. La detención preventiva no puede exceder las ocho (8) horas de duración, contadas a partir del momento de su aprehensión, y procede en los siguientes casos:

a) Cuando fuere sorprendido en flagrancia;
b) Si tuviere objetos o presentare rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en la comisión de una contravención, y

c) Cuando se negare a manifestar o brindar la información suficiente que haga a su identidad, omitiere hacerlo, se negare a dar los informes necesarios o los diere falsamente, sin causa justificada. En todos los casos, bajo pena de nulidad, el procedimiento debe efectuarse con la participación de dos (2) testigos civiles de actuación.

Toda detención preventiva debe ser comunicada de inmediato a la autoridad competente quien se impondrá de la situación y ordenará las medidas a seguir.

Las circunstancias que motiven la detención preventiva y su prolongación en el tiempo deben hacerse constar, bajo pena de nulidad, en el acta a que hace referencia el artículo 130 de este Código.

Artículo 123.- Incomunicación. En ningún caso procederá la incomunicación del presunto infractor bajo pena de nulidad del procedimiento.

Artículo 124.- Menores bajo el efecto del alcohol, estupefacientes, psicofármacos u otras sustancias. Cuando en la vía o paseos públicos se encontrare a menores de dieciocho (18) años de edad en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes, psicofármacos o cualquier otra sustancia que altere o limite su capacidad de obrar, la autoridad policial procederá a trasladarlos al

establecimiento sanitario o terapéutico que corresponda, dando inmediata intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o al organismo que en el futuro la reemplace, para su posterior entrega a los padres, tutores o guardadores a quienes se avisará y citará a ese fin. En caso de no ser retirados por adultos responsables dentro de las doce (12) horas de notificados, la Secretaría mencionada precedentemente, aplicará las medidas de protección integral de derechos que corresponda, de conformidad con la Ley Nº 9944.

TÍTULO II DE LOS ACTOS INICIALES

Artículo 125.- Promoción de la acción. Toda falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio o por simple denuncia verbal o escrita ante la policía o autoridad competente, salvo las establecidas en el artículo 46 del presente Código.

Artículo 126.- Emplazamiento del imputado. El funcionario que compruebe una infracción emplazará al imputado en el mismo acto para que comparezca ante la autoridad competente cuando ésta lo cite, salvo el caso en que sea procedente la detención preventiva.

Artículo 127.- Sustanciación del sumario. Corresponde instruir el sumario contravencional a la policía administrativa con inmediato conocimiento y siguiendo las directivas que le imparta la autoridad competente, si éste no creyere conveniente avocarse directamente a la instrucción. Dicho sumario debe quedar terminado en un plazo de cinco (5) días, prorrogables por un término igual mediante decreto fundado de la autoridad competente. En caso que hubiere detenidos el sumario debe sustanciarse en un plazo improrrogable de dos (2) días desde el momento de la detención.

Artículo 128.- Habilitación. La autoridad de juzgamiento y policial deben habilitar los días y horas necesarios para el estricto cumplimiento de los términos y plazos fijados en este Código.

Artículo 129.- Secuestro y medidas precautorias. La autoridad policial interviniente puede proceder al secuestro de todos los instrumentos, objetos, cosas, valores o dinero con que se haya cometido la infracción o que sirvieren para su comprobación. Puede, además, ejecutar toda otra medida precautoria -incluida la clausura- debiendo comunicar de inmediato lo actuado a la autoridad competente quien podrá decidir sobre la procedencia de la medida.

Artículo 130.- Acta inicial. La autoridad policial iniciará el sumario contravencional confeccionando un acta que contendrá los elementos necesarios para determinar claramente:

- a) El lugar, fecha y hora de comisión de la falta;
- b) La naturaleza y circunstancias de la misma y las características de los elementos, instrumentos o vehículos empleados para cometer la falta;
- c) El nombre y domicilio del imputado, si hubiere sido posible su individualización;
- d) El nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere;
- e) La disposición legal presuntamente infringida;
- f) El nombre, cargo y firma del funcionario interviniente;
- g) El detalle de los bienes secuestrados, y
- h) Si actúa de oficio o por denuncia.

Artículo 131.- Remisión del acta. La copia del acta cabeza de sumario será elevada a la autoridad competente inmediatamente de confeccionada, quien impartirá las directivas a cumplimentar para instruir el sumario.

Artículo 132.- Carácter del acta inicial. El acta tiene carácter de declaración testimonial para el funcionario interviniente.

Artículo 133.- Información. A todo imputado -detenido o no- se le hará saber de inmediato y por escrito, bajo pena de nulidad:

- a) El nombre de la autoridad competente a cuya disposición se encuentra;
- b) La contravención que se le atribuye;
- c) El derecho de designar asistencia letrada;
- d) La facultad de requerir copia del acta que debe serle entregada de inmediato, dejando constancia en el sumario, y
- e) El derecho de efectuar una llamada telefónica para informar a un familiar directo acerca de su situación.

TÍTULO III DEL JUZGAMIENTO

Artículo 134.- Carácter del juzgamiento. El juzgamiento será oral, sumario, gratuito, de características arbitrales y de instancia única.

Artículo 135.- Recepción del sumario. Recibido el sumario por la autoridad competente, cuando el hecho no configure contravención o no se pudiera proceder, éste ordenará su archivo sin más trámite. En caso contrario la autoridad competente citará inmediatamente al imputado si estuviere detenido, o dentro del término de diez (10) días si estuviere en libertad.

Artículo 136.- Remisión al ámbito jurisdiccional. Cuando la tipicidad de la infracción que se le imputa, las condiciones personales del infractor o la gravedad del hecho cometido hagan presumir que la sanción aplicable será de arresto, la autoridad de juzgamiento elevará de inmediato las actuaciones al juez competente conforme lo dispuesto en el inciso b) del artículo 119 de este Código, poniendo el infractor a disposición de éste si aún permaneciere detenido.

Artículo 137.- Comparecencia del imputado. En el día y hora fijados la autoridad competente intimará al imputado dando lectura del acta y procediendo a su identificación. Acto seguido escuchará al imputado -en presencia de su defensor- invitándolo a formular el descargo, a ofrecer y

producir pruebas si lo estima conveniente y, seguidamente si no hubiera pruebas para diligenciar, dictará resolución sin más trámite. Si el imputado no compareciera, se le reiterará la citación bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública, luego de lo cual y previa constancia en el sumario, se dictará resolución sin más trámite.

Artículo 138.- Pruebas. La autoridad competente, de oficio o a pedido de parte, puede interrogar personalmente a los testigos u ordenar las pruebas o medidas para mejor proveer que considere indispensables, a cuyo fin está facultado para suspender la audiencia por un término no mayor de diez (10) días.

Artículo 139.- Confesión de culpabilidad. Si el imputado confesara circunstanciada y llanamente su culpabilidad se dictará -sin más trámite- la resolución que corresponda, atendiendo lo preceptuado en los artículos 24, 25, 26, 27 y 41 del presente Código, en tanto resultaren aplicables.

Artículo 140.- Criterios generales. La autoridad competente valorará las pruebas con arreglo a la sana crítica racional y dictará resolución, absolviendo o condenando. En caso de duda debe estarse a lo que sea más favorable para el imputado.

Artículo 141.- Notificación. La resolución se tendrá por notificada en el mismo acto de ser dictada oralmente por la autoridad competente.

Artículo 142.- Acta de Juzgamiento. De lo actuado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 137 de este Código se labrará un acta, que debe contener:

- a) Lugar y fecha de realización;
- b) Nombre y apellido de la autoridad competente, del imputado y del defensor, y
- c) Una relación de los hechos que se imputan, resumen de las pruebas incorporadas y valoradas, descargo del imputado y del defensor y la resolución.

Artículo 143.- Resolución. Efectos. Se tendrán por firmes las resoluciones dictadas por la autoridad competente si los interesados -por sí o a través de su defensor- no solicitaren dentro de los dos (2) días de su notificación la revisión judicial, o si ulteriormente y sin causa justificada no comparecieron a la citación para la revisión judicial o durante su trámite.

TÍTULO IV DE LA REVISIÓN JUDICIAL

Artículo 144.- Revisión judicial. Dispuesta la remisión de la causa, conforme lo previsto en el artículo 136 de este Código, o pedida la revisión judicial la autoridad competente debe elevar de inmediato el sumario con los detenidos que hubiere al juez que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo 119 de este Código, sin hacerse efectiva la condena.

Dentro del plazo de veinte (20) días a contar desde la recepción del sumario en caso de hallarse en libertad, o inmediatamente si estuviera detenido, el juez citará al imputado para imponerlo de las actuaciones y fijar la fecha de audiencia del juicio.

El imputado puede presentar luego de la citación a juicio y hasta el comienzo de la audiencia, las pruebas que hagan a su defensa que no hubiere ofrecido y producido en oportunidad del artículo 137 del presente Código.

Artículo 145.- Audiencia de revisión judicial. Resolución. Actas. Abierta la audiencia el juez intimará el hecho de acuerdo a las constancias del sumario y a lo actuado por la autoridad competente, y recibirá declaración al imputado quien podrá abstenerse de hacerlo. Acto seguido, se examinarán los elementos de prueba. Excepcionalmente el juez -de oficio o a pedido del imputado- puede ordenar nuevas pruebas indispensables a cuyo fin está facultado para suspender la audiencia por un término no mayor de seis (6) días. Concluida la recepción de la prueba, el juez concederá la palabra al defensor y en último término preguntará al imputado si tiene algo que manifestar.

A continuación el juez dictará, en forma sumaria y oral, resolución absolutoria o condenatoria.

En la instancia jurisdiccional las autoridades comprendidas en el inciso b) del artículo 119 de este Código juzgarán sin encontrarse limitadas por lo valorado y dispuesto en la resolución dictada por la autoridad competente, pudiendo imponer sanciones más gravosas.

El secretario labrará un acta sumaria de lo actuado que será firmada por el juez, el imputado si supiere y quisiere hacerlo -dejándose constancia en caso contrario-, el defensor y el actuario.

Artículo 146.- Ley supletoria. Las disposiciones de la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba- se aplicarán supletoriamente en cuanto no fueran expresa o tácitamente incompatibles con las de este Código y la naturaleza de su procedimiento.

TÍTULO V DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 147.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia el día 1 de abril de 2016. Durante dicho lapso de tiempo se deben articular todos los mecanismos referidos a instrumentación, capacitación y readecuación del nuevo procedimiento en materia de contravenciones establecido en el presente Código.

Artículo 148.- Derogación. Derógase, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba- Texto Ordenado 2007 y sus modificatorias, a excepción de:

- a) Los artículos 54 al 60 del Capítulo Segundo -Alteraciones al orden en justas deportivas- del Título II del Libro II;
- b) Los artículos 105 al 108 del Capítulo Primero -Violación a normas reglamentarias de la caza y la pesca deportiva- del Título III del Libro II, y
- c) El inciso 2) del artículo 114 del Capítulo Primero del Título I del Libro III.

Artículo 149.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

Cra. Alicia Mónica Pregno

Vicegobernadora

Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

**PROYECTOS DE LEY- 2060/L/08, 8196/L/11, 10697/L/12, 12428/L/13, 13713/L/14,
13996/L/14, 13997/L/14, 14201/L/14, 14275/L/14, 14369/L/14, 14388/L/14,
14389/L/14, 14784/L/14 y 15160/L/14**

TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10327**

CAPÍTULO I

MODIFICACIONES A LA LEY Nº 9235 -DE SEGURIDAD PÚBLICA-

Artículo 1º.- Modifícase el inciso IV. del artículo 3º de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

"IV. Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para la investigación, persecución y conjuración temprana de contravenciones y delitos, así como para el intercambio de información delictiva en los términos de esta Ley."

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 22 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 22.- La función de la Policía de la Provincia de Córdoba consiste esencialmente en el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, en la prevención de las contravenciones y en la disuasión, prevención y conjuración temprana del delito, como así también su investigación, cuando corresponda de acuerdo a la ley."

Artículo 3º.- Modifícase el inciso p) del artículo 23 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:

"p) Conocer las faltas cuya competencia le atribuye el código de la materia y leyes complementarias, de conformidad a los procedimientos en ellos establecidos;"

CAPÍTULO II

MODIFICACIONES A LA LEY Nº 7826 -ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL-

Artículo 4º.- Incorpórase como inciso 5) del artículo 64 de la Ley Nº 7826 -Orgánica del Ministerio Público Fiscal-, el siguiente:

"5) Conocer y juzgar administrativamente las faltas cuya competencia le atribuye el Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba."

Artículo 5º.- Facúltase al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba a:

a) Dictar las normas prácticas para conocer y juzgar administrativamente las faltas cuya competencia el Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba le atribuye a los Jueces de Paz de Campaña;

b) Asignar la competencia territorial de los Jueces de Paz de Campaña y su eventual subrogación, y

c) Coordinar seminarios de formación, tendientes a homogeneizar los criterios y las valoraciones que contribuyan a una correcta aplicación del Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba.

Artículo 6º.- Facúltase al Ministerio Público Fiscal a:

a) Dictar las normas prácticas para conocer y juzgar administrativamente las faltas cuya competencia el Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba le atribuye a los Ayudantes Fiscales;

b) Asignar la competencia territorial de los Ayudantes Fiscales y su eventual subrogación, y

c) Coordinar seminarios de formación tendientes a homogeneizar los criterios y las valoraciones que contribuyan a una correcta aplicación del Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba.

Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

Cra. Alicia Mónica Pregno

Vicegobernadora

Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9-

INMUEBLES PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE TRATAMIENTO, VALORACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA Y ACCESOS. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.

Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley 17914/L/15, con una nota que mociona su tratamiento sobre tablas -la cual se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 2 de diciembre de 2015.

**Sra. Presidenta del
Poder Legislativo
De la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S. / D.**

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, para el expediente 17.914/L/15, proyecto de ley iniciado por los legisladores González y Arduh declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios y convenientes para la ejecución del Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de Residuos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba y accesos.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso
Legislador provincial

– Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos Mario Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.

Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de Comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador González.

Sr. González.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento el proyecto por el cual se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles para la ejecución del Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de la Provincia de Córdoba.

Este Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana Córdoba fue presentado por la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba, y lo que hoy vamos a votar declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios es, en realidad, el corolario de una larga gestión en la que han trabajado, cooperado y aportado valiosos elementos, información y propuestas, diez municipios de esta Provincia que paso a mencionar: Córdoba, Río Ceballos, Alta Gracia, La Calera, Juárez Celman, Despeñaderos, Malvinas Argentinas, Villa Allende, Villa Los Aromos y Villa La Bolsa. Ellos, junto al Sindicato de Recolección de Residuos de Córdoba, conforman CorMeCor, la corporación que propone la creación de este complejo ambiental para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Córdoba.

Señor presidente: se trata de un proyecto que apunta a resolver la disposición final de los residuos sólidos urbanos de una zona muy importante que, más allá del radio urbano de la ciudad Capital de Córdoba, incluye a numerosos municipios del área metropolitana. Algunos son grandes e inmensamente poblados, como Alta Gracia o Villa Allende, mientras que otros son más pequeños, como Villa Los Aromos o Villa La Bolsa. Sin embargo, todos

ellos, trabajando conjuntamente y acompañados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, han sido, a lo largo de estos años, los que han ido posibilitando la gestión que hoy culminará con el tratamiento y sanción de esta ley.

Es bueno decir que el Gobierno de la Provincia de Córdoba se compromete a hacerse cargo de las erogaciones, gastos y recursos financieros que la expropiación de este inmueble, cercano a las 400 hectáreas, requiera. Esto es, sin ninguna duda, una inversión muy importante que el Gobierno de la Provincia de Córdoba necesita realizar de manera imprescindible, en su política de cooperación con los gobiernos municipales, para avanzar en la solución de problemas que son de interés general; más aún en este momento que, por la situación en la que se encuentra el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos en Córdoba, se requiere de una respuesta inmediata poniendo en marcha la construcción y ejecución final de este complejo ambiental.

La resolución 510 del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía es, en realidad, el corolario de un expediente tramitado en la Secretaría de Ambiente en el que se ha incorporado toda la información técnica que describe las etapas de desarrollo del proyecto, como son el resumen ejecutivo, los objetivos perseguidos, la descripción del complejo que prevé la construcción de dos módulos para la disposición de residuos sólidos y la previsión de un sector para su expansión, y detalles de la forma en que operará el mismo.

En el expediente está también la descripción de la planta de separación mecánica, de la planta de residuos de obras y demoliciones, de la planta de compostaje, de la planta de tratamiento de lixiviados y la planta de biogas. Además, en el mismo se encuentra la evaluación del impacto ambiental, el plan de gestión ambiental de monitoreo y de contingencias, todo ello acompañado de una cuidadosa planimetría del proyecto y de un cómputo del monto de inversión para la ejecución de las obras, certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

También es de relevancia -y, obviamente, está en el legajo mencionado- el dictamen técnico número 75, de fecha octubre de 2015, por el cual la Comisión Técnica Interdisciplinaria, luego de evaluar la documentación mencionada, recomienda autorizar el proyecto del complejo ambiental y, por otra parte, la convocatoria efectuada por el secretario de Ambiente a una Audiencia Pública con el objeto de consultar el estudio de impacto ambiental presentado por CorMeCor Sociedad Anónima, que se celebró en noviembre en nuestra ciudad de Córdoba.

Con fecha de noviembre obra constancia de la celebración de una reunión en la que participaron todos los representantes del Gobierno de Córdoba mencionados, los accionistas de CorMeCor Sociedad Anónima y los representantes del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba, en la que se resolvió elegir el lugar para radicar el complejo dentro de las zonas -y esto es muy importante- indicadas como aptas u óptimas por el Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba, y ubicadas tal como se detalla precedentemente, entre la Ruta nacional 36 y la Ruta provincial 5, esto es en el Departamento Santa María de nuestra Provincia.

Es fundamental señalar, señor presidente, que con la ejecución de los actos descriptos se ha dado cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos legales que establece la normativa vigente en nuestra Provincia en materia ambiental. Esto es así porque el proyecto fue presentado bajo la responsabilidad técnica de consultores ambientales inscriptos en el Registro pertinente; porque la sociedad proponente se encuentra constituida en forma legal; porque se realizó en tiempo y forma adecuados y conforme a la Audiencia Pública; finalmente, porque el predio donde se prevé la instalación del proyecto ambiental se encuentra fuera de todo radio urbano municipal y, conforme surge del acta suscripta por todos los sectores -Gobierno provincial, CorMeCor y Sindicato- sería expropiado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Por todo lo mencionado, el paso siguiente consiste en declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación por parte de esta Legislatura los inmuebles necesarios y convenientes para la ejecución del mencionado Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba.

En lo referente al aspecto normativo, el proyecto en tratamiento encuentra su fundamento en la Ley 6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º dispone: "La declaración de utilidad pública se hará en cada caso, por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación", tal como reza textualmente la ley. De este modo se garantiza tanto la planificación previa a la determinación del bien como la razonabilidad de la misma.

Entonces, el proyecto en tratamiento contempla lo siguiente: primero, la declaración de utilidad pública, en su artículo 1º, y la determinación, en su artículo 3º, de que los inmuebles en cuestión ingresen al dominio público de la Provincia. Segundo, la previsión establecida en su artículo 4º de que el Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a los fines de reflejar presupuestariamente lo aquí establecido. Tercero, especialmente en su artículo 5º, y, teniendo en cuenta la finalidad de los inmuebles a ser expropiados, se determina una zona de restricción para el establecimiento y desarrollo de emprendimientos inmobiliarios residenciales, complejos habitacionales o desarrollos urbanísticos, ya sean públicos o privados, para residencia permanente o transitoria en una franja; la restricción rige en una franja de mil metros alrededor de todo el perímetro de los inmuebles a expropiarse.

Por último, deroga en su artículo 6º la Ley Provincial 10165 de 2013, que declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación determinados inmuebles para la ejecución de las etapas de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Por todo ello, y por considerar que con esta expropiación concretaremos un significativo avance tendiente a mejorar la calidad de vida en una zona tan densamente poblada, como la que incluye los municipios que comprenden el ente CorMeCor y, en definitiva, con el objetivo de lograr una comunidad sustentable y resaltando la cooperación que ha existido entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y los diez gobiernos locales que han trabajado en este tema, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley que declara de utilidad pública y expropia los inmuebles descriptos en el Anexo, que forma parte del presente proyecto.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Arduh.

Sr. Arduh.- Señor presidente: en verdad, el legislador González ha desarrollado el presente proyecto en su totalidad.

Lo que queríamos agregar desde el bloque de la Unión Cívica Radical respecto de este proyecto ambicioso sobre el tratamiento de los residuos sólidos urbanos que tiene CorMeCor es, más que todo, explicar porqué es este lugar específico el que se ha determinado.

En 2012, se firmó un convenio entre el Municipio de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba con el objetivo de analizar los posibles sitios de emplazamiento. En una primera etapa se tuvieron las alternativas de emplazamiento y, en la segunda, el estudio de riesgo ambiental, determinando cuáles eran las zonas aptas y las no aptas para el emplazamiento del sitio.

En 2014, tomando en consideración las conclusiones del prestigioso workshop "Alternativas tecnológicas para el tratamiento y valorización de los residuos", del Comité Evaluador compuesto nada más ni nada menos que por la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Católica y el INTI, que recomendaba la instalación de una planta de tratamiento como la que se presenta, pero sobre todo considerando las conclusiones de la segunda etapa del estudio de la selección del sitio elaborado, determinado por la Universidad Nacional de Córdoba, se redefinió el sitio propuesto originalmente para la instalación del centro; también se realizaron todos los otros estudios técnicos -de topografía, geotecnia e hidrología superficial y subterránea.

Este año se presentó ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia el estudio de impacto ambiental, acompañado por el plan de gestión y monitoreo ambiental, el plan de contingencias y se incorporaron estudios técnicos de topografía, geotecnia e hidrología.

En octubre de 2015, la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente de la Provincia emitió -como bien dijo el legislador González- el dictamen técnico 075 habilitando la consecución del procedimiento a la Audiencia Pública, que se realizó el 24 de noviembre.

Por eso, señor presidente, los residuos de carácter sólido urbano tienen hoy una importancia sustantiva en las políticas de gestión de nivel municipal y comunal en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

Esto es así por la significancia que tiene el adecuado manejo de estos residuos en los presupuestos públicos, y por el efecto adverso que implica un manejo inadecuado, tanto sobre las condiciones ambientales de la región, como de la salud de la población en general.

Por ello, solicitamos se declare de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio de referencia.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Clavijo.

Sr. Clavijo.- Señor presidente: adelantamos nuestro apoyo al tema en cuestión.

En 2013, nuestra posición fue de rechazo a las expropiaciones entonces planteadas y que hoy son derogadas por este mismo proyecto que se trae, por consideraciones y motivos

que no viene al caso repetir hoy, que tenían que ver con estudios de impacto ambiental y con situaciones socioeconómicas de las zonas elegidas.

Al tema en cuestión lo hemos valorado y puesto de manifiesto; se trata de la elección, como bien lo manifestara el legislador González, de un predio que se encuentra dentro, no sólo de la legislación vigente en Córdoba -ya sea porque las leyes nacionales, provinciales o las propias ordenanzas municipales lo determinan-, sino porque está dentro de lo permitido en los estándares internacionales en cuanto a las distancias a zonas pobladas.

Hace varios años, en un reportaje que le hicieran al escritor uruguayo Eduardo Galeano, el periodista le preguntaba qué opinión le merecía el hecho de que un ciudadano estadounidense consumiera diez veces lo que consume un ciudadano mexicano; el escritor le contestó que por suerte es así, porque el consumo supone desechos y contaminación, y si todos los habitantes del planeta consumiéramos lo que consume un habitante estadounidense, realmente no podríamos vivir.

Es decir que la basura es un tema de alcance mundial, problemático y difícil, y hoy esto adquiere relevancia porque estamos hablando de la ciudad de Córdoba, por los volúmenes de residuos sólidos urbanos que se generan en esta ciudad y porque esta situación viene año tras año y gobierno tras gobierno sin encontrar una solución seria y efectiva.

Hemos participado del workshop que se hizo, donde distintas empresas presentaron sus propuestas al municipio, y también participamos de la presentación de la oferta ganadora; no pudimos participar de la Audiencia Pública que se realizó este mes, y también podemos decir que hoy tenemos algo que en 2013 no teníamos: la nueva Ley de Ambiente de la Provincia de Córdoba.

Un tema particular es la situación que se vive en Bouwer, una zona marginada de nuestra Provincia donde, lamentablemente, se ha ido llevando todo lo que la sociedad o la mayoría de los cordobeses no desea ver, como son los predios de enterramiento de basura, la cárcel, el depósito de autos, el depósito podrido del Estado y la planta de tratamientos cloacales, han convertido a esa zona de la Provincia en marginada y muy deprimida.

Digo esto porque el hecho de estar aprobando este predio de enterramiento y, por lo tanto, el proyecto que se ha puesto a consideración, no quita recordar lo que está pasando en esa zona, la remediación de la misma sigue siendo una gran deuda que tenemos el resto de los cordobeses con quienes viven allí.

El proyecto presentado, sobre el cual hoy lo que vamos a resolver es la expropiación del predio, es un proyecto que en los papeles y en lo escrito viene a dar muchas garantías respecto a una solución de fondo a los problemas que veníamos teniendo. Al día de hoy, el enterramiento de residuos sólidos urbanos se hace en un predio calificado de provisorio, y hasta la fecha no existía un proyecto alternativo que diera, por lo menos, los visos de una solución de fondo para los próximos años, como es el proyecto que se ha definido, y la expropiación de este predio, que por sus dimensiones asegura que el mismo pueda ser usado en los próximos treinta o cuarenta años.

También consultamos a algunos profesionales con quienes trabajamos en la Ley de Ambiente -repito la Ley de Ambiente-, porque el tema del enterramiento de basura fue uno de los casos que fuimos tomando para ir definiendo buena parte del articulado de la ley para que sirva como una herramienta para ir solucionando problemas y no, como dijimos cuando se trató la ley, para generar problemas nuevos; consultamos al biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, ya que ese foro, junto con la red ciudadana Nuestra Córdoba, realizaron un análisis en conjunto y presentaron un proyecto donde planteaban que querían que el proyecto en cuestión estableciera una línea de base para que cuente con un plan de metas para recuperación de residuos y disminución de enterramientos a corto, mediano y largo plazo, que debía generar las condiciones para que la información necesaria para monitorear el progreso en el cumplimiento de las metas fuera pública y estuviera disponible; que en caso de que se cumplan o se superen las metas exista un incentivo, en principio tributario, y en caso de que no se llegue a las metas exista una sanción; que prevea el uso energético del biogas generado por el enterramiento -a este punto volveré después- y que se cree una comisión asesora técnico-social que monitoree el avance del plan de metas, el acceso a la información de cómo se gestiona el predio y la realización de informes y propuestas.

Consultado el biólogo Kopta, éste manifestó que todas estas propuestas fueron incorporadas en las recomendaciones de la Comisión Técnica Interdisciplinaria y que, incluso, las mismas fueron ratificadas en la Audiencia Pública del 24 de noviembre.

Dije que volvería al tema del biogas porque en los predios a remediar, tanto de Bouwer como de Piedras Blancas, existe hoy una fenomenal reserva de gas que la Provincia de Córdoba, a través de su Empresa Provincial de Energía, puede utilizar para generar energía, lo que daría un salto no sólo en la calidad de la generación de energía -una actividad

altamente contaminante- sino incluso incorporando un elemento en la generación de energía que permitiría abaratar los costos de la misma. Es decir, es algo que tenemos a mano, es algo que necesitamos aprovechar y que por suerte tenemos una empresa en manos del Estado, como la Empresa Provincial de Energía Eléctrica, que puede utilizar este tipo de combustible que hoy se está generando a través de la basura, ya que la generación de gas no es algo inmediato, y en el nuevo predio de enterramiento llevará su tiempo hasta poder contar con la producción de gas necesaria para generar energía eléctrica.

Por los motivos expuestos, decidimos brindar el apoyo a la decisión de expropiar este predio de enterramiento, y quiero decirlo con la tranquilidad de saber que hoy en Córdoba tenemos la ley más avanzada que existe en la Nación respecto al ambiente, y uno de sus articulados, el que tiene que ver con el estudio de impacto en salud, es un tema sobre el cual se trabajará, ya que está pensado de tal manera que a lo largo no sólo del proyecto o de la construcción de la planta, sino a lo largo de toda la operación permitirá controlar y monitorear para que el impacto en salud sean minimizado, sea controlado y para evitar de esta manera que ello se transforme en un nuevo cuento de terror, como terminaron siendo los viejos predios de enterramiento de Bouwer y de Piedras Blancas.

De esta manera, damos nuestro apoyo al proyecto presentado.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.

Es para adelantar el rechazo del bloque del Frente de Izquierda al proyecto en tratamiento, esencialmente porque, a pesar de que a uno le gustaría confiar en los estudios que se citaron del Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba y demás, hay estudios que encomendaron los vecinos a la Universidad de La Plata que descalifican, tanto técnica como científicamente, a los presentados para dar aval a esta expropiación. No sólo eso, sino que, además, los mismos vecinos plantearon que la Audiencia Pública se hizo en un día laborable en la otra punta de Córdoba, con la imposibilidad que eso significa para asistir a esa Audiencia y, atendiendo a estas cuestiones, marcan que una vez más Bouwer se ve perjudicada por los sucesivos enterramientos de basura y vertederos que tienen y que han originado problemas, no sólo para la población en lo que hace a olores nauseabundos y demás, sino para la propia salud de los habitantes. De hecho, se han detectado muchísimos casos de plomo en sangre no solamente en animales sino en personas que viven en ese sector.

Por esa razón, defendiendo el interés de los vecinos es que voy a rechazar este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Echevarría.

Sra. Echevarría.- Señor presidente: es para solicitar la abstención en este punto porque considero que es una decisión muy importante votar un proyecto ambiental a 30 años y creo que no se ha podido garantizar un debate adecuado para poder tomar tal decisión.

No desconozco la existencia de un proceso de varios años en el que han intervenido varias instituciones, pero no se ha podido discutir bien en este recinto.

Además, en la Audiencia Pública que se ha realizado hace pocos días se han escuchado voces críticas, fundamentalmente de los vecinos de las comunidades aledañas a este predio; también de organizaciones como FUNAM, y hay algunos especialistas de la Universidad de La Plata que realizan objeciones al estudio de impacto ambiental. Todas estas cosas nos parece que ameritan una revisión para tomar una decisión que, insisto, no es respecto de un proyecto menor sino de algo que va a impactar en los próximos 30 años.

Como no se ha podido garantizar todo esto es que solicito la abstención.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Voy a poner a votación la solicitud de abstención formulada por la legisladora Echevarría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.

Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: nuestro humilde y pequeño partido tuvo su debut electoral en Bouwer, en la elección municipal, y salimos segundos, con tres concejales, y conste que no votan los presos.

Hecha esa aclaración, le digo que en el día de hoy, cuando apareció con fuerza este proyecto, me comuniqué con los concejales electos por la comunidad de Bouwer, que conocen plenamente dónde estarían ubicados -y las coordenadas- estos nuevos predios a expropiar, y quien era el candidato a intendente me manifestó que consideran que con la nueva colocación se reducirían totalmente los riesgos y peligros que ellos vieron

oportunamente, y que también le puede significar a la población de Bouwer –la externa, señor presidente- algo importante en cuanto a puestos de trabajo.

Nos hemos tomado el trabajo de averiguar si habría algún reproche importante de la comunidad a la instalación en ese lugar y doy por seguro que esta gente que representa a la primera minoría de la localidad –son tres concejales- me manifestaron que no están preocupados por el riesgo.

En segundo lugar, me parece que no todos los días aprobamos, en esta Cámara, leyes que son el resultado de una concertación en lo público, una concertación de los distintos estamentos del sector público que llevó años de trabajo, que llevó esfuerzos y que nos marca, en cierta forma, el camino del futuro, el camino de la concertación de sectores políticamente diversos en pro de objetivos comunes.

Ese y sólo ese es el argumento por el cual apoyo este proyecto de ley. En verdad, no me gustó la velocidad con la que apareció el proyecto, pero creo que hay que premiar el esfuerzo de los que vienen trabajando desde hace mucho tiempo para que esto salga bien.

Como usted sabe, señor presidente, en los cuatro años que he estado acá no he votado expropiaciones abiertas, pero esta expropiación vino semiabierta, vino con la expresión exacta de las coordenadas de la zona a expropiar en el croquis que la acompaña; de no haber venido el croquis explicando perfectamente las coordenadas del sector a expropiar o si estuviese mal la referencia específica en el artículo 1º, no hubiera votado; voto favorablemente y le doy un fuerte estímulo a los que están trabajando en la concertación pública –no privada, hay que resaltar esto- por el futuro del tratamiento de los residuos sólidos y el sistema que prevé CorMeCor.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, señor legislador.

Tiene la palabra el legislador Salvi.

Sr. Salvi.- Gracias, señor presidente.

Adelanto el voto afirmativo a este proyecto. Desde el bloque Frente para la Victoria entendemos que es darle una solución a la ciudad de Córdoba y al gran Córdoba; por eso, vemos con agrado este proyecto y lo vamos a acompañar.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legislador.

Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.

Comparto en todas sus partes los argumentos expresados por el legislador Clavijo de manera tal que, para mayor abundamiento, voy a adherir a los mismos.

Quiero que quede expresado mi voto positivo para el presente proyecto.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.

Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión el proyecto tal como fue presentado.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.

-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración en general el proyecto 17914/L/15, tal como fuera despachado por la Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.

A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.

– Se votan y aprueban los artículos 1º a 6º, inclusive.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

**PROYECTO DE LEY
17914/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Declárense de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles necesarios y convenientes para la ejecución del Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final de los Residuos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba y los pertinentes accesos, a localizarse entre las coordenadas que se detallan en el Croquis anexo a la presente.

ARTÍCULO 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas de los inmuebles descriptos en el artículo 1º de esta Ley, serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente de conformidad a la individualización que realizará el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 3º.- Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación en el artículo 1º de esta Ley, ingresarán al dominio público de la Provincia y se inscribirán en el Registro General de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en la presente Ley.

ARTÍCULO 5º.- Determinése como zona de restricción para el establecimiento o desarrollo de emprendimientos inmobiliarios residenciales, complejos habitacionales o desarrollos urbanísticos para residencia permanente o transitoria de población o casas habitacionales, sean públicas o privados, sobre las fracciones que se extiendan en una franja de mil metros (1000 mts.) alrededor de todo el perímetro de la zona determinada en el artículo 1º de la presente Ley.

ARTÍCULO 6º.- Deróguese la Ley Provincial nº 10165.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Leg. Oscar González., Leg. Orlando Arduh.

FUNDAMENTOS

El saneamiento urbano encuentra entre uno de sus principales componentes el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

Para concretar dicho saneamiento se requiere la implementación de estrategias de gestión basadas en políticas públicas orientadas por la noción de sustentabilidad ambiental urbana. Estas últimas deben asentarse en datos técnico-científicos que describan adecuadamente la situación socio-ambiental actual y permitan proyectar acciones a futuro.

En el sentido precitado, la Resolución nº 510 de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, de fecha 30 de Noviembre de 2015, APROBÓ el Estudio de Impacto Ambiental "Complejo Ambiental de Tratamiento, Valoración y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba", que fuera presentado por la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana de Córdoba SA (CORMECOR SA).

CORMECOR SA, integrada por diez localidades (Córdoba, Río Ceballos, Alta Gracia, Estación Juárez Celman, La Calera, Despeñaderos, Malvinas Argentinas, Villa Allende, Villa Los Aromos, y Villa La Bolsa) y por el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba, es la responsable del proyecto que consiste en la instalación de un complejo ambiental de tratamiento, valoración y disposición final de residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Córdoba, a emplazarse íntegramente en una superficie de 340 hectáreas ubicadas en predio sito entre la Ruta Nacional nº 36 y la ruta Provincial nº 5, Depto. Santa María, cuyas coordenadas extremas son: A: x.6507537 y.4377185; G: x.6506761 y.4380916; H: x.6506724 y. 4380907; E: x.6505645 y. 4376635.

La Resolución antes mencionada fue el corolario del Expediente nº 0517-020536/15, tramitado en la Secretaría de Ambiente, en el que se fue incorporando la información técnica que describe las etapas de desarrollo del proyecto, entre las que se cuentan: resumen ejecutivo resaltando las particularidades del proyecto, objetivos perseguidos, descripción del complejo (que prevé la construcción de dos módulos para la disposición de residuos sólidos) y la previsión de un sector para su expansión y detalles de la forma en la que operara el mismo.

Que asimismo obran en dicho expediente, descripción de la Planta de separación Mecánica, Planta de Residuos de Obras y Demoliciones, Planta de Compostaje y de Tratamiento de lixiviados y Planta de Biogás. También se glosaron al mismo Evaluación de Impacto Ambiental, Plan de Gestión ambiental, de Monitoreo y Contingencias. Todo ello acompañado de la planimetría del Proyecto y cómputo de monto de inversión para la ejecución de las obras certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.

Resultan de relevancia, y obviamente constan en el legajo referenciado, por una parte el Dictamen Técnico nº 075 de fecha 20/10/15 por el cual la Comisión Técnica Interdisciplinaria luego de evaluar la documentación mencionada recomienda AUTORIZAR el proyecto del Complejo Ambiental, y por la otra la convocatoria efectuada por el Secretario de Ambiente a la Audiencia Pública con el objeto de consultar el Estudio de Impacto Ambiental presentado por CORMECOR SA, la que se celebró el 24/11/15. Obra, además, constancia de que con fecha 12/11/15 se celebró reunión en la que participaron representantes de Gobierno de Córdoba, accionistas de CORMECOR SA y representantes del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba, en la que se resolvió elegir el lugar de radicación del complejo, dentro de las zonas identificadas como aptas/óptimas por el Instituto superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Córdoba y ubicadas, tal como se detallo precedentemente, entre la Ruta Nacional nº 36 y la Ruta Provincial nº 5.

Es fundamental señalar que con la ejecución de los actos descriptos se dio acabado cumplimiento a todos y cada unos de los requisitos legales que establece la normativa vigente en nuestra provincia en materia ambiental, dado que: el proyecto ha sido presentado bajo la responsabilidad técnica de consultores ambientales inscriptos en el registro pertinente; la sociedad proponente se encuentra constituida en legal forma; se realizó en tiempo y forma la audiencia pública y, finalmente, el predio

donde se proyecta la instalación del complejo se encuentra fuera de todo radio administrativo y conforme surge del acta suscripta por representantes de todos los sectores (gobierno provincial, CORMECOR y Sindicato) será expropiado por la Provincia.

Por todo ello, el paso siguiente consiste en la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación, por parte de esta Legislatura, de los inmuebles necesarios y convenientes para la ejecución del mencionado "Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final de los Residuos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba".

En lo referente al aspecto normativo, el proyecto en tratamiento encuentra su fundamento en la Ley 6394 - "Régimen de Expropiación", que en su artículo 2º dispone "...La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación..." garantizando así tanto la planificación previa a la determinación del bien, como la razonabilidad de la misma.

Este proyecto prevé entonces y como es usual en estos casos:

- la declaración de utilidad pública en su artículo 1º y la determinación en su artículo 3º de que los inmuebles en cuestión ingresen al dominio público de la provincia;

- la previsión, en su artículo 4º, de que el Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo aquí establecido; y

- especialmente en su artículo 5º y teniendo en cuenta la finalidad de los inmuebles a ser expropiados, la determinación de una zona de restricción para el establecimiento o desarrollo de emprendimientos inmobiliarios residenciales, complejos habitacionales o desarrollos urbanísticos para residencia permanente o transitoria de población o casas habitacionales, sean públicas o privados, en una franja de mil metros (1000 mts.) alrededor de todo el perímetro de la zona a expropiarse; y

- Derogar, en su artículo 6, la Ley Provincial 10165, del año 2013, que declaraba de utilidad pública y sujetos a expropiación determinados inmuebles para la ejecución de las etapas de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de la ciudad de Córdoba

Por todo ello, y por considerar que con esta expropiación concretaremos un significativo avance tendiente a mejorar la calidad de vida de una zona tan densamente poblada como la que comprende a las localidades que integran el CORMECOR y en definitiva con el objetivo de lograr una comunidad sustentable, entendiéndolo por tal aquella donde su población, tanto la que vive como la que labora, mantiene una relación de equilibrio con el entorno natural y construido para lo cual trabajan constantemente mejorando el mencionado entorno en el ámbito local, es que pido por su intermedio a esta legislatura el estudio y la aprobación del presente proyecto de ley.

Leg. Oscar González., Leg. Orlando Arduh

PROYECTO DE LEY 17914/L/15

TEXTO DEFINITIVO

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY: 10328

Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los inmuebles necesarios y convenientes para la ejecución del Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final de los Residuos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba y los pertinentes accesos, a localizarse entre las coordenadas que se detallan en el Croquis Anexo a la presente.

Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas de los inmuebles descriptos en el artículo 1º de esta Ley, serán las que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente de conformidad a la individualización que realizará el Poder Ejecutivo.

Artículo 3º.- Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación en el artículo 1º de esta Ley ingresarán al dominio público de la Provincia y se inscribirán en el Registro General de la Provincia de Córdoba.

Artículo 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en la presente Ley.

Artículo 5º.- Determinese como zona de restricción para el establecimiento o desarrollo de emprendimientos inmobiliarios residenciales, complejos habitacionales o desarrollos urbanísticos para residencia permanente o transitoria de población o casas habitacionales, sean públicas o privados, sobre las fracciones que se extiendan en una franja de mil metros (1000 m) alrededor de todo el perímetro de la zona determinada en el artículo 1º de la presente Ley.

Artículo 6º.- Derógase la Ley Nº 10165.

Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

**Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba**

-10-

**RUTA PROVINCIAL Nº 21. TRAMO CERRO COLORADO-QUILINO.
DENOMINACIÓN COMO "CURACA JUAN ASENCIO".**

Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17812/L/15, con despacho de comisión.

A continuación se leerá la nota respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 2 de diciembre de 2015.

A la Presidencia del Poder Legislativo

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 17812/L/15, proyecto de ley iniciado por los legisladores Vásquez, Solusolia, Caro, Eslava y Brouwer de Koning, denominando "Curaca Juan Asencio" al tramo de la Ruta Provincial Nº 21, que une las localidades de Cerro Colorado y Quilino.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso

Legislador provincial

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.

Tiene la palabra el legislador Mario Vásquez.

Sr. Vásquez.- Señor presidente: el presente proyecto de ley es para designar el tramo de la Ruta provincial Nº 21, entre las localidades de Caminiaga y Quilino, con el nombre de Curaca Juan Asencio, con el claro objeto de reconocer y honrar la memoria de quienes habitaron nuestra región del norte cordobés, así como recordar y respetar la identidad, costumbres, tradiciones y legados de los pueblos aborígenes.

Ya hemos tratado un proyecto de ley para el tramo que va desde Caminiaga hasta Santa Elena, con intersección de la Ruta nacional Nº 9 pasando por Cerro Colorado, al cual denominamos Atahualpa Yupanqui en reconocimiento y honra a ese cantautor argentino popular que tuvo nuestro norte de Córdoba, que se aquerenció en esa región, pero siempre relacionado con un hombre que fue Eustacio Barrera, descendiente de pueblos originarios de nuestra zona, quien le dio un terreno donde hizo su casa Atahualpa que se llamó Agua Escondida. Hubo un indio relacionado con Atahualpa que se llamaba indio Pachi, que era un reconocido músico de la zona, y la característica que poseía era tocar la guitarra con su mano izquierda.

En este otro tramo de la Ruta Nº 21 que va desde Caminiaga a Quilino, queremos hacer un reconocimiento y recordar al último curaca que tuvo la comunidad indígena de la zona de Quilino y Villa Quilino. Este curaca era llamado así pero, en realidad, era cacique, como los denominaron los españoles.

Juan Asencio era de la etnia de los Henia-Kamiare, que habitaban la región del Valle Quilín, cuyo rango era curaca, es decir, era el responsable de la gobernación de su comunidad, el rango más alto de su organización social, el cual era de carácter hereditario.

Para hablar de nuestros pueblos originarios debemos recordar quiénes eran para fortalecer la memoria colectiva y saber quiénes habitaron originalmente nuestro suelo.

Es así que la expedición de Jerónimo Luis de Cabrera, que fundó Córdoba en 1573, en su recorrido ingresó por el actual norte de la Provincia de Córdoba, más precisamente por la zona de San Francisco del Chañar, pasando por Caminiaga, para luego llegar a la región del Valle de Quilín, que era una de las regiones más pobladas del norte de la Provincia, con características de un microclima con temperaturas apacibles aún en la época de invierno, surcado por dos acequias de un importante caudal de agua con características cristalinas, una llamada por su pueblo Chimampa y la otra Yuramampa que significaba "agua blanca" o "río blanco", descubriendo así la comunidad de los indios Quiliones comandado por el Curaca Anime, en ese momento.

Los aborígenes que habitaban en esta comunidad llamaron la atención a los expedicionarios por sus características y aspecto caucásico, con barba completa, con una figura espigada y altura de 1,70 metros aproximadamente, que para la época, era demasiado desarrollada, y se estima que cerca de un 10 por ciento de la población poseía ojos verdes llamados "soto". Eran cazadores, recolectores y sedentarios, practicaban la agricultura y la ganadería. Eficaces en el manejo del arco y la flecha, desarrollaron la industria lítica con la que fabricaban armas de piedra, bolas de boleadoras, cabezas de mazas, puntas de lanza, puntas de flecha, proyectiles para honda, como también morteros para la molienda de granos.

Su alimentación se basaba en la recolección de molle, piquillín, chañar; también sembraban maíz, zapallo y quinoa. En cuanto a la ganadería, criaban ganado compuesto de rebaños de llama, como también gallináceas, que son los pavos de monte.

Sus viviendas eran chozas semienterradas de grandes dimensiones, donde convivían varias familias, con techos de ramas y paja, como también vivían en cuevas de piedra cuando se trasladaban de los valles a los cerros para la cría de su ganado.

Desarrollaron la industria textil con el tejido de lanas para su indumentaria, mantas y ponchos. Realizaban arte rupestre con fines religiosos, grabados y dibujos en grutas y cavernas. También desarrollaron la alfarería y ejecutaban dos tipos de cerámicas, una negra grisácea, que en la actualidad se sigue haciendo en la zona, y otra grabada.

Dentro de las artesanías que se realizaban había una que se destacaba: el tejido de paja de trigo, que se decoraba con plumas de pavo y chala de maíz teñida con pigmentos que recolectaban de los frutos de la zona. Este tipo de tejido, único en el país, se sigue desarrollando actualmente en los pueblos de Quilino y Villa Quilino, honrando el legado artesanal de nuestros ancestros preservando parte de esa cultura aborigen.

Su religión creía y adoraba al Sol –Inti–, a la Luna –Mamá Quilla–, a la tierra –Pacha– y al viento –Uchimar–, desarrollando diversos tipos de ceremonias en honor a cada uno de estos dioses.

La sabiduría de estos pueblos y su cultura, sufrieron un desmembramiento y aculturación con la llegada de los conquistadores en el año 1574, cuando Jerónimo Luis de Cabrera toma la región para su merced y luego encomienda a Pedro Luis de Cabrera, hijo del conquistador.

Así comienza el proceso de diezmación y aculturación de estos pueblos originarios a través del mestizaje, la explotación laboral, llegando hasta la esclavitud, la usurpación del territorio aborigen y las muertes originadas por las epidemias que trajeron los conquistadores, como la gripe, el sarampión y la viruela, y también las guerras que llevaron adelante defendiendo su territorio.

De su grito de guerra que era "komchingon", cuyo significado es "muerte a ellos" –dirigidos a los invasores españoles–, es de donde los conquistadores toman el nombre, los designan y los bautizan como "Comechingones" a estos pueblos originarios de la región.

En el año 1805, al construirse un camino a Catamarca por el actual paraje Las Toscas del Departamento Ischilín, 40 kilómetros al oeste de Quilino, el Real Consulado, a través del Comandante Eufrasio Agüero, conviene con el Cacique de Quilino, Juan Asencio, la provisión de 50 a 60 hombres, quienes junto con 70 u 80 hombres más, que provenían de la Compañía establecida en Totoral, serían los encargados de la construcción del mencionado camino, que luego se internaría por Las Salinas para salir en Casa de Piedra, Provincia de Catamarca, y que se constituiría en el Camino Real a Catamarca.

Estos antecedentes nos permiten tener conocimiento de la existencia del Curaca Juan Asencio, cuyas últimas actuaciones se remontan a 1811, cuando se queja ante el Gobierno provincial por el elevado monto de los tributos que debían pagar los habitantes del lugar. Este lugar fue proclamado como pueblo, con la obligación de tributar en el año 1796, por orden del Marqués de Sobremonte, Gobernador Intendente de Córdoba, el cual crea una comunidad española-indígena en el lugar –antecedentes estudiados y que debo agradecer al doctor Lincoln Urquiza, quien nos facilitó estos datos y es miembro de la Facultad de Filosofía y de la Junta Provincial de la Universidad Nacional de Córdoba, y ha publicado dos libros: "Noticias históricas de Ischilín" e "Historias del Norte Cordobés".

Estos datos nos remontan a que en ese mismo año –1811– fallece el cacique, y no se nombra sucesor ante una comunidad aborigen desmembrada por las explotaciones laborales, el reclutamiento de sus hombres para el Ejército del Norte y el mestizaje, entre otros factores, hasta llegar así a la gobernación de Manuel López que, en 1831, decreta la extinción como organización social a la comunidad aborigen de los indios Quiliones, quitándoles de esta manera su identidad de pueblo originario.

Con la muerte de Juan Asencio, en el año 1811, queda en el registro de la memoria de su pueblo como el último curaca de los Quiliones.

Para recordar y preservar la memoria, hacer conocer nuestra cultura aborígen, difundir las tradiciones, y en reconocimiento al último curaca de la región de Quilino y Villa Quilino – llamado mal por los españoles como cacique– es que propicio el nombre del tramo de la Ruta provincial Nº 21, comprendido entre Caminiaga y Quilino, con el nombre de “Curaca Juan Asencio” y solicito el acompañamiento del Pleno para su aprobación.

– Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).– Voy a poner en consideración en general, tal como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y Legislación General, el proyecto de ley 17812/L/15.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).– Aprobado.

A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.

– Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).– Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

**PROYECTO DE LEY
17812/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.– Denomínase con el nombre de “Curaca Juan Asencio” al tramo de la ruta Provincial Nº 21, que une las localidades de Cerro Colorado y Quilino.

ARTÍCULO 2º.– Dispónese la impresión de dicho nombre en mapas, carteles, señalizaciones verticales y toda otra indicación que se efectúe sobre el referido tramo de la Ruta Provincial Nº 21, de acuerdo a las previsiones de la Ley Nº 8555.

ARTÍCULO 3º.– Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Leg. Mario Vásquez, Leg. Walter Solusolia, Leg. David Caro., Leg. Gustavo Eslava, Leg. Luis Brouwer de Koning

FUNDAMENTOS

Surge la iniciativa de este proyecto de ley para designar el tramo de la Ruta Provincial Nº 21 entre las localidades de Cerro Colorado y Quilino con el nombre de “Curaca Juan Asencio”, con el claro objeto de reconocer y honrar la memoria de quienes habitaron nuestra región del norte cordobés, así como recordar y respetar la identidad, costumbres, tradiciones y legados de los pueblos aborígenes.

Juan Asencio era de la etnia de los Henia-Kamiare, que habitaban la región del Valle de Quilino, cuyo rango era Curaca es decir quién era el responsable de la gobernación de su comunidad, el rango más alto de su organización social y el cual era de carácter hereditario.

Para hablar de nuestros pueblos originarios debemos recordar quienes eran para fortalecer la memoria colectiva y saber quiénes habitaron originalmente nuestro suelo.

Es así que cuando la expedición de Jerónimo Luis de Cabrera, que fundó Córdoba en 1593, en su recorrido ingresa por el actual norte de nuestra provincia, más precisamente por la zona de San Francisco del Chañar, pasando por Caminiaga, para luego llegar a la región del Valle de Quilino, una de las regiones más pobladas del Norte de la Provincia, con características de un micro clima con temperaturas apacible aún en la época de invierno, surcado por dos acequias de muy importante caudal de agua con características cristalinas, una llamada por su pueblo Chimampa y la otra Yuramampa que significaba “agua blanca” o “río blanco”, descubriendo así también la comunidad de los Indios Quilinos, comandado por el Cacique “Anime”.

Los aborígenes que habitaban en esta comunidad llamaron la atención a los expedicionarios por sus características de aspecto caucásico, con barba completa, con una figura espiada y alta para la época de 1,70 mts de estatura aproximadamente, y se estimaba que cerca de un 10% de población poseía ojos verdes llamados soto. Eran cazadores, recolectores y sedentarios, practicaban la agricultura y la ganadería. Eficaces en el manejo del arco y la flecha, desarrollaron la industria lítica, con la que fabricaban armas de piedra, bolas de boleadoras, cabezas de mazas, puntas de lanza y flecha, proyectiles para honda, como así también morteros para la molienda de grano.

Su alimentación se basaba en la recolección de molle, piquillin, chañar, también sembraban maíz, zapallo y quinoa. En cuanto a la ganadería criaban ganado compuesto de rebaños de llamas, como así también gallinaes, que son los pavos de monte.

Sus viviendas eran chozas semienterradas de grandes dimensiones, donde convivían varias familias, con techo de rama y paja como así también vivían en cuevas de piedra cuando trasladaban de los valles a los cerros para cría de su ganado.

Desarrollaron la industria textil con el tejido de lanas para su indumentaria, mantas y ponchos. Realizaban arte rupestre con fines religiosos, grabados y dibujos en grutas y cavernas. También desarrollaron la alfarería y ejecutaban dos tipos de cerámicas, una negra grisácea y otra gravada.

Dentro de las artesanías que realizaban había una que destacaba y fue el tejido de paja de trigo,

que se decoraba con plumas de pavo y chala de maíz teñida con pigmentos que recolectaban de los frutos de la zona. Este tipo de tejido, único en el país, se sigue desarrollando actualmente en los pueblos de Quilino y Villa Quilino, honrando el legado artesanal de nuestros ancestros preservando parte de esa cultura aborigen.

Su religión creía y adoraba a Inti (sol), Mama Quilla (luna), Pacha (tierra) y Uchimar (viento), desarrollando diversos tipos de ceremonias en honor a cada uno de estos dioses.

La sabiduría de estos pueblos y su cultura sufrieron un desmembramiento y aculturación con la llegada de los conquistadores en el año 1574, cuando Jerónimo Luis de Cabrera toma la región para su merced y luego la encomienda a Pedro Luis de Cabrera, hijo del conquistador.

Así comienza el proceso de diasmación y aculturación de los pueblos originarios a través del mestizaje, la explotación laboral llegando hasta la esclavitud, la usurpación del territorio aborigen, y las matanzas originadas por las epidemias que trajeron los conquistadores, como la gripe, el sarampión y la viruela y las guerras que llevaron adelante defendiendo su territorio. Es también de su grito de guerra que era "Komchingon", cuyo significado es "muerte a ellos" dirigidos a los invasores españoles, de donde toman el nombre y los designan como Comechingones puesto por los conquistadores.

En los años 1805 al construirse un camino a Catamarca por el actual paraje Las Toscas del Departamento Ischilín, 40 Km. al oeste de Quilino, el Real Consulado a través del Comandante Eufrasio Agüero conviene con el Cacique de Quilino Juan Asencio la provisión de 50 a 60 hombres, quienes junto con 70 u 80 hombres más que provenían de la Compañía establecida en Totoral, serían los encargados de la construcción del mencionado camino.

Y es este antecedente el que nos permite tener el conocimiento de la existencia del Curaca "Juan Asencio", cuyas últimas actuaciones se remontan a 1811 donde se queja ante el Gobierno Provincial por el elevado monto de los tributos que debían pagar los habitantes del lugar. Este lugar fue proclamado como pueblo, con la obligación de tributar, en el año 1796 por orden del Marqués de Sobremonte, Gobernador Intendente de Córdoba, el cual crea una comunidad Español-Indígena.

En ese mismo año de 1811 fallece el Cacique y no se nombra sucesor, ante una comunidad aborigen desmembrada, por las explotaciones laborales, el reclutamiento de sus hombres para el Ejército del Norte, el mestizaje, entre otros factores; hasta llegar así a la Gobernación de Manuel López (1836 – 1852), el cual decreta la extinción como Organización Social de la Comunidad Aborigen de los Indios Quilinos, quitándoles de esta manera su identidad de pueblo originario.

Con la muerte en 1811 de Juan Asencio queda en el registro de la memoria de su pueblo como el último "Curaca" de los Quilinos.

Para recordar y preservar la memoria, hacer conocer nuestra cultura aborigen, difundir las tradiciones y en reconocimiento al último Curaca de la región de Quilino y Villa Quilino es que propicio el nombre del tramo de la Ruta Provincial Nº 21, comprendido entre el Cerro Colorado y Quilino, con el nombre de "Curaca Juan Asencio" y solicito el acompañamiento del pleno para su aprobación.

Leg. Mario Vásquez, Leg. Walter Solusolia, Leg. David Caro., Leg. Gustavo Eslava, Leg. Luis Brouwer de Koning

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 17812/L/15, iniciado por los Legisladores Vásquez, Solusolia, Caro, Eslava y Brouwer de Koning, por el que denomina "Curaca Juan Asencio" al tramo de la Ruta Provincial Nº 21 que une las localidades de Cerro Colorado y Quilino, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º.- Impónese el nombre de "Curaca Juan Asencio" a la Ruta Provincial Nº 21 en el tramo comprendido entre las localidades de Caminiaga -Departamento Sobremonte- y Quilino -Departamento Ischilín-.

Artículo 2º.- Dispónese la impresión de dicha denominación en mapas, carteles, señales y toda otra indicación que se efectúe sobre el referido tramo de la Ruta Provincial Nº 21, de acuerdo a las previsiones de la Ley Nº 8555.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DIOS GUARDE A V.H.

Caro, Monier, Luciano, Felpeto, Agosti, Borello, Basualdo, Labat, Gigena, Ponte.

**PROYECTO DE LEY 17812/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10330**

Artículo 1º.- Impónese el nombre de "Curaca Juan Asencio" a la Ruta Provincial Nº 21 en el tramo comprendido entre las localidades de Caminiaga -Departamento Sobremonte- y Quilino -Departamento Ischilín-.

Artículo 2º.- Dispónese la impresión de dicha denominación en mapas, carteles, señales y toda otra indicación que se efectúe sobre el referido tramo de la Ruta Provincial Nº 21, de acuerdo a las previsiones de la Ley Nº 8555.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

Cra. Alicia Mónica Pregno

Vicegobernadora

Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-11-

SISTEMA DE REPOSITARIOS DIGITALES EDUCATIVOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DE LA PROVINCIA. CREACIÓN.

Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16577/L/15, que cuenta con despacho de comisión.

A continuación se leerá la nota respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 2 de diciembre de 2015.

Sra. Presidenta

Poder Legislativo

de la Provincia de Córdoba

S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha del expediente 16577/L/15, proyecto de ley, iniciado por los legisladores Perugini y Ceballos, creando el Sistema de Repositorios Digitales, Educativos, Culturales y Científicos de la Provincia.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso

Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Perugini.

Sra. Perugini.- Señor presidente: el proyecto de ley mencionado propone la creación del Repositorio Educativo Digital de Córdoba. Un repositorio es nada más que un lugar donde se guarda algo, en este caso el REDCOR será la unidad que almacenará, preservará y difundirá de manera digital el acervo documental del Ministerio de Educación, la información y producción intelectual de los equipos del área central, de los docentes y de los estudiantes de las instituciones de todos los niveles educativos del Ministerio de Educación. En síntesis, el objetivo del REDCOR será visibilizar y compartir información.

Este proyecto, señor presidente, viene a dar marco legal a algunas acciones que en este sentido ya viene realizando el Ministerio de Educación, con el propósito de continuar avanzando en el proceso de democratizar el conocimiento.

Como todos ya sabemos –y lo hemos dicho en numerosas oportunidades-, estamos en la era de la información digital, y un ejemplo de esta afirmación es un cálculo realizado por la empresa IBM en el año 2012; según este cálculo, desde los comienzos de la historia humana hasta el año 2003 se han generado 5.000 millones de Gigabytes de información; en el año 2011 esa misma cantidad se generó sólo en dos días, y el pronóstico de este cálculo decía que para el año 2014 esa misma cantidad, es decir 5.000 millones de Gigabytes, se generarían cada 10 minutos. Este es el cambio de época que tanto impacto tiene en toda la sociedad mundial y en nuestras vidas particulares.

Por esto sabemos que los niños y los jóvenes crecen con una computadora, con un teléfono o con una tablet entre sus manos, son los nativos digitales. ¿Y por qué recalco esto? Porque la educación en todos los niveles no puede quedar al margen de estos cambios, debe autorregularse, debe adaptarse, debe pensarse en relación a estos cambios permanentes que

se dan en el entorno, debe estar en un constante proceso de adaptación que recibe el nombre de homeostasis.

Hoy, señor presidente, el patrimonio educativo y la producción intelectual deben estar a disposición de todos, pertenezcan o no al sistema educativo, sean o no ciudadanos de esta Provincia.

Por eso, enmarcamos la propuesta de creación de este repositorio en un movimiento internacional: el Open Access, que promovía en una primera instancia el acceso abierto y gratuito a la investigación científica y técnica, y luego fue extendiéndose a otros repositorios como, por ejemplo, los educativos.

¿Qué significa acceso abierto y gratuito? Significa que cualquier persona interesada en estos contenidos podrá ingresar libre y gratuitamente, sin necesidad de registrarse o suscribirse en ningún lado, y de esta manera poder leer, descargar, copiar, imprimir o enlazar textos y usarlos posteriormente con fines relacionados a la educación, a la gestión de políticas públicas, o a la producción de nuevos conocimientos en todas sus formas.

Los contenidos del REDCOR serán normativas sobre educación, planes de estudio instructivos, material de prensa, material histórico de la gestión educativa provincial; literatura de apoyo a los contenidos curriculares elaborada por los equipos técnicos del área central; material académico como trabajos finales, tesis, tesinas, monografías, informes de investigación; contenidos audiovisuales; materiales de enseñanza y aprendizaje generados por los docentes.

Es precisamente en la educación pública donde la producción intelectual debe circular y llegar a todos. Voy a dar un ejemplo: cientos de docentes del sistema público producen importante material pedagógico para el desarrollo de sus actividades áulicas que solamente se difunden allí, dentro del aula; generalmente, no salen fuera de ese ámbito. Y aun cuando actualmente hay docentes que tienen un blog de acceso público, estas páginas no tienen una amplia difusión: sus direcciones son poco conocidas y rara vez son enlazadas desde otros sitios web, haciendo que su visibilidad desde otros buscadores sea limitada, volviéndose así obsoletas.

En este sentido, una de las finalidades del REDCOR será que las propuestas de enseñanza de los docentes puedan llegar a otros colegas, pudiendo ser reutilizadas, promoviendo de esta manera una enseñanza más interactiva, favoreciendo la mejora de las prácticas pedagógicas.

Con respecto a los estudiantes, en nuestra provincia hay más de 38 mil estudiantes de nivel superior en la educación pública. En el marco de asignaturas cuyo objeto de estudio es la metodología científica, estos estudiantes deben presentar trabajos finales, informes, tesis o tesinas para poder acceder a la titulación; trabajos que son evaluados y que representan un aporte importante para interpretar la realidad de nuestras comunidades provinciales, ya que estos trabajos generalmente tienen que ver con el empleo local, la producción, el ambiente y el desarrollo en general. Estos trabajos muchas veces quedan en la biblioteca y son muy poco leídos. Por lo tanto, considero que contribuir a visibilizar las producciones de las instituciones educativas de manera rápida y oportuna, a través del acceso abierto, además de ser un estímulo, contribuirá al desarrollo de la creatividad y a la innovación, evitando muchas veces la repetición de investigaciones.

– Ocupa la Presidencia la señora Presidenta, Vicegobernadora Mónica Pregno.

Respecto del nivel del área central del Ministerio de Educación, existen archivos y documentos que ponen en evidencia cuál fue la evolución o involución y el trayecto de la gestión educativa a través del tiempo. Estos archivos –a los que es muy difícil acceder cuando están en papel– contienen información imprescindible para la toma de decisiones, así como para la reflexión y el análisis del impacto que éstas conllevan.

Señora presidenta: la autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Educación de la Provincia, quedando facultado para su reglamentación, debiendo fijar las políticas de depósito, preservación, metadatos, operatividad y servicio, aspectos estos que deben ser revisados y actualizados en forma periódica.

Asimismo, la autoridad de aplicación establecerá los requisitos que deben reunir los materiales a incorporar, pudiendo también disponer albergar recursos que, aun no habiendo sido producidos por actores del sistema educativo, tengan importancia sustantiva para la educación, respetando siempre los derechos de autor y las instituciones.

En esta dirección, el Ministerio de Educación queda facultado para suscribir convenios con instituciones públicas y privadas, con entes autárquicos, con otras universidades y repositorios, para implementar esta política de la manera más eficiente posible.

Finalmente, debo decir que la educación es uno de los ejes centrales de las políticas públicas del Gobierno de Unión por Córdoba, y el repositorio será una herramienta

fundamental para democratizar y mejorar la educación, en orden a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y cooperativa.

Por las razones expuestas, señora presidenta, en nombre de mi bloque pido la aprobación de proyecto en tratamiento y solicito el acompañamiento a mis pares del resto de los bloques que integran este Cuerpo.

Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Vagni.

Sra. Vagni.- Señora presidenta: adelanto el voto positivo del bloque de la Unión Cívica Radical al proyecto de ley en tratamiento, ya que consideramos que es necesario publicar y difundir este banco recopilador de producción tecnológica y científica, con el fin de garantizar el libre acceso al mismo por parte de la sociedad.

No obstante, entendemos que es indispensable –tal como lo manifestamos en las reuniones de comisión– generar un registro con el fin de proteger dicha producción intelectual, preservando el derecho de autor de nuestros estudiantes, investigadores, científicos, artistas y de todos aquellos que realizan un aporte a la sociedad a través de su trabajo y producción intelectual, siempre en concordancia con la Ley nacional 26.899, en cuyo articulado reza que los repositorios digitales deben desarrollarse conforme las normas de interoperatividad adoptadas internacionalmente.

Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 16577/L/15, tal como fuera despachado por las Comisiones de Educación y Cultura, y de Ciencia, Tecnología e Informática.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.

La votación en particular se hará por número de artículo.

– Se vota y aprueban los artículos 1º a 6º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 7º de forma, queda aprobado el proyecto en general y particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Tiene la palabra la legisladora Lizzul.

Sra. Lizzul.- Señora presidenta: solicito la incorporación de los legisladores Altamirano, Solusolia, Vagni, Caffaratti, Eslava, Cid y Brarda como coautores de los proyectos de ley 17767 y 17768.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.

**PROYECTO DE LEY
16577/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:**

ARTÍCULO 1º.- Crease el Sistema de Repositorios Digitales Educativos, Culturales y Científicos de la Provincia de Córdoba cuyo objetivo es almacenar, preservar y difundir la producción científica, técnica y artística en formato digital, de acceso abierto y sin fines de lucro de las instituciones y agentes que conforman el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, la Universidad Provincial, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura o los organismos que en el futuro los reemplacen.

ARTÍCULO 2º.- El Sistema de Repositorios Digitales Educativos, Culturales y Científicos de la Provincia de Córdoba estará integrado por el cúmulo de producciones científicas, técnicas y artísticas que se desarrollen en las instituciones públicas y educativas del Ministerio de Educación, Universidad Provincial, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura o los organismos que en el futuro los reemplacen en los siguientes grupos:

a) Documentos Académicos: reunirá las producciones científicas y técnicas (proyectos, trabajos finales, materiales docentes, investigaciones, publicaciones, ponencias, patentes, etc.) de las Instituciones de Educación Superior Universitaria y no Universitaria de la Provincia de Córdoba.

b) Revistas científicas, culturales y educativas.

c) Documentos Institucionales del Gobierno de la Provincia en sus distintas reparticiones: Congresos, conferencias, boletines informativos, marco normativo, concursos, premios.

d) Producciones Artísticas: literarias, pintura, música, danza; investigaciones, congresos, jornadas, etc.

ARTÍCULO 3º.- El desarrollo tecnológico del Repositorio Digital será compatible con las normas internacionales promoviendo y garantizando el acceso libre a sus contenidos mediante las TIC y procurando la protección de los derechos de la institución y del autor sobre la publicación científica, técnica o artística.

ARTÍCULO 4º.- El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley y estará a cargo del desarrollo de la plataforma de software, como así también de su administración, regulación, asistencia técnica, preservación y difusión de esta política.

ARTÍCULO 5º.- Invítase a los municipios y comunas a adherir a la presente Ley.

ARTÍCULO 6º.- De forma.

Leg. Elba Perugini., Leg. María Ceballos

FUNDAMENTOS

En la era de la tecnología ubicua, aquella que se hace omnipresente en todas las dimensiones de la vida cotidiana, como sostiene Nicolás Burburles, es preciso establecer políticas de preservación y difusión digital de las producciones científicas, técnicas y artísticas que se desarrollan desde las instituciones públicas del Gobierno de la Provincia, entendiendo que su origen está sostenido por los fondos públicos que aporta la sociedad en su conjunto y que debe retornar a través del acceso abierto a esta información como sustrato de interés general, iniciativas, proyectos, políticas públicas, para promover el desarrollo humano y el de las comunidades.

Maximiliano Tocco en el “Manual Conceptual y Operativo de Digitalización”³ expresa que “La digitalización es en la actualidad la herramienta de preservación más completa y satisfactoria que nos brinda la tecnología. (...) Las técnicas digitales actuales nos permiten disfrutar de una alta calidad de preservación que nos asegura que el contenido semántico del original será preservado en el tiempo casi incorruptible e indefinidamente.”

En este marco, el presente Proyecto de Ley intenta constituir el Sistema de Repositorios Digitales, una base de información permanente de acceso gratuito, libre y abierto de todas las producciones científicas, técnicas y artísticas que desarrollen los agentes e instituciones pertenecientes a los distintos Ministerios del Poder Ejecutivo, como también del Poder Legislativo, Poder Judicial, municipios y comunas de Córdoba.

En este sentido, definimos al Repositorio Digital, objeto de este Proyecto de Ley, como el sitio web que almacena y preserva el conjunto de producciones científicas, técnicas y artísticas de los agentes, instituciones que forman parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba, con especial énfasis en aquellas que provengan del Ministerio de Educación, de la Universidad Provincial, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Agencia Córdoba Cultura.

Otra característica fundamental del repositorio es su carácter de acceso abierto que contribuye al incremento del patrimonio científico, técnico y cultural, constituyéndose en información de trascendencia para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra Provincia.

Con respecto a los autores, los modelos internacionales de repositorios plantean que éstos deben tener el control sobre la integridad de sus producciones publicadas y el derecho a ser oportunamente reconocidos y citados.

En definitiva, este Proyecto propicia democratizar el acceso al conocimiento y a los saberes generados desde las instituciones del Estado mediante el acceso ilimitado a obras a quienes de otra forma no pueden acceder, por ejemplo, al comprar un libro, adquirir una revista científica, asistir a un evento cultural o participar de congresos y jornadas.

El Repositorio Digital será una herramienta para hacer visible el trabajo que se realiza desde las instituciones de la Provincia de Córdoba, donde la educación y el conocimiento son percibidos como uno de los ejes centrales de las políticas públicas de este Gobierno.

Por último, consideramos de trascendencia la construcción de un Repositorio Digital de Acceso Abierto como iniciativa innovadora ante la escasez de repositorios en la Provincia, como también de leyes nacionales la mayor parte de los países del mundo.

Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.

Leg. Elba Perugini., Leg. María Ceballos

DESPACHO DE COMISIÓN

Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN Y CULTURA y de CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 16577/L/15, iniciado por las Legisladoras Perugini y Ceballos, por el que crea el Sistema de Repositorios Digitales Educativos, Culturales y Científicos de la Provincia, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1º.- Créase el “Repositorio Educativo Digital de la Provincia de Córdoba” (REDCor), de acceso libre, gratuito y sin fines de lucro.

Artículo 2º.- El Repositorio Educativo Digital de la Provincia de Córdoba (REDCor) tiene como objetivo almacenar, preservar y difundir -en formato digital- la producción intelectual proveniente de todas las instituciones educativas y áreas técnicas dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba ó el organismo que en el futuro lo sustituya.

³ Disponible en http://www.acceder.gov.ar/docs/manual_digitalizacion.pdf

Artículo 3º.- La producción intelectual a que hace referencia el artículo 2º de esta Ley está integrada por material académico, normativa educativa, informes y trabajos de investigación, tesis, tesinas, audios, videos, material de prensa, material docente, publicaciones, instructivos y toda otra producción que la Autoridad de Aplicación considere pertinente.

Artículo 4º.- El Repositorio Educativo Digital de la Provincia de Córdoba (REDCor) debe ser compatible con las normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente. En ese marco debe respetar las políticas de contenidos, acceso a datos, depósito, preservación, metadatos y servicios, las que deben estar sujetas a revisión periódica.

Artículo 5º.- El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo sustituya es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, quedando facultado para suscribir los convenios que fueran necesarios para su implementación.

Artículo 6º.- La Autoridad de Aplicación dispondrá de las partidas presupuestarias necesarias para dotar al Repositorio Educativo Digital de la Provincia de Córdoba (REDCor) de los recursos humanos y técnicos para su funcionamiento.

Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DIOS GUARDE A V.H.

Perugini, Basualdo, Ceballos, Gigena, Luciano, Gamaggio Sosa, Narducci, Vagni.

**PROYECTO DE LEY 16577/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10329**

Artículo 1º.- Créase el "Repositorio Educativo Digital de la Provincia de Córdoba -REDCor-", el que será de acceso libre, gratuito y sin fines de lucro.

Artículo 2º.- El Repositorio Educativo Digital de la Provincia de Córdoba -REDCor- tiene como objetivo almacenar, preservar y difundir -en formato digital- la producción intelectual proveniente de todas las instituciones educativas y áreas técnicas dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo sustituya.

Artículo 3º.- La producción intelectual a que hace referencia el artículo 2º de esta Ley está integrada por material académico, normativa educativa, informes y trabajos de investigación, tesis, tesinas, audios, videos, material de prensa, material docente, publicaciones, instructivos y toda otra producción que la Autoridad de Aplicación considere pertinente.

Artículo 4º.- El Repositorio Educativo Digital de la Provincia de Córdoba -REDCor- debe ser compatible con las normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente. En ese marco, debe respetar las políticas de contenidos, acceso a datos, depósito, preservación, metadatos y servicios, las que deben estar sujetas a revisión periódica.

Artículo 5º.- El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo sustituya es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, quedando facultado a suscribir los convenios que fueran necesarios para su implementación.

Artículo 6º.- La Autoridad de Aplicación dispondrá de las partidas presupuestarias necesarias para dotar al Repositorio Educativo Digital de la Provincia de Córdoba -REDCor- de los recursos humanos y técnicos para su funcionamiento.

Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

Cra. Alicia Mónica Pregno

Vicegobernadora

Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-12-

A) FIESTA DEL DEPORTISTA, EN LA LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.

B) 46º FIESTA NACIONAL DEL ORO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE CANALS, DPTO. UNIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

C) MUESTRA DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS DE LOS JARDINES SANTA MARÍA, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

D) TANTI SOLAR DEL ROCK, EN LA CIUDAD DE TANTI, DPTO. PUNILLA. 14º EDICIÓN ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

E) SAN CARLOS MINAS. FIESTAS PATRONALES. BENEPLÁCITO.

F) ESTANCIA DE GUADALUPE, DPTO. MINAS. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

G) CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE LA UNC. DIPLOMATURA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. INICIO DE CLASES. BENEPLÁCITO.

H) FERNANDA PEREIRA, ALUMNA DEL IPEM N° 82, DE LA CIUDAD DE DESPENADEROS, DPTO. SANTA MARÍA. OBTENCIÓN DEL PRIMER LUGAR EN LA XIX OLIMPIADA ARGENTINA DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. BENEPLÁCITO.

I) 9° FESTIVAL DE LOS AMIGOS 2015, EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUTIÉRREZ, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.

J) SISTEMA DE LUMINARIA DEL EMPALME DE LA RUTAS NACIONALES NROS. 9 Y 60. REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. SOLICITUD AL PE.

K) DRA. ELEONORA ZAHORSKI. LABOR REALIZADA PROPICIANDO LA INVESTIGACIÓN, ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LA HISTORIA DEL NORTE CORDOBÉS. HOMENAJE.

L) CARLOS CORIA, DEPORTISTA VILLAMARIENSE. OBTENCIÓN DEL SUBCAMPEONATO EN EL CAMPEONATO ARGENTINO MASTERS DE BILLAR. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.

M) CLUB ATLÉTICO DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD. 95° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.

N) CLUB ATLÉTICO TALLERES DE BALLESTEROS, DE LA LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL. ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN Y OBTENCIÓN DEL BICAMPEONATO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.

O) CLUB ATLÉTICO SAN MARTÍN DE VICUÑA MACKENNA. 95° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.

P) CENTRO EDUCATIVO 12 DE OCTUBRE, DE LA LOCALIDAD DE TRES ÁRBOLES, DPTO. CRUZ DEL EJE. 100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 17690, 17881, 17889, 17894, 17895, 17896, 17897, 17898, 17900, 17901, 17902, 17909, 17910, 17911, 17912 y 17913/L/15, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha comisión.

En consideración los proyectos precedentemente enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
17690/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión a la “Fiesta del Deportista” a realizarse el sábado 19 de diciembre de 2015 por el Club Unión Deportivas Laspiur.

Leg. Delia Luciano

FUNDAMENTOS

El Club Unión Deportiva, realiza el día 19 de diciembre de 2015, realiza la Fiesta del Deportista, que contara con la presencia de todas las disciplinas que interactúan en la institución.

El deporte es una actividad que el ser humano realiza principalmente con objetivos recreativos aunque en algunos casos puede convertirse en la profesión de una persona si la misma se dedica de manera intensiva a ella y perfecciona su técnica y sus resultados de manera permanente. El deporte es básicamente una actividad física que hace entrar al cuerpo en funcionamiento y que lo saca de su estado de reposo frente al cual se encuentra normalmente. La importancia del deporte es que permite que la persona ejercite su organismo para mantenerlo en un buen nivel físico así como también le permite relajarse, distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, además, divertirse.

Leg. Delia Luciano

**PROYECTO DE DECLARACIÓN 17690/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de una nueva edición de la "Fiesta del Deportista" de la localidad de Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo, a desarrollarse el día 19 de diciembre de 2015 bajo la organización del Club Unión Deportiva Laspiur.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

17881/L/15

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la 46ª "Fiesta Nacional del Oro Blanco", a realizarse en la localidad de Canals, Departamento Unión, entre los días 9 y 16 de enero de 2016, por ser esta conmemoración un evento que rinde un cálido homenaje a todas aquellas personas que desarrollan su actividad alrededor de la explotación tampera.

Leg. Fernando Wingerter, Leg. Elba Perugini., Leg. María Ceballos

FUNDAMENTOS

Canals, en el Dpto. Unión, se encuentra entre las cuencas lecheras más importantes del país donde se ubicaron numerosas familias de inmigrantes dedicadas a las tareas rurales. Quienes hoy heredaron las costumbres camperas continúan en el desafío de sostener y mantener uno de los establecimientos fabriles más importantes dedicados a la industria láctea, con prestigio nacional e internacional, y otros similares en constante crecimiento. Es por lo que el Club Atlético Libertad de Canals, organiza, una vez más esta Fiesta Nacional que tiene por objetivo rendir un cálido homenaje a todas las personas que desarrollan su actividad alrededor de la explotación tampera, principal fuente de recursos de la zona instituyendo en sí, un gran estímulo para quienes son parte de la cultura agrícola, empresarios, productores, tamperos, ciudadanos, logrando un espacio de confraternidad e intercambio de experiencias, considerando la repercusión económica de la Región, la Provincia y el País.

Por las razones expresadas y por las que se verterán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.

Leg. Fernando Wingerter, Leg. Elba Perugini., Leg. María Ceballos

PROYECTO DE DECLARACIÓN 17881/L/15

TEXTO DEFINITIVO

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de la "46ª Fiesta Nacional del Oro Blanco", a desarrollarse del 9 al 16 de enero de 2016 en la localidad de Canals, Departamento Unión, reconociendo especialmente a quienes trabajan en la explotación tampera.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

17889/L/15

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA**

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la "Muestra de Experiencias Didácticas de los Jardines de Santa María", que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre en la Glorieta de la Casa de la Cultura de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.

Leg. Carolina Basualdo

FUNDAMENTOS

Esta muestra tiene como objetivo compartir con la comunidad el cierre 2015 de un proceso de trabajo de los Jardines del Departamento Santa María, que se viene desarrollando en el marco del Programa Nacional de Formación Docente Permanente (PNFP) desde el año 2014, y que culminará el próximo 2016.

El PNFP es un Programa de carácter federal –se lleva adelante en todas las escuelas de todos los niveles del país– y es de carácter obligatorio, gratuito y situado. Una de sus acciones consiste en el desarrollo de jornadas de capacitación donde cada equipo institucional, con el aporte de contenidos, materiales, y el acompañamiento de un tutor por zona y nivel, lee, estudia, reflexiona, debate y construye colectivamente sobre las experiencias y las propuestas que ofrece a su comunidad, buscando la mejora. Las directoras llevan adelante la conducción de este proceso en cada institución de manera participativa, luego de encuentros previos y periódicos con sus compañeras de zona y la orientación de la Tutora y la Supervisora.

El PNFP ha fortalecido y enriquecido lo más valioso de los Jardines como espacios públicos relevantes de cuidado y enseñanza, puerta de ingreso a la Educación Formal, en un esfuerzo permanente por asumir los desafíos de la inclusión, la igualdad y la transmisión de ricos patrimonios culturales para todos y cada uno de los niños y niñas.

Del 1 al 3 de diciembre en la glorieta de la Casa de la Cultura de Alta Gracia, de 18 a 21 hs, se

expondrán las experiencias que han tomado cuerpo en la diversidad de los jardines, urbanos, rurales, más pequeños y más grandes, de niños y niñas de 3 a 5 años, que han dejado florecer la imaginación, el conocimiento, la esperanza, la alegría, el juego, la comunidad, la identidad y el trabajo.

Los jardines que participan de la muestra son: Gobernador Amadeo Sabattini, Enrique Larreta, Comandante Espora, Víctor Mercante, Santiago de Liniers, Rector Avanci, José María Paz, Presidente Yrigoyen, República Italiana, Merceditas de San Martín y Manuel Solares de Alta Gracia; Dr. Nicolás Avellaneda de Punta de Agua; Catalina B. de Barón de Los Cedros; Pablo Pizzurno de Villa Parque Santa Ana; José Hernández de Villa de Prado; Vicente López y Planes de Anizacate; Mariano Moreno de San Isidro; Mariano Moreno anexo Los Molinos; Mariano Moreno anexo Bajo Chico; Joaquín Víctor González de Villas Ciudad de América; Jardín Potrero de Garay; Libertador General San Martín y Juan Minetti de Malagueño; Martín Miguel de Güemes de San Nicolás; General Belgrano de La Serranita; General Belgrano anexo La Bolsa; Jardín Los Aromos; 25 de Mayo de Despeñaderos; Silvio Juan Berteza Lamberto de Monte Ralo; Bernardino Rivadavia de Lozada; French y Berutti de Rafael García; French y Berutti anexo Potrero del Estado; Juan Bautista Alberdi de Toledo; Libertador General San Martín de Socavones; Libertador General San Martín anexo La Arcadia y Dr. Florentino Francisco Bustos de Bower.

Es por todo lo expuesto que, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.

Leg. Carolina Basualdo

PROYECTO DE DECLARACIÓN 17889/L/15

TEXTO DEFINITIVO

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito por la realización de la "Muestra de Experiencias Didácticas de los Jardines del Departamento Santa María", que se desarrolla del 1 al 3 de diciembre de 2015 en la Glorieta de la Casa de la Cultura de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

17894/L/15

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la 14º edición del "Tanti Solar del Rock", que se llevará a cabo en la localidad de Tanti, Departamento Punilla, el día 16 de enero de 2016.

Leg. Alicia Narducci., Leg. Marcos Sestopal

FUNDAMENTOS

"Tanti Solar del Rock" es un Festival de Rock, que se gestó con la idea de un trabajo solidario a partir de un grupo de amigos de la localidad de Tanti en el año 2002; se trata de un evento solidario, con entradas gratuita, que se realiza anualmente al aire libre en el Anfiteatro Municipal de dicha localidad, pidiéndose como entrada únicamente un alimento no perecedero o un útil escolar, que luego son repartidas a distintas instituciones sociales que más los necesiten, preferentemente son repartidas a las escuelas rurales de la zona. En la edición 2015, el beneficio fue para la escuela rural de Tanti "El Durazno", la cual además recibió una importante suma en dinero para refacciones.

Además de este objetivo solidario, el evento sirve para brindarles un espacio de difusión a los artistas locales y una oportunidad, para la comunidad, de acercarse al género musical. Este proyecto, se ha ido consolidando a través de los años como una iniciativa cultural que ha logrado la perfecta amalgama entre lo que es un espacio artístico y la solidaridad y es por ello que en el año 2009 fue declarado de Interés Municipal por la Municipalidad de Tanti, a través del Decreto Nº 092/2009.

Para esta décima tercera edición, que se llevará a cabo en el Anfiteatro Municipal el día 16 de enero de 2016, se ha consolidado la presencia de distintos grupos, dentro de los mismos uno muy importante como "Ataque 77", con más de 20 años de trayectoria a lo largo y ancho del país, con bandas de soporte tales como "Cabezones" de Rosario, "Planeador V" de Córdoba, "Cuatro al Hilo", "Juan Terrenal" y "Esteban Cabalín" también de Córdoba, de esta manera el "Tanti Solar del Rock" sigue creciendo y consolidándose año a año. El evento será promocionado en diferentes medios tales como "Radio 100.5", "Multimedio SRT", "FM 88.9 Pobre Johnny", "FM 102.5 SHO", y además por los medios de televisión como Canal 10 de Córdoba, el 12 TV y redes sociales conocidas.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Leg. Alicia Narducci., Leg. Marcos Sestopal

PROYECTO DE DECLARACIÓN 17894/L/15

TEXTO DEFINITIVO

**LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la realización del festival musical denominado "14º Tanti Solar del

Rock”, a desarrollarse el día 16 de enero de 2016 en la mencionada localidad del Departamento Punilla.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
17895/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en San Carlos Minas, el día 8 de diciembre en homenaje a la Inmaculada Concepción de María.

Leg. María Manzanares

FUNDAMENTOS

San Carlos Minas, cabecera del departamento Minas, celebra el 8 de diciembre sus Fiestas Patronales en homenaje a la Virgen María, siendo un acontecimiento de gran relevancia para dicha localidad que trasciende a la región por la importancia que adquiere como manifestación de fe entre los pobladores de la zona.

El dogma católico de la Purísima Concepción de María es motivo de festejo central en el calendario litúrgico, siendo además inspiración para el desarrollo de festividades de religiosidad popular, muy propagadas en el pueblo, pasando a constituir un componente indisoluble de su identidad.

Por estos motivos y los que se expresaran con motivo de su tratamiento solicito a los Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.

Leg. María Manzanares

**PROYECTO DE DECLARACIÓN 17895/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de San Carlos Minas, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 8 de diciembre de 2015 en homenaje a la Inmaculada Concepción de María.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
17896/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Estancia de Guadalupe, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 12 de diciembre de 2015 en homenaje a la Virgen de Guadalupe.

Leg. María Manzanares

FUNDAMENTOS

Estancia de Guadalupe es una localidad ubicada a 230 kilómetros de la Ciudad de Córdoba, cuya comunidad rinde culto a la Virgen de Guadalupe, su Patrona; por tal motivo se reúnen alrededor de su evocación el día 12 de diciembre para la celebración central.

Este día se convierte en una gran fiesta, donde se combinan creencias religiosas y sus ritos, con elementos propios de una fiesta popular, platos típicos y números artísticos; siendo todos los años un gran motivo de encuentro de las familias del lugar y visitantes que llegan a compartir un día festivo de gran importancia para el pueblo.

Por esto motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento solicito a los Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.

Leg. María Manzanares

**PROYECTO DE DECLARACIÓN 17896/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de Estancia de Guadalupe, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 12 de diciembre de 2015 en homenaje a la Virgen de Guadalupe.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
17897/L/15
LA LEGISLATURA DE LA**

**PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito por el inicio de clases, el 20 de noviembre de 2015, de la Diplomatura en Gestión de Negocios con la República Popular China, por parte del Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Leg. Nancy Lizzul

FUNDAMENTOS

En el mes de marzo de 2015, la Universidad Nacional de Córdoba desarrolló el Curso de Formación Integral sobre China, en el marco de la Alianza Estratégica Integral entre Argentina y la República Popular de China.

El evento permitió que los asistentes, más de trescientas personas, pudieran interiorizarse sobre experiencias de empresas e instituciones gubernamentales de nuestro país que se encuentran desarrollando diferentes proyectos con China. Por otra parte, en el mes de mayo de 2015 la UNC llevó a cabo, a través de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales, las jornadas informativas sobre las becas disponibles para estudiar en China donde más de cincuenta estudiantes de distintas universidades de Córdoba se acercaron a escuchar la oferta y los consejos necesarios para tener un buen desenvolvimiento.

El rector de la UNC, Dr. Francisco Tamarit, ha valorado la realización de estas acciones en el marco de una definición de la Universidad como el ámbito más adecuado para discutir un futuro de sustentabilidad, bienestar y desarrollo en relación a los vínculos potenciales y reales que Argentina tiene con China.

En ese marco, el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, en tanto unidad académica dependiente del rectorado, ha puesto a disposición su capacidad institucional y su experiencia en trayectos formativos multidisciplinarios para desarrollar, en su seno, una propuesta formativa que atienda a esta área de vacancia y de suma relevancia para la vida política y económica de nuestra provincia y nuestro país.

Objetivo

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades, habilidades y competencias necesarias para la formulación y realización de negocios, actividades comerciales, inversiones y desarrollo de relaciones interinstitucionales con la República Popular de China.

Objetivos Específicos

- Conocer aspectos fundamentales de las economías del Asia Pacífico en general y de la República Popular China en particular, resaltando aquellos que impacten eventualmente en las prácticas comerciales, las operatorias de comercio exterior y los negocios.

- Reconocer herramientas vinculadas a la comercialización, negociaciones y aspectos jurídicos económicos específicos para la formulación de negocios y actividades comerciales con China. Brindar información sobre legislación, costumbres y ámbitos de cooperación que vayan más allá de lo comercial, con énfasis en aspectos científicos, académicos, culturales y sociales en general.

- Contribuir indirectamente en el diseño de estrategias alternativas para el desarrollo de operaciones de comercio exterior y negocios con las regiones asiáticas, donde la etnia china es predominante en materia comercial.

- Adquirir conocimientos teóricos, metodológicos, técnicos e instrumentales que permitan gestionar acciones conjuntas con entidades chinas.

Justificación

Hasta hace pocos años atrás la relación entre China y Latinoamérica en general, y entre China y Argentina en particular, había sido pobre y de poca densidad. Por ello, la realidad sorprende a todos por igual, dado el importante nivel alcanzado del vínculo actual con la R. P. China. Esto puede corroborarse con algunos pocos datos: entre 2000 y 2013 el comercio de bienes entre 2 Latinoamérica y el Caribe con la potencia asiática se multiplicó por 22 (alcanzando los U\$D 275.000 millones), mientras que con el resto del mundo aumentó sólo 3 veces. Esa velocidad ha sido tal que, a ese ritmo, las metas de comercio birregional planteadas por el presidente chino Xi Jinping a mediados de 2014 se alcanzarán cinco años antes del plazo previsto. Por el lado de las inversiones procedentes de China en América Latina y el Caribe, desde 2010 han aumentado sustancialmente, haciendo de China uno de los principales inversores en Latinoamérica. Además, en estrecha relación con los canales comerciales y de inversiones señalados, China se está convirtiendo rápidamente en la principal fuente de crédito soberano para un conjunto de países latinoamericanos, fundamentalmente aquellos con dificultades de acceso a los mercados globales de capitales. Entre 2005 y 2011, la banca pública china habilitó líneas de crédito por más de U\$D 75 mil millones para los gobiernos de la región, y solamente en 2010 comprometieron disponibilidades por U\$D 37 mil millones, más que el Banco Mundial, el BID y el Banco de Importación - Exportación de EE.UU. combinados. Argentina es una de las economías más destacadas como receptoras de aquellos flujos en el último quinquenio. Más aún, Argentina no es la excepción en la proyección internacional de China. Ya es nuestro segundo socio comercial y uno de los primeros tres inversores en Argentina, y la relación bilateral es tan intensa y dinámica que ha adquirido la categoría de "Estratégica e Integral", de acuerdo a los acuerdos alcanzados entre 2014 y 2015 entre ambas economías.

Esa relación ha crecido exponencialmente en varios sentidos, por lo tanto nada de lo que decida China ahora resulta marginal ni resulta neutro. Sus decisiones globales sobre temas comerciales,

financieros o políticos impactan a Latinoamérica en algún grado, y, mientras más se estreche la relación, más importante serán las decisiones del pueblo chino para los latinoamericanos. En suma, la relación ya es integral y claramente estratégica para todas las partes que intervienen. Además, se produce en un contexto especial. El creciente protagonismo de varias economías emergentes -con énfasis en las que forman el BRICS- define nuevos mapas globales, mezcla sus sociedades y rediseña metodologías, colocando en el centro de la escena a grandes acuerdos transcontinentales que parecen enterrar el multilateralismo, que casi siempre ha expresado la agenda de intereses internacionales de las grandes hegemonías del hemisferio norte occidental. Con la nueva conducción, tanto la política interna como exterior de China tiene una nueva fisonomía, su voz suena más firme a nivel internacional, mostrándose más dispuesta a atender asuntos apremiantes a nivel global desde su óptica. La propuesta de China de un gigantesco TLC para las economías que integran hoy la APEC parece ir en ese sentido. En el medio los TLC's que China ya ha firmado con economías latinoamericanas y los que paralelamente negocia, parecen terminar de dar forma a la manera en que ese país ha decidido seguir el camino de su inserción internacional, de su integración definitiva a las redes de comercio e inversiones globales, como un gran protagonista. En todo caso, el analista debe apreciar que hay persistencia de guías, continuidad en las políticas centrales más allá de los cambios de las personas que las ejecutan. La quintaesencia es el "desarrollo pacífico y mutuo", y con Latinoamérica implica mayor cooperación y profundizar y aumentar los esquemas de consulta.

Si China requiere otros socios a futuro que le resulten confiables y proveedores de calidad de gran parte de los insumos que requiere y de largo plazo, un camino posible y conveniente es afianzar su relación con Latinoamérica, colaborar con su desarrollo y evitar presentarse como un hegemonía que necesita únicamente satisfacerse de insumos para mantener su crecimiento en un mínimo indispensable. China tiene mucho de lo que Latinoamérica necesita (recursos y mercado), así como Latinoamérica, en su origen, también cuenta con los insumos alimenticios y energéticos que China requiere para mantener su crecimiento. Un camino posible y conveniente es colaborar con el desarrollo latinoamericano y evitar presentarse como un hegemonía que sólo necesita satisfacerse de insumos.

El riesgo de que Latinoamérica estratifique su oferta en productos de escaso valor agregado y proveniente de industrias extractivas, es evitable si se parte de un buen diagnóstico compartido. Hay espacio para que Latinoamérica mejore sustantivamente su oferta y, más importante, desarrolle sus capacidades en industrias más sofisticadas conjuntamente con China y sus empresas. Las asimetrías son muchas y algunas grandes y evidentes, por lo que el rol del Estado es fundamental para que puedan construirse puentes. Nadie en este escenario quiere ver replicada una relación de dependencia tal que lleve a Latinoamérica a padecer nuevamente un vínculo centro-periferia tan bien descrito hace casi un siglo atrás.

De allí, y por lo enunciado justificadamente, los sectores privados y público de la Argentina presentan un particular interés por desarrollar las relaciones con China como consecuencia del alto potencial que presenta como mercado, junto a sus vecinos. La eventual realización de negocios con agentes económicos de países como Japón, China o Corea -además de las cuestiones específicas naturales a esa actividad- requiere conocer decisivos aspectos culturales, distantes de las prácticas habituales en el mundo occidental.

La presente Diplomatura presenta una originalidad que no tiene precedente en nuestro país y se inscribe en un notable interés por parte de toda la comunidad (no exclusivamente académica) en conocer más al eventual socio chino, que ya es el segundo socio comercial de Argentina y la principal fuente de financiamiento a nivel de economías individuales. En Argentina los chinos ya constituyen la cuarta corriente migratoria (detrás de la peruana, boliviana y paraguaya) y estimaciones oficiales informan que son alrededor de cien mil los residentes de origen chino radicados en la Argentina.

Esta Diplomatura plantea contribuir a un enriquecimiento necesario sobre la R. P. China sobre temas comerciales, económicos, jurídicos, diplomáticos y culturales, que sirva de puente entre pueblos de orígenes muy diferentes que se encuentran compartiendo espacios e intereses comunes.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en la presente declaración.

Leg. Nancy Lizzul

**PROYECTO DE DECLARACIÓN 17897/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por el inicio de clases, el pasado 20 de noviembre, de la Diplomatura en Gestión de Negocios con la República Popular China, desarrollado por el Centro de Estudios Avanzados -CEA- de la Universidad Nacional de Córdoba.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
17898/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por haber obtenido el primer lugar en orden de mérito en la instancia Provincial de la XIX Olimpiada Argentina de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y representar al Departamento Santa María en la final, a "Fernanda Pereira" alumna del IPEM 82 Santiago Penna de la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María.

Leg. Carolina Basualdo

FUNDAMENTOS

La Olimpiada Argentina de Filosofía se enmarca en las actividades de articulación entre la Educación Media y la Universitaria que desarrolla la Secretaría de Educación Media de la UBA (Universidad de Buenos Aires). Se trata de una competencia filosófica entre alumnos argentinos o naturalizados que cursan los últimos dos años de escuelas secundarias oficiales, tanto públicas como privadas, cuya máxima es el dictum kantiano “atrévete a pensar por vos mismo”.

La Olimpiada Argentina de Filosofía tiene por objetivos que los alumnos:

- Desarrollen las destrezas cognitivas necesarias para realizar una correcta argumentación.
- Articulen el pensamiento reflexivo, lógico y crítico.
- Desarrollen tanto su capacidad para plantear problemas filosóficos como el respeto y la tolerancia hacia argumentos alternativos, base de todo sistema democrático.
- Investiguen y reflexionen acerca de problemas éticos como horizonte de realización de lo humano.

La temática de la XIX Olimpiada Argentina de Filosofía fue: “La Aventura filosófica de la libertad: ¿Por qué elegimos? y se desarrolló en tres etapas:

1. Certamen Interescolar: que consistió en un encuentro eliminatorio entre todos los alumnos inscriptos de cada localidad o zona de todo el país.
2. Certamen Jurisdiccional: un encuentro a nivel provincial entre todos los clasificados en la primera instancia para determinar los prefinalistas.
3. Final Nacional: donde los ganadores definen el podio.

Fernanda Pereira, alumna del IPEM 82 Santiago Penna de Despeñaderos, obtuvo el primer lugar entre 14 instituciones finalistas que participaron de la Instancia Jurisdiccional de la Provincia de Córdoba. Cabe mencionar que esta fue la primera vez que la institución participa de la Olimpiada y que gracias al esfuerzo, dedicación y compromiso de Fernanda, obtuvieron un lugar en la final representando al Departamento Santa María.

Porque la educación es la nueva justicia social, es importante reconocer el logro obtenido con voluntad, responsabilidad y compromiso de esta alumna, en este importante certamen.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la siguiente iniciativa.

Leg. Carolina Basualdo

**PROYECTO DE DECLARACIÓN 17898/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su reconocimiento y felicitación a la alumna del IPEM Nº 82 ‘Santiago Penna’ de la localidad de Despeñaderos, Srta. Fernanda Pereira quien, representando al Departamento Santa María, obtuvo el 1er puesto en el orden de mérito en la instancia provincial de la XIX Olimpiada Argentina de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
17900/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

De Interés Legislativo la realización de la “9º Edición del Festival de los Amigos 2015”, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de diciembre del corriente año, en la localidad de Villa Gutiérrez, Departamento Ischilín.

Leg. Mario Vásquez.

FUNDAMENTOS

Este festival, que ya va por su octava edición consecutiva, nace en el año 2008, de una idea conjunta de los Jefes Comunes Sergio Figueroa y Osvaldo Abramenia, de las comunas de Cañada de Río Pinto y Villa Gutiérrez del Departamento Ischilín, respectivamente.

Es de destacar la modalidad que tiene la organización de este evento, ya que la misma va rotando entre ambas localidades mencionadas. Fue así que en la primera edición, le tocó ser anfitriona a la localidad de Cañada de Río Pinto, y se desarrolló los días 01, 02 y 03 de febrero de 2008.

Posteriormente la organización se traslada a la Comuna de Villa Gutiérrez, en el año 2009, para la segunda edición, siendo la tercera nuevamente organizada por Cañada de Río Pinto y así sucesivamente.

En esta oportunidad la organizadora de la novena edición del festival es nuevamente la localidad de Villa Gutiérrez, y se realizará los días 11 y 12 del corriente mes y contará con la presencia de diversos artistas de la región y nacionales.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.

Leg. Mario Vásquez.

PROYECTO DE DECLARACIÓN 17900/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización del “9º Festival de los Amigos 2015”, a desarrollarse los días 11 y 12 de diciembre en la localidad de Villa Gutiérrez, Departamento Ischilín.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
17901/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del órgano que corresponda, proceda a realizar la reparación y puesta en funcionamiento de todo el sistema de luminaria del Empalme de la Ruta Nacional Nº 9 y la Ruta Nacional Nº 60.

Leg. Mario Vásquez.

FUNDAMENTOS

Como todos sabemos tanto la Ruta Nacional Nº 9 como la Ruta Nacional Nº 60 son dos arterias fundamentales para toda la zona norte de nuestra Provincia, las cuales tienen un importante flujo, no solo de automotores, sino también de camiones de cargas.

Es así que en el empalme de estas dos rutas todo el sistema de luminarias que se encuentra instalado se encuentra averiado, destruido o fuera de funcionamiento, lo cual genera serias situaciones de peligro para los automovilistas, transportistas y las diferentes empresas de transporte público de pasajeros que utilizan a diario estos dos corredores.

Sra. Presidente, es de suma importancia poder contar con la infraestructura vial en condiciones óptimas de funcionamiento para así de esa manera estar garantizando la seguridad vial a los transeúntes y favoreciendo al desarrollo de las economías regionales y del turismo.

Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.

Leg. Mario Vásquez.

PROYECTO DE DECLARACIÓN 17901/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del órgano que corresponda, disponga la pronta reparación y puesta en funcionamiento del sistema de luminarias en el empalme de las Rutas Nacionales Nº 9 y Nº 60.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
17902/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Su Homenaje a la Dra. Eleonora Zahorski por su importante labor propiciando la investigación, estudio y difusión de la Historia del Norte de nuestra Provincia, todo ello llevado a cabo a través de la fundación del Círculo de Amigo de la Historia del Norte de Córdoba “Horacio Dagoberto Goñi Fierro”.

Leg. Mario Vásquez.

FUNDAMENTOS

La Dra. Eleonora Zahorski en la ciudad de Wilno, Polonia, el 20 de febrero de 1923. En el año de 1929 se traslada, con sus padres, a la Argentina radicándose en el pueblo de Yermal Viejo cerca de Oberá, luego de pasar algunos días en el Hotel de Inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires.

Comenzó a cursar sus estudios primarios en un establecimiento educativo ubicado a 2 Km. de su casa, trayecto este que realizaba diariamente a pie, donde curso hasta el 5º grado. Con el correr de los años se fue manifestando en como una persona de espíritu solidario por lo que un médico del pueblo le dijo a su madre que la joven tenía aptitudes para la medicina ya que por iniciativa propia aprendió a tomar la temperatura, colocar inyecciones y hacer curaciones elementales.

Por ello, y con la ilusión de recibirse de doctora en mente, Eleonora retoma sus estudios interrumpidos en 5º grado. Es así que rinde en calidad de Alumno Libre el 6º grado de la primaria y el 1º año de la secundaria; curso el 2º año como alumna regular y el 3º año en calidad de libre, para al año siguiente repetir esta modalidad y cursar el 4º año como regular y el 5º como libre, demostrando las grandes aptitudes académicas de Eleonora.

Finalizada la secundaria viaja, junto a una amiga, a la ciudad de Rosario con la finalidad de inscribirse en la Facultad de Medicina de la Universidad de dicha ciudad, pero dado algunos problemas administrativos en el trámite de inscripción que no le permitieron anotarse para el cursado; por ello viaja

a nuestra provincia donde comienza y finaliza sus estudios de medicina en el año de 1966.

Luego de recibida viajó a la ciudad de Corrientes donde se desempeñó como medica ayudante en una clínica privada de Bella Vista. Posteriormente regresa a la ciudad de Córdoba donde se desempeña durante 2 años en el Hospital Córdoba junto a la Dra. Ester Sakayama.

Es así que luego es trasladada por el Ministerio de Salud a Villa del Totoral; luego el 20 de abril 1969 fue designada Directora del Dispensario Provincial de la localidad de Sarmiento, en el mismo Departamento Totoral.

Luego se casó con el historiador Horacio Dagoberto Goñi Fierro, y es junto a él que en el año 1976 fundan en la localidad de Sarmiento el Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba "Monseñor Pablo Cabrera", que actualmente se conoce con el nombre de Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba "Horacio Dagoberto Goñi Fierro", radicado recientemente en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.

La Dra. Zahorski, además, escribió el libro "Imperios y Culturas Americanas. Albores de la Humanidad y Logros Científicos" (Ediciones El Copista / 1999), así como también folletos de difusión histórica: "Cristóbal Colón. Temas Sobre el V Centenario" entre otros.

En el año 2008 fue designada como Miembro Correspondiente de la Junta Provincial de Historia de Córdoba. Así como en la actualidad preside el Círculo de Amigos de la Historia.

Actualmente continua viviendo en la localidad de Sarmiento, donde goza del aprecio y respeto de todos aquellos que tienen el gusto de conocerla, ya que es una persona de mérito, un ser humano pleno de sensibilidad y ternura, y que a sus 92 años de edad continua siendo un verdadero ejemplo de lucha y trabajo constante.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.

Leg. Mario Vásquez.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN 17902/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su reconocimiento y homenaje a la Dra. Eleonora Zahorski por su destacada e importante labor de investigación, estudio y difusión de la Historia del Norte de nuestra Provincia, llevado a cabo a través de la fundación del Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba "Horacio Dagoberto Goñi Fierro".

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
17909/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito y adhesión por el Subcampeonato en el Campeonato Argentino Masters de Billar, alcanzado por el deportista villamariense Carlos Coria.

Leg. Darío Ranco.

FUNDAMENTOS

El pasado domingo 29 de noviembre el billarista villamariense Carlos Coria obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Argentino de Billar Masters 2015, en la especialidad de cinco quilles, realizado en el Club Pesca de Villa Carlos Paz, donde participaron los mejores exponentes del país.

Coria, representante del Club Sarmiento de Villa María, tuvo su gran revancha tras su participación en el Mundial de Italia, clausurando un año con un juego de alto nivel que lo llevó a la final del torneo de Maestros.

En esa instancia Coria enfrentó a Guillermo Canavesio (Pergamino), uno de los mejores casinistas del país y nuevo campeón argentino.

El tercer lugar le correspondió a Marcelo Dellagáspera (Rosario), cuarto fue su coterráneo Gustavo Longo, quinto Alejandro Martinotti (Pilar), sexto Héctor Filippi (Bell Ville) y séptimo Walter Ingenieri (Rosario), quien al igual que Coria fue varias veces campeón argentino.

Gustavo Giordano (Asociación Cordobesa de Volantes), Enrique Scarano (Chivilcoy) y José Oliva (Asociación Cordobesa de Volantes) son los tres nuevos jugadores Master, completando el cupo de diez que tiene la Argentina.

Sra. Presidente: por tratarse de un logro trascendente en el ámbito deportivo de la región es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Leg. Darío Ranco.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN 17909/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su reconocimiento y felicitación al deportista villamariense Carlos Coria por la obtención del Subcampeonato en el Campeonato Argentino Masters de Billar.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
17910/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito y adhesión al 95º aniversario del Club Atlético Defensores de San Marcos Sud, que se celebrará el día 18 de diciembre de 2015.

Leg. Darío Ranco.

FUNDAMENTOS

El 18 de diciembre de 1920 un grupo de jóvenes ávidos de practicar fútbol resolvieron fundar este club que nació con el nombre de Club Atlético Belgrano pero que, al poco tiempo, cambió su denominación por el de Club Atlético Defensores de San Marcos.

Luego de un largo peregrinar, en 1933 la dirigencia del club adquirió un terreno para levantar sus instalaciones. "Los Tordos", denominación recibida por su itinerancia en sus primeros años, lleva los colores azules y amarillos. El fútbol es su deporte favorito, encontrándose afiliado el club a la Liga Bellvillense de Fútbol, aunque también las bochas ocuparon un espacio importante en la vida institucional. En 1987 se incorporó el tenis y en 1990 se inauguró un moderno complejo que cuenta con pileta.

Sra. Presidente: con motivo de celebrarse el 95º Aniversario de una institución pujante y querida de nuestro interior provincial, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Leg. Darío Ranco.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN 17910/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario del Club Atlético Defensores de San Marcos Sud, a celebrarse el día 18 de diciembre de 2015 en la mencionada localidad del Departamento Unión.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
17911/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito y adhesión por el ascenso a Primera División y el Bicampeonato alcanzado por el Club Atlético Talleres de Ballesteros en el ámbito de la Liga Bellvillense de Fútbol.

Leg. Darío Ranco.

FUNDAMENTOS

El pasado domingo 29 de noviembre el Club Atlético Talleres de Ballesteros logró una trascendente victoria por 2-0 sobre Sportivo Unión de General Ordóñez que le permitió lograr el título de campeón del torneo Clausura de la Liga Bellvillense de Fútbol. Esta conquista, sumada a la lograda con la coronación en el torneo Apertura, le posibilitó a la entidad de Ballesteros cerrar un año estupendo en su historia deportiva, consiguiendo el retornado ascenso a la primera división "A".

Talleres presentó en su última presentación de la temporada 2015 a Facundo Rivero, Juan Cerutti, Joaquín Rivero, Alihuen Salis, Federico Balsells, Gastón Lutterini, Germán Bertoldo, Juan Rivero, Tadeo Albiero, Wilson Acuña y Maximiliano Bazán. DT: Sandro Cepeda.

Ingresaron: Martín Sierra, Michel Isassa y Tomás Villalba. Suplentes: Lorenzo Actis y Enzo España. Los goles fueron convertidos por Tadeo Albiero y Maximiliano Bazán.

Sra. Presidente: por tratarse de un logro trascendente en el ámbito deportivo de la región es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Leg. Darío Ranco.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN 17911/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito por el ascenso a Primera División y el Bicampeonato obtenidos -en el ámbito de la Liga Bellvillense de Fútbol- por el "Club Atlético Talleres" de la localidad de Ballesteros, Departamento Unión.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

**17912/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su beneplácito y adhesión al 95º aniversario del Club Atlético San Martín de Vicuña Mackenna, que se celebrará el día 10 de diciembre de 2015.

Leg. Darío Ranco.

FUNDAMENTOS

Por la inquietud de un grupo de vecinos fue fundado el 10 de diciembre de 1920 el Club Atlético San Martín de Vicuña Mackenna, El nombre escogido obedeció a que las primeras instalaciones del nuevo club se encontraban ubicadas en la calle Libertador General San Martín.

En la actualidad, la institución posee dos predios deportivos, uno donde está ubicado el salón de usos múltiples, canchas de padel y canchas de entrenamientos mientras que en el otro predio se encuentra el estadio de fútbol, denominado "Parque Centenario", y un mini estadio para las inferiores.

El fútbol es el deporte rector de "el Patriota del Sur". Los colores que identifican a su divisa son el celeste y el blanco, en alusión a los colores patrios. La institución se encuentra afiliada a la Liga Regional de Fútbol Río Cuarto, ámbito en el que conquistó los títulos de campeón de ascenso en los años 1986, 1992 y 2007 mientras que su único halago en primera división llegó en el año 2014 con la conquista del Torneo Apertura. En los últimos tiempos se ha incorporado el hockey sobre césped como disciplina deportiva de la entidad.

El club organiza, anualmente, "La Fiesta del Pueblo" en conmemoración a las fiestas patronales de la localidad en su predio deportivo.

Sra. Presidente: con motivo de celebrarse el 95º Aniversario de una institución prestigiosa y progresista de nuestro interior provincial, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

Leg. Darío Ranco.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN 17912/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario del Club Atlético San Martín de la localidad de Vicuña Mackenna, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 10 de diciembre de 2015.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN
17913/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito a la "celebración de los 100º años del centro educativo 12 de Octubre", de la localidad de Tres Arboles, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, la que realizará el día jueves 3 de diciembre del corriente año a las 10:00 hs. en las instalaciones de la citada institución.

Leg. José Monier.

FUNDAMENTOS

El día 3 de Diciembre del corriente año, la Comunidad del Centro Educativo 12 de Octubre, de la Localidad de Tres Arboles, se apresta a Celebrar los 100 Años de dicha Institución.

La citada institución educativa fue creada el 10 de octubre de 1915, Expediente N° 1, Letra 1, comenzó a funcionar en una propiedad privada de la familia Monier, en ese momento contaban con un salón y una docente designada a cargo de todos los grados.

En el año 1965 se realiza una importante Celebración por las bodas de oro del establecimiento educativo.

Por amplios pedidos de la comunidad de Tres Arboles se concreta la Construcción de la Escuela en el marco del programa "Plan Cuarto Centenario de Córdoba" por obra del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en un terreno donado por la familia Monier.

A finales de los años 90 debido a la baja matrícula escolar se dispone el cierre de la escuela por un periodo prolongado, luego de reiteradas gestiones de la comunidad y dando a conocer que en el lugar se encontraban un numero de diez niños en edad escolar se realiza la remodelación y en el mes de Octubre del año 2010 se lleva a cabo la reapertura de la misma funcionando actualmente con personal único y brindando un gran servicio educativo a la comunidad.

La celebración contara con la presencia de autoridades educativas, escuelas de la zona, ex alumnos, ex docentes e invitados especiales quienes darán un marco de especial significación al evento.

Esta Legislatura participa del júbilo que tan Importante Evento representa para toda la Comunidad de la Localidad de Tres Arboles.

Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo

Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido formulado.

Leg. José Monier.

**PROYECTO DE DECLARACIÓN 17913/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:**

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de creación del centro educativo '12 de Octubre' de la localidad de Tres Árboles, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 3 de diciembre de 2015 en las instalaciones de la citada institución.

**-13-
LEGISLADORES PROVINCIALES.
PALABRAS DE DESPEDIDA**

Sr. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señora presidenta: siendo la última sesión de la gestión legislativa 2011-2015, quisiera expresarle a usted, como Vicegobernadora y como presidenta de esta Legislatura, nuestro agradecimiento y reconocimiento por la conducción que ha realizado, más allá de las diferencias, entendiendo que en el juego de la democracia cada uno de los que estamos aquí sentados hemos intentando aportar lo mejor de nuestras cualidades intelectuales y humanas, defendiendo con vehemencia y convicción las ideas que nos llevaron a ocupar estas bancas.

Hago extensivo esto a cada uno de los 70 legisladores, a los funcionarios y a las áreas operativas que sostienen día a día el funcionamiento del Poder Legislativo que, a nuestro criterio, es uno de los poderes más importantes de la República en función de la representación que ostenta.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Matar.

Sra. Matar.- Señora presidenta: como es la última sesión y muchos de los que estamos acá nos vamos a despedir, quiero decir -y lo comparto con mi bloque, porque sé que es un sentimiento compartido- que cuando uno ejerce una función pública y hace un balance siempre quedan cosas que no se pudieron lograr. En lo personal, y después de 8 años como legisladora, digo, como Alfonsín, que habrá cosas que no supimos, no quisimos o no pudimos hacer. Lo que sé, señora presidenta, es que lo que hicimos y lo que intentamos fue con el corazón.

Muchas gracias a todos y en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical les digo hasta siempre. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.

Sra. Echevarría.- Señora presidenta: no quería dejar de decir unas palabras en mi última sesión.

Como ustedes saben, hoy recién estoy cumpliendo un mes y quince días de un mandato cortísimo, pero hemos tenido una actividad muy intensa. Hemos presentado numerosos proyectos sobre distintas problemáticas: de género, ambientales, de derechos laborales, de salud. Y, por supuesto, esos proyectos están a disposición para cualquier legislador que los quiera tomar, ya sea globalmente o como punto de partida para otros.

Lamento que la legisladora Vilches no esté porque especialmente a ella y al bloque de Frente de Izquierda se los ofrecemos porque, a pesar de que se han negado a nuestra invitación a conformar un interbloque, nosotros vamos a seguir peleando por la unidad de acción, creemos que hay que sumar, no hay que restar. Además, estos proyectos no han sido elaborados entre cuatro paredes sino que han surgido de la participación de numerosas organizaciones sociales y sectores postergados que, como dije en el juramento, estábamos a su disposición.

Quiero agradecerles por el excelente trato que he recibido de todo el personal de esta Casa, del resto de los legisladores y de quienes presiden este Cuerpo, porque más allá de las lógicas diferencias políticas que no hemos dejado de plantear hasta el último minuto, insisto, me han tratado muy bien.

Lamentablemente, por muy poquitos votos y con un recuento definitivo cuestionado, hemos quedado afuera de esta Legislatura por los próximos cuatro años, pero no se preocupen, no nos extrañen que seguramente nos vamos a volver a ver.

Gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: quiero agradecerle a usted y, como lo hizo Liliana Montero, agradecer a todas las personas que hemos integrado esta Cámara, a los señores y señoras legisladores, al personal de la Cámara, a las Secretarías de la Cámara, a los relatores, a todas las personas con las cuales nos hemos peleado, reído y compartido un montón de cosas.

Cuánto más podremos cumplir el deber donde el pueblo nos ha puesto, de ser control del Poder y una sana oposición constructiva al Gobierno; pero yo valoro positivamente la inmensa capacidad de perdonar que ha tenido el oficialismo conmigo. No puedo no reconocerlo; cada lunes empezaba con una sonrisa, como olvidando lo que había sucedido la semana anterior. Lo bueno de eso es que podemos ser adversarios ocasionales pero en el fondo somos amigos.

A los que se van -una sana envidia-, que les vaya muy bien en las nuevas funciones que van a desempeñar; les deseo de todo corazón que les vaya bien, que en el terreno de la política donde trabajen sea absolutamente exitoso el camino que emprendan. Los que vuelven a sus casas y no van a una política activa o a cargos públicos, mi sana envidia. Les deseo a todos una feliz Navidad y les agradezco mucho.

Quiero resaltar a tres legisladores –en mi caso personal, creo que hay que hacerlo- del oficialismo: a “Chichí” Ponte, con quien me ha tocado compartir la Comisión de Asuntos Constitucionales y he conocido a través de ella a una peronista de ley, (aplausos); a Ricardo Fonseca, y en él a toda la oposición, pero especialmente, quiero agradecerle a Ricardo la paciencia que me tuvo porque yo empezaba la semana los días lunes en su despacho para ver cómo era esto de ser legislador y me ayudó con mucho entusiasmo, y a Sergio Busso que me voy a ir sin entender cómo puede hacer para olvidarse de todas las que le he hecho.

Nada más. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Salvi.

Sr. Salvi.- Señora presidenta: quiero agradecerle a mis pares de bloque, sin olvidar a alguien que ya no nos acompaña, Marta, que seguramente su reconocimiento está en el pueblo y en su lucha; agradecerle a usted, porque más allá de que transitamos el camino de ser intendentes y nos conocíamos de los pasillos gestionando, conocí a una persona con una sensibilidad muy particular; le tengo mi más profundo respeto como persona, más allá de la política, y le agradezco todo lo que la ha dado a la Legislatura y a la Provincia en su carácter de Vicegobernadora.

También quiero agradecerles a todos y cada uno de los integrantes del personal de la Cámara; además, al resto de los pares con quienes vamos a compartir el próximo período y con quienes no lo voy a hacer, los felicito por la tarea, porque como bien decían recién, más allá de los encuentros y desencuentros, se debe entender que cada uno trata de defender sus convicciones y pensamientos, y solamente pensamos distinto, no somos enemigos; esto lo digo especialmente a algunos o algunas legisladoras que creen que la política es de amigos o enemigos, no es de esa manera, pensamos distinto, pero eso no significa que no se le pueda hablar a un par, ni mucho menos pedirle que no le hable.

Me siento orgulloso de estar aquí representando la expresión de la voluntad del departamento. Quiero agradecer a todos y cada uno de los presidentes de bloque y autoridades con quienes compartimos la Comisión de Labor Parlamentaria, y en la despedida decirles que le vamos a quitar a García Elorrio el sobrenombre que le habían puesto de García “el odio”.

Gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.- Señora presidenta: quiero sumarme a esta despedida, que más que eso es un hasta luego.

Todos los que intentamos honrar estas bancas somos, por sobre todas las cosas, militantes.

Más allá de que algunos seguirán por cuatro años más y otros estemos en otro derrotero, seguramente nos vamos a encontrar en las distintas trincheras donde la militancia popular nos convoque.

En verdad, me voy contento porque lo hago en una sesión en que la Legislatura ha estado a la altura de las circunstancias. Y si la memoria no me es ingrata, creo haber debutado en esta Cámara allá por fines del año 2007, con la anterior composición, discutiendo también cosas importantes. Es así que he tenido un comienzo grato y una culminación también grata en esta Legislatura, esta Casa del pueblo que a veces se toma como el parlamento del niño pobre de la República cuando, en realidad, es el lugar donde más acabadamente se expresa la voluntad popular.

Más allá de las diferencias y disensos que han sido públicos, estos son los juegos de la democracia, con los debates y las batallas que estarán quedando por el camino para el recuerdo o la anécdota, lo que no se va a perder y quedará para el futuro es el afecto y el respeto que nos tenemos como personas y como legisladores.

Hasta siempre, hasta luego. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Agosti.

Sr. Agosti.- Señora presidenta: parece que fue ayer que comencé con esta tarea, pero han transcurrido cuatro años. Sólo me queda expresar palabras de agradecimiento hacia su persona, que ha tenido un trato muy cordial para con nosotros y para conmigo.

A mis colegas, sobre todo a los oficialistas, les pido disculpas si en alguna oportunidad tuve un exabrupto; sí lo hice fue porque me caracterizo por mi frontalidad.

Ha sido una experiencia muy linda la que he pasado, no sin decir que he visto distintas maneras de hacer política; pude ser testigo de lealtades y deslealtades que no se condicen con mi forma de ser, pero así es la vida.

Quiero agradecer infinitamente a los colegas de mi bloque, a los de la Unión Cívica Radical, a Unión por Córdoba, a García Elorrio, con quien tuve la satisfacción de compartir algunas cuestiones que nos identifican, y a los bloques de Izquierda decirles que me asombra su tenacidad y perseverancia.

Finalmente, quiero agradecerles a todos aquellos que colaboran diariamente para que esta Legislatura funcione; mención especial para los muchachos relatores con los que hice una gran amistad y a los que recordaré con mucho cariño, y a los que están aquí atrás, en la cafetería, los que me atendieron siempre con la misma humildad y lindo gesto; ojalá que en un día no muy lejano puedan ver colmadas todas sus aspiraciones.

Más allá de las diferencias políticas, a mis colegas quiero agradecerles el espacio que me brindaron para expresar libremente mi pensamiento.

El tiempo pasa, y para resumir hay una frase que dice: "Todo principio tiene un final y al final vuelvo a pensar en el principio".

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Rista.

Sra. Rista.- Gracias, señora presidenta: en realidad, ya hizo la mención el legislador Salvi, pero, además de adherir a todo lo dicho por mis colegas, quiero hacer un recordatorio especial de Marta Juárez, con quien me tocó compartir cuatro años como concejal y estos últimos cuatro años como legisladora. Considero que, más allá de estar en veredas políticas bastante diferentes, era una persona realmente admirable por todo lo que fue su lucha. Mis respetos a ella en este momento de despedida de esta Cámara.

Simplemente quería decir esto.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Borello.

Sr. Borello.- Señora presidenta: ya se ha dicho casi todo, lo que para mí es muy bueno porque soy de hablar poco. Adhiero a todo lo expresado y quiero agradecerle a usted, señora presidenta; agradecerles a todos los empleados legislativos en el nombre de Guillermo, quien estuvo siempre y nos ayudó a dar los primeros pasos.

A mis compañeros legisladores quiero decirles que soy de los que piensan que en política se aprende todos los días, y durante estos 4 años hemos aprendido muchísimo y vamos a seguir aprendiendo. Gracias por la amistad que tengo hoy con mucha gente que no conocía antes de llegar a esta Cámara, lo que constituye lo más valioso.

Ojalá que todos, en la función que cumplamos, ya sea en la actividad pública o privada, sigamos contribuyendo para tener una Córdoba mejor y un país mejor.

Muchas gracias a todos en esta despedida. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Ponte.

Sra. Ponte.- Señora presidenta: por ser el último día me voy a dar el lujo de romper el protocolo porque no iba a hablar. Es más, el presidente del bloque no lo sabía, pero yo tenía preparado un homenaje porque ayer fue el Día del Ama de Casa; pero como venía complicada la cosa, lo dejé.

Pero no me quiero ir sin hablar. En primer lugar, por lo vivido. Recién la miraba a usted, señora presidenta, y recordaba aquel diciembre de 2011 cuando me tocó presidir la sesión preparatoria y tomarle juramento a los 69 legisladores, 70 incluida yo, y que hoy terminan su mandato junto conmigo.

Agradezco haber tenido la posibilidad de vivir una experiencia maravillosa porque por primera vez fue electa una mujer Vicegobernadora de esta Provincia y hoy está conduciendo los destinos de esta Cámara.

Estoy orgullosa de haber formado parte con todos los legisladores y con el Secretario General del Gremio de los Trabajadores Legislativos de darles tranquilidad a cientos de trabajadores por su pase a planta permanente; formamos parte de eso y lo viví yo.

Como mujer, dirigente sindical, estoy orgullosa de haber estado estos cuatro años sentada en esta banca; una ama de casa común, una militante de base, una luchadora sindical que peleó por los derechos de las más vulnerables y de las “sin palabras” en la calle; estoy orgullosa de representar a mi gremio y al movimiento obrero.

Estas son las cosas que me llevo feliz. Gracias a quienes, según dicen aquí adentro, son la oposición, porque me respetaron en todo momento y me han brindado su cariño. Llevo todo eso guardado en mi retina. Con mis 75 años de vida me llevo esta “frutilla de la torta”.

¡Gracias a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Paz y amor para todos! ¡Viva Perón, carajo! (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador González.

Sr. González.- Yo, casi interpretando el sentir de muchos legisladores, por lo menos del cupo masculino, quisiera casi hacer una moción de orden. Hemos estado conversando con varios y queríamos proponer que se vaya García Elorrio y se quede la legisladora Echevarría. ¿Será posible eso? (Risas y aplausos).

Perdón, pero creo que el clima que felizmente estamos viviendo en esta última sesión me permitió hacer esta broma.

Ahora, hablando en serio, en nombre de Unión por Córdoba estamos realmente gratificados de haber trabajado este tiempo con todos los bloques, de haber concretado la sanción de leyes importantes, y de que muchos tengamos una larga trayectoria en esta Cámara.

Recién, a medida que los colegas legisladores hablaban, con el legislador Busso conversábamos que somos casi sobrevivientes de esta Cámara. Ambos llegamos por primera vez a esta Legislatura cuando el sistema era bicameral, a la entonces Cámara de Diputados de la Provincia en el año 1987; yo era el presidente del bloque y el legislador Busso era el legislador más joven –imagínense, si él ya es un viejo, qué soy yo en este momento.

Me acuerdo cuando íbamos a verlo al entonces presidente de la Cámara de Diputados, el legislador Molardo; presidiendo el despacho del legislador Molardo había un cuadro de don Hipólito Yrigoyen, y en aquella época todos estábamos en una democracia reciente, impetuosa y llena de pasiones, y varias veces pensé “si algún día conducimos esta Cámara, en lugar de ese cuadro vamos a poner el de otro presidente tres veces de los argentinos” y, en verdad, señora presidenta, ese cuadro de don Hipólito Yrigoyen en ese despacho, que a mí me toca ocupar, sigue estando y estoy orgulloso de que esté allí, porque considero que han pasado muchos años de la democracia y que todos hemos ido madurando y adquiriendo esa serena ecuanimidad que es necesaria en todos los que ejercen alguna función pública.

La sesión de hoy -como bien dijo alguno- ha sido casi una muestra de esto: hemos votado leyes por consenso como la de CorMeCor, donde el Gobierno provincial, la primera ciudad de la Provincia gobernada por otro partido político y nueve municipios más de distintos signos, han coincidido y han sido capaces de trabajar en conjunto para elaborar algo por el bienestar de la población de Córdoba.

¡Ojalá que este espíritu que reina hoy en este recinto, y la figura de don Hipólito Yrigoyen y la de tantos otros grandes de la política argentina sigan alumbrando este recinto y generando el clima adecuado para que, con todas las diferencias, podamos seguir trabajando, lógicamente con los desacuerdos que a veces surgen, pero fundamentalmente con el respeto mutuo y con la cooperación que se hace imprescindible para vivir en democracia!

Muchas gracias. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Les agradezco, fundamentalmente, a todos ustedes; primero en las expresiones de algunos de los legisladores y legisladoras, pero entendiendo que este tiempo compartido ha sido un tiempo que ha tenido características más que importantes, en el sentido de saber encontrar en cada uno de ustedes, en las distintas miradas en las territoriales y en las desde el punto de vista de la fuerza política a la que representaban; entiendo eso lo importante en la vida: entender al otro, escucharlo, y en ese escucharlo interpretar porqué una determinada mirada, qué es lo que cada uno trajo como bagaje de su territorio, de lo que compartió con la gente.

Esta Casa, lo decía la legisladora Montero hace unos instantes cuando y hablaba de lo que es e implica este Poder -es un Poder de mucha importancia, que tiene -a mi juicio- la magnífica obligación de traer la voz de cada uno de los cordobeses.

En verdad, en el seno de este recinto, en las comisiones muchísimas veces hubo miradas distintas, pero esas miradas son justamente las que enriquecen, y es de buenos hombres y mujeres saber escuchar.

Me llevo algo de cada uno de ustedes; seguramente algunos conservarán la actividad que hoy están realizando como colegas legisladores; habrá otros que estarán en otras instancias, defendiendo a Córdoba desde otros lugares, y quienes volverán a actividades diferentes.

Quiero contarles qué me llevo de ustedes: entendí que esta Legislatura tenía que abrir las puertas; entendí que este lugar, que a veces para la gente suena un poquito lejano, tenía que ser más cercano, porque ustedes son setenta voces que la representan. Desde ese lugar, traté de estar presente, en la calle, dejando que la gente la recorriera, la sintiera como propia y cada día sintiera que podía estar más cerca de cada uno de ustedes, que son sus representantes. Desde ese lugar, en cada uno de ustedes busqué, busqué y busqué la humanidad, y la encontré.

¡Feliz Navidad! Que tengan un excelente año y que la humanidad sea lo que los conduzca. (Aplausos).

No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Delia Luciano a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

– Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- ¡Muchas gracias por todo! Y que Córdoba tenga en todos ustedes y en los que estarán en el futuro en esta Cámara el apoyo que tienen que tener para ser una Córdoba muy linda, grande y con todos los cordobeses felices. ¡Gracias a todos, felicidades! (Aplausos).

Queda levantada la sesión.

-Es la hora 20 y 03.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto – Mirta Nadra
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo